

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

FACULTAD DE DERECHO

Departamento de Historia del Derecho



TESIS DOCTORAL

**Régimen de montes de Segura, (siglos XIII al XIX)
[Manuscrito]**

MEMORIA PARA OPTAR AL GRADO DE DOCTOR
PRESENTADA POR

Emilio de la, Cruz Aguilar

Madrid, 2015

R. 136484.

TE

1178



UNIVERSIDAD COMPLUTENSE



5313546465

EL REGIMEN DE MONTES DE SEGURA
(SIGLOS XIII AL XIX)

Tesis realizada por el doctorando
Emilio de la Cruz Aguilar, bajo la
dirección del titular de la II Cá-
tedra de Historia del Derecho, Dr.
Don Rafael Gibert y Sánchez de la
Vega, de la Facultad de Derecho de
la Universidad Complutense.

Madrid, 1.977.

DONATIVO



BIBLIOTECA
DE DERECHO

Debo hacer constar mi profundo y sincero agradecimiento a los miembros del Departamento de Historia del Derecho de mi Facultad, en todos sus estamentos, por la inestimable ayuda prestada para la elaboración de esta tesis. Su sabiduría y su amistad han sido elementos clave en mi trabajo.

I .- INTRODUCCION

Las naciones más adelantadas han reconocido la importancia de ocuparse en el cuidado de los montes. Sus productos son una necesidad para los usos de la vida, por sus muchas aplicaciones a la minería, a las fábricas, a la construcción naval y civil, a la cría de ganados y al orden doméstico. Ejercen, además, una influencia benéfica en la temperatura, en el aumento de las aguas superficiales y, por consiguiente, en la vegetación, salubridad del país y hasta en el carácter de los habitantes.

Preámbulo de la Real Orden de 21 de febrero de 1841. Cita en "Derecho Administrativo" de Carlos García Oviedo y Enrique Martínez Useros. pág. 449.

El punto de partida de esta tesis está en los titulares de los periódicos. Con los primeros calores, cada día, aparecen sin solución de continuidad las noticias de los incendios forestales. Los bosques españoles arden cada año en mayor proporción y en los últimos tiempos el número de incendios y de superficie afectada ha crecido de una manera dramática, igualando la superficie de repoblación y anulando ese esfuerzo.

Pero los montes españoles arden por diferentes causas y una de ellas, la más importante, es el incendio intencionado. Según datos oficiales, la tercera parte de los fuegos en el monte son intencionados; como se trata de destruir, - la superficie afectada supera la tercera parte del total, - por lo que el problema alcanza un nivel de superlativo interés nacional.

¿Por qué arden los bosques?. O, más concretamente, - ¿Por qué los españoles prenden fuego, intencionadamente, a sus bosques?. Hay una explicación demasiado fácil, excesivamente simplista, enraizada en las esencias más puras de nuestra "masocohistoria": el español "es" arboricida, el español "odia" el bosque. De ese axioma comulgan la mayoría de los españoles y este trabajo querría, dentro del limitado ámbito que le es propio, descargar al pueblo español de parte de las culpas que se le atribuyen. No de todas, porque en el otro extremo estaría la otra injusticia, pero sí, repito, de la mayoría.

Planteada la pregunta, podría llegarse a la respuesta por una encuesta si los incendiarios estuvieran dispuestos a "confesarse", cosa inimaginable en ellos que normalmente, en proporciones casi totales, escapan a la acción -

de la Justicia, según se comprueba por la proporción entre incendios acaecidos y culpables encausados.

El dato inicial que me llevó a lo que, a juicio mío, es la clave del problema, lo proporcionó un hecho comprobado sobre el terreno:

En la Sierra de Segura, que conozco personal y directamente, la frecuencia de fuegos era desproporcionada entre la zona de esa Sierra que forma parte del Coto Nacional y el resto. Entre ambas zonas no hay más división que una línea trazada convencionalmente en un mapa: es la misma tierra, la misma gente, igual estructura social y economía idéntica. Pero, curiosamente, los incendios ocurren desde los límites del Coto hacia dentro y son intencionados. Es una historia de cada verano: los fuegos se inician al atardecer, en varios sitios y frecuentemente con el viejo sistema (ya veremos las primeras noticias sobre él) de dejar una mecha encendida y enterrada entre la pinocha que puede provocar el incendio incluso días después. Cuando es talla, el autor está tranquilamente en su casa y lo más probable es que luego vaya entre los campesinos reclutados por la Guardia Civil para apagarlo.

La conclusión evidentemente es que la "vocación" incendiaria de los serranos la provocaba el Coto, por lo que se hace necesario valorar qué significa para ellos ese establecimiento. Es, en cierto modo, a escala menuda, un régimen jurídico administrativo diferente, cuyos efectos, dichos muy brevemente, son que el peso del establecimiento del Coto ha recaído sobre los hombros de los que viven dentro de su ámbito.

¿De qué manera?. Tienen que compartir su habitat con

los animales salvajes y no sólo los indígenas protegidos, sino los importados. La difícil convivencia entre agricultores, ganaderos y fauna se ha resuelto a favor de esta última de una manera radical e injusta. Sin fondos suficientes para establecer el coto con todas las medidas adecuadas para evitar perjuicios a los agricultores o indemnizarlos justa y rápidamente, los animales salvajes son los auténticos privilegiados. Son intocables, aún cuando estén en terreno cultivado y, por el contrario, los trámites para indemnizar los daños que causan llevan años y requieren, aparte la correspondiente instancia, una valoración previa, confiada al organismo oficial responsable, promotor y defensor de los animales y el abono anticipado de los gastos de peritación del daño.

Los que, en el pasado, estaban persiguiendo la caza, es decir los furtivos, han sido los únicos habitantes de estas tierras que han sido incorporados a la nueva situación, interesados en ella, en la que han encontrado una nueva forma de vida. Paradójicamente, los que pusieron la fauna en peligro de extinción, son hoy guardas forestales disfrutando de un empleo fijo y cómodo, mientras los que se limitaron a cultivar tierras y guardar ganado se encuentran con que sus sembrados los arrasan los animales y estos disputan el pasto al ganado doméstico. El testimonio del conflicto está objetivamente representado por los miles de denuncias anuales que van al Juzgado por infracciones en esta zona.

Antes, en los años subsiguientes a la guerra, las denuncias venían de otra parte de la Sierra. A Orcera, cabeza de partido y entonces sede del Juzgado de Primera Instancia, llegaban los detenidos en autobuses custodiados --

por la Guardia Civil. Procedían, principalmente, de los dos pueblos ganaderos de la Comarca, Santiago de la Espada y Pontones, y llegaban por contrariar, de alguna manera, - las labores de repoblación forestal masiva.

El conflicto entre los ganaderos, que venían pastando sus ganados desde hacía muchísimos años, y el programa de repoblación también vencía en contra de los más débiles que, en muchos casos, no tenían más títulos que los recibos de contribución y la posesión pacífica de esos derechos.

En ambos casos se trataba de intereses nacionales: - la repoblación forestal y la conservación de la naturaleza. En ambos casos el conflicto con los intereses particulares se resolvió por una expropiación disimulada sin indemnización eficaz ni compensación real. Las necesidades - de la comunidad nacional se cumplieron a costa de una parte de ella, la más débil, la más indefensa. En el caso de los conflictos por la repoblación no había habido incendios por no haber nada que incendiar, debido a que alrededor de dos siglos atrás otro organismo, también ejecutor e instrumento de unos intereses nacionales se había ocupado de arrasar, en nombre de esos supremos intereses, los bosques existentes en esa parte de la Sierra. Porque las situaciones actuales, causa de los incendios, inducían lógicamente la pregunta de si hubo en el pasado situaciones parecidas y desde cuándo la Administración y los montañeses se enfrentaban en esa guerrilla sorda, desconocida e incomprendida por el gran público.

Porque la intuición de que el campesino y el ganadero español no llevaba su enemiga al árbol como tara congé-

nita, sino que era un reflejo adquirido a consecuencia de un régimen jurídico en alguna manera injusto, se confirmaba en el hecho de que en las zonas españolas en que regían las antiguas comunidades y se conservaba el dominio o algún tipo de aprovechamiento sobre los montes comunales, - atribuido a la comunidad como conjunto de vecinos, había escasos fuegos forestales y, finalmente, cuando esos montes comunales se conservaban como tales pero con serias - interferencias y abusos de los órganos administrativos del ramo que, de hecho, impedían el disfrute normal de esos de rechos, los fuegos ocurrían.

Se ha tratado entonces de demostrar que la enemiga del español al árbol a cuya sombra vive, no es más que el reflejo de un proceso, que está ahora en sus últimos esta dios, en el que, despojándolo de legítimos derechos milenarios, se le ha hecho odiar lo que sólo ha significado para él, en los últimos doscientos años, opresión, represión y envilecimiento. Ese proceso es consecuencia de la - aplicación de los principios despótico-ilustrados a todo - un sistema político-económico local que había resistido, - casi incólume, todas las alternativas de nuestra Historia.

He tratado de buscar los orígenes de esta situación actual cuya gravedad no acaba de comprender el gran público y que puede llevar a la ruina de nuestro bosque en un - plazo no excesivo. Intento también reaccionar, de una forma razonable y razonada, contra la actitud oficial que ha escogido el camino más fácil y más inútil para tratar de impedir el drama: la elevación de las penas con que se cas tiga el incendio, con la modificación adecuada de los artí culos 549 a 553 inclusive y el 565 del Código Penal.

La elevación de una pena ya incluida en el Código -

desde sus primeras ediciones debe ser una señal de alarma que haga reaccionar automáticamente al jurista. El Derecho Penal es el espejo en que se reflejan las anomalías sociales y, en primer lugar, la incapacidad para encontrar normas de derecho dispositivo adecuadas para ofrecer cauces a las necesidades de la sociedad e instrumentar medios para la prevención de los conflictos. La insolución de estos - conflictos en origen, por ignorancia, involuntad o presión extrajurídica, aboca al remedio dramático de la elevación de penas que es una confesión de impotencia del legislador civil o, lo que es más grave, su falta de beligerancia o - su papel secundario en unas estructuras políticas marcadas por el autoritarismo.

Usando un símil médico, el derecho dispositivo no penal, singularmente el Civil, está en el lugar y hace la - función de la medicina preventiva, de la profilaxis, mientras el Derecho Penal, coactivo y sancionador, ocupa el sitio de la terapéutica o, mejor aún, de la quirúrgica. Si - en la medicina el camino nuevo apunta hacia la prevención, en el Derecho también se inclina por la búsqueda de caminos preventivos, en el reforzamiento de la virtualidad del Derecho para ofrecer moldes jurídicos a las realidades sociales que se están produciendo y se prevén, de manera que se eviten los conflictos materia del Derecho Penal. Aún - dentro del mismo Derecho Penal la tendencia reformadora cobra mayor fuerza y, ya en el extremo, hay quienes dudan - que el Derecho Penal sea un auténtico Derecho.

Tratar de solucionar ese grave problema por el burdo camino exclusivo de la elevación de las penas evidencia - una histeria del Poder que no está de humor para llegar al fondo de los problemas, ni siquiera para plantearse la --

etiología de un conflicto que, forzosamente, debe tener - otros aspectos distintos del de la mera represión de los delitos. Cuando el Poder elige la única vía de la punición, está cerrando el camino de la solución real, se queda en la corteza de la perturbación y muestra que no quiere comprender o que, lo que sería peor, no puede por falta de - mentalidad o de vocación.

Para intentar demostrar que esta enemiga del español al bosque es una simple consecuencia de un proceso en el que la Administración, a través de doscientos años y - algo más, ha mantenido una lucha constante con el pueblo -sin connotación demagógica- para arrebatarle algo que -- era suyo, voy a examinar la historia del régimen de montes en una zona concreta de España. Por varios motivos:

1º) Es una de las zonas montañosas (o, mejor dicho, era) más extensas, más ricas y más boscosas de España.

2º) Regía en ella un sistema de mancomunidad a la - que se le atribufan los aprovechamientos totales, incluso tallar, de sus bosques.

3º) Este sistema, establecido a raíz de la recon-- quista, con un fuero de la familia de Cuenca, continuó - con sucesivas ordenanzas en 1480 y 1580.

4º) La Ordenanza de montes de Marina de 1748 supuso la ruina de la comarca, la destrucción de la comunidad y el comienzo de la destrucción, que hoy está siendo completada, de los inmensos bosques.

5º) Esta Ordenanza marca también el principio del odio de los serranos al árbol, del que fué expropiado y que sólo le dió desde aquel día y hasta hoy, penas y con

trariedades.

6º) En la actualidad el proceso de despojo, ya en sus últimos estadios, continúa.

Esos motivos y circunstancias, si acertamos a exponerlos adecuadamente, deben demostrar que la salvaguarda de los montes está en el Derecho. Porque en aquellas partes en que se ha mantenido el régimen que era el de la zona estudiada, los montes están ahí y a salvo, mientras en ésta han ido disminuyendo atterradoramente y sin pausa. Y aún les amenaza un grave peligro que también se señalará al final de este trabajo.

Como estas mismas circunstancias se han producido en la mayor parte de las zonas forestales de España, creemos que las conclusiones que de aquí se deriven pueden ser válidas con carácter general, pues, normalmente, a las mismas causas, en las mismas condiciones, seguirán iguales consecuencias.

Tiene interés, además, esta comarca por haber sido núcleo de una efímera y pienso que única, provincia marítima de Segura de la Sierra con una extensión enorme, que se examinará, y porque en ella se plantearon los problemas, propios de las jurisdicciones especiales, siempre tan de actualidad. Se da también la coincidencia de que los territorios a que afectó esta división administrativa pertenecían en su mayor parte a municipios regidos por fueros de la familia del de Cuenca-Teruel. Es decir, que las nuevas normas absolutistas y centralizadoras chocaron contra una vieja norma de alta calidad. "El más fa

moso, completo y ordenado de los Fueros municipales de nuestra Castilla medieval" (1), continuado, sobre todo en lo que se refiere a régimen de montes, por Ordenanzas que se inspiran en él y lo amplían.

(1) UREÑA Y SMENJAUD. "El Fuero de Cuenca". Introducción
pág. 11.

II .- SISTEMA DE TRABAJO

Partiendo del régimen derivado del Fuero de Segura, cuya coronación y consagración son las Ordenanzas de 1580, se examinará la realidad económica, política y social a que dió origen el fuero y que las ordenanzas testimonian y confirman. Como congruente con la tesis, se pondrá particular acento en el régimen de montes, ya que a su examen está enfocado este trabajo y como principal sostén económico de la Mancomunidad de Segura y su tierra. Pieza fundamental en un sistema de aprovechamientos comunales de los que fueron tan corrientes en Castilla.

Examinada esa realidad, sus consecuencias más directas, particularmente el aumento de población y la relativa prosperidad, las garantías ciudadanas y la libertad, se estudiará el punto de quiebra y su motivación.

La ruptura con el régimen tradicional se inicia, para la zona estudiada con un preataque derivado del establecimiento del Negociado de los Montes de Segura en Sevilla, típica empresa de despotismo ilustrado y se materializa totalmente por aplicación de la Ordenanza de Montes de Marina de 31 de enero de 1748, sus ampliaciones y complementos que consagran una situación de destrucción paulatina de una realidad política, social y económica por otra mentalidad nueva, claramente importada por la nueva dinastía, centralista y despectiva del antiguo sistema y quebrantadora de una idea clásica, milenaria sobre la propiedad de la "silva".

Se valorarán a continuación los efectos que, para

la zona examinada, tuvo esa legislación nueva, en particular la Ordenanza de Montes de Marina que, aparte de ser más radical y afectar a la jurisdicción ordinaria, tiene el interés de haberse aplicado a la mayor parte de los bosques españoles cercanos al mar (con excepción de las Provincias Vascongadas y Navarra) y las sierras de Cuenca Albarracín y Segura en sentido amplio. Por lo que lo concluido para esta zona puede predicarse de las demás afectadas, prácticamente media España:

La aplicación del régimen nuevo se contemplará desde los puntos de vista de la jurisdicción especial que estableció y su conflicto con la ordinaria; las consecuencias de opresión y tiranía que supuso para los pobladores sometidos; las utilidades reales que se derivaron para la nación y, finalmente, el significado político indirecto derivado de la privación de sostén económico a las entidades municipales y supramunicipales y el socavamiento de sus atribuciones y su poder.

A continuación, el estudio examina los debates de las Cortes de Cádiz preparatorios del decreto de abolición de la Ordenanza de 1748, con una doble utilidad: primero, evidenciar la generalidad de los problemas derivados de la aplicación de la Ordenanza citada; segundo, desvelar la lucha por la conservación de los viejos derechos comunales, que late en el transfondo del problema total.

Finalmente, tras un breve capítulo de enlace, unas pinceladas sobre la situación contemporánea para mostrar



sus similitudes con el régimen de despotismo ilustrado y cómo, en lo que aún queda, sigue consumándose "por vías exquisitas" el despojo de los derechos comunales desde la Administración de Montes. Para concluir que una ley injusta fué, y es, principal culpable de la ruina de nuestros bosques y sólo en una ley justa puede estar su defensa eficaz y perdurable.

III .- FONDOS UTILIZADOS

ARCHIVO NACIONAL DE SIMANCAS

En la Sección Secretaría de Marina, el voluminoso legajo 576, rotulado "Montes de Segura y Alcaráz" con tiene documentación sobre el funcionamiento de la jurisdicción especial, representaciones de los pueblos, cartas, informes, etc. Va ordenado por años, con falta de bastantes, singularmente los primeros. Para la localización basta guiarse por la fecha del documento citado.

En el Registro General del Sello, se ha consultado la confirmación del Puerto de Segura por los Reyes Católicos, con referencias a confirmaciones anteriores. También documentos sobre conducción de madera para los Alcázares de Córdoba y derechos de las villas comuneras sobre términos de Alcaráz.

MUSEO NAVAL

Manuscritos sobre el funcionamiento de la explotación de maderas por la Marina y el Real Negociado. Textos del proyecto de decreto y decreto de supresión y - discurso del ministro de Marina sobre ello.

ARCHIVO HISTORICO NACIONAL

De él, en la Sección de Ordenes Militares, se han obtenido datos sobre la Encomienda de Segura, singularmente sobre población y rentas.

Asimismo el texto de la Real Cédula de 1818 de regulación especial de los Montes de Segura.

BIBLIOTECA NACIONAL

En la sala general de lectura se ha consultado el Expediente sobre los Montes de Segura de 1811, reflejo de la preocupación por esa sierra en el lado afrancesado. También las obras de Antonio José de Cavanilles.

En la Sección de Raros, la Historia Genealógica de la Casa de Lara, de Luis de Salazar, que inserta la concesión del Fuero de Cuenca a Segura y el privilegio de no dar posada a los Maestres. También la obra de Ambrosio de Salazar "Almoneda General de España", con datos sobre la tributación de diferentes poblaciones españolas a principios del siglo XVII.

REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA

Consulta de las Relaciones Topográficas de Felipe II. Datos sobre las sierras de agua de Segura y las dehesas de propios o comunes de villas y lugares, así como de población y economía de la zona estudiada. Se encuentra también el testimonio de que al menos dos poblaciones de la federación de Segura eran villas antes que ella y una tenía fuero.

ARCHIVO DE LA REAL CHANCILLERIA DE GRANADA

A través de los pleitos y recursos planteados ante la Real Chancillería se han conseguido datos sobre determinados matices del régimen tradicional, las sierras de agua, los caballeros de sierra y, después, el proceso

de despojo de los bienes municipales.

BIBLIOTECA DEL MINISTERIO DE HACIENDA

Consulta del Diario de Sesiones de las Cortes de Cádiz, con los debates sobre la jurisdicción especial, precedidos por dictámenes de Agricultura y Marina.

ARCHIVO NOTARIAL DE ORCERA

Datos sobre procesos, organización del Real Negociado y Ministerio de Marina. Los documentos citados se localizan por el año de otorgamiento en el protocolo.

ARCHIVO MUNICIPAL DE BENATAE

Datos sobre régimen de propiedad. Dehesas comunes y particulares de los pueblos, bienes de propios, etcétera.

PAPELES DEL AUDITOR OLIVARES

En poder de sus descendientes, en Orcera. Documentan los conflictos de jurisdicciones, completando los datos de Simances, con los carreros y el proceso por cohecho contra empleados del Ministerio.

UN EJEMPLAR DEL TRASLADO DE EJECUTORIA DE LA CHANCIILLERIA DE GRANADA

Procedente del archivo municipal de Génave, en poder particular, contiene un testimonio completo de las

Ordenanzas del Común de 1580 y una sentencia muy interesante.

ARCHIVO MUNICIPAL DE ORCERA

Sin ordenar, ni clasificar, no se pueden dar referencias bibliográficas fijas. Se ha empleado para advertir el reflejo de la actuación del Tribunal de Montes de Marina que tenía su sede en este pueblo, a través, singularmente, de poderes y otros documentos otorgados por ante el escribano de concejo.

ADVERTENCIA: El Archivo del Tribunal en Orcera, salvado durante la guerra de la Independencia, mediante su ocultación en lo más profundo de la Sierra, fué quemado en 1833, por una partida "facciosa" según testimonian Juan de la Cruz Martínez y Pedro Fernando Martínez.

IV .- SITUACION GEOGRAFICA

Esta zona forma uno de los nudos montañosos más extensos del país. En ella se encuentran las cabeceras de dos ríos "cabdales", Guadalquivir y Segura, y sus bosques fueron hasta época relativamente reciente, una de las masas forestales más importantes de España.

Esas dos circunstancias unidas (los bosques y la existencia de dos ríos flotables) son causa que desde épocas muy tempranas se realicen conducciones de madera por el agua. Singularmente por el Guadalquivir que era mucho más propicio para ello que el Segura. Aunque con una salvedad: la parte primera del curso, hasta la altura de Hornos de Segura es practicable para este tipo de faenas, pero en ese punto entra en una garganta muy estrecha que impedía la navegación fácil. Por ello, el - Guadalquivir era utilizado en el curso medio y bajo y en la parte alta se utilizaba el Guadalimar, río de curso bastante regular que nace en la Sierra de Alcaraz, atraviesa la de Segura y se une al Guadalquivir cerca de la actual estación Baeza-Linares del ferrocarril - Madrid-Cádiz.

Esta combinación de los ríos está testimoniado ya en el siglo X. (1). Al-Zuhri, hace referencia al trans-

(1) Isa ben Ahmad Al Razi. Anales palatinos del Califa de Córdoba Al-Hakam II. Trad García Gómez pág 129. El califa exonera a la cora de Jaén de los materiales de construcción naval (madera, pez y alquitrán) que habían de ser transportados a Sevilla y Algeciras, (abril del 973).



porte de madera por el Guadalquivir en esta zona y la existencia de un estrecho paso que hacía necesario recurrir al Guadalimar. Esta estrechura no hay duda debe corresponder al llamado Tronco de Mozoque o de Beas, como sugiere Vallvé Bermejo (1).

El transporte de madera por río se ha seguido realizando hasta los años cincuenta, de manera que los habitantes de esta Comarca han sido siempre consumados pineros o gancheros que han participado en conducciones de toda España:

La Comarca tiene tres partes que pueden diferenciarse claramente: el Valle, nombre muy usado sobre todo en los documentos históricos (Val de Segura) y la Sierra, muy poco poblada en un principio debido a la peligrosa cercanía de la frontera con Granada. Se completa con una tercera parte que es geológica y físicamente distinta, pero que histórica y políticamente ha pertenecido siempre a ella, constituida por las últimas estribaciones orientales de Sierra Morena que se une al borde de la Sierra de Segura sin solución de continuidad y sin otra separación que unas lomas de regular altura y, en parte, el curso del Guadalimar.

Las dos primeras partes son de la era secundaria y formaron en otros tiempos geológicos el borde sur del mar que ocupó al actual Valle del Guadalquivir y comuni

(1) Joaquín Vallvé Bermejo. "La gura de Jaén", Al-Andalus vol XXXIV. fas.1.

caba el Mediterráneo y el Atlántico. Es terreno calizo en general y de buena altura media. Los picos culminantes de la Sierra de Segura en sentido estricto son las Banderillas (1992 mts.) El Almorchón (1810 mts.) y El Yelmo (1809 mts.). En sentido amplio, como se entendía históricamente, la mayor elevación es La Sagra (2400 mts.), seguida del Cerro de las Empanadas (2107 mts.).

La tercera parte, de formación primaria, es de naturaleza pizarrosa y altura mediana y baja, Vierte sus aguas al río Guadalmena que afluye al Guadalimar y es una sierra templada en la mayor parte del año y calurosa en verano. Tiene la coloración sabida de este sistema montañoso.

En la Sierra de Segura propiamente dicha es donde se encuentran los pinares cuya importancia la convirtieron en objeto de atención desde el punto de vista forestal y le dan aún importancia en ese aspecto. Crían sus tierras cuatro clases de pinos: el piñonero (*pinus pinea*), el carrasco (*pinus halepensis*) el rodeno o negral (*pinus silvestris*) y el laricio, salgar o blanco (*pinus laricius*). Este último es uno de los tipos de esta clase de mayor valía. Sus ejemplares suelen ser derechos y de escasa diferencia de diámetro entre la cepa y la copa, en relación con otros pinos, la madera de muy buena calidad, flexible y sin nudos; tienen la corteza blanquecina, la pinocha, u hoja, corta y la pila pequeña, alcanzando grandes alturas. Por ello ha sido siempre especialmente valorado para la construcción naval en particular.

Estas clases de pinos se ordenan por altúras: los carrascos y piñoneros o donceles ocupan las cotas más bajas del terreno, no suelen pasar de los 900 metros de altitud; el rodano o negral, comparte las cotas superiores del carrasco y llega, aproximadamente a los 1.200 en cuya cota comienza a aparecer con mayor frecuencia el laricio, dueño casi exclusivo de las cotas superiores a los 1.300 metros de altitud. El color de su hoja señala las masas de cada tipo de pinos: el carrasco es verde - claro y hoja corta, el piñonero, oscura; el negral larga y verde muy oscura y el laricio todavía más, resultando a lo lejos casi azul. Así los montes de estas sierras, cuando están poblados, son verde claro en las faldas, verde oscuro a media ladera y azul oscuro en la cercanía de las cumbres, cuyas rocas son de un color gris plata que, a veces, a distancia, no se sabe si están o no nevadas.

Hay también robles, de importancia para la construcción naval, y los había con mayor abundancia, como se demuestra por los topónimos "Robledo" relativamente abundantes, y una variada gama de árboles (encina, tejo, fresno, olmos, arces, álamo, etcétera).

En Sierra Morena, los árboles son escasos, correspondiendo a un encinar degenerado, ejemplares aislados de pino carrasco en los lechos de los ríos y predominio de monte abajo, singularmente jara, madroño y brezo. Este monte bajo se dá también en la Sierra de - Segura, aunque predominan en ella los lentiscos y cor-

nicabras sobre la jara y escasea el brezo.

Los ríos principales, a efectos de estudio, es decir, los que han sido utilizados alguna vez para conducciones de madera, son el Guadalquivir sus afluentes Guadalimar y río de los Molinos (éste último utilizado una vez) y el Segura y su afluente el Tus. Todos, según se advierte examinando sus cauces, con unos caudales disminuidos en los últimos decenios, como ha descendido la precipitación anual y la frecuencia de las nevadas. Si se tiene en cuenta el dato citado por Tamames de que el arbolado aumenta en un once por ciento el agua disponible para igual superficie sin bosque (1) puede afirmarse sin temor a error que esa disminución se debe en gran parte, quitadas las causas generales, a la extraordinaria disminución de los bosques en esta zona. Como debe tener la misma causa el enorme relleno de los cauces, consecuencia del aumento de la erosión en esta cuenca reflejada en el dato de que en sus embalses se depositan anualmente 765 metros cúbicos de sedimentos por cada kilómetro cuadrado de cuenca (2).

Están lejos los días en que los que cumplimentaron la encuesta de las "Relaciones Topográficas" afirmaban que nevaba en la Sierra de Segura hasta en verano (3).

En sentido amplio, la Sierra de Segura comprende

-
- (1) Ramón Tamames. "Estructura Económica de España" 3ª Ed.
 - (2) Idem. pág. 223.
 - (3) Relaciones Topográficas de los pueblos de España. Copia de la Real Academia de la Historia. Folios 453 y 55.



las de Alcaraz, Calar del Mundo, Taibilla, La Sagra, de Cazorla y del Pozo (1). Nuestro estudio se centra en lo que históricamente fué la Mancomunidad del Val de Segura, cuyo territorio corresponde a lo que fué encomienda de Segura, que pasó a ser encomienda mayor de Castilla, en lugar de Uclés, entre los años 1243-1246. Corresponde, en la actual división administrativa, al partido judicial de Orcera, provincia de Jaén, y está compuesta por doce villas, en lugar de las siete comuneras primitivas, cuyos términos suman unas doscientas mil hectáreas.

Actualmente, los bosques han reducido mucho su primitiva extensión, hay pinares que sólo han dejado su rastro en la toponimia, como Pinar Negro y el Pinar del Risco y gran parte de la alta sierra, la situada en los términos de Santiago de la Espada y Pontones es una estepa gris azulada con algún pino aislado. Quedan, aunque severamente reducidos por las talas de la RENFE, los pinares de Riomadera, de pino salgareño, y otros que están siendo duramente explotados por la misma empresa estatal.

Por contra, los cultivos aparecen en los lugares más inverosímiles, con pendientes de vértigo y hay oliveras en las cumbres o en los repechos de las proximidades cuya plantación, muchas veces en bancales sostenidos por "paratas", revelan un trabajo impropio que no conduce a unos resultados congruos y sólo unas circunstancias extremas han podido obligar a emprender.

(1) Enciclopedia EDAF, Art. "Segura (Sierra de)"

El clima es templado en verano, con noches relativamente frescas, y en invierno con nieves, menos abundantes progresivamente, que, una o dos veces al año incomunican a los pueblos de Santiago de la Espada y Pontones del resto de la Comarca y la Provincia.

Las comunicaciones son difíciles por la mala calidad de las carreteras que sólo están asfaltadas en la parte baja de la Sierra, mientras las demás son de macadam y en su mayor parte dependen de Montes (hoy ICONA). Es forestal la carretera comunica Pontones y Santiago de la Espada con los otros pueblos y está, lentamente, asfaltándose, pero, cuando la nieve la interrumpe, se usa para dejarla expedita una pala excavadora que se lleva con la nieve una parte del firme.

Como hemos dicho, nacen en ella los ríos Segura y Guadalquivir que se incrementa por multitud de afluentes de diversa importancia, de aguas en general limpias y claras, trucheras. Hay en la comarca tres embalses: el mayor es el del Tranco de Mozoque llamado modernamente de Beas, sobre el Guadalquivir, con 500 millones de metros cúbicos de capacidad; el segundo el del Guadalmena, sobre el río de igual nombre, de 400 millones de metros cúbicos y el tercero el de Miller o Las Anchuricas, sobre el río Segura, que tiene una capacidad de 10 millones de metros cúbicos. En todos se cría trucha indígena, arco iris, y el black-bass, el barbo y la boga, así como el lucio.

La fauna es rica, aunque ya hayan desaparecido los osos y onzas de los que se habla en las Ordenanzas de 1560

y en las Relaciones Topográficas de Felipe II. Hay, como especies indígenas, capra hispánica, jabalí, quebranta-huesos, águilas, lince, gatos monteses, gamos, corzos, zorros y, pieza curiosa, la ardilla segureña ("Sciurus securae"), además de nutrias y diversas piezas de caza menor. Especies importadas son el muflón de Córcega y los lucios y black-bass y trucha arcoiris, ya citados.

La flora es también rica, propia de un bosque mediterráneo. Aparte de las variedades de pinos citadas, hay robles, encinas, tejos, arces, fresnos, avellanos, y, entre los arbustos, jara, lentisco, cornicabra, madroño, enebro, con gran difusión de flora aromática, -singularmente aromática-, como romero, espliego, tomillo, cantueso, mejorana, yerbabuena, etcétera, etcétera, que hacen de estas sierras auténticas montañas perfuradas.

Políticamente, la zona ha fluctuado entre Jaén y Murcia, perteneciendo a uno u otro reino según las épocas o dividiéndose entre ambos. Su gravitación natural es hacia Andalucía y la mayor parte de sus pueblos están en aguas vertientes al Guadalquivir, aunque el territorio se divide en partes aproximadamente iguales. En realidad, - como dicen los cumplidores de la encuesta contenida en las Relaciones Topográficas "ni es de Jaén, ni en Murcia, ni en la Mancha, porque está en el mojón de las tres provincias" (1).

(1) Relaciones Topográficas. Academia de la Historia.
Tomo III. págs. 453 y ss.

En cualquier caso, es curioso, y misterioso, el peso de Segura a través de la mayor parte de su historia, únicamente quebrado en los últimos tiempos, que la llevaron a ser capital de un reino de taifa, (siglo XI) y cabeza de "iqlim", dentro de la "qura" de Jaén, que comprendía una zona aproximadamente igual a la que hoy se entiende como Sierra de Segura en sentido amplio, según referencia supra (1). Dominaba, pues, sobre entidades de población mayores, como Alcaraz y Cazorla y se extendía - muy dentro de lo que hoy es provincia de Murcia y Albacete. Igual sucede después, cuando la creación de la provincía marítima de Segura de la Sierra: ésta desplazaba a la ciudad de Alcaraz, más céntrica y poblada.

En la actualidad, desde 1837 la Comarca forma parte de la provincia de Jaén, que parece su sitio natural. Ha perdido su antigua entidad e incluso al partido de -- Segura se le segregó Yeste y Nerpio, para quedar reducido al ámbito histórico de la vieja Mancomunidad. La cabecera de partido ha pasado de Segura a Siles y de éste a -- Orcera, en la que parece consolidada por su situación central respecto de la mayor parte de los núcleos de población de la zona. Como se advertirá en su lugar oportuno, valorando el hecho, este partido ha quedado privado de su Juzgado de Primera Instancia e Instrucción, aunque sigue siendo cabeza de un Juzgado Comarcal, sede de la Notaría,

(1) J. Vallvé Bermejo. Trabajo y lugar citados "supra".

el Registro, la Delegación Comarcal de Sindicatos y circunscripción representada por un diputado en la Provincial de Jaén.

V .- PANORAMA MEDIANO

La comunidad habitante en la Comarca, una vez conquistada Granada, debió entrar en una época que, en relación con su suerte posterior, podría llamarse dorada. Alejado el peligro de las frecuentes algaras de los moros, puesto que la zona fué fronteriza desde su reconquista, a principio del siglo XIII - hasta la caída de Granada, se inició un período de prosperidad cuyo reflejo más evidente es el aumento de población que se advierte comparando la visita de encomiendas realizada por el maestro de Santiago, Juan Pacheco, en el año 1468 (1) con las poblaciones que se incluyen en las Relaciones Topográficas de Felipe II, cuyos datos están tomados, para la Comarca de referencia, en diciembre de 1575 (2).

En la citada visita se expresa la población de ocho entidades de población, de las cuales subsisten hoy siete. Su población respectiva en los años dichos es la siguiente.

	Año 1468 (vecinos)	Año 1575 (vecinos)	aumento	x 10
Segura de la Sierra	150	500	350	233x 10
Orcera	50	500	450	900x 10
Puerta de Segura	50	80	30	60x 10
Benatae	70	150	80	114x 10
Génave	40	300	260	650x 10
Siles	200	300	100	50x 10
Bayonas	40	30	-10	-25x 10
Hornos de Segura	0	300	300	

(1) AHN. Sección Ordenes Militares. Signatura 1233 C. citado por Ramón Paz Remolar "Estudios homenaje a Marín Ocete" y ...

(2) Relaciones Topográficas. Real Academia de la Historia. Tomo III, folios 453 ss.



El crecimiento de la población es espectacular en esos ciento siete años. La única excepción es la villa de Bayonas que pierde 10 vecinos y el caso más espectacular de crecimiento es el de Orcera que gana 450. De señalar es que Hornos, que en la visita de 1468 se da como despo^ublado a causa de las guerras recientes (se refiere a las habidas entre don Rodrigo Manrique y don Alvaro de Luna, desarrolladas en años anteriores a la visita), tiene, un siglo después, 300 vecinos.

La seguridad que dió el fin de la conquista de Gra^unada se refleja claramente en ese aumento de población, y sobre todo, en la continua referencia que hace la visita de encomiendas a los fuertes donde se recogían los habi^utantes para defenderse de las incursiones de los moros, incursiones que en las Relaciones Topográficas son solo reflejos anecdóticos, como la deliciosa historia de la mu^ujer de Orcera, cuyo juramento barrunta la presencia de los moros que tratan de cautivarla, escondidos en unas covati^ullas vera del camino.

El mancomún de la Sierra de Segura, con sus aprovechamientos madereros, sus ganados, los derechos de los ganados forasteros y una agricultura escasa, circunscrita a las tierras mejores y mas llanas y los pequeños huer^utos familiares, debió conocer una cierta prosperidad. Pue^ude ser significativo que en 1612, según datos de Ambrosio de Salazar, Segura pagaba once cuentos noventa y cinco mil maravedíes, mientras, por ejemplo, la ciudad de Toro apor^utaba once cuentos doce mil; Sepúlveda tres cuentos cuatro

mil maravedíes y Soria once cuentos doscientos ochenta y dos mil, y, por tomar ejemplos geográficamente cercanos, Ubeda once cuentos seiscientos cuarenta mil maravedíes (1)

Por contra, la encomienda era pobre, de manera - que el comendador de Segura obtuvo una renta sobre las salinas de Belinchón por decisión de Fernando III para compensar la escasa rentabilidad que tenía para la Orden, de bido, con toda probabilidad, a la exención de pechos y portazgos que se le concedió, junto con la de posada, por mejoramientos del fuero inicial, y también resulta escasa comparada con encomiendas vecinas de menor extensión y riqueza (2). Como dice Lomax, Segura tuvo un fuero privilegiado porque , en lugar de darle el señorial de Uclés, se le concedió el concegil de Cuenca, con algunas reservas "sacados ende las Eglecias, e los fornos, e los baños, e las tiendas, e las carnicerías, el mercado, el portadgo e la ida del rey..." (3). Sin embargo, el 23 de septiembre de 1440, el capitulo de la Orden confirmó el privilegio que tenía el Concejo de Segura de no dar posada a los Comendadores, objeto de pleito con Rodrigo Manrique en 1428 (4).

Parece, pues, que la comunidad debió desenvolverse en una prosperidad relativa, pacíficamente, sin problemas con la Orden, que deseaba fueran los vecinos "buenos

(1) Ambrosio de Salazar. Almoneda General de España B.N. 7412. Sección Raros.

(2) Derek W. Lomax. "La Orden de Santiago"

(3) Luis de Salazar. "Historia genealogica de la Casa de Lara. B.N. Tomo IV, pag. 673

(4) Joaquin de Entrambasaguas. Los Manrique. pag. 6

amigos" suyos, y dedicándose fundamentalmente al trabajo forestal, con una artesanía derivada de la madera, como se advierte en las Relaciones Topográficas (1). Gozando de los repartos de madera que se hacían a través de las sierras de agua, según se verá en el estudio de las Ordenanzas del Común del Val de Segura, con una ganadería muy desarrollada que aprovechaba también la lana para hilados y la leche para quesos.

Con ese panorama, no parece exagerada la bucólica estampa que traza Juan de la Cruz Martínez "La afición por traficar maderas despertándose, se apoderó de otras muchas familias y el número de hacheros, aserradores, canteros, pineros, tuvo su natural ensanche. Acreciéndose las fortunas con las utilidades que se reportaban por esta ocupación, que en breve espacio se generalizó tanto que llegó a ser la única ocupación de sus nuevos pobladores, y se pensó en mejoras, ya se estudió más y se principiaron a establecer sierras de agua, almacenes de madera elaboradas y otras cosas" (2).

El dato de que el incremento de población más espectacular corresponda, según los datos aportados, a Orcera, parece demostrar que la base principal de la prosperidad de la mancomunidad era la madera. Este pueblo, - efectivamente, ha sido siempre un pueblo de trabajadores

-
- (1) Relaciones Topográficas de los pueblos de España. Real Academia de la Historia. Tomo III hojas 522 y ss.
 - (2) Juan de la Cruz Martínez. Memoria histórica del Partido de Segura. Baeza 1842. Pág.80.

de la madera.

En el informe que evacúa el archivero de Marina, Sans Barutell, en 1º de abril de 1811, las poblaciones citadas los siguientes censos: (1)

	1575	1811	Diferencia	x 100
Segura de la Sierra	500	750	más 250	50 x 100
Orcera	500	300	-200	40 x 100
Puerta Segura	80	80	=	
Benataç	150	120	-30	20 x 100
Génave	300	200	-100	33 x 100
Siles	300	300	=	
Bayonas	30	0	-30	
Hornos de Segura	300	80	-220	73 x 100

Hay otras dos entidades de población que no aparecen en la "Visita de Encomiendas", pero si en las Relaciones Topográficas y en el informe del archivero de Marina. En ellas la diferencia también es notable:

Torres de Albánchez	200	60	-140	70 x 100
Villarrodrigo	200	80	-120	60 x 100

Unicamente gana, en esos doscientos treinta y seis años, Segura, doscientos cincuenta vecinos. Orcera en el mismo período, pierde doscientos. Estos datos, a mi juicio habría que valorarlos en el mismo sentido en que se hizo con el espectacular crecimiento de este último pueblo en el periodo que va entre la visita de encomiendas de 1468

(1) Memoria citada. Págs. 19, 20, 21, y 22.

y la encuesta de las Relaciones en 1575. Orcera, pueblo maderero por excelencia, se resiente gravemente de la - nueva situación en que los organismos oficiales tienen la exclusiva en el tráfico de maderas. Sólo Segura de la Sierra, como cabeza de una extensa provincia, gana población, con seguridad debido a la burocracia que la administración requería.

En función de lo dicho, habría que valorar lo que dice Fernando Aybar, de 72 años, en una petición dirigida al Ministro de Marina en 1780 : "...con licencia o sin ella, siempre se les denuncia por los guardas celadores del Ministerio de Marina, en donde experimentan muchas vejaciones de prisiones, comparecencias y crecidas exacciones de maravedíes, por cuyos fundados miedos y temores se han salido muchos vecinos de este término y el común de Segura, en este año y el otoño anterior, para el de la ciudad de Huescar y otras partes, especialmente los dueños de ganados bacunos" (1).

Es posible aplicar aquí la afirmación de Gibert de que la población estabilizada en un nivel bajo debía mantenerse bien con la madera y los pastos (2).

El colapso serio en el desenvolvimiento normal de la comunidad de Sierra de Segura, después de la exclusiva del Real Negociado, debió constituirlo la supresión de las

(1) Archivo de Simancas. Sección Secretaría de Marina y Guerra. Legajo 576. Atado del Año 1780.

(2) Rafael GIBERT. Antiguo Régimen Español de Montes y Caza.

sierras de agua dispuesta por la Ordenanza de 1748, artículo 74, que ordena al Intendente de Cartagena prohíba su uso a los vecinos de Segura "por lo que destruyen aquellos pinares" permitiéndolas sólo "la sierra para la precisa tablazón que necesiten para fábrica y reparación de sus casas, para lo cual se dará permiso; precediendo los informes de que queda hecha mención en esta ordenanza".

Estas sierras de agua deberían corresponder en su aspecto a la descripción que hace Stendhal en "Rojo y Negro": "Una serrería de agua se compone de un cobertizo al borde de un arroyo. El techo está sostenido por un armazón que se apoya sobre cuatro gruesos pilares de madera. A ocho o diez pies de altura, en medio de un mecanismo muy sencillo empuja contra esta sierra un pedazo de madera. Otra rueda puesta en movimiento por el arroyo es la que hace funcionar este doble mecanismo; el de la sierra que sube y baja y el que empuja suavemente la pieza de madera hacia la sierra que la convierte en planchas".

La Ordenanza de 1748, en el artículo citado, hace una precisa referencia topológica aludiendo a las sierras "que hay en el parage llamado Fuente del Rey". En la zona referida hay varios topónimos alusivos: "Arroyo de la Sierra del Agua"; "Cortijo de la Sierra del - Agua"; "Ermita de la Sierra del Agua" y "Sierra del Agua", a secas que corresponde a una pequeña elevación. Sobre el terreno, uno de los parajes más espléndidos de la Sierra de Segura, subsisten las ruinas de bastantes edificaciones en el punto que señala el mapa (se ha utilizado

el del Instituto Geográfico y Catastral, escala 1/50.000) con el nombre de Cortijos de la Sierra del Agua. Se advierte claramente haber existido un núcleo de población apreciable cuya ermita, también indicada con su topónimo correspondiente, situada en una loma que domina las ruinas del poblado, es de fuerte fábrica con sillares en las esquinas y arco de entrada y se dedica actualmente a tinada.

Hay, finalmente, un lugar denominado "Huelga de la Sierra de Agua" en el que pudimos situar el emplazamiento que tuvo el artificio. Lleno de zarzas y de arbustos, pero evidente, puede advertirse el canal que derivaba el agua del río Tus (afluente del Segura) para lograr los saltos necesarios que movieran las ruedas de las sierras. Parece que del mismo canal se servían varias sierras tomando sus aguas en unos pozos que hay en el cauce de trecho en trecho. Su trazado se sigue perfectamente desde el punto de toma de agua, un estrecho rocoso. Una gran explanada que hay entre el canal y el río debió ser el lugar donde se almacenaba la madera.

La disposición de la Ordenanza de 1748 que hace referencia a estas sierras es de interpretación dudosa - pues puede ser igual una supresión que una expropiación a beneficio de la Marina. En cualquier caso, el resultado es idéntico. El emplazamiento es todavía recordado entre los habitantes de las cercanías como destinado a tales artificios y hay recuerdo de la técnica de aserrar, abriendo los troncos por mitad en sentido longitudinal.

Las Relaciones Topográficas de Felipe II hablan de

las sierras de agua en la parte referente a Segura, afirmando que son en número de siete (1). Lo más probable es que hablara de las existentes en el lugar citado, pero - hubo otras sierras en el ámbito de la Comarca, como lo demuestra una anotación de los derechos devengados por el auditor Olivares por suspensión de una sierra de agua perteneciente a Pedro Fernando Martínez que está pendiente el 8 de marzo de 1824 (2). Dentro del ámbito de la Provincia Marítima hay otro topónimo "Sierra de Agua" en el término municipal de Paterna del Madera, provincia actual de Albacete.

Es curioso y sugestivo señalar que los alrededores, en un gran radio, del paraje Puente del Rey, citado en la Ordenanza de 1748, tienen aún hoy uno de los bosques más tupidos de toda la Sierra de Segura, con pinos enormes y espesos y multiseculares. Parece, pues, que no había una destrucción tan apocalíptica como quiere hacer creer dicha Ordenanza en su precitado artículo 74. Por contra, demuestra la eficacia de lo dispuesto en el capítulo 57 de las Ordenanzas del común de 1580 que, como veremos, reservan un espacio de media legua alrededor de las sierras de agua "por quanto se ve que el principal aprovechamiento de esta villa y su tierra son las dichas sierras de agua".

(1) Relaciones Topográficas. Hojas 522 y ss.

(2) Papeles del Auditor Olivares. Testimonio del escribano de Marina y Montes de Segura Agustín Megia y Salcedo.

Queda señalar, como curiosidad semántica, que actualmente, y así consta en los mapas, se dice sierra "del" agua porque la gente, en general, ha olvidado salvo, como se dijo, los habitantes aledaños, qué designaba el topónimo, creyéndolo referido a una sierra (accidente geográfico) que tiene o mana agua, en lugar de una sierra (máquina) que se mueve con agua.

La leña también se aprovechaba, pues la había en abundancia. Los que cumplimentan las preguntas de las Relaciones Topográficas manifiestan que hay mucha leña por todas parte y "que se estuviera en Toledo o en Madrid valdría tanto como una razonable ciudad" (1).

De ella se abastecía hasta Manzanares, a unos ciento treinta kilómetros de Segura, por la carretera actual más directa, según dato recogido por Noel Salomón de las dichas relaciones (2).

La fabricación de quesos, según se deduce de la protección concedida en las Ordenanzas del Mancomún a los queseaderos, debió ser importante.

Las maderas, conducidas por los carreteros y los pineros del país, llegaban a toda Andalucía, a la Mancha, etcétera... Puede decirse que en todas las casas de cientos de kilómetros a la redonda de Segura las piezas de madera provenían de su Sierra. Igual que las maderas de

(1) Relaciones Topográficas. Hojas 522 y ss.

(2) Noel Salomón "La vida rural castellana en tiempo de Felipe II" págs. 113 y 114.

los Alcázares de Córdoba (1) y, probablemente, de la mezquita. En las conducciones fluviales de madera regia una serie de reglas consuetudinarias, vigentes hasta las últimas operaciones realizadas. La más importante era la de preferencia en la utilización del río: aquél que botaba un madero arreglado, según fuera en rollo o madera labrada, tenía derecho a realizar la conducción total antes que otros posibles conductores que quisieran utilizar el río. Ocurría a veces que los hacheros trabajaban hasta de noche para poder aguar madera antes que los posibles concurrentes.

Hay otras costumbres seguidas en caso de riadas, pérdida u ocultación de madera, etcétera, que merecían un trabajo específico.

Una comunidad de hombres libres que labraban la madera a golpe de hacha, con sencillos y eficaces artes hidráulicos, la conducían en carretas o navegaban sobre ella cientos de kilómetros. Que pastaban su ganado y exportaban las pieles y la lana (cuya saca no tenía límite alguno), hacían sus quesos y cultivaban la morera para seda, los pequeños huertos en las veguillas de los ríos y arroyos y las tierras mejores en los llanos y en los valles, cazaban y pescaban libremente fuera de veda, por que era del común.

Ese es el retrato de un grupo humano sobre el que

(1) Ver apéndice documental. Docs. 1 y 2.

cayó, como un ave carnífera, el Estado constituido en colonizador y sus funcionarios en instrumentos de una inesperada tiranía, estúpida e inmoral, inútil porque destruyó sin beneficio para nadie, oprimió con sagrados pretextos y sirvió para enmascarar la avaricia, el cohecho, la malversación y el robo bajo los más altos postulados de un servicio público incumplido y burlado.

VI .- REGIMEN DEL FUERO

"De los montes y terrenos incultos, que no se incluyeron en el repartimiento general, quedó común y promiscuo su aprovechamiento, con igualdad entre los Españoles y los Godos, como patrimonio general del pueblo, segun es de ver por la Ley 10 del citado título I, Libro 10 del Fuero Juzgo..."

ESCOLANO DE ARRIETA

(Práctica del Consejo Real.

1796, pág. 232).

"Las leyes antiguas del tiempo de los Goodos, y la más reciente y usual legislación, establecida con la mayor solemnidad a medida que se conquistaba la tierra sobre los moros, y las condiciones de Millones que inducen pacto entre la Corona y los pueblos, demuestran ser - inabdicable de éstos el dominio y administración de sus montes y términos públicos..."

ESCOLANO DE ARRIETA

(Práctica del Consejo Real.

1796. pág. 231)

El régimen legal de montes en esta extensa comarca, aparte de las normas de vigencia general, está regulado por dos piezas específicas, profundamente relacionados entre sí, ya que una es, en parte, evolución de la otra:

En primer lugar, el Fuero de Segura y su tierra (las antiguas villas de Benatae, Génave, Hornos de Segura, Siles, Torres de Albánchez y Villarrodrigo). El fuero, parece concedido por el Maestre de Santiago, Pelay Pérez Correa, en la Bastida de Jaén el 12 de febrero de 1246, de acuerdo con los freyles de la Orden:

"... damos y otorgamos al Concejo de Sigura, también a los que agora son como a los que serán por venir, el fuero de Cuenca todo: sacamos ende las Eglecias, e los fornos, e los bannos, e las tiendas, e las carnererías, el mercado, el portadgo, e la ida del Rey; assí como se echaría al Rey que se eche al Aomendador del Logar, e desent si nos pagare del iudicio, échesse al Comendador Mayor, echesse al Maestre si fuere de la tierra, e si non finque por el iudicio del Comendador Mayor...

"... y concede que los vecinos de Sigura nos pechen en ninguna pecha, ni paguen portadgo en toda la tierra de la Orden" (1).

(1) Luis de SALAZAR. Historia genealógica de la Casa de Lara. Tomo IV, fol. 678.

Sin embargo, según afirma Lomax (1), Segura tenía otro fuero antes que este.

Pero debía ser también el de Cuenca y, en ese caso, la supuesta concesión de 1246 es una confirmación. Se deduce así de lo contenido en el catálogo de Fueros de la Real Academia, donde, al hablar del fuero de Montiel, dice habérsele concedido al concejo de villa y aldeas de Montiel el fuero de Cuenca "assí como lo dimos al concejo de Segura". La fecha de concesión a Montiel es "dos días por andar del mes de abril de 1243, en San Marcos de León. Está publicado por Chaves en su Apuntamiento legal. (2).

Aparte de esto, el fuero de Segura sirvió como modelo de aforamiento para Férez (hoy provincia de Albacete) y Moratalla, Lietor y Litor, cercanos a aquél. (3).

El Fuero de Cuenca fué también concedido en esta zona a Iznatoraf, Baeza, Alcaraz, Santisteban, La Iruela y, probablemente, Cazorla. De manera que toda la zona montañosa, y ese dato debe calificarse de importante para el estudio de los posteriores acontecimientos, estaba sometida a una norma prácticamente idéntica. Al menos en lo que se refiere al régimen de montes, respecto del cual no se expresaba reserva alguna.

En base a este fuero, pero con muchas innovacio-

(1) Derek W. LOMAX. La Orden de Santiago.

(2) Bernabé de Chaves. Apuntamiento Legal. fol. 42.

(3) Idem. Idem. folio 44.

nes, está elaborada la segunda pieza reguladora: las Ordenanzas de 1580.

De ellas se conserva al menos un traslado auténtico que se aportó en la Chancillería de Granada como prueba en un pleito mantenido entre las villas de Segura por un lado y las de Génave, Torres y Villarrodrigo por otro, traslado luego unido a la sentencia y es de 1612.

Una y otra, complementándose, regulan la vida política, económica y social de una Comunidad de las que fueron tan frecuentes en España, auténticas federaciones de villas, viviendo sobre bosques, pastos, y, probablemente, cultivos comunales, con derecho a la caza y la pesca y con cierto ámbito de autonormación.

Como examinaremos posteriormente, una vez estudiado el texto de las Ordenanzas, sus relaciones con el fuero tipo Cuenca son constantes y su inspiración evidente. Hay algunas novedades, que se señalarán, y corresponden a nuevas técnicas unas (como la regulación de lo referente a las sierras de agua, sin precedentes en el Fuero de Cuenca) y otras muestran la evolución de determinadas instituciones, como la prenda, que tiende a la admisión única de la prenda efectuada por los caballeros de sierra, siguiendo con ello la evolución señalada por Orlandis (1) hacia la eliminación de la prenda extrajudicial. Aunque, al hilo también de sus afirmaciones, en esta zona subsiste hasta hoy el acorralamiento del ganado que se encuentra haciendo daño.

(1) José Orlandis. La prenda como procedimiento coactivo en la Edad Media.

Las Ordenanzas fueron elaboradas en julio de 1580, ante Francisco de Molleda, Escribano Real, en la sacristía del Monasterio de Santa María de la Peña, en las afueras de Orcera, entonces arrabal de Segura, por provisión real cumplimentada por don Francisco de Vargas, Gobernador del partido. Parece que esta elaboración obedece a una representación de la villa de Hornos en el sentido de estar ella y las demás del valle de la villa de Sigura en posesión y costumbre muy antigua de que cuando la citada de Sigura quisiera hacer ordenanzas por provisión de S.M. especialmente para la guarda y conservación de los términos de dicha villa, no pudiera hacerlas sin que se prestaran todos los concejos del común y estuviesen presentes a su formación.

Recaída la provisión, fué cumplimentada por el Gobernador que "mandó juntar a las villas de él en el lugar acostumbrado para conferir y tratar con ellas sobre dicha Real Provisión, y en su consecuencia, habiendo presentado los representantes de dichos pueblos como queda dicho sus respectivas credenciales, fueron invitados por el receptor comisionado para que hiciesen dichas ordenanzas mirando en todo el servicio de Dios, de S.M., - Real utilidad y provecho deste común, conservación y aumento de sus términos, y así procedieron los pueblos comuneros, inclusa esta cabeza de partido, a formar de una voluntad y concordia nemine discrepanti las citadas ordenanzas..."

En esta provisión se prohíbe expresamente "que -

los caballeros de sierra ni otra persona alguna, fuera de los oficiales del dicho común, se hallasen en la Junta, ni entrasen en ella a tratar de lo tocante a las dichas Ordenanzas". Parece que se trata de evitar cualquier posibilidad de coacción armada, ya que los caballeros eran vecinos de Segura y Orcera, su arrabal, y se nombraban la mitad por Segura y la otra mitad, del total de veinticuatro, por las villas restantes.

Estas Ordenanzas se confirman por Felipe II en junio de 1581 y tienen luego una larga vigencia y una notable virtualidad pues aparecen citadas hasta mediados del siglo XIX, según veremos, como algo vigente o, por lo menos, respetado por todos los comarcanos.

Representan una reelaboración de ordenanzas más antiguas a las que se hace referencia frecuente en distintos capítulos:

"Ordenanzas antiguas usadas y guardadas conforme a la ley del fuero (capítulo 17); "Ordenanzas viejas antiguas (capítulo 18)"; "Las dichas ordenanzas antiguas (capítulo 20); "Las ordenanzas confirmadas por Su Magestad antes destas (capítulo 1). En general, parece que las disposiciones encabezadas por "otrosí" corresponden al texto más antiguo, mientras "item" encabeza disposiciones nuevas o reelaboraciones que incluyen dentro otras antiguas de las que muchas veces conservan ese "otrosí" revelador, más castizo.

Están constituidas por setenta y dos capítulos, -

como se denominan en el propio texto, de desigual extensión y sistemática; no demasiado rigurosa, ya que, por ejemplo, en lo referente a los caballeros de sierra (capítulos 1 al 21, inclusive) se incluyen normas de procedimiento; la regulación de la vecindad está en dos capítulos muy separados (22 y 36); las normas sobre recogida de ciertos frutos se contienen las referentes a piñas - donceles, bellota de carrasca y roble y nueces en tres ordenanzas correlativas (37, 38 y 39) y lo referente a las avellanas en otra separada (la 43); hay duplicaciones y reiteraciones, resultado, probablemente, de ser estas ordenanzas una reelaboración de las antiguas y de la típica actitud de "remachar" en evitación de posteriores discusiones. Así la rúbrica del capítulo 27 es "Que no cortén árboles ningunos sin licencia del concejo de Sigura" (luego, en el cuerpo de la ordenanza, aclara "de fructo llevar"), la del 60 "Que ninguna persona fuera de los términos corte cossa alguna de ellos, verde ni seca, sin licencia del concejo".

Es ilustrativo su texto porque, con cierta frecuencia, la norma contiene una miniexposición de motivos que la justifica y revela qué ha ocurrido en la práctica anterior para decidir a los procuradores de las villas a establecerla. En ese sentido, la falta de sistemática, por otra parte normal en la época, es una preciosa circunstancia a efectos de este estudio.

La importancia de las Ordenanzas del Mancomún de 1580 radican pues en que representan un estadio de desa-



rrollo de la comunidad a más de trescientos años vista del comienzo de su funcionamiento. A través de ellas se rastrea fácilmente el desenvolvimiento de la entidad comunal de Segura y su tierra. Se advierte la presencia del texto del fuero, el reflejo legislativo de las dificultades planteadas por su ejecución práctica y las novedades normativas absolutas correspondientes a supues-tos radicalmente nuevos.

Son al mismo tiempo una pieza configuradora de una realidad futura y testimonio de otra anterior. Es frecuenta la referencia a las ordenanzas antiguas, a la ley del fuero, estilo y costumbre usada y guardada y a la experiencia habida en el tiempo pasado respecto de determinado caso o materia. Así el texto no se limita a normar, también nos enteramos de que las villas tenían sus recelos sobre el nombramiento de caballeros de sierra; de que estos podían tener entre sí connivencias para burlar sus preceptos y los medios que usaban para tal fin; de lo apetecible que resultaba ser vecino del común hasta hacer necesario prever la venida de forasteros, como sucedía, para "gozar de los términos"; igualmente los vecinos, para aumentar su capacidad de aprovechamiento de la madera, podían traer gente de fuera y "así ayudan a hacer madera", defraudando el derecho de los demás. Es revelador en cuanto al fundamento económico de la comunidad ("por quanto por experiencia se ve que el principal aprovechamiento que esta villa y su tierra tiene son las dichas sierras de agua"); del régimen de propiedad

de los bosques ("en más de treinta leguas a la redonda de estos términos no hay bosque alguno de su magestad ni de señor alguno particular"). Etcétera.

De esos dos aspectos, primará en este trabajo aquél que refleja una realidad pasada y presente sobre la valoración de las Ordenanzas como pieza legislativa de ámbito comarcal. Interesa, desde el punto de vista concreto de este trabajo, examinar las Ordenanzas como reflejo jurídico de una comunidad viva en los campos económico, político y social. De ellas se deduce, aparte de lo señalado, la importancia superlativa de la propiedad comunal: los bosques (que ocupan la mayor parte de la superficie de los términos), la caza y la pesca (que no son aquí derechos atribuidos a señor alguno, ni mayestáticos), los frutos de determinados árboles (avellanas, nueces, carrascales y robledos, piños piñoneros), las cuevas, los pastos, ciertas hazas, los egidos, etcétera, etcétera. Del texto sale la imagen de un colectivismo casi total que hubiera hecho las delicias de Joaquín Costa.

Queda la duda del régimen de propiedad de los terrenos cultivables. Las Ordenanzas no contienen una manifestación tan tajante como la referente a los bosques, pero puede haber base para suponer que también estaban sujetos a algún tipo de reparto comunal si se valora la abundancia de topónimos "quiñón" y "suerte" en esta comarca en el sentido en que lo hace Costa, como muestra del reparto periódico de las tierras de la-

bor, (1), y la constancia en las cuentas del Ayuntamiento de Benatas de una partida correspondiente a lo que han pagado los labradores de la villa como arriendo de las suertes adjudicadas aquel año en la dehesa de Oruña, que tenía una parte de labor.

En el texto de las Ordenanzas, como pieza legislativa, aparecen normas de clara progenie:

La regulación de los caballeros de sierra, común al fuero de Cuenca y a los de su familia, tiene una gran amplitud en estas Ordenanzas que le dedican veintidós capítulos.

Los quintos de ganados forasteros que entren en los pastos comunes.

La limpieza de las fuentes comunes y de un espacio alrededor que es en estas ordenanzas de dos varas, mientras en el Fuero de Cuenca, y es de suponer que en el de Segura, era de dos estadales, equivalentes a ocho varas.

Las construcciones en terrenos públicos y sus efectos.

Las destrucciones de apriscos, ranchos, abrigos de ganado, etcétera.

La saca de hierbas, aves, mineros, etcéteras.

Caza y pesca.

(1) Joaquín Costa. "Colectivismo agrario en España". Buenos Aires, 1944-págs 269 y 270.

Las precauciones para encender fuego en el monte, prácticamente iguales a las contenidas en las Leyes Visigodas VIII, 2, 2.

Otras presentan perfeccionamientos sobre lo establecido en el Fuero base como sucede con la doctrina sobre vecindad, que examinaremos.

Novedad radical son los capítulos dedicados a regular las sierras de agua, absolutamente desconocidas en el Fuero.

Es interesante rastrear el origen de las disposiciones contenidas en las Ordenanzas, pero se ha advertido que, a efectos de este trabajo, interesa más examinar su valor como conformador de una realidad económico-social y espejo de la misma en el tiempo anterior a ellas. Por ello, no pasamos al estudio en profundidad de las Ordenanzas en ese aspecto.

El lenguaje empleado en ellas, a nuestro parecer, garantiza la participación directa de los procuradores de las villas del común en su elaboración, y corresponde al popular vigente aún en la actualidad, cosa nada extraña en una comarca que ha permanecido en el aislamiento durante muchos siglos por la deficiencia de las comunicaciones.

Así aparecen "excodixo", nombre actual de una herramienta con boca doble muy usada hoy para la poda de árboles.

Se emplea el artículo sin modificación delante de

"hacha" ("la hacha dicha"). Adjetivos como "gusanienta"; participios como "careado" (del verbo carear) que significa dejar pastar los ganados, bién a su aire, bién trabados y también expresiones como "coto y redonda"; "guisar de comer"; "alzar el hato" o "tercias partes" o "en todo y por todo" usados en el coloquio cotidiano actual.

Igualmente son populares y empleadas hoy las denominaciones de los diferentes marcos de madera de sierra: "chillas", "ripias", "alfangias", "costeros", etcétera.

En las Ordenanzas se muestran esos recelos de las villas sobre los nombramientos de caballeros de sierras como señalaremos, también la tendencia de Segura a anticiparse en el disfrute de ciertos aprovechamientos, como el ramoneo contra cuyo abuso obrará la ordenanza 67, que es de las nuevas probablemente, según se deduce de su "item" inicial. Pero, además, en el traslado de la Real ejecutoria de la Chancillería de Granada que nos ha servido de fuente para conocer el texto de las Ordenanzas, consta que el pleito ocurrió entre las villas de Génave, Villarrodrigo y Torres de Albasanchez por una parte y la de Segura por otra, porque ésta juzgaba y sentenciaba - por sus ordenanzas particulares en lugar de hacerlo por las del común.

Aparte de ello, en el encabezamiento de las Ordenanzas, se dice cómo la villa de Hornos hizo valer antes de su elaboración que "estando ella y las demás del común del Valle de la villa de Sigura de la Sierra en costumbre

y posesión muy antigua que quando la villa de Sigura quisiera haçer ordenanças... para la guarda y conservación de los términos de las dichas villas no las puedan hacer sin que junte todos los concejos del común y estén presentes a las hacer..." pedía una provisión real para que - "las dichas villas y lugares del dicho común se juntasen y pudiesen nombrar un procurador universal, para que en nombre de los dichos concejos contradixese las dichas ordenanças".

Estos datos dan idea de que entre la villa-cabeza y las demás existían las naturales tensiones. Quizá originadas porque, aparte de la tendencia normal a la autocracia de las personas o entidades dirigentes, Hornos fué villa antes que Segura, según manifiestan los cumplidores de la encuesta de las Relaciones Topográficas y con un privilegio de Fernando III a través del Maestre de la Orden de Santiago (1); igualmente en Torres de Albánchez - manifiestan fueron villa ocho años antes que Segura, su fuero está en el Archivo de Uclés y fueron reducidos por dicha villa a la condición de aldea suya hasta que el año 1552, por un privilegio de Felipe II, siendo príncipe - aún, se eximió y recuperó su villazgo mediante pago de cierta cantidad. (2) La villa de Génave tiene una historia parecida en cuanto a la adquisición del villazgo, de manera que es muy probable que fuese villa en las mismas

(1) Relaciones Topográficas. Academia de la Historia. folios 536 y ss.

(2) Idem. Idem, folios 630 vuelto y ss.

condiciones que Torres.

Estas tensiones tenían su escape en el cuidado con tínuo que las villas más antiguas, singularmente Hornos, ponían en el cumplimiento de los postulados sobre los que se fundaba el común.

CONTENIDO Y ESTRUCTURA.-

En estas ordenanzas, que son setenta y dos, se ha ce referencia en determinados casos a otras anteriores (concretamente en una de ellas se reproduce otra de 1480) y se les da nueva vigencia. Parece, como advertimos ya, que las antiguas se inician por "otrosí", mientras las mo dernas comienzas por "item". Las de "otrosí" tienen por objeto materias típicas de estas regulaciones primitivas mientras que las "item" tienen un sabor nuevo y, digamos, más elaborado. La ordenanza que cita la fecha y el escri bano que testimonia el acuerdo del Concejo de Segura es de 12 de noviembre de 1480 y se refiere a la forma en que deben entregar los caballeros de sierra las prendas a la Justicia de la villa para que las ponga en fialdad.

Aprobadas por Felipe II en junio de 1581, tratan todos los aspectos de una economía forestal y ganadera, con muy poca relevancia de la agricultura y reflejan el régimen propio de una mancomunidad de montes y pastos que vive sobre unos montes comunales, siendo casi inexisten-
tes los de propiedad particular, como revela la ordenan-
za número 71 ya citada.

APROVECHAMIENTO MADERERO.-

En cuanto al aprovechamiento de la madera, de las mismas ordenanzas se deduce claramente que regía un sistema de reparto o "suertes" del tipo del que aún rige en - algunos pueblos de Soria, por ejemplo (Vinuesa, Covalada, Duruelo de la Sierra, Navaleno, Molinos de Duero, Abejar, Cabrejas, San Leonardo de Yagüe, Vadillo y Talveila) o en Burgos (Quintanar de la Sierra, Regumiel, Canicosa de la Sierra, Vilbiestre, Neila, Palacios de la Sierra, Hontoria del Pinar, etcétera. El privilegio del aprovechamiento para los vecinos tiene su regulación en la prohibición contenida en la ordenanza 70: "Que ningún hombre extraño de nuestra tierra y jurisdicción no sea osado... ni corte madera alguna, ni la saque...." que concreta la norma de la 60 que prohíbe con carácter general a los forasteros cortar "cossa alguna de ellos verde ni seca, sin licencia del concejo". El precepto hace hincapié en la generalidad de la prohibición: "que ninguna persona... de qualquiera calidad, preeminencia o dignidad que sea, no pueda ni sea osado de cortar... ni sacalla fuera, ora sea del gordor del astil de azadón arriba e dende abajo, por delgado que sea el pie o rama que cortare, quemare o sacare...". La pena es de seiscientos maravedíes.

LAS SIERRAS DE AGUA.-

En cuanto al derecho que los vecinos tenían, no se establece en las ordenanzas directamente, sino que aparece en el curso de la regulación de las sierras de agua,

es decir, unas sierras movidas por un salto de agua. El sistema, usado en toda Europa en su tiempo, es transformar el movimiento rotatorio en uno de vaivén. En los términos de Segura debían ser numerosas y parece que eran el medio técnico de que los vecinos participaran en los productos del bosque. Se dedican a ellas las ordenanzas número 51, 52, 53, 54, 55, 56, y 57.

Estas sierras de agua se establecían por licencia del concejo de Segura como aparece de un pleito del Concejo, Justicia y Regimiento de la villa contra Francisco de Utrera, vecino de Hornos, de 1572, obrante en el Archivo de la Real Chancillería de Granada (1) con el siguiente encabezamiento: "... Sobre guarda de el privilegio conzedido a dicha villa; lei y fuero de quença y ordenanzas de ella que prohíbe no se haga edificio alguno, ni sierra de agua sin lisenzia de el concejo como señor de los términos..."

En la ordenanza 52 se establece que "los señores de las sierras de agua repartan madera a todos igualmente, no descogiéndola para unos sino que la den buena o mala o como saliere a todos... de los que tienen derecho de la poder llevar y sacar..."

La 53 habla de nuevo del repartimiento ordenando que se haga al mediodía.

(1) Archivo de la Real Chancillería. Cabina 3. leg, 1465 nº 9.

La 54 estatuye: "... que ningún señor de las dichas sierras de agua, pues han de repartir la madera como dicho es... que a qualquiera persona de Sigura o de Orcera, su arrabal y de los otros pueblos que tienen derecho de la sacar, la repartan..."

Estas normas que excluyen la libertad de los señores de las sierras de agua para dar a nadie determinado de madera, sino que la han de dar a todos igualmente, según la suerte, indica que no se trataba de una venta sino de una entrega. A la que los vecinos, por serlo, tenían derecho, como lo dice expresamente la ordenanza 52 y la 54.

Confirma lo dicho la ordenanza 55: "... Que los que trabajan en las sierras de agua no les den en pago de sus jornales madera por repartimiento como a los demás vecinos". Por un lado se trata de evitar el pago en especie con el peligro de confusión entre lo debido como jornal y lo que ha de entregarse por ser vecino, derecho aparte y de naturaleza diferente. La conculcación de esta regla se castiga con una pena de seiscientos maravedíes.

Finalmente, la ordenanza 56 dice: "... si para sus necesidades los dueños vendieron alguna madera adelantada, no les puedan dar más madera de la que les cupiere por suerte, por el repartimiento...". El derecho a cierta parte de madera era enajenable, como establece expresamente esta norma y se otorgaba por algún tipo de sorteo, o, simplemente, por la suerte en el momento de



repartir la madera, de la que, (ordenanza 52, ya comentada) no se podía "descoger ni hacer pila señalada". Es curioso que en la actualidad, en los pueblos sorianos que aún conservan este tipo de aprovechamientos, le llamen la "suerte". La que corresponde a un matrimonio en que marido y mujer sean vecinos del pueblo, se llama "suerte entera", la de un soltero o soltera mayor de veinticinco años, "media suerte", igual que el vecino o vecina que se casa con un forastero. Como ejemplo, en Navaleno y Covalada la "suerte entera" ronda, en el año 1975, las cien mil pesetas; en Quintanar y Vinuesa, cincuenta mil; en Salduero y Molinos cuarenta mil; en Canicosa, sesenta mil, etcétera (1).

Los aprovechamientos que no se realizaban en las sierras de agua, estaban sujetos a la cautela general del permiso, atribuido al Concejo de Segura, para cortar. Pero, además, existía la prevención, contenida en la ordenanza 58, de que nadie aserrara "madera de manos" en los términos sin licencia del Concejo de Sigura "porque de haber habido sierras de manos se ha visto por experiencia el gran daño y perjuicio que se hace en los dichos pinares e por ello la república recibe agravio...". Se castiga la falta a esta ordenanza con la pérdida de la madera y multa de mil maravedíes.

Los aprovechamientos forestales eran, pues, el

(1) José Luis PECKER. "La suerte que dan los pinos".
"ABC" 15-1-75.

principal medio de los habitantes de la Sierra que ejercían, con su base, una serie de actividades alrededor de la madera: transporte (veremos la gran importancia de las carreterías) y labrado de la madera. El transporte, por tierra primero y después por los ríos Guadalimar y Guadalquivir hasta Sevilla y por el Tus y Segura hasta los Almadenes de Calasparra, está documentada desde el siglo X, en la época musulmana.

Las ordenanzas cuidan de que no haya desperdicio de madera. La número 51 establece los marcos que deben aserrar las sierras de agua, señalando las medidas de chillas (1), ripias (2), alflagías (3), cavocosteras(4), y costeras (5), ordenando que aprovechen todo el pino que cortaren, so pena de 600 maravedíes por cada pié que dejaran de aprovechar y por cada pieza que no correspondiera a los marcos establecidos, aparte de perderla, un -- real. En el mismo sentido, la ordenanza 61 dice: "Item ordenamos y mandamos que los cadiceros y arteseros que cortaren pinos los aprovechen enteramente so pena pague por cada pié seiscientos maravedíes...".

Se permite, como es usual, que los vecinos de -

-
- (1) chillas. Aferesis de cuchilla. Tabla delgada de ínfima calidad cuyo ancho varía entre 12 y 14 cm. y el largo entre 1,7 y 2,5 metros.
 - (2) ripias. Tabla entre 14 y 18 ancho y 1 de grueso 2,10 y 2,50.
 - (3) alflagías mitad de un cuartizo. 7x9 cms.
 - (4) cavocosteras (?)
 - (5) costeras parte del tronco más próxima a la corteza que queda al aserrarlo, cuadrándolo.

Segura y sus términos (ordenanza 62)" puedan cortar qual quiera monte y de qualquier calidad que sea para reparo y ensanche de qualesquier caminos y veredas y veintenas e para passos, puentes y ríos y arroyos, por donde la gente passe y camine, anssí a pié, como con bestias y carretas".

COMERCIO DE LA MADERA.-

Para que esta riqueza principal sirva de elemento efectivo de activación del comercio se prohíbe en la ordenanza 59 "que nadie saque madera ninguna menuda ni rollizos en carretas fuera de los términos de Sigura" y la prohibición la fundamenta así: "...porque de causa de llevar en tanta abundancia se hace estanco donde la llevan y se compra allí la madera y estoruan que los bastimentos no vengán a esta villa y sus términos y el que lo contrario hiciere por cada carretada incurra, por sabida o por tomada, en pena de mil maravedíes e más que pierda la tal madera e su valor".

Como en todos los casos en que se busca atajar algo con rigor, se atribuye a cualquiera la posibilidad de llevar la parte del caballero de sierra en las denuncias.

Hay una prevención para evitar que la madera, primer producto de la comunidad, salga masivamente. Aparte de la regla que acabamos de examinar, la ordenanza 57 - que permite a los dueños de las sierras de agua que corren para carretas "a el Andalucía" exige que juren "no convertirá los pinos para río so la dicha pena doblada".

Es decir dos mil maravedíes por pié. La pena pecuniaria más alta de las contenidas en las Ordenanzas para vecinos. La conducción por el río era sin duda la forma más adecuada para hacer sacas masivas.

Se trata de que vengan de fuera a traer "bastimentos" de manera que se active el comercio y dejen suministros, no solamente dinero. Dirigido a ello está lo normado por las ordenanzas citadas, en cuanto a saca de madera, y las que pueden estimarse su complemento, la 40 y la 41. La primera establece que "ningún forastero de los términos pueda sacar cargas de ninguna cossa de los pueblos de ellos sin meter otras tantas de proveimiento como llevare de madera u otras cossas". Dice que "se ha tenido de uso y costumbre inmemorial usada y guardada y aún por privilegio y libertad". Cargas que han de ser "enteras" para sigun la bestia fuere, de pan o vino o - aceyte o fructo de legumbres e pescado". Se hace también, al final de esta ordenanza, una referencia a la corambre y las lanas como posibles cargas que pueden sacarse del común y que parecen pedir, por su importancia, una men-ción expresa.

La pena es pérdida de la carga, como es habitual, y multa de seiscientos maravedíes.

La número 42 es una dulcificación de la norma general en cuanto permite que los que entran cargas puedan hacer las suyas de reporte en algún pueblo distinto de donde descargaron. El fundamento del precepto vá in-cluído en él cuando dice "a veces los caballeros vuelven

a los arrieros del camino con sus cargas y reciben agravio del qual no reciben satisfacción porque antes se - quieren ir que pedir justicia". El caso es cuando descargada la carga de proveimiento en un pueblo van a hacer cargas a otro, levantando sospecha de que no han metido carga alguna y son detenidos y vueltos por los caballeros. Se provee, para evitar tales casos, que el escribano del pueblo donde hayan descargado expida una cédula en la que se especifiquen las cargas que metió y vendió para que pueda comprar y hacerlas en otros pueblos del común.

Si el caballero, a pesar de que el forastero lleve la cédula, lo prendare y volviera debe pagar el día al forastero y sus intereses (puede estimarse aquí que se establece una indemnización de daños y perjuicios, con la formulación clásica de "damnum emergens" y "lucrum cesans") luego sin dilación y "se determine bién e sumariamente, sin figura de juicio, por lo qual sea executado el tal cauallero, sin embargo de apelación ni - otro remedio alguno y, demás desto, sea privado del dicho officio...". La pena de privación del oficio raras veces se impone al caballero en las Ordenanzas, aquí se estima necesaria para la protección de los que traían los bastimentos más necesarios: pan, vino aceite, legumbres y pescado.

La ordenanza 42 es un complemento de la anterior "Que el vecino no venda al forastero cargas en los términos para sacallo fuera, ni el vecino llevar las bes-

tias del forastero para sacar del término las tales cargas". Este precepto se dirige a evitar que los vecinos que vienen con cargas los vendan a forasteros, y no lleguen a los pueblos del común. Se debe referir al reporte de los que, por tener la facultad de sacar madera, como vecinos, traen luego otro tipo de cargas que se quiere lleguen a los pueblos del término y no se vendan dentro de él para ser sacados fuera. La pena es "por cada carga" de seiscientos maravedíes. Y cualquiera puede ser parte para denunciar.

PREVENCION DE FUEGOS EN LOS BOSQUES.-

Como es usual en este tipo de ordenamientos forestales y pastoriles, se incluyen en las ordenanzas una serie de prevenciones para evitar los fuegos en los bosques. Son las ordenanzas número 24, 25 y 26.

La norma general es que no se quemen rastrojos, ni se hagan rozas con fuego antes del día de Santa María de agosto (15 de agosto, Virgen de la Asunción). Cuando se respeta esta regla general, la ordenanza 24 declara que "no tenga pena alguna aunque queme, en una distancia de sesenta pasos de su heredad, "qualquier árbol de fruto llevar, ni otro qualquier monte".

No establece la norma que regirá respecto de los daños causados fuera de esos sesenta pasos, pero se supone que la general de indemnización de daños.

Cuando se prenden rastrojos o rozan con fuego antes del quince de agosto, la ordenanza 25 castiga "demás

de dichas penas, incurra en pena de mil maravedíes, aplicados según desuso".

La 26 contiene las precauciones cuando se encienda fuego en el campo "para guisar de comer": "qualquier persona que encendiese fuego en los dichos términos, sea - obligado a lo matar con agua o con tierra, enterrándolo de manera que no lo dexe vivo ni encendido so pena, por cada una vez y no hubiere limpiado del alrededor las ramonicas y pajonas que hubiere, de seiscientos maravedíes. ...". Es decir, aparte de la multa, la indemnización de los daños.

LA GANADERIA.-

En segundo lugar va la ganadería. También los pastos pertenecían al común de las villas del Val de Segura. Contiene, pues, el ordenamiento una serie de normas sobre ellos, atribuyéndolos en exclusiva a los vecinos y estableciendo las correspondientes penas para los forasteros que los disfrutaban indebidamente:

La ordenanza 20 regula la manera en que los caballeros deben hacer los quintos "de los ganados de los vecinos de afuera en los términos desta dicha villa". Deben manifestarlos ante el escribano de la villa para que se cobre "conforme a las dichas ordenanzas... y ley del fuero que sobre esto habla y lleve al concejo la quinta parte de tales quintos".

RAMONEO.-

La ordenanza 28 trata del posible conflicto de preferencia entre las riquezas forestal y ganadera que puede suponer la necesidad de ramonear para el ganado. Se superpone la forestal puesto que la regla general es que "en ningún tiempo puedan desmochar los dichos árboles para - ningún género de ganados" y después vienen las excepciones concretas: "las vacas y bueyes del ero" y para la res "que fuere coja o estuviere gusanienta ande por sí y no de otra manera. Otrosí permitimos que se pueda echar ramón para chotos y corderos de los vecinos del común, cortado de los árboles por alto" para evitar abusos, se dan ciertas aclaraciones y limitaciones : "... se entiende desmochado todo lo que una persona de cada hatu pudiere llevar cada un día a questas a las majadas o corrales o a otra qualquiera parte donde los dichos chotos y corderos estuvieran...". Se establece también que el ramón, se - transporte sesenta pasos de los árboles y "si estando desviado el tal ramón es, fueran halladas las madres con ellos comiendo en el dicho ramón, no haya pena...". Aparece aquí la nota tierna, tan corriente entre los campesinos con sus animales domésticos, cuando habla de la res coja o gusanienta y prevé que las madres se acerquen a pacer el ramón que se ha traído para las crías y lo permite. También en el alegato de los ganaderos santiagueños, dos siglos después, para conseguir licencias de ramoneo, late ese mismo sentimiento y se busca el apoyo de esta norma y la siguiente.

La ordenanza 29 permite que puedan desmochar "los vecinos deste común" en todo tiempo que esté la tierra cubierta de nieve "para todo qualquier género de ganado y bestias sin pena alguna...".

En la ordenanza 67 se completa lo establecido en otras anteriores para ramonear. Esta norma parece motivada por pasados abusos pues al saberse en Segura antes que en los demás pueblos del común la licencia para ramonear, "... quando vienen a saberlo los demás vecinos del común, ya es pasado el término que se dió para el dicho ramonear ... por tanto que cada y quando que el concejo de la dicha villa de Sigura diere licencia para ramonear, habiendo causa justa, tres días antes que se use la tal licencia lo hagan saber a las dichas villas y lugares del dicho común con un peón que queste quatro reales cada día". Se advierte aquí, de nuevo, el forcejeo entre la villa de Segura y las demás del común para mantener la igualdad en el disfrute de los beneficios "generales" y una concesión de las demás villas de que los gastos de comunicación vayan a su costa. Si no se cumple este requisito de aviso lo que se haga no tiene ningún valor ni efecto "porque es justo que todos goçen generalmente".

Prohíbe la ordenanza 30 que "ninguna persona sea osado de traer ni trayga en estos nuestros términos en cada una manada de machos de cabrío más de seis mansos con esquilas. La persona que más tragere tenga por pena... si fuere vecino, mil maravedíes y si fuere forastero... doce mil por cada una vez...". Con la sólita diferencia entre

vecino y forastero, esta es una de las penas más duras de las contenidas en las ordenanzas.

GANADOS FORASTEROS.-

Los ganados extranjeros, registrados y manifestados, pueden venir a la Sierra y tienen cañada amojonada. Parece que al común le interesa esta venida puesta que la ordenanza de "las veredas de los ganados extranjeros que en los términos de Sigura están", previene posibles abusos de los caballeros de sierra que "prenden y hacen vejaciones" a los que ansí vienen con sus ganados y de los alcaldes entregadores de cañadas, por llevar penas y achaques, hacen culpas donde no las hay y otras veces por se haber salido o careado penan con grandes penas...". Se establece que, puesto que por donde entran los ganados es tierra sin labores, pasen y vayan sin guardar cañada alguna, siempre que vayan por donde es costumbre y no arrosten ni detengan al ganado, so pena de seiscientos maravedíes.

Había determinados sitios en los cuales el ganado que entraba se contaba y registraba, los llamados contadoros que aún subsisten en la toponimia de la Comarca.

El disfrute de los pastos del común queda, en principio, reservado a los vecinos del término, la ordenanza 25 "Del que metiere en los términos ganados de fuera de la orden sin lo registrar", así lo establece. Manifestación y registro de ganado que se hará ante el Concejo. Cuando no se haga así y los caballeros los tomaren e lo

supieren, se castiga la falta con una multa de seiscientos maravedíes para el vecino que encubriere el ganado y el tradicional quintado del rebaño para el dueño, además de la expulsión del ganado.

ARMAS DE LOS PASTORES.-

Para evitar pendencias entre los pastores, que debían haber ocurrido, según dice expresamente la ordenanza 47, se prohíbe que gañanes y pastores lleven armas ofensivas. Enumera, como ejemplo, una larga lista: arcabuz o escopeta, ballesta o lanza, espada, dardo, daga y puñal. Se castiga la contravención con pérdida de las armas, que pasan al caballero o justicia que las tomare, y una multa de trescientos maravedíes. Las luchas o peleas que trata de evitar este precepto debían ocurrir con carácter grave: "...porque de traer los pastores y gañanes en sus cauñas y hatos, armas ofensivas ha habido muertes y otros escándalos...". Se les permite únicamente, según la rúbrica de la ordenanza, que ésta no amplía luego, "los cuchillos que suelen". Se referirá lógicamente a los de su servicio para cortar y comer.

ESPACIOS Y EDIFICIOS ESPECIALMENTE PROTEGIDOS.-

RASTROJOS.-

La ordenanza 31 establece que "a los vecinos deste común que al presente son y por tiempo fueren, se les guarden los rastros de sus panes seis días después de sacadas las cargas dellos". Se entiende que, después de

esos seis días, los rastros pasaban a ser del común en cuanto a pastos se refiere y podían ser aprovechados por cualquier vecino. Esta preferencia se guarda bajo pena de cien maravedíes por cada manada de cabrío o lanar de cién cabezas arriba y de cién cabezas abajo, dos maravedíes por cabeza. Los ganados mayores y los puercos tengan la pena de los paños. En este caso, sólo el dueño del rastrojo puede prender y no otra persona, ni siquiera el caballero.

BARBECHOS.-

La 49 impide que entre el ganado en el barbecho hasta tres días desde que haya cesado de llover bajo determinadas penas pecuniarias, en las que se hace la consabida distinción entre diurnidad o nocturnidad para doblar en este caso la pena. Los barbechos que se quedaren sin sembrar, pasado el mes de enero no tienen que guardarse. Esta disposición debe estar motivada por la necesidad de que las siembras no se hollen por los ganados ya que las pezuñas sobre el suelo mojado forman luego, una vez seco, una especie de costra que dificulta todo el desarrollo de las siembras. Contiene esta ordenanza la obvia prevención de que cuando el ganado y las siembras fueren del mismo dueño no ha lugar a sanción.

CABAÑAS, CORRALES, APRISCOS, MAJADAS, ETC.-

La 32 pretende conservar todo tipo de edificaciones que sirvan para el ganado: "...que ninguna persona

sea osado de quemar ni derrivar cauaña ni corral ni aprisco ni otro amparo que esté hecho en nuestros términos para reparo de las gentes o ganados, so pena de seiscientos maravedíes...". Quedan libres de pena los que tratan de mudarlo a otra parte "...e para lo hacer mayor o menor".

La ordenanza 48, con otras prevenciones, prohíbe arar, cavar, labrar, edificar o hacer cualquier labor en las cabañas, abrevaderos de ganado, majadas o egidos, cotos y vedados, que impidan "el aprovechamiento público e común dello, so pena de seiscientos maravedíes" y pérdida de lo que hubiere edificado, o sembrado. Esto de acuerdo con las normas generales de la accesión de mala fé.

QUESEADEROS.-

Los queseaderos se otorgan cada año a los "señores de ganado" por el concejo y supone privilegio de pasto en tales queseaderos "dende mediados de abril hasta que hayan acauado de hacer el queso ..." pero no después de San Juan (24 de junio) permitiendo, a partir de dicho día, que "en qualesquier queseadero pueda entrar a pastar qualesquier ganados sin pena alguna".

La ordenanza 45 regula la forma en que se debe conseguir el queseadero, el requisito de que se les amojone y dé mandamiento por personas nombradas por el cabildo, previa jura formal por parte del concesionario del



número de ovejas que tiene para quesear, sin cuyo requisito no hay derecho al queseadero. Señala también los de rechos del señalamiento: que las personas que lo hagan vayan a costa del concesionario y se pague medio real y un queso "que de tiempo inmemorial acostumbra a llevar y le pertenece" al escribano del cabildo.

La ordenanza 46 establece las penas para los que no respeten el queseadero. En ellas está incluido el mismo dueño (concesionario) del queseadero que meta ganado diferente del que sirva para quesear "so color de ser el tal ganado de sus amigos, hijos o parientes o criados, ora sean mayores o menores, directo o indirecto, incurra en cada uno, ora sea el dueño del queseadero u otro qualquiera, en pena de cada manada de ducientos maravedíes de día y de quatrocientos de noche". Aparece la habitual duplicación de pena por nocturnidad. "Si fuesen puercos, pague cada cabeza quatro maravedíes de día y ocho de noche y si fueren yeguas o vacas, medio real de día... y uno de noche y si fueren cabras, de cada manada, qualquiera que sea, ducientos maravedíes de día y de noche el -doblo".

Se exceptúan de las penas las bestias de arada (bueyes, vacas y demás) que no tienen pena y para el concesionario se establece, además de las multas, la pérdida de la concesión. El mismo concesionario está legitimado activamente para denunciar, llevando la parte que correspondería al caballero si denuncia antes que él.

MAJADAS Y ABREVADEROS.-

La ordenanza número 68 regula lo referente a las majadas y abrevaderos. "que en todo el término común de este término se señalen y amojonen majadas para ganados mayores y menores e abrevaderos e para ello se diputen personas de experiencia, de cada villa uno o dos, para que lo que ellos declaren ante el ayuntamiento de Sigura por aquello se esté y se guarde". La especial protección de estos lugares de descanso nocturno de ganados y pastores, consiste en que, según esta misma ordenanza, "dentro de los quales no se corta, ni en veinte passos alrededor, cossa". La pena para la contravención es de las más crecidas entre las incluídas en esta regulación puesto que asciende a dos mil maravedíes por pié cortado.

BIENES PUBLICOS: CAMINOS, FUENTES, ARBOLES Y CUEVAS.-

La ordenanza 48 prohíbe expresamente "que ninguna persona, en los dichos nuestros términos, sea osado de arar ni cavar ni labrar ni hacer otro edificio ni lavor ninguna en los caminos ni veredas públicas, que van a otra parte por donde pasan los vía andantes y en las cañas ni abrevaderos de ganado ni en las majadas o egidos, cotos y bedados so color alguna...". La razón es que son públicos y nada se puede hacer "que impida el aprovechamiento público e común dello". La pena es de seiscientos maravedíes, aparte de la pérdida de lo edificado o plantado y de que "la tierra quede común como antes lo era".

Hay un curioso criterio para distinguir los caminos y veredas que pueden estirmarse públicos y los que no lo son: "...se entiende -dice esta ordenanza- quando passara adelante, porque si en su lavor remata, el dueño lo puede arar y echar por do quisiere sin pena alguna".

Se entienden comunes asimismo "las fuentes que estuvieren en las hazas de labores" y "l fructo de los árboles que estuvieren en las dichas heredades siendo tales que siempre se hayan tenido y reputado por comunes los frutos dellos...".

Las fuentes y sus nacimientos "deben estar limpias para el beber de las gentes y su servicio y aprovechamiento -dice la ordenanza 50- que ninguna persona . abreve puercos, ni laven en ellas otras suciedades...". Se manda también en la misma ordenanza que se guarden dos varas alrededor de ellas, se refiere a las que están fuera de los pueblos, en que estén limpias "porque anésí conbiene al bién público". La pena es de seiscientos maravedíes.

Son comunes también las cuevas, según la ordenanza 33, y sólo se atribuye su uso por un año "por aquella vez y por el verano e inbierno" al que primero entrare y encendiere fuego. Parece que las cuevas donde se albergaban personas y ganados, sobre todo estos últimos, eran codiciados y "causa de auer alguno entrándose y algunas de las otras personas se quieren entrar y sobre ello ha habido cuestiones y debates, siendo como son comunes pa-

ra todos...". El derecho al uso de la cueva se pierde una vez alzado el hato y queda libre para el siguiente que llegue. La contravención se pena con seiscientos maravedíes.

COTO PARA SIERRAS DE AGUA.-

A las sierras de agua, principal industria de la comunidad, se les concede, por la ordenanza 57, "coto y redonda a cada una de media legua común e que no corten pinos en ellas, salvo para edificios de cassas, los vecinos del común". El razonamiento se apoya precisamente en la importancia de tales sierras: "Item por quanto por experiencia se ve que el principal aprovechamiento que esta villa y su tierra tiene son las dichas sierras de agua, porque por la madera que en ellas se hace traen los abastecimientos... porque el dicho comercio no pare e todos sean abastados e la república no reciaua daño, ordenamos y mandamos que todo siempre se les guarde a cada una de las sierras media legua que les damos y señalamos por coto y redonda alrededor, siendo señalado y aprobado por el dicho concejo y oficiales dél, de tal manera que ninguna persona sea osada para madera de río cortar ningún género de pino, de ningún gordor que de él sea y aunque sea del gordor del hasta de azadón ni para ello se pueda dar licencia y si se diere que no valga, porque siempre ansí los pinos criados como los que criasen y nacieren sean y estén para el aprovechamiento de las dichas sierras de agua y no para otra cossa alguna..."

Con la excepción dicha, de que sea para casas, la falta a esta ordenanza se pena con mil maravedíes por cada pié cortado, pudiéndolo denunciar cualquier persona, y no só lo los caballeros de sierra, correspondiendo al denunciador la parte del caballero en tal denuncia.

FRUTOS ESPECIALES.-

El aprovechamiento de ciertos frutos, piñas (de pinos pinea, doncel o piñonero), bellotas, nueces y avellanas está regulado en las ordenanzas para establecer días a partir de los cuales se pueden coger esos frutos sin pena.

La número 37 establece que "ninguna persona sea osado de coger piñas de pinos donceles hasta ser pasado el día de la conmemoración de los Santos de cada un año". La pena es de cien maravedíes por cada vez, pero para el forastero la pena se sextuplica. Queda permitido coger hasta una docena de piñas sin multa y se prevé que el día de todos los Santos cayese en sábado en cuyo caso la fecha "post quam" se traslada al martes siguiente.

La 38 regula el tiempo permitido para varear bellota de roble, de carrasca y del malojo. La bellota de carrasca no se puede coger antes del día de San Lucas "de cada un año" y la de roble y matojo hasta el día de San Miguel, so pena de trescientos maravedíes al que "antes destos días la cogiere o bareare para ganado". El que desgrumare las carrascas con las manos o de otra ma

nera incurre en pena de cien maravedíes. Una pena y otra por cada carrasca. La diferencia de pena es normal, puesto que con vara se derriba mucho más fruto.

Se castiga incluso a los pastores, porqueros y demás personas que andando con el ganado lleven vara de -avellano ni de otro árbol, fuera de su gancho, "so pena de trescientos maravedíes por cada vez que ansí con ella fuere hallado y que la tenga en su hato". Hay la excepción de "cualquier vecino de Sigura y de las villas y lugares de su tierra pueda coger un celemín de bellota... para su comer, antes del dicho día de San Lucas".

Los caballeros que encuentren a alguien cogiendo, vareando o desgrumando deben prenderlos y serán creídos por su solo juramento.

La ordenanza 39 se refiere a las nueces y establece que "de aquí adelante, hasta pasado el día de Sant Miguel de septiembre de cada un año" nadie varee ni coja nueces en los términos del común, "si no fuere de su propia heredad", bajo pena de quinientos maravedíes. Coger nueces está más penado que piñas piñoneras y bellotas y hay, incluso, en la ordenanza examinada una expresa referencia al caballero que la conculcare: aparte de la pena, pierde el oficio por un año. La denuncia que haga el caballero ha de ser por tomada y no por sabida.

Lo referente a las avellanas se regula en el número 43 de las ordenanzas. No se puedan coger antes del día de Nuestra Señora de Septiembre, bajo la misma pena que sanciona la cogedura de nueces e igual prevención

respecto del caballero que, por sí o por otro, hiciere lo prohibido en esta ordenanza. Permite, sin embargo, como en la bellota, que cada vecino pueda coger "para su comer" antes de dicho día "hasta un celemín, no más".

La excepción que contiene, respecto a las nueces, la ordenanza 39 al permitir que cada uno las recoja en su propia heredad sin limitación, indica que estos árboles estaban, en general, incluidos en los comunes y formaban parte de los goces reservados a los vecinos. También la expresa permisión de un celemín de bellota y de avallana para su comer, evidencia que se trataba en esos dos frutos de un aprovechamiento ganadero más, aunque la avellana tiene una valoración superior y mayor protección penal.

ALIMAÑAS.-

La ordenanza 63 regula los premios a los que capturen alimañas, lobos y zorras, estableciendo diferencias según sean presentados en Segura, en alguna de las villas o en las aldeas del común. Así el concejo de Segura pagará por cada lobo cuatro ducados y por un lobecico quinientos maravedíes, las villas, respectivamente, un ducado y cien maravedíes y las aldeas doscientos maravedíes y nada por los lobeznos. Las zorras se pagarán en Segura a un real (treinta maravedíes) y en las demás villas a medio real. Todo lo qual se entienda que se ha de pagar registrándose en el dicho concejo de Segura con los dichos lobos y camas dellos y çorras...".

Se corta a las alimañas la oreja derecha, para evitar - que se reutilicen en cualquier sitio, y el cazador debe jurar que los ha matado en los términos del común, previendo la posible "importación" de alimañas muertas.

CAZA Y PESCA.-

La caza y la pesca están reguladas en las ordenanzas 69, 70, 71 y 72 y la actuación de los caballeros respecto de ellas en la 18.

En la número 69 se establece la veda de conejos y perdices. Los primeros es los messes de abril y mayo y para las perdices desde entrante el mes de abril "hasta en fin del mes de junio siguiente" porque en todo este tiempo la experiencia ha mostrado en estas tierras, por ser frías...". Durante estos períodos el "que lo contrario hiciere en qualquiera manera que sea, e tomare los huevos a las dichas perdices o gaçapos de leche a los conejos, incurra en las penas declaradas en las pragmáticas de su magestad que en esto hablan".

Hay aquí una remisión a las normas generales vigentes. La especialidad está en el tiempo de veda establecido en función de los datos de la comarca. Esta ordenanza daría cumplimiento a lo ordenado por las Cortes de Córdoba, que, en 1570, mandaban que cada provincia declarase particularmente el tiempo de veda.

La siguiente ordenanza limita el derecho de caza a los vecinos del común: "Que ningún forastero entre en el término a cazar ni cortar madera ni saque metales ni .

aves". Prohíbe cazar "ningún género de caça, con canes ni aves ni redes, ni con ballesta". Para el castigo de los contraventores se remite, como antes a "las leyes y pragmáticas de su magestad".

La 71 recoge el derecho de los vecinos a la caza: "que en todo tiempo del año que esté criada la caça, ansí de conejos y liebres comodde perdices y palomas - torcaçes e otras aves, las puedan tomar y caçar con qualquier género de instrumentos aparexados para caçar". No se reduce solamente a la caza de animales dañinos, como algunos ordenamientos del mismo tipo, sino que concede un auténtico derecho de caza. De cualquier manera se hace distinción de ambos géneros puesto que, en el mismo artículo, se hace referencia a este tipo de animales "en los quales (montes) se crían muchos puercos y lobos y - osos y onças y cabras monteses conejos, perdices y otros géneros de animales que se comen y destruyen los panes, como por vista de ojos cada un año se ve...".

Hay también una remisión final a "las leyes e - pragmáticas de su Magestad que disponen sobre la manera de poder caçar y que se han de guardar en todo y por todo".

La ordenanza 72, la última, regula la pesca, estableciendo la veda. Señala dos de diferente duración: la trucha desde principio de octubre hasta mediados de diciembre porque es el tiempo en que desova y "para ello corre" y el resto de los peces desde entrante abril hasta el fin del mes de mayo. Repite aquí que "la tierra es

fría" así como la referencia a las leyes y pragmáticas de Su Magestad.

Hay una norma, casi escondida en el final del artículo, en la que se establece que en estas materias, ni los alguaciles ni otras personas puedan denunciar por sabida ni por tomada y si lo denunciare no valga la tal denunciación ni se le aplique la pena...". Esta exclusividad de los caballeros para actuar en materia de pesca, debe, según parece lógico, aplicarse también a la caza.

En la ordenanza 18 regula la manera en que ha de actuar el caballero que prenda cazando y pescando, debiendo manifestarlo "ante la justicia y por ante el escribano del cauildo desta dicha villa a quien nombramos y señalamos para ello y no ante el escribano público ni ante otra persona alguna..." el escribano debe asentar en un libro del concejo lo que el caballero manifieste sobre los siguientes extremos: nombre del caballero, nombre del denunciado, lugar del término donde sucedió el hecho y la clase de prenda que hizo.

LA AGRICULTURA.-

En último lugar en cunto a la extensión de normas y su número está lo agrícola. Solo una ordenanza, la 23, se refiere específicamente a "lo que pueden hacer los labradores en sus labores y tierras". Autoriza a que en las tierras de su propiedad o posesión pueda libremente "sin caer e incurrir en pena alguna, cortar y talar y sacar de quaxo y rozar y quemar todo el monte y árbo-

les que hubiere nacidos y de nuevo nacieren en cualquier género e suerte que el monte y árboles fuere...". Con - dos limitaciones: si hubiere en dichas labores robles o carrascas de dental arriba de grueso (1) debe dejar dos pies de carrasca o de roble por cada fanega (2) y, segun da limitación, si hubiere pinos donceles o salgareños, también de dental arriba, "no los pueda cortar sin que primero sea visto por uno de los del concejo de la dicha villa de Sigura y éste dé razón para que, si fueren de provecho, los mande aprovechar el dicho concejo". Los de dental abajo puede cortarlos libremente, aunque también con la obligación, pareja a cuando se trata de robles o carrascas, de dejar dos pies por fanega.

Este precepto no se preocupa de preservar los futuros pinos, puesto que permite cortar los renuevos, pero sí conserva algunos árboles para resguardo de las personas y el ganado, preocupación muy común en todos los reglamentos de este tipo. Esa quizá sea la causa de que en la actualidad, en la Comarca que tratamos, se encuentren, aislados en medio de labores evidentemente viejas, ejemplares centenarios de pinos donceles. Estos pinos "obligatorios" se podían limpiar y desconchar hasta la mitad. Las ramas se utilizaban como leña y calda (3) y la concha como curtiembre, para mezclar con el yeso y

(1) Dental. Una de las piezas del arado, de unos 6 u 8 cm. de diámetro.

(2) Fanega aproximadamente, en esta tierra, 0,665 Ha.

(3) Calda. Conjunto de ramaje de árboles. Arbustos usados para caldear los hornos.

lograr un armazón ligero para los revoltones o bovedillas y como calzo para las tejas, que se sigue aún empleando.

LA VECINDAD.-

Como es natural en un ámbito privilegiado, hay una continua distinción entre el forastero y el vecino y una preocupación por los requisitos para ser considerado como tal, y por la posibilidad de que algunos se hicieran pasar por vecinos sin serlo y participar en el disfrute de los términos del común. Ya hemos hecho alusión a ese problema al principio de este apartado, por lo que ahora simplemente se ampliará lo dicho en puntos concretos.

La diferencia de trato puede ejemplarizarse con la ordenanza-ll que establece cómo los caballeros han de proceder cuando hallaren a alguien delinquiendo: mientras los forasteros se sujetan a prisión con sólo la denuncia del caballero, los vecinos no pueden ser presos, si prestan fianza por la cantidad que se les pidiere, hasta haber llegado a la sentencia final. Se declaran "abonados de fianzas" todos los señores de ganados y labradores y los criados de los mismos deberán "abonarse de fianzas llanas de estar a derecho y pagar por lo juzgado y sentenciado". Es decir, el forastero va a prisión sin fianza, el vecino tiene derecho a ella y, siendo propietario, se le presume.

Las ordenanzas 36, 60, 62 y 64 hacen expresa refe

rencia a los forasteros para marcar su diferencia con - los vecinos:

La 35 habla del caso de que alguien meta ganados forasteros en el común, haecho que se castiga con el tradicional quintar si no se han registrado. Ya se habló de ella en otro lugar de este apartado.

La 36 trata del forastero que entrare a cortar madera en estos términos sin "se avecindar o registrar hacha y de el vecino que le metiere y tubiere encubierto". Parece, según explica esta ordenanza, que muchos vecinos de la villa de Segura, de Orcera, su arrabal, y de las demás villas y lugares del común metían forasteros para que les ayudaran a labrar madera, teniéndolos encubiertos "sin se avecindar" ni registrar. Eso iba en contra de la ley del fuero puesto que los vecinos eran los que ostentaban, personalmente, el derecho y si alguien utilizaba "mercenarios" forasteros defraudaba tal derecho pues podía labrar más madera que los demás vecinos con sus solas fuerzas. Dice textualmente la ordenanza que el derecho pertenece a los vecinos "conforme a la ley - del fuero y sentencias que sobre ello hay y ansi se defrauda el derecho que pertenece a este concejo". Para evitarlo, se ordena al forastero registrar el hacha o herramienta y pedir licencia, parece también según eso que debía pagar alguna clase de exacción.

La sanción por incumplimiento de este precepto es para los vecinos de seiscientos maravedíes, para los forasteros se remite a la pena establecida para los que

cortaren árboles "de fructo" que es, según la ordenanza 66, de mil maravedíes por pie y cien por cada rama.

CONCEPTO DE VECINDAD.-

En consecuencia, dado este régimen de vecindad privilegiada tan común en las poblaciones de frontera, es natural que la adquisición de vecindad se regule en uno de los artículos del ordenamiento. El artículo 22 lleva la rúbrica siguiente "De los forasteros que en Sigura y en términos vinieren a se avecindar".

Da primero el concepto de lo que se considera vecino: "la vecindad de cada uno es donde vive y tiene cassa poblada", como criterio real y, como criterio legal, "donde por las leyes del encabezamiento general de las alcabalas y del servicio y montadgo perteneciente a su magstad está declarado y mandado que en tal lugar sea habido por vecino y no -advierde y remacha- donde se avecindare sin ir a vivir con su cassa poblada a el tal lugar". Esta falsa vecindad ocurre también en esta zona "en gran daño y perjuicio desta villa y de sus propios y rentas y término, y en perjuicio de sus pobladores y de sus haciendas de ellos, y de sus ganados", porque muchos se vienen a avecindar, sin traer su casa ni tenerla poblada, porque "muchas veces acontece que no se reciben (registran) las tales personas porque así conbiene y en fraude desta villa y su república, por favor y otras vías exquisitas, procuran... avecindarse en las otras villas y lugares, situados en los términos desta dicha villa y, so color de

tal vecindad, sin tener cassa poblada, gozan como vecinos... y otros meten sus ganados". Además, como forasteros que no pagan los cánones o estipendios que debía haber establecido para ellos, a cambio del disfrute de ciertos y determinados aprovechamientos, "defraudan a este dicho concejo de sus derechos propios y rentas, como por experiencia se ha visto, y a su magestad sus derechos".

REQUISITOS DE VECINDAD.-

En su virtud establece esta ordenanza 22 los requisitos para adquirir la vecindad en los términos.

En primer lugar debe hacerse algún tipo de "recepción" o registro, según se deduce del contexto, aunque no se establezca expresamente.

En segundo lugar, trae su casa dentro del plazo de treinta días "de como fuere recevido por vecino". Este plazo es aplicable a casados y viudos, no a los solteros.

En tercer lugar, que tenga la casa poblada durante todo el año.

El soltero que hiciere vecindad "conforme a las leyes y pregmáticas de nuestros reinos" no está obligado a tener casa poblada, pudiendo, pues, aún sin ese requisito, gozar como los demás vecinos.

La vecindad que no cumpla las exigencias previstas es inválida, sin otra pena, excepto para los que hubieren metido ganados que les serán quintados, conforme a las or



denanzas 20 y 35 ya examinadas.

SEÑUELOS, HIERBAS, AVES, ETC.-

La número 64 prohíbe a los forasteros que saquen de los términos señuelos, hierbas, aves, según dice la rúbrica. Luego el texto amplía concretando "açores", "mineros" o diciendo en general " u otras cossas que son defendidas por nuestros fueros e por otras nuestras ordenanzas". La pena es la pérdida de lo que intentare sacar, de las caballerías en que lo transporta y mil maravedíes de multa por cada pie de siñuelo y lo mismo por las dichas aves o mineros y otras cossas que aplicamos donde ellas las aplican". Estas otras ordenanzas no se sabe cuales pueda ser, quizá las más antiguas que se estiman vigentes en cuanto no contradigan las que examinamos.

La ordenanza 70 reitera y duplica prohibiciones de otras: los forasteros no pueden cortar madera ni sacarla (ordenanza 60), llevar sal, ni fierro ni otro metal (ordenanza 64) ni aves algunas (ordenanza 64) de las que se crían en estos términos. Las penas son las establecidas en las leyes y pragmáticas de Su Magestad.

LOS CABALLEROS DE SIERRA.-

"Para la guarda de los dichos términos y montes" dice la ordenanza primera "mandamos y ordenamos" que se guarden las leyes del fuero a que esta villa está poblada, y usada y guardada en lo que toca a los caualleros de sierra....".

Esta especie de caballería andante rural con funciones de guardería forestal, ganadera y agrícola y tiene en estas Ordenanzas una prolija regulación que abarca veintiún artículos, del primero al veintiuno inclusive. Se trata de conservar una guardería rural selecta, con conocidos orígenes, de especiales características que la haga respetable y respetada mediante una serie de exigencias que garanticen su independencia económica y su actuación correcta en los cometidos que se les confían.

REQUISITOS MATERIALES.-

1º BIENES.-

Los caballeros deben tener bienes raíces propios, sin cargas, "en contía de los cien florines del cuño de Aragón, con el doblo conforme a la ley del fuero, que montan y hacen cinquenta mil maravedíes de la moneda que al presente corre". Estos bienes han de ser propiedad del aspirante a caballero por lo menos seis años antes a la fecha de presentación, según la ordenanza 1ª.

2º CABALGADURA.-

Se les exige, como instrumentos de su oficio, que tengan, en primer lugar, caballo, ensillado y enfrenado a la gineta, que valga doce mil maravedíes, sin contar la silla y los arreos. Este requisito respecto del caballo, contenido en la ordenanza primera, se completa con otras prevenciones que van en las ordenanzas 4, 5 y 7. La 4 exige que el caballero tenga siempre el caballo "sin lo pres

tar, vender ni alquilar".

A.- Venta.-- Si lo vende, está obligado a comprarlo dentro de un mes, una vez pasado el cual no podrá seguir ejerciendo el oficio hasta que lo compre y sea examinado "conforme a la ordenanza".

B.- Muerte.-- En caso de muerte, el plazo es más largo, se le dan dos meses, pasados los cuales cesa en el oficio hasta que lo compre.

C.- Consecuencias.-- Las consecuencias, aunque obvias, son expresadas por esta ordenanza "que si passados los dichos términos, el tal cauallero no hubiere comprado el dicho cauallo y manifestado para que se examine, la toma y tomas y prendas que hiciere... no le bala ni el juez pueda admittilla ni el tal cauallero lleve derechos della y sea ninguna la denunciación y sea libre el denunciado o denunciados...".

D.- Cómputo de los plazos.-- Para contar los plazos establecidos en los que puede el caballero estar sin caballo, señala esta ordenanza que deben manifestar la venta o la muerte ante el escribano del cabildo dentro de los tres días de que sucedió el caso "para que se sepa y averigüe desde quando corren los términos dichos. Si no se hicieren estas diligencias no valgan las tomas que el cauallero hiciere, como dicho es".

E.- Falsa propiedad.-- La ordenanza 5 prevé que el caballo no sea propio del caballero, castigando la falsedad con la pérdida del caballo.

F.- Condiciones del caballo (examen).- La ordenanza 7 lleva la rúbrica "Quales bondades han de tener los caualllos de los caualleros y el tiempo que sea obligados a tenellos antes que sean admitidos". Pide esta ordenanza que los caballos tengan tres años "dende arriba, de manera que con potro de dos años no se pueda presentar, ni les valga". El examen de las condiciones de los caballos debe hacerlas el pleno del concejo, no cualquiera de sus individuos, sino todos "juntos en su cavildo y ayuntamiento". El examen hecho de otra manera no vale. Se pretende con él que "tenga buenos caualllos, sanos que sean tales que con ellos, en servicio de su magestad y servicio de su tierra y reino, puedan defender y ofender".

3º ARMAS DEFENSIVAS Y OFENSIVAS.-

Las armas que debe tener el caballero se enumeran en la primera ordenanza: "conviene, a saber, capaçeta e babera, celada y morrión o las coraças o cota y espada y daga o puñal, lança y adarga". La enumeración es anárquica pero recoge armas ofensivas y defensivas, enumerando éstas desde la protección de la cabeza, capacete, babera, celada y morrión, en las que las denominaciones capacete y morrión no señalan grandes diferencias mientras la celada tiene la característica de llevar visera, siendo por fin la babera una pieza que protege, como su nombre indica, el cuello y que, en buena teoría, debe ser un complemento común a cada una de las formas diferentes de casco que se citan. Para protección del cuerpo, se señalan las corazas o cota y viene luego la adarga, escudo

ovalado de cuero con dos asas para embrazarlo que completa el aparato defensivo. Después habla de las armas ofensivas: largas (espada y lanza) y cortas (daga y puñal), en estas últimas la exigencia será alternativa pues las diferencias entre una y otra se reducen a que la primera es una especie de espada en pequeño, con guarnición para el puño y gabilanes, con dos, tres o cuatro filos, mientras el puñal sólo hería de punta y carecía de guarnición y gabilanes.

REQUISITOS PERSONALES.-

1º.- VECINDAD ESPECIAL.-

Hay un requisito sobre la procedencia de estos caballeros, que se establece en la ordenanza 17, según ella deben ser vecinos de Segura y de Orcera su arrabal, "conforme a las ordenanzas antiguas de esta villa, usadas y guardadas conforme a la ley del fuero" proque así "siendo personas abonadas y miradas guarden mejor los términos". Segura guardaba, como garantía de sus prerrogativas el control de "las fuerzas armadas".

2º.- NUMERO Y NOMBRAMIENTO.-

Sin embargo, las villas comuneras restantes debían tener sus recelos y desearían alguna suerte de intervención en la milicia de los caballeros de sierra. Eso explica el final de la ordenanza primera que dice textualmente: "...y en esta ordenanza hubo ciertas contradicciones por las villas del común y por esta villa de Sigura que

fué en las ordenanzas confirmadas por su magestad, antes desta vista ésta con las demás, fué respondido y mandado a esto que haya veinticuatro caualleros, los doce puestos por Sigura y los doce puestos por las villas del común...". Es decir Segura nombraba doce y cada una de las restantes, seis, dos cada una.

3º.- EXAMEN.-

En la ordenanza 2 se regula el examen de los caballeros: "... en el día de su presentación ante los dichos oficiales del concejo y los dichos jueces nombrados para ello "debían los aspirantes "correr la carrera". Es decir, manejar su caballo armados y hacerlo correr delante del jurado que debía examinarlos. Para este examen se eligen unos particulares requisitos buscando la segura apreciación de las cualidades requeridas. Por ello, el artículo 7, al tratar de la rúbrica de "Quales bondades han de tener los cauallos de los caualleros..." establece "...declaramos que la justicia desta villa de Sigura ni regidores della, por sí solos, no puedan examinar los dichos caualleros, ni sus armas ni cauallos ni bienes, si no fuera estando juntos en su cavildo e ayuntamiento ... y que el examen que de otra manera se hiciera no valga ni el caballero pueda usar el dicho officio ni valgan las prendas y penas que hiciera..."

El examen referido, con las garantías previstas debe pasarse el día señalado del 29 de diciembre precisamente ya que el artículo primero dice "... y el caualle-

que después passado el dicho día que fuere señalado para la tal presentación, quando los demás caualleros se presentaren, sigun dicho es, viniere a se presentar, no sea ni pueda ser admitido ni reciuido a el dicho oficio".

Cumplidos los requisitos, el examen señalaría los vainticuatro caballeros que habían de ejercer, según expresa el artículo primero, "por el tiempo que tuvieran el officio de el gobernador que fuere en este partido". No se establece la forma en que los demás miembros del mancomún hacían uso del derecho de poner dos caballeros por cada una de las seis villas, ni hay criterios para la selección quando los aspirantes hicieran necesario, por número, la elección. Se supone que quedaba al arbitrio de los jueces nombrados al efecto y que, según se entiende de la expresión literal, parecen todos pertenecer al "cavildo y ayuntamiento de Segura".

4º.- JURAMENTO.-

Tras correr la carrera los caballeros, de acuerdo con el artículo 2 deben prestar juramento "en forma devida de derecho ante el escribano del cabildo y oficiales" que las armas y el caballo son suyas y no prestadas, y no las prestará a otro. También que "usará bién y fielmente el tal officio de cauallero y aguarda de los términos, guardando el servicio de dios nuestro señor y de su magestad, y mirarán por el bién y pro común desta villa y sus términos y de las villas y aldeas de ellas y del común... que en todo guardarán las ordenanzas desta villa y harán

todo aquello que buenos y leales caballeros y guardas de los dichos términos y montes deben y son obligados a hacer". La fórmula final del juramento, según el artículo que examinamos es "Sí, juro amén".

REQUISITOS FORMALES: RECUDIMIENTO.-

Una vez examinados los caballeros con los requisitos citados, "dado todo por bueno y bastante", para usar el oficio necesitan, inexcusablemente, que les sea dado el "recudimiento", licencia o credencial por el concejo que expide el escribano del cabildo y debe ir firmado por uno de los alcaldes "como se tiene de costumbre". El arancel del escribano por la expendición del recudimiento es de diez maravedíes, según se establece en el artículo 3.

El caballero con sus armas, su caballo, sus bienes desempeñados y su recudimiento está preparado para desempeñar las funciones propias de su oficio que están expresadas en una serie de ordenanzas:

OBLIGACIONES.-

De acuerdo con la número 6 deben "visitar y andar los términos" personalmente ("por sus personas"). Es decir, tiene una función de vigilancia, haciendo lo que se llamaría hoy patrulla.

Conforme a la número 10 deben visitar las mojoneras "quando les fuere mandado por la justicia o el concejo". En el curso de estas visitas y "patrullas" los cababa

lleros deben denunciar a quién encuentre haciendo daño en las mieses ("panes") según el artículo 14; cazando o pescando durante el tiempo de veda (artículo 18); también, aunque no lo señale expresamente, los forasteros que cazaren o pescaren contra la prohibición del artículo 70, o saque aves, metales, sal o fierro ni otro metal, conforme al mismo artículo. Igualmente las contravenciones de todo tipo a las ordenanzas como la de la prohibición del artículo 18, ampliada en el 35 sobre los que metieren ganado de fuera; la del 36 sobre los que entren a cortar madera sin avecindarse o registrar el hacha; las prohibiciones de coger bellota, avellanas o nueces antes de los tiempos establecidos, ya que la referencia del artículo 39 a las nueces en que se habla expresamente de la intervención del caballero debe entenderse referida a los demás frutos del mismo tipo; igualmente deben llevar la policía del comercio que exige la entrada de "bastimento" en los términos, (artículo 41); deberán cuidar del cumplimiento de la norma respecto a los barbechos durante tres días después de llover (artículo 49); en el artículo 65 se vuelve a hacer referencia a un cometido concreto de los caballeros: la supervisión del paso de ganados forasteros por las cañadas, previendo, de nuevo, como en el 39, que los tales hagan prendas y vejaciones a los que "ansí vienen con sus ganados"; y el artículo 72 les atribuye en exclusiva la facultad de denunciar en las infracciones de los dispuesto en materia de pesca.

En realidad, los caballeros tienen todas las atribuciones que derivan de hacer guardar lo dispuesto en

las ordenanzas a cuyo cumplimiento están dedicados según se expresa en la fórmula del juramento que se recoge en el artículo 2.

PROTECCION.-

Para ello gozan de una protección eminente, contenida en los artículos 8 y 9. En el primero se recoge el caso de que, en el ejercicio de su función ("guardando los dichos términos e andando por ellos usando sus oficio") alguien o algunos "defendieran las prendas o hicieren reprecas o qualquier otra resistencia o les denostaren o hicieren o dixeren otros denuestos o palabras sobejanas o de injurias". Estas faltas, que tienen diferentes gradaciones, desde el mero insulto, denuesto o injuria, hasta la situación de violencia que supone una reprecas o una resistencia a su actuación, se castigan con "las penas establecidas por leyes del reino".

En el 9 se establece una obligación positiva de cooperar con los caballeros en el ejercicio de su función ("andando guardando los términos" según reitera) que requieran a otras personas para hacer las prendas "pidiéndolos favor y ayuda y que vayan con ellos a prender los tales culpados". Los que falten a esta obligación general de favor a la justicia como en el caso anterior, "en las penas establecidas por leyes del reino", pudiendo hacer el requerimiento cualquier caballero.

REMUNERACION.-

La remuneración de los caballeros se hace por participación en las penas. El artículo 14 establece, en el caso de que prendan por daños en las mieses, de ganados, la tercera parte de la pena y esa es la medida de su haber, debiéndosele atribuir, según establece el artículo 16, al caballero que "visitando los términos hallare el exceso y del que por sabida denunció antes". Es un estímulo para que los caballeros recorran la tierra y no para los que, sin hacerlo, sepan del hecho y lo denuncien antes, caso que debía suceder y "sobre ello ha habido pleytos".

RESPONSABILIDADES.-

Incurren también, como es lógico, en responsabilidades. El artículo 5 previene el caso de que alguien que quiere presentarse como caballero traiga "cauallo o armas compradas o hiciere compra de bienes fingidamente o otras escripturas fingidas". Esta falta se castiga con la pérdida de las armas, el caballo y los bienes, sanción muy dura y que entrafía la posibilidad de que la sufriera un tercero prestador y da idea de que el oficio debía ser lo bastante apetecido como para que los aspirantes a él recurrieran a este tipo de simulaciones.

La falta a la obligación de visitar las mojone-
ras que establece el artículo 10 se castiga por ese mismo artículo, en el que hay luego una referencia general al caballero que "fuere contra esta ordenanza y las demás

ordenanzas de esta villa", con la pérdida del oficio durante tres años, pudiendo ser denunciado por cualquier vecino.

Cuando las denunciaciones que haga no pueda el caballero "provar ni averiguar y el tal demandado fuere dado por libre, pague el tal caballero todas las costas y gastos del denunciado y la parte del juez y concejo desta villa". Parece que se trataba de corregir alguna tendencia comprobada a un "exceso de celo" en las denuncias por parte de los caballeros ya que el artículo 11 que establece esta norma termina diciendo "y esto se guarde ansí porque cesen muchos inconvenientes".

En el artículo 12 la falta a la obligación del caballero de denunciar las prendas en ciertos plazos se castiga con que "no le valga a el tal cauallero la prenda que ansí por toma o por sabida hiciere ni dello pueda llevar cossa alguna y si algo llevare lo vuelva y haya perdido con él quatro tanto".

El artículo 13 lleva la rúbrica específica "Capítulo de la pena que tiene el caballero que ordenanza que brantare". Esta disposición, como norma general, señala las penas aplicables a los caballeros que vayan contra la ordenanza: el duplo de las aplicables a otros cualesquiera y, como motivación, al principio, expone que "por experiencia se ha visto... se atrever los tales caualleros y otras personas por su mandado a echar fuego y hacer talas y sacar madera vedada, ansí por río como en carretas fuera de estos términos" lo que hace necesario es

ta agravación de las penas. Además, estas faltas se hacían en connivencia, denunciando un cauallero lo que otro había hecho y aquél "nunca más se lo pide ni sigue la causa", dejándola sin actor, por ello se prohíbe que un caballero denuncie a otro y se autoriza que lo pueda hacer cualquier persona.

El artículo 15 prevé el caso de que los contraventores comuniquen sus faltas a caballeros parientes o amigos de manera que no pueda otro caballero intervenir y, dejando el que denunció sin seguir causa, quede sin ulterior trámite la denuncia hecha por el caballero amigo o pariente. Se establece en ese caso que "la tal denuncia no le balga y passe a cualquier cauallero el qual sea legítimo actor para lo pedir como si el hiciera la tal toma que el otro cauallero denunció", siendo éste privado perpetuamente de su oficio. Y todo ello para que "los quebrantaren las ordenanzas sean punidos y castigados y los tales caualleros no hagan encuvierda ni disimulación con ninguna persona de qualquier calidad que sea".

Finalmente, la ordenanza 19 prohíbe a los caballeros que reciban "maravedies algunos ni otras cosas" reiterando que para hacer la dicha manifestación "no recien dinero si no fuere prendas muertas". La sanción al contraventor es el duplo de lo que disimulare, devolución de lo recibido y sanción como perjurio del delito cometido. Si reincide, además de las penas dichas, se verá privado perpetuamente del oficio.

EL TESTIGO APROBADO.-

El caballero puede llevar consigo una especie de ayudante asalariado que llama la ordenanza 6 "testigo aprobado". Este ayudante debe ser elegido por el caballero y precisa la aprobación del cabildo, debe jurar "ante todas cosas", en forma de derecho, "usar bién el tal cargo de testigo aprobado". Este ayudante no puede recibir parte de las tomas, sino que estará al salario que el caballero le pague el "que mereciere por cada día justamente e no más". Las atribuciones de este "testigo - aprobado" son de menor entidad que las del caballero, lógicamente, ya que sólo es creído cuando afirmare haber visto "por vista de ojos hacer la tal corta o otro delito". En esta misma ordenanza se prohíbe a un caballero hacer de testigo en la denuncia de otro, contrariamente a lo que se permite al testigo aprobado.

PROCEDIMIENTO DE ACTUACION DE LOS CABALLEROS.-

Repartidas sin rigor sistemáticamente en las ordenanzas reguladoras de la actuación de los caballeros de sierra, van incluídas una serie de normas de procedimiento referidas principalmente al prender y denunciar.

DENUNCIAS (CLASES).-

Hay dos tipos de denuncias: de oídas y de vista y toma. La denominación obvia cualquier explicación. Interesa que el testigo aprobado no puede denunciar de oídas y la preferencia de los caballeros que denuncian

de vista y toma sobre los que lo hacen de oídas.

DENUNCIAS (REQUISITOS).-

a) Plazo.-- Según la ordenanza 12, deben efectuarse en ciertos plazos desde el hecho, dependientes de la distancia a la villa: dentro de una legua, tres días; desde una legua en adelante, cinco días. So pena de que no valga la denuncia ni la prenda, deba devolver lo que haya llevado y pierda "con el quatro tanto".

b) Formalidades.-- La ordenanza 18 establece que se hagan a la justicia ordinaria de la villa, por ante el escribano del cabildo "...y no ante el escribano público ni ante otra persona alguna". Este debe asentar en un libro "por extenso" la manifestación del caballero con los siguientes datos.

- 1.- Nombre del caballero que denuncia.
- 2.- Nombre del denunciado.
- 3.- Lugar donde se prendó.
- 4.- Si el ganado es mayor o menor.
- 5.- Si fué de noche o de día.
- 6.- Fecha (día, mes y año).
- 7.- Descripción del hecho ("declarado por extenso la tal corta y tala o fuego y daño").
- 8.- Fundamento de derecho ("... por qué ha de ser condenado el que culpado fuere conforme a - las Ordenanzas").

c) Juramento.-- "Asentadas las dichas manifestacio

nes, el cauallero la jure y pida su derecho ante la justicia". No se dice claramente si este juramento figuraba en el asiento del libro de denuncias.

d) Notificación al mayordomo o procurador del Concejo.— El escribano debe hacer saber al mayordomo o procurador del Concejo la manifestación asentada de suerte que la parte que ha de corresponder de la denuncia al Concejo figure como asiento de cargo en contra de tales administradores y dé luego cuenta del cobro de dicha parte en la pena que se pudiera imponer. Como dice expresamente la ordenanza, mayordomo y procurador se convierten en interesados directos en que el juicio se siga y se falle, pues puede exigírseles responsabilidad por negligencia y condenados a pagar de sus bienes al Concejo.

e) Período de audiencia.— Tras de cumplir estos requisitos y depositar la fianza se abre un período de audiencia "para que, sirviere el dueño a dar alguna razón porque no se deba perder, sea oído". Si nada manifiesta el dueño "que pasen a pena". Para la duración de este plazo, se remite al tiempo "que el derecho manda, uso y costumbre de esta villa".

Las ordenanzas 19 y 20 reiteran la obligación del caballero de manifestación y la segunda, concretamente, respecto de los quintos.

PRENDAS.—

Se previene, de acuerdo con la práctica corriente en los fueros de la familia Cuenca-Teruel la prenda de

iniciación de juicio (1).

Distinguen las Ordenanzas prendas vivas y muertas. A los vecinos sólo se les pueden tomar de la segunda - clase, según la ordenanza 6, "como es hacha o escodixo o manta o caldero o otra qualquiera que no sea ganado ni bestias ni dineros". A los forasteros, de acuerdo con la misma ordenanza, cualquiera "que asigure el valor de la tal denuncia y delito".

Estas prendas se distinguen claramente de las que corresponden a la figura del acorralamiento ("Shüttung"), reguladas en la ordenanza 14 que autoriza a los caballeros para "prender todos y qualesquiera ganados mayores y menores que se hallaran haciendo daño en los panes y heredades". Esta prenda, como corresponde a su naturaleza, e debe hacerse, segun esta ordenanza, "de vista y toma", no de oídas. El que tuviere ganado en tierra ajena puede impedir la prenda mostrando licencia del dueño, dada ante escribano. Remacha que tal licencia ha de llevarse en el acto de la prenda y no servirá mostrarla después.

Las prendas deben depositarse, según la ordenanza 21, por la Justicia de la villa, a quien se las entregará el caballero, "en fialdad el tiempo que el derecho manda, uso y costumbre de esta dicha villa". Las prendas muertas se entregarán en depósito (ordenanza 19) a persona llana, lega y abonada, que no sea caballero.

(1) Josè ORLANDS. La prenda de iniciación de juicio en los fueros de la familia Cuenca-Teruel.

CITACIONES, COSTAS Y GASTOS.-

Las citaciones a los vecinos arraigados y abonados se hacen a costa del denunciador, según la ordenanza 11, hasta que el fallo señale a quién corresponden las costas "attento que se ha visto muchas veces denunciar de muchas cosas injustas de que los vecinos desta villa y su común reciben mucho daño y agravio".

En el pago de costas y gastos se estará a lo que determine el juicio, como es habitual, pero los caballeros, cuando el acusado saliere absuelto, deben, según la ordenanza arriba citada, abonar costas, gastos y la parte del juez y del concejo en la denuncia. Esta norma, contenida también en la 11, suponía una excepcional garantía para los vecinos y obligaba al caballero a ser prudente en sus denuncias y a realizarlas "justa y derechamente".

FIANZAS.-

Los vecinos arraigados y abonados, deben prestar fianza para no ser presos hasta "haber determinado la causa diffinitivamente", según las ordenanzas 6 y 11.

PRISION PREVENTIVA.-

La prisión preventiva se establece para el forastero en todo caso, según la tan citada ordenanza 11, y para el vecino, "a sensu contrario", en el caso de que no dé fianzas.

LAS PENAS.--

a) Pecuniarias.-- Las multas son la pena más frecuente. Con 100 maravedíes se castiga el desgrume de carrascas (38) y corte de cada rama de árboles de fruto (66).

Con 300, la entrada en los rastrojos de rebaños de más de cien cabezas de ganado menor (31).

Varear bellota de carrasca antes de San Lucas y de roble antes de San Miguel (38).

Llevar vara de avellano de más de dos varas de medir (38).

Llevar armas prohibidas los pastores (47).

Con 400, meter ganado menor en los queseaderos, de noche (46).

Meter cabras, cualquiera que sea la manada, de noche, en los queseaderos (46).

Con 500, coger nueces antes de San Miguel (39).

Coger avellanas antes de Nuestra Señora de Septiembre (43).

Con 600, no matar el fuego o no limpiar su alrededor (26).

Quemar, derribar rancho, corral o aprisco (32).

Ocupar ilegalmente una cueva, más del plazo marcado (33).

Entrar sin registrar, ganados forasteros (35).

Encubrir a un forastero (36).

Coger piñas fuera de plazo (37).

Sacar cargas prohibidas (40).

Construir en terreno público (48).

Ensuciar fuentes o abrevar puercos en ellas (50).

Desaprovechar los pinos en las sierras de agua, por cada pié (51).

Distribuir desigualmente la madera en las sierras de agua (52).

Faltar a las normas de distribución de madera en las sierras de agua (55).

Excederse en los precios tasados de la madera (56).

Cortar los forasteros algo, sin licencia (36).

Desaprovechar los arteseros o cadiceros los pinos, por cada pié (61).

Arrostrar o detener el ganado en tránsito (65).

Con 1000, echar fuego antes de la Virgen de agosto (25).

Traer los vecinos más de seis mansos cencerreados (30)

Cortar en coto de sierra de agua, por cada pié (57).

Aserrar madera de manos, sin licencia (58).

Sacar madera, sin licencia, por cada carreta (59).

Sacar siñuelo (cada pié) y demás cosas prohibi--
das (64).

Cortar árboles de fructo de las hazas comunes (66).

Con 1.200, excederse en los precios en las sierras
de agua por segunda vez (56).

Con 2.000, cortar pinos en majada, por cada pié
(68).

Con 12.000, traer los forasteros más de seis man
sos encerrados (30).

Esta es la pena, tasada, de más cuantía.

Hay otras cuyo cómputo será muy variable según los
casos. Por ejemplo, las previstas en el capítulo 46 so-
bre la reserva de pastos en los queseaderos respecto de
los puercos, a razón de cuatro maravedíes de día y ocho
de noche y para yeguas y vacas, medio real de día y uno
de noche (es decir, diceciséis y treinta y dos maravedíes,
respectivamente). En el mismo caso están otras penas co-
mo la que llevan los caballeros que denuncian fuera de
término, según la ordenanza 12, consistente en el cuá-
druplo de lo percibido; o el duplo de lo que ocultaren
en los casos previstos por la 19.

En general, hay que advertir, en cuanto a este ti-
po de penas la apreciación de la agravante de nocturni-
dad en los daños por ganado, reflejada en la duplicación
respecto de los daños diurnos.

También se duplican las penas pecuniarias cuando

el delincuente es un caballero.

Las penas se distribuyen, en la mayor parte de los casos, entre el juez, el denunciador y el concejo: Hay excepciones contadas: El reparto entre denunciador, juez y reparos de caminos y puentes del común (cap.5); entre caballero denunciador, juez y obras pías que se entiende cera del Santísimo (14); denunciador, juez y obras públicas, sin especificar reparos de caminos y puentes (19); dos partes al dueño y una al juez (26); la tercera parte atribuida alternativamente al caballero o al dueño (46); sustitución de la tercera parte atribuida al concejo por el dueño (49 y 66).

La parte atribuida al denunciador corresponde al caballero en determinados casos en que él es el único legitimado para denunciar.

b) Prisión.— Exceso en los precios tasados por tercera vez, doce días (56).

c) Confiscaciones.—

Del caballo, armas y bienes fingidos (5).

Del quinto de los ganados forasteros introducidos ilegalmente (20).

De la herramienta no registrada por forasteros (36)

De las piñas cogidas fuera de plazo (37).

De las cargas prohibidas (40).

De armas prohibidas a los pastores (47).

De lo edificado o sembrado en caminos y espacios de dominio público (48).

De la pieza de madera labrada que no se ajuste a los marcos legales (51).

De la madera repartida contra ordenanza en las sierras de agua (53).

De la madera vendida a precios excesivos (56).

De los derechos de mandar cortar pinos, por exceso en los precios, tercera vez (56).

De la madera aserrada por sierra de manos (58).

De la carreta y su carga de maderas sacada ilegalmente (59).

De las caballerías en que se sacaren cosas prohibidas (65).

Estas confiscaciones cumplen la norma general de pérdida de las cosas objeto de comercio ilícito o que sirven para cometer un delito.

d) Especiales para caballeros de sierra.-

Privación del oficio:

Un año por coger nueces en tiempo prohibido (39).

Tres años por incumplir las funciones previstas en la ordenanza 10.

Perpetua: por encubrimiento (15); por recibir dinero u otras cosas, reincidiendo (19); por malprender (41).

e) Remisión a pragmáticas de vigencia general.-

Denuesto a los caballeros (8).

Negación de ayuda a los mismos (9).

Perjurio, asimilado el encubrimiento por los caballeros (19).

Cazar en tiempo de veda (69).

Cazar los forasteros o sacar sal, hierro, metales o aves (70).

Pescar en tiempo de veda (72).

LA PROPIEDAD

Bosques. No había bosques reales ni privados en el territorio del Común. Así lo afirma taxativamente el capítulo 71 de las Ordenanzas, al razonar la libertad de caza concedida a los vecinos: "...no hay en más de treinta leguas a la redonda bosque alguno de su magestad ni de señor alguno particular". Si calculamos la legua equivalente a 5.572,70 metros, interpretando literalmente el dato, resultará que no había bosques reales ni privados en una enorme extensión cercana a los - 90.000 Km², tomando como radio las 30 leguas, equivalentes a unos 167 kms y aplicando la fórmula de la superficie de un ámbito circular $\pi \cdot r^2$. Con las debidas reservas, ante la falta de comprobación del dato y la posible expresión tópica de las Ordenanzas, queda claro el dominio en esta zona y las fronteras de los bosques municipales o comunales.

Tornando a ceñirnos a la tierra de Segura, los bosques no eran privados ni reales, pero con una característica : parece que estaban atribuidos en propiedad a la villa cabeza, según se deduce del texto de una representación al Rey dirigida por el regidor Bernabé Picarzo de Almazán. En ella, para oponerse a la pretensión de algunos particulares de tener derecho a cobrar la madera cortada, aduce los siguientes argumentos:

1º) Segura ganó, en 1488, un pleito fallado por el Gran Mestre de Santiago por el que las villas y luga

res del Común pretendían tener derecho a montes y pastos.

2º) Segura enajenó pinares sin distinguir entre tierras concejiles y particulares para construir el Monasterio de Santa María de la Peña ampliación de una ermita (donde a partir de la construcción se reunirían los procuradores del Común , en su sacristía).

3º) Segura, en 1600, hipotecó pinares y productos de las maderas como garantía de los censos tomados.

4º) La sentencia citada atribuyó a Segura la facultad de dar licencias de corta y demás aprovechamientos forestales. (1).

Sin embargo, las demás villas y lugares tenían alguna manera de participación en los productos de los bosques como se deduce indudablemente del capítulo 54 de las Ordenanzas en que dice: "...a qualquiera persona de Sigura o de Orcera su arrabal y de los otros pueblos que tienen derecho de la sacar (la madera) y no a otros la repartan...".

En las "Relaciones Topográficas", en el apartado de Siles, una de las villas más importantes del común, se dice: "en quanto a los aprovechamientos de los montes del dicho término común, lo hacen e gozan como los propios vecinos de la dicha villa de Segura, e los demás

(1) Archivo de Simancas, Sección Secretaría de Marina.

Legajo 576. Atado del año 1782.

pueblos de la dicha gobernación de Segura" (1).

Pastos. Los pastos pertenecían al Mancomún; hasta época muy tardía subsistió ese tipo de aprovechamiento. La mancomunidad de pastos se extendía también a las tierras de labor, una vez levantadas las cosechas, según se deduce "a sensu contrario" del capítulo 31 de la Ordenanza que establece una reserva temporal a favor de los dueños de rastrojos. Los ganados extranjeros solían venir a pastar, previo registro, pagando unos derechos.

Labores. La mayor parte debieron ser comunes y repartirse periódicamente entre los labradores vecinos, como se deduce de las cuentas del Ayuntamiento de Benatae (2), así como de la abundancia de topónimos "quiñón" y "suerte".

La denominación "quiñón" se aplica generalmente a los huertos cercanos a las poblaciones, mientras se llama "suerte" a las labores relativamente distantes. Por estas adjudicaciones los labradores pagaban un tanto a modo de arrendamiento anual. La propiedad privada agrícola debía circunscribirse a pequeños huertos familiares y nunca alcanzaba a los bosques, comunes en su totalidad.

(1) Relaciones Topográficas. Fol 664 vuelto.

(2) Año 1798, folio 2, vuelto:

Cargo: Doscientos cincuenta reales de vellón producto de la labor de la dehesa de Oruña, y suertes de las Fuentes de ella, repartidas a los vecinos labradores de esta villa.

Las roturaciones particulares de monte debieron ser un fenómeno tardío. Al menos con la extensión y el desgobierno que hoy se advierte y, según se señala en otro lugar, debieron ser provocadas en buena parte por el trastorno que produjo el régimen de montes especial en la estructura económica tradicional forestal-pastoral.

Ganados. La propiedad de ganados debía ser la más importante de las privadas. Era ganado vacuno, lanar de cerda y cabrío, éste último mirado con cierto re celo, como se advierte en las Ordenanzas.

Debía haber grandes rebaños con pastores asalariados y también rebaños formados por cabezas de distintos propietarios con un pastor común, sistema usado has ta hace pocos años.

Los productos de la ganadería eran importantes. por ejemplo, la lana podía salir sin limitaciones. El queso debía fabricarse en grandes cantidades, según se deduce de los privilegios otorgados a los queseaderos, que sugieren también cierta importancia económica de ese producto.

En las "Relaciones", en la parte correspondiente a Segura, se dice "...hay en esta villa pocos labradores porque la aspereza della no consiente otra cosa; la mayor parte son señores de ganado y otros tratan en sacar con carretas maderas para el Andalucía y Campo de Montiel (1). Con ello se refleja los dos principales sostenes económicos del Común.

(1) Relaciones Topográficas, fol. 469

Molinos. Los molinos eran particulares o pertenecían a los municipios que los arrendaban anualmente. Son particulares los seis de Segura (1) el de La Puerta (2) los tres de Santiago con una carga a favor del concejo de Segura (3) los cinco de Orcera (4) los cuatro de Hornos (5) dos de los cinco de Siles (6). Son del concejo dos de Siles (7), el de Benatae (8) y (9), el de Torres (10) el de Génave (11) y el de Villarrodrigo (12). Finalmente, uno de Siles pertenece a una cofradía (13).

Hornos. En la concesión del Fuero de Cuenca a Segura se exceptúa lo referente a los hornos, reservados a la Orden. Sin embargo, el régimen no debió ser uniforme en todos los pueblos del común, pues, mientras

-
- (1) Relaciones Topográficas, fol 460.
 - (2) Idem. fol 504 v.
 - (3) Idem. fol 512
 - (4) Idem. fol 526
 - (5) Idem. fol 539 v. y 540
 - (6) Idem. fol 659 v.
 - (7) Idem. idem
 - (8) Idem. fol 519 v.
 - (9) Cuentas del Ayuntamiento de Benatae. Año 1789. fol 12:
Cargo: Un mil noventa y siete reales de vellón producto de treinta y seis fanegas de trigo en que se remató el arriendo del molino harinero de estos propios ensubhasta pública a favor de Francisco Rodríguez Henares, vecino de esta villa, maestro molinero, vendidas a distintos precios que constan en el libro de venta de Grangería.
 - (10) Relaciones Topográficas. Fol 633 v
 - (11) Idem. fol 491
 - (12) Idem. fol 671
 - (13) Idem. fol 659 v.

las Relaciones Topográficas se refieren a los hornos de la Encomienda en Génave (1), el de Benatae pertenecía al concejo que lo arrendaba (2).

Oficios enajenados. Las dos escribanías de Segura (una en la villa y otra en el arrabal Orcera), la de Siles y la de Hornos, pertenecían al concejo que las arrendaba. Las de Segura producían ciento veinte ducados (3); la de Hornos rentaba entre seis y siete mil maravedíes (4) y la de Siles, veinticinco mil, un año con otro (5).

La guarda de las dehesas se arrendaba en Siles y en Villarrodrigo. En la primera villa a un precio medio de seis mil maravedíes; mientras que rentaba la de Villarrodrigo cuatro mil (7).

Segura arrendaba también el oficio de almotacén y dehesería que, con otras cosas no especificadas, rentaban al concejo cien ducados (8).

-
- (1) Relaciones Topográficas. fol 491 v.
 - (2) Cuentas del Ayuntamiento de Benatae. Año 1789. fol 2:
Cargo: Ciento y cincuenta reales de vellón, producto del arriendo del horno de pan cocer de estos propios que se remató en subhasta pública a favor de Juan Gómez, maior, vecino de esta villa.
 - (3) Relaciones Topográficas. Fol. 470
 - (4) Idem. Fol. 543 v.
 - (5) Idem. Fol. 664 v.
 - (6) Idem. Idem.
 - (7) Idem. Fol. 673 v.
 - (8) Idem. Fol. 470

Dehesas comunes y reservadas. Esta distinción señalada por Noel Salomón como claramente sentida en el medio rural español (1) estaba plenamente vigente en el ámbito del común de Segura y su tierra. Las villas tenían sus dehesas reservadas, incluso un arrabal como Orcera poseía dehesa propia, llamada del Tamariz, de unas quinientas hectáreas. Según especifican las "Relaciones Topográficas" (fols. 453 y ss) Segura tenía siete dehesas; Bayona, dos; Génave, una; La Puerta (aldea), tres; Hornos, dos; Siles, cuatro; Torres, una; Villarrodrigo, una (de una legua por dos). Sólo Benatae carecía, en 1575, de dehesa propia, aunque tuvo después dos, quizá por donación de Segura, como las de Bayonas. Junto a ellas existían las de aprovechamiento común que se regían por normas generales.

En el archivo del Ayuntamiento de Benatae, en un documento de 1838, aparece, al inventariar los bienes municipales, la distinción entre "propios antiguos" y "agregación a propios" correspondientes, estos últimos, según expresa el mismo documento, "a las partes del terreno que se ha señalado a esta villa del que era de común aprovechamiento de todas las del Partido" (2).

(1) Noel Salomon. La vida rural castellana en tiempos de Felipe II, pág 120.

(2) "Presupuesto de los productos y gastos de la villa de Benatae con los que atiende a sus cargas municipales". Una hoja escrita por dos caras con cubierta del mismo papel.

Este documento es una especie de certificado de defunción del común y debe tener su parejo en todos los ayuntamientos de la Comarca.

Y parece como si Chaves hubiera sido profeta cuando decía: "...de suerte que, así como el referido común aprovechamiento de los Términos de Segura de la Sierra y los demás, facilitaron el aumento de vecinos, labranza, ganadería en aquellos pueblos, y en los de Segura; así de el mismo modo siempre que se les quiten dichos aprovechamientos, es absolutamente precisa su decadencia, y minoración en todo, como el tiempo lo evidenciará, si llegare el infausto caso de experimentarse..." pero se equivoca en cuanto a la posibilidad del evento al seguir: "...que no se espera, respecto, así del tenor de los Privilegios referidos, y su práctica, como en atención a las demás consideraciones hechas" (1).

Caza

Derecho libre de los vecinos, sin más limitación que el tiempo de veda (Capítulo 71 de las Ordenanzas del común de 1580).

Pesca

Igual que la caza como se dice en el capítulo 72 de las Ordenanzas y confirman las "Relaciones Topográficas" en repetidos lugares (2).

(1) Bernabé de Chaves, "Apuntamiento legal...", fol. 202.

(2) "Relaciones Topográficas" correspondientes a Segura (folio 460) Torres (fol 633 v) Siles (fol. 660) y Villarrodrigo (fol. 671).

Vista la persistencia de organizaciones y divisiones territoriales, referida en otro lugar de este trabajo, considerando que esta comarca formó el borde del condado de Todmir, es tentador suponer que los usos comunales en ella correspondieran a situaciones preexistentes al dominio musulmán. Recogemos la opinión de Beneyto: "No negamos que algunas veces los aprovechamientos colectivos puedan tener su fuente en concesiones señoriales. Lo que creemos es que ninguno de estos regímenes ha sido base preponderante y menos exclusiva de los usos comunales" (1). Y la de Pérez Pujol, citada por Beneyto en el mismo trabajo, de sus "Instituciones de la España goda": "En realidad, estas selvas, y prados, montes y pastos comunes, son anteriores a la dominación romana; son restos de la propiedad comunal ...que cobran nueva vida por la influencia del espíritu germánico". Como una posibilidad cronológicamente intermedia, cabría aportar otra opinión, extraída también del trabajo de Beneyto, la de Sciacca: "Autrevoli srittori ci hanno detto che l'origine deve ricercarse nella primitiva collettivita della terre, e per il mezzogiorno d'Italia specialmente nella propieta publica che il municipio romano lasciava al godimento dell'università".

Si no remontándose en el tiempo tanto como quiere Pérez Pujol, sí podría suponerse una continuidad en el régimen comunal desde el tiempo de los godos, persistien

(1) AHDE. 1932. "Notas sobre el origen de los usos comunales". pág 32.

do durante la dominación musulmana. La mancomunidad, en tonces, sería una consecuencia de reconocimiento en el sentido que dice Escolano de Arrieta: "Luego que las tierras se recobraban de los moros, eran aplicados los montes a cada población en su repartimiento y demarcación general de términos, guardando el sistema de las leyes godas en lo substancial, con todo el aprovechamiento alto y baxo, a excepción de lo que cupieron a particulares por repartimiento y donadío, u otro título legítimo..." (1). No hay pruebas, sólo la intuición de que la dominación musulmana, y cada vez se comprueba más, al menos en el terreno cultural, no supuso un corte tan violento como hace suponer un examen elemental de nuestra historia. En este caso concreto, es sugestiva la fórmula de donación de Hornos a la Orden en la que se dice: "el castillo de Hornos, en la frontera de Segura, con sus pertenencias, y todos los términos que tenía en tiempo de los sarracenos..." (2), o recordar el documento en que Azeyt Abuzeyt, "rex valentiae...hoc idem in iuribus segobricensis ecclesiae conservare volentes, licet cum omnia quae secundum decisionis inclitae recordationis regis Bambae ab antiquo habuit, partim a christianis, partim a sarracenis..." (3)

(1) Escolano de Arrieta "Práctica del Consejo Real".
pág. 232

(2) Bernabé de Chaves "Apuntamiento legal...". Fol. 19

(3) Villanueva. "Viaje literario a las iglesias de España" (1902). págs. 228

Fuera cual fuera su origen, puede afirmarse que en la Sierra de Segura, como en Castilla la Nueva, "en el siglo XV, la propiedad comunitaria estaba en vida plena y continuaba siendo una pieza maestra de la vida rural, tanto desde el punto de vista económico como psicológico" (1).

(1) Noel Salomon. "La vida rural castellana en tiempos de Felipe II". pág. 120.

LA JURISDICCION

De acuerdo con el Fuero de Cuenca, que regía en Segura, con la salvedad contenida en su carta de concepción, el lugar del rey en las alzadas correspondía al comendador del lugar, luego al de la encomienda y, finalmente, al Maestre si estaba en el país.

Con ello las instancias judiciales eran: alcalde concejil, tribunal de alcaldes, comendador, comendador mayor y maestre (1). Rigiendo lo que para las apelaciones allí se dispone, en cuanto a materia, cunatía, forma y plazos.

Los alcaldes y jueces eran elegidos por las colaciones, el domingo siguiente a San Miguel, aplicándose lo prevenido para caso de desacuerdo de la colación correspondiente en el nombramiento de jueces (F. Cuenca, XVI, 1 y 2). Según señala Lomax, el comendador delegaba en un "alcalde mayor de las alzadas" (2) que cobraba, en 1478, un salario de 5.000 maravedíes, mientras el de los alcaldes y alguacil de la Villa de Segura era de 600 (3).

Debemos recordar las garantías personales de los vecinos denunciados ya vistas en el examen de las Ordenanzas de 1580.

(1) Derek W. Lomax "La Orden de Santiago". pág. 179

(2) Idem.

(3) Miguel Angel Ladero Quesada "La Orden de Santiago en Andalucía...". En Publicaciones de la Univ. de Sevilla



De señalar es también la especial situación de Siles en este campo, pues, según su carta de villazgo, concedida por el maestro Alvarez de Figueroa en 1397, se guardaba a esta villa la primera instancia, de cuantía hasta diez mil maravedíes, de cuya en adelante podían conocer los "jueces mayores" (1). No afectaba esta especialidad a la jurisdicción eclesiástica en la que Segura entendía (2).

Con esta excepción de Siles, las villas y lugares acudían a Segura en primera instancia.

(1) Relaciones Topográficas. Fol 665

(2) Idem. Fol. 664.

COLOFFON

Parece, pues, que con pequeñas salvedades sobre leves diferencias entre los diversos pueblos integrantes del Común, pueden aplicarse a Segura y su tierra, a sus habitantes, dos textos concordantes, de dos autores diferentes, separados por algunos años.

El primero es de Claudio Sánchez Albornoz:

"Ahora bien... el peso de la tradición municipal castellano-leonesa, la precisión de los señores de atraer pobladores a sus dominios y sistemas de habitación que imponía la geografía en el país, dieron nacimiento a una larga serie de centros urbanos ... que pronto llegaron a ser cabezas de concejos señoriales. Tales concejos dependían, claro está, de un miembro de la oligarquía laica o clerical o del Maestre de una Orden Religiosa de Caballería, pero no por ello sus habitantes dejaban de gozar de plena libertad individual, de bienes y heredades propios y de muchos derechos políticos... Y en consecuencia el tercer gran avance de la frontera de Castilla volvió a afirmar la libertad de los nuevos y los novísimos castellanos". (1)

El segundo de Noel Salomón:

(1) Claudio Sánchez Albornoz. "Estudios Generales -XXVI- La frontera y las libertades de los castellanos".

"El campesino de Castilla la Nueva... atravesó el umbral de los tiempos modernos con la cabeza alta, como un hombre libre y orgulloso de que sus antepasados no hubieran sido víctimas de la verdadera servidumbre absoluta. Un abismo separa su condición de la de sus hermanos aragoneses, catalanes o valencianos en la misma época". (1)

En el centro de esta confederación de villas y lugares, el concejo de Segura, con sus pendones (2), sus sellos (3) y sus cien picas y arcabuces (4) y, sobre todo, con su Fuero de Cuenca, era una entidad municipal digna de respeto.

(1) Noel Salomón "La vida rural castellana en tiempos de Felipe II". pág. 186.

(2) Relaciones Topográficas. Fol. 453 v.

(3) Idem. fol 453 v: "un sello grande plata, y en su contorno dicen las letras sigilium de señoría de Sigura de la Sierra: hay otro sello pequeño de las mismas armas para cerrar cartas: hay otro sello muy antiguo de metal de cobre...yeste se ha usado desde que esta tierra se ganó de los moros".

(4) Idem. fol 466: "... en lo de la guerra de Granada este ayuntamiento y concejo de Sigura eligió capitán e alférez, e quitaron tres banderas a los moros en el Puerto de la Losa, y para esto compró este concejo cien alcabuces, y cien picas, que salieron todos a costa deste concejo, y al presente tiene este concejo su casa de armas con muchos alcabuces y picas, bien reparado y recibido".

"Entre todos los fueros municipales de Castilla y León, ninguno hay comparable con el que D. Alonso VIII dió a la ciudad de Cuenca despues de haberla conquistado y libertado de la esclavitud musulmana".

P. MARIANA

VII .- PUNTO DE FLEXION

El tráfico de maderas debió seguir, como indica Juan de la Cruz Martínez, durante estos siglos, abasteciendo a extensas zonas circundantes, de Andalucía y La Mancha, pero lo más probable es que no llegara a Sevilla en determinado momento debido a la competencia de la madera extranjera importada que, posiblemente, fuera más barata en los puertos de mar y tierras próximas. Por ello, en 1733, cuando se plantea la necesidad de madera para la construcción de la Fábrica de Tabacos, hacía cierto tiempo que la madera de la Sierra de Segura no bajaba navegando por el Guadalimar y el Guadalquivir, como consta sucedía en el siglo X, XI y hasta el XVI, en que navegó una pinada con destino a los Reales Alcáceres de Córdoba. El lapso de interrupción, sin embargo, no debió ser excesivamente largo puesto que los viejos del curso bajo del Guadalquivir recordaban las conducciones de madera desde aquellos montes (1).

En ese momento se produce el punto de flexión que dió origen a una nueva situación en la Comarca: las maderas nacionales resultaban más baratas que las importadas. Cuando se quiso traer madera de Flandes, sólo de anticipo se pidió ochenta mil duros, por lo que a punto estuvo de suspenderse el proyecto de construcción de la Fábrica de Tabacos. Con la noticia de las conducciones de madera de la Sierra de Segura por el río, se envió a

(1) Juan de la Cruz Martínez. Memoria histórica...pág 83.

personas entendidas a visitar iglesias y edificios antiguos en los que se había empleado madera de Segura y com probaron ser de excelente calidad, por lo que se determi nó emplearlas en la construcción de la Fábrica de Tabacos.

Fernández de Navarrete atribuye el cese de ese tráfico por el río a

"el trastorno de las guerras de sucesión y la mudanza del gobierno, en que tomaron parte muchos extranjeros, como era natural, pusieron en olvido nuestras producciones territoriales prefiriendo las contratas onerosas para traerlas de fuera con no me nos daño de la real Hacienda que de nuestra agricul tura. Las maderas de Flandes y de otros países del norte se conducían con grandes dispendios aún para edificios civiles, sin conocer ni apreciar las que teníamos en nuestros montes... se recordó que en tiempos antiguos se conducían desde los montes de Segura por el río Guadalquivir, que aún vivían algu nos hombres que conocieron este tráfico, el cual ha bía cesado (según entonces decían) o por excesivos derechos o por las dificultades de la conducción" (1).

Evidentemente, ya no era normal, en función de la demanda de madera, que se produjera la situación refleja

(1) Martín Fernández Navarrete. Reflexiones sobre los mon tes de Sgura..... págs. 86 y 87.

da en las Relaciones Topográficas "...hasta en los caminos (habla del de Yeste a Segura) haya tanta suma de pinos derribados y madera y leña que nadie se aprovecha de ello... y esto mismo de esta madera y leña hay hacia otras partes de este dicho término" (1).

Se realiza la conducción de ocho mil pinos para construir la fábrica de tabacos.

"Sin embargo de la mucha madera que dejó la pinada en su navegación, fué tan considerable la cantidad que llegó a Sevilla, que no se encontraron al pronto almacenes para su custodia y resguardo..."(2). "La fábrica de tabacos se concluyó sobraron maderas, vendiéronse, y el Gobierno reportó sumas tan gruesas del sobrante, que casi le indemnizaron de cuantos gastos tuviera. El Intendente de Sevilla proyectó, atendidos estos primeros buenos resultados, establecer un comercio de maderas con el nombre de Real Negociado. Tuvo efecto este plan, y entonces se construyó el almacén del Rey, en el que se custodiaban los palos que anualmente navegaban hasta Sevilla. El Negociado se organizó a su modo, mandó comisionados a la Sierra, y aquí principió ya la lucha de este establecimiento con los pueblos del partido de Segura y Alcaraz sobre el pago de los árboles que

(1) Relaciones Topográficas. RAH. Tomo III. folios 453 y ss.

(2) Memoria sobre situación geográfica y extensión de la provincia de Segura de la Sierra... por el archivero de Marina Sans Barutell. 1º abril de 1811. pág. 31.

se cortaban..." (1).

A partir del "descubrimiento" de la Sierra de Segura, se inicia un ir y venir de comisionados, funcionarios, prácticos y marinos que volvían encandilados por la cantidad y la calidad de las maderas de la zona:

"Deseoso este buen servidor del Rey (el Intendente de marina de Cádiz, don Francisco de Varas y Valdés) de averiguar con toda certeza la verdad en asunto de tanto interés para la monarquía, ordenó pasase a principio de diciembre de 1734 a reconocer aquellos montes el carpintero de construcción Francisco Gener y habiéndolo examinado a su vuelta (que fué afinales de enero del siguiente año de 1735) el constructor don Ciprián Autan sobre la calidad, clase y abundancia de los árboles, y demas objetos de su comisión, propuso al intendente Varas se hiciese otro reconocimiento más fundamental, porque siendo cierto lo que decía Gener, sería haber hallado un tesoro..." (2).

Van después el mismo Gener y el capitán de fragata Juan de Valdés, que debían salir el 1 de abril de 1738. El infante Almirante manda también que vayan el maestro de arboladura del Departamento de Cartagena y un práctico para que examinasen el curso del Segura, la calidad de las maderas y la posibilidad de su navegación

(1) Juan de la Cruz Martínez. Memoria Histórica...pág 31.

(2) Memoria del Archivero de Marina Sans Barutell.pág 32.

por el mismo río. Valdés evacuó su informe en 26 del mismo mes, "informando haber encontrado un pino de 18 pulgadas por 40 codos de largo, que de 6 hasta 9 pulgadas y de 38 a 42 codos había abundancia..." (1). Con ello señalaba Valdés la característica de los pinos de la clase laricio de su desproporción entre el diámetro y la altura que les da una importante esbeltez y los hacía muy útiles para la construcción naval.

"El terreno de aquellos montes parece los dispuso la Providencia para la cría de pinos. Se reproducen con asombro y sin que tenga la menor parte el trabajo e industria del hombre..." (2).

Sus características técnicas eran también superiores para el fin que se trataban como sigue diciendo el mismo texto:

"...yo no dudo que pueda tener España en aquellos montes, maderas propias para arboladuras y del mismo peso que las de Rusia, pues habiendo comparado la gravedad específica de estas con las de Segura cortadas al medio día, están en razón de treinta y seis a cuarenta, y las expuestas al norte pesarían menos..." (3).

(1) Memoria del Archivero de Marina Sans Barutell. pág. 33.

(2) Memoria del Archivero de Marina Sans Barutell. Informe del Ministro de Hacienda, Francisco Angulo, al Rey. 23 de enero de 1811. pág. 2.

(3) Informe del ingeniero Tomás Muñoz de 3 de febrero de 1811. pág. 10.

Aparte de ello, de las características técnicas, el informe de Valdés tiene también ciertos ribetes líricos cuando habla del color de los árboles: "... que el color de los más de ellos era blanco, el de algunos de coral, y ninguno acitronado..." (1).

La conclusión de que se había descubierto un tesoro, como se ha dicho antes, fué general y el ingeniero Tomás Muñoz, después de proporcionar datos impresionantes sobre el destrozo efectuado por la Marina, el Real Negociado y los particulares, dice

"Asombra este cálculo (el de la madera perdida cada año sólo por el ramo de Marina) pero el haber aún maderas, da una idea de la feracidad de estos montes, de su inmensa producción, y del valor de la alhaja, que a pesar del empeño de los hombres no se ha podido destruir. Ha disminuído, sí, mucho: está próxima a su total ruina; pero éste cálculo demuestra la facilidad con que se puede reponer estableciendo el orden y economía que he manifestado, eligiendo manos inteligentes y limpias que los manejen, y destruyendo al mismo tiempo todo lo que sea sostén de los abusos antiguos. De este modo solamente podrá el Rey contar con montes, disfrutar de su riqueza, surtir sus arsenales, abastecer a sus vasallos a menos costo de un material tan preciso para su conservación, y perpetuar una alhaja que eterni-

(1) Memoria del Archivero de Marina Sans Barutell, pág 33.

ce su memoria...". (1).

Es curioso que, como ocurre con todos los informes de este tipo oficial, las lenidades de los órganos de la Administración, sus graves defectos, irregularidades delictivas, prevaricaciones y robos, se pongan al mismo nivel que los abusos de los particulares habitantes de estas sierras y que tenían, por un fuero secular, derecho a cierto grado de aprovechamiento de la madera.

La necesidad de ocuparse de los "abusos" de los pobladores no se plantea en 1585, en cuyo año la madera y la leña de los árboles caídos no tiene excesivo valor, sino siglo y medio después, cuando cobra un valor económico nuevo que debería haber revertido sobre esas comunidades, ya que no existía casi la propiedad individual, en lugar de, con el pretexto de cumplir un fin nacional, dilapidarse entre los bolsillos de los funcionarios y la mala administración.

Hubiera podido ser el punto de partida de una prosperidad nueva para los habitantes de la vieja mancomunidad. En lugar de ello, la Administración montó una auténtica empresa de colonización de la comarca, cuyos beneficios ni siquiera fueron para la nación sino que, como ha de verse, quedaron en las manos de los funcionarios, se fundieron en el sostenimiento del aparato montado para la expoliación de una riqueza casi intacta

(1) Informe del ingeniero Tomás Muñoz... pág. 17.



que, de pronto, había cobrado valor y cuyos dueños no sólo fueron privados, contra todo derecho, de ella, sino castigados por tenerla.

La empresa colonial se estableció desde su comienzo, con el Real Negociado de maderas de Segura en Sevilla, apoyada por una jurisdicción especial, dependiente del Ministerio de Hacienda. Luego, la Marina entró en la poco gloriosa empresa, también con ese apoyo y con el de una organización represora paralela y coadyuvante centrada en el Tribunal especial correspondiente.

Hay una diferencia clara entre el Real Negociado de Hacienda y el de los Montes de Marina. Este último persigue un fin de servicio a una necesidad nacional, la construcción de barcos de guerra. Dejando aparte que no es lícito cargar ese peso sobre los hombros más débiles, ni siquiera sobre determinados hombros, en lugar de distribuirlo entre todos en proporción adecuada, el Negociado de Marina pretende llenar una función pública, aunque -como veremos- no lo consiga. Sin embargo, los fines del Real Negociado de Hacienda son directa y descaradamente el lucro de la Administración. Así lo señala el Fiscal militar del Almirantazgo en su informe de 1817:

"Es un hecho incontestable que el objeto del Negociado (de los montes de Segura en Sevilla) es el de sacar la mayor utilidad posible; y para ello nunca ha economizado, ni se podrá esperar que econo

mice los arbolados..." (1).

Nos encontramos entonces con el increíble ente establecido sobre una expropiación sin fundamento legítimo, para que se lucre la Administración. No creo que haya precedente ni paralelo, aunque sí, como luego se dirá, un curioso epígono contemporáneo y vigente en los momentos en que se está redactando esta tesis.

Lastimosamente, más adelante se expondrá, ni para proporcionar beneficios al Estado sirvió ese Real Negociado, porque perdió dinero en unas proporciones tan escandalosas que hacen sospechar que la prevaricación, fué la norma de actuación de tal organismo... Tiene cierta gracia indicadora que en un testamento de uno de los empleados de él, en el que encarga a sus herederos cobren las pagas que le adeuda el Real Negociado, se le llame, por error o convencimiento, Real Negocio (2).

También es revelador que se mantuviera tal establecimiento cuyo primitivo objeto era la construcción de la Real Fábrica de Tabacos (hoy Universidad de Sevilla) años después de acabarse tal construcción y que ella fuera pretexto para su mantenimiento como aparece de un poder de los carreteros de Siles que en 1 de abril de 1778 habla de las maderas con destino a "...Los Reales arsenales, para la construcción y carena de bajeles

(1) Dictamen del Fiscal del almirantazgo. Museo Naval. Ms 443. hoja 415.

(2) Archivo Notarial de Orcera. Protocolo del año 1750.

de la Real Armada y para las Reales fábricas de tabacos de la Ciudad de Sevilla" (1).

Descarnadamente, una organización administrativa se constituyó en colonizadora de una parte del territorio nacional por dos de sus entes. Uno para cubrir un flanco importante como la necesidad de una Marina de Guerra, pero el otro constituido con el fin confesado de explotar una propiedad ajena, comunal, en beneficio del Fisco. Esa explotación consiguió, con un despojo organizado en el despilfarro, lo que no había conseguido el pequeño "abuso" de los carreteros, ganaderos y agricultores de la zona.

Logró, además del arrasamiento material de los bosques, poner en el corazón de los montañeses el germen del odio al bosque o, al menos, de su indiferencia. Como tercer efecto de este nuevo giro, instauró una mentalidad administrativa y funcionarial, aún vigente, que se podría resumir, aunque parezca duro o sarcástico, en la consideración de las zonas montañosas como auténticos señorios jurisdiccionales de los organismos que, sucesivamente, se ha ido encargando de la administración de los montes. Se verá.

(1) Archivo Notarial de Orcera. Protocolo del año 1778.

VIII .- LA RUPTURA Y SU EQUIPO LEGAL

No optó la Administración por intentar conseguir sus fines respetando, al menos en parte, los derechos de los montañeses, promoviendo su prosperidad y buscando la eficacia por el camino de un acuerdo con los concejos que hubiera supuesto la innecesariedad del aparato administrativo montado, la simplificación de las tareas, la clarificación de la contabilidad y el mantenimiento de las comunidades, potenciando sus virtualidades y su bienestar. Hubiera sido más beneficioso para todos, pero la suficiencia y la soberbia del tipo de actitudes y mentalidades que pueden encajar en esa denominación general de "despotismo ilustrado", lleva, junto con méritos innegables y éxitos exteriores, un germen de destrucción esterilizadora de una parte de sus espectaculares logros.

El hombre, la comunidad, la sociedad, agotan sus fuerzas hasta casi anularse en estos tremendos partos en que se les impone la anulación de su ser auténtico en aras de entes superiores y de concepciones universales que, faltas casi siempre del número suficiente de servidores adecuados, capacitados e íntegros, se quedan en simples aparatos burocráticos sostenidos por el puro peso específico de los intereses creados a la sombra de aquellas ideas "espléndidas" degradadas a simples artificios verbales, nomenclaturas y organizaciones, sostenidas por una mística de servicio vacua, falsa y mimética.

Para romper con el "status" anterior, creado a partir y en función de ciertas piezas legislativas, el

Estado se pertrechó con las normas adecuadas que desempeñaron en este caso el triste papel que toca de vez en cuando al Derecho positivo: ser herramienta de injusticia y título de opresión.

La pieza fundamental está constituida por la Ordenanza de Montes de Marina firmada por Fernando VI en el Buen Retiro el 31 de enero de 1748 (Ley XXII de la Novísima Recopilación).

Sigue una instrucción adicional firmada por el mismo Fernando VI el 18 de mayo de 1751 (Ley XXIII de la Novísima Recopilación).

La Real Orden circular de Carlos IV, de 31 de diciembre de 1800 (Ley XXVII de la Novísima Recopilación).

El Real Decreto del mismo rey, firmado en Aranjuez el 1 de mayo y ordenanzas de 26 y 31 de octubre de 1802 y cédula del Consejo de 14 de agosto de 1803 (Ley XXVIII de la Novísima Recopilación).

Complementos de la norma central del régimen de montes de Marina son, en aspectos concretos, la Real Orden de 12 de diciembre de 1748 que establece las penas prescritas "a los dañadores de los Montes del Reyno" y la Instrucción de 30 de agosto de 1749 "que han de observar los guardas zeladores de los Montes...".

Es también interesante la orden circular del Secretario de Estado y del Despacho Universal de Indias y Marina, Baylio don Julián de Arriaga, reencargando la observancia de la Ordenza, de 16 de marzo de 1754, intere-

sante porque revela defectuosas aplicaciones de la ordenanza matriz y, además y sobre todo, la temprana aparición de abusos cometidos a su sombra.

Existen también una serie de normas menores como la instrucción de 23 de abril de 1800 para gobierno y administración de los pueblos del Departamento de Cartagena, reveladora de la deficiente administración de caudales que se practicaba.

Estimamos como representativas de esta ruptura, claves de ella, la Ordenanza base de 31 de enero de 1748, con sus complementos funcionales: la Real Orden de 12 de diciembre de 1748, reguladora del aspecto penal en la nueva legislación, y la Instrucción de 30 de agosto de 1749 relativa a la guardería forestal, ya que ambas son desarrollos reglamentarios de la Ordenanza central.

Pareja importancia tiene la instrucción adicional de 17 de mayo de 1751.

Constituyen el núcleo central de las disposiciones sobre la materia. Las demás piezas legislativas sirven más bien como testimonio de la persistencia en el error, de los efectos de la legislación nuclear y la inútil insistencia en los postulados que la informaron.

Por ello, a continuación sólo se examinarán esas disposiciones significativas de la iniciación del régimen; sobre las otras se harán referencias en el contexto del examen del desenvolvimiento del citado sistema.

IX .- LA ORDENANZA DE 1748

El 31 de enero de 1748, Fernando VI firma en el palacio del Buen Retiro la "Ordenanza para la conservación y aumento de los montes de Marina en las provincias y distritos que se expresan" que supone la ruptura del régimen tradicional examinado y una auténtica expropiación de los derechos comunales sin una compensación ni remotamente congrua. La introducción de la Ordenanza dice:

"Hallándome enterado del decadente estado en que están expresamente los montes, con especialidad los inmediatos al mar, a causa de las cortas que in debidamente se han hecho con mucha frecuencia, tallas y quemas, y el ningún cuidado que se ha tenido y tiene en atender a su importante reparo por medio de los plantíos y visitas, como lo prescriben las leyes de estos Reynos, y varias resoluciones de los Señores Reyes mis antecesores, dirigidas al mayor aumento y conservación de los montes, de lo qual se sigue tanta utilidad a mi servicio y a mis vasallos; he resuelto expedir la ordenanza siguiente, que se observará inviolablemente en las provincias y distritos que en esta cédula se expresan, sin embargo de los privilegios, derechos o costumbres que puedan autorizar la práctica en contrario".

El párrafo final contiene el principio legal del despojo de derechos comunales milenarios cuyo origen llega al Derecho Romano, persistiendo en el Derecho Visigodo y encarnándose en los fueros municipales, cartas pue-

blas, en Las Partidas, los Usatjes y toda una variedad de textos legales del más diverso ámbito y clase.

La Ordenanza consta de sesenta y nueve apartados, numerados, aparte del de introducción a que hemos aludido, en los que se regulan aspectos jurídicos y técnicos del nuevo régimen que afectará a los montes de Marina.

JURISDICCION

Se atribuye la jurisdicción en los montes situados en las inmediaciones del mar y ríos navegables a los Intendentes de Marina de los Departamentos de Cádiz, Ferrol y Cartagena que ejercerán, por sí o por sus subdelegados, con total inhibición de cualesquier otra jurisdicción, "del mismo modo -precisa el apartado 1- que han estado encargados en lo pasado a los Jueces de Montes de los Reynos y provincias". Este artículo se amplió por Real Cédula de 1 de enero de 1751 que mandó hubiera en cada cabeza de partido un Ministro de Marina, que ejerciese la jurisdicción con sujeción única e inmediata al Intendente de la provincia. Si la extensión territorial lo hiciere preciso, la misma Real Cédula autoriza se establezcan subdelegaciones para las que se destinarán Oficiales de Contaduría.

INVENTARIO

El artículo 2 manda que los intendentes confeccionen, por medio de los ministros, un inventario de los montes de la jurisdicción de estos últimos, para ser posteriormente visitados. Tales inventarios deben incluir

noticias sobre su régimen de propiedad (particulares, comunales, propios y reales) su situación y número de árboles, sus especies, y calidades, distinguiendo por su edad nuevos, crecidos y viejos.

Este inventario que confeccionarán los visitadores debe ampliarse, según indica el artículo 3, a los terrenos baldíos, "con su extensión y calidad, distancia de la costa, facilidad o dificultad de abrir carriles hasta ella, y qué especie de árboles prevalecerán mejor en cada uno".

Para impulsar la rapidez del menester señalado a los visitadores, el artículo 4 les manda que no se detengan en averiguaciones de derechos, sino que consideren, a efectos del inventario, quién ostenta la posesión actual.

OBLIGACION DE PLANTAR

El artículo 5 consagra una servidumbre personal a que se somete a los vecinos de los montes. Es ya el comienzo de unas prestaciones personales que sólo afectarán con el tiempo a los habitantes de las montañas y que persisten en la actualidad con la obligación de acudir, la mayor parte de las veces sin equipo adecuado y con provisiones insuficientes, a combatir los incendios en los montes. El artículo examinado obliga a cada vecino a plantar tres árboles del género que señale el visitador y, dice la ordenanza innecesariamente y hasta con un toque de sarcasmo, "más, lo que cada uno quisiere".

Todos están obligados, escepto las viudas pobres que no tengan en su compañía un hijo mayor de dieciocho años. A ese efecto, las Justicias de las jurisdicciones visitadas darán relación de los vecinos de cada lugar para proveer los autos para el plantío. Las mismas Justicias deben hacer la distribución del gravamen y atender a la economía y medios de hacer los plantíos. Como se excluye a las viudas pobres y a los vecinos notoriamente imposibilitados, caritativamente, se dispone en el artículo 6 que las mismas Justicias encargadas de distribuir la carga distribuyan también la parte de los exentos "a los vecinos más hábiles y de más posibilidad, más número y se complete el correspondiente a todo el vecindario".

NORMAS DE PLANTACION Y CULTIVO

Los artículos 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 contienen normas técnicas para la plantación de viveros, el desrame de los plantones y su trasplante. Son singularmente prolijas y con detalles de mimo que roza el ternurismo (en contraste con la estricta determinación de que los vecinos cumplan su cupo de árboles, aunque tengan sobre sí la carga de los débiles o los "notoriamente imposibilitados").

"Se pondrán las bellotas a mano, cubriéndolas con tierra, con el cuidado de no pisarlas...". "En un sitio de moderado espacio, bién descubierto del sol y resguardado de los vientos del norte, en el

qual se plantarán las bellotas más gruesas y sanas de los robles más arbustos...". "Si arrojare la tierra algunas plantas -precave el artículo 8- que puedan viciarlos, se arrancarán antes que tomen cuerpo, reservando la yerba o grama, para que mantenga la humedad y los rocíos del verano". "A los tres años -elegantiza el artículo 9- se limpiarán, cortando sutilmente las ramas que hayan brotado, dexando solas las guías...se trasplantarán a los sitios más abrigados de los montes...en luna creciente, observando, que en el sitio en que se coloquen, guarden la misma postura natural que tenían en el vivero, a cuyo fin... se le hará alguna señal a la parte de Oriente para situarla en el nuevo -puesto, mirando a la misma". La distancia de árbol a árbol la suficiente para que "manteniendo la conveniente separación, los árboles se alimenten mejor, y sus ramas se tiendan sin embarazo", según establece el artículo 10. El artículo 11 cuida de que la fosa para la plantación tenga una vara de profundidad y tan espaciosa que entren las raíces sin compresión ni violencia: la tierra del fondo ha de estar muy desmenuzada y mullida... se terraplengará, cubriéndolo bien las raíces, ciñendo el árbol de modo que el viento no lo mueva, abrigándole con la tierra hasta lo más alto que se pueda...". "En los montes en que pasten ganado -dice el artículo 12- se arrimará cada árbol una estaca bien metida en tierra, y se atará con él por tres o quatro partes

con mimbre, o cosa que no pueda cortarle la corteza... y demás de este arrimo se le rodeará con espinos, zarzas, argomas o cosa semejante que desvíe los ganados". El artículo 13 habla de la plantación de robles en las tierras mejores y más cercanas a los embarcaderos. El 14 dice que, cuando los árboles no engrosaren a proporción de su altura, "se harán en los troncos unas rayas derechas de alto abaxo, penetrando con un cuchillo sutilmente la corteza: y si se reparare que algunos empiezan a secarse, se podarán dándoles el corte por lo verde.

El artículo 15 trata de que los ministros de Marina de las provincias envíen para reconocer los montes "contramaestres de construcción o personas inteligentes en la fábrica de baxeles, a fin de examinar si se cuidan como conviene, atender y concurrir a que todos los árboles nuevos crezcan y se guíen con la vuelta o tortura natural que téngan; dándoselas mayor si les pareciere conveniente, por medio de alguna ligera artificiosa disposición para que, creciendo así, puedan sin violencia formar a su tiempo en la construcción de los baxeles el miembro que convenga".

Los artículos 16, 17 y 18 tratan de las normas de la poda y completan las referentes a esta auténtica "nursery" de árboles que establecía la Ordenanza con tan sobresaliente ternura, con esa curiosidad semántica de emplear "tortura" en su significado etimológico más auténtico. Y con la dureza humana que se inicia

con el párrafo introductorio, que desplaza en una línea todo el régimen jurisdiccional tradicional, y sigue en los artículos que van tras de los examinados sobre siembra, trasplante, poda y cuidado de los árboles útiles para el Real Servicio.

PROHIBICION DE CORTA

El artículo 19 es duro, ya está hablando de hombres, no de árboles útiles para la Marina: "Se ha de embarazar y castigar rigurosamente que se corten y trocen los robles u otros árboles... celando las Justicias esos excesos, como que han de ser responsables de todos los daños de esta calidad, si no dieren autor de ellos". Este tiránico sistema de "excitar el celo" de las justicias debió dar origen, al ser aplicado, a un clima desagradable de desconfianza y enfrentamiento entre las Justicias y los vecinos ya que aquéllas, lógicamente, tratarían de encontrar a cualquier precio la víctima propiciatoria.

LICENCIAS DE CORTA

El artículo 20 establece otra prohibición general de cortar árboles por el pié "sin los requisitos que adelante se dirán". Los requisitos se articulan en los números 30, 31, 32, 33 (que se refiere a los montes particulares), 34. Son estos la licencia, que se solicitará al Subdelegado por escrito (artículo 30), informe de la Justicia del lugar, a la que envía la so



licitud (art. 31), compromiso del vecino o la comunidad de plantar y dar presos de dos hojas (es decir, agarrados y de dos savias) tres árboles por cada uno que cortare y que no se corte en los parajes más próximos a los embarcaderos "que siempre han de reservarse a mi servicio".

Cuando la corta deba hacerse en un lugar distinto del que necesite las maderas el Subdelegado remitirá la instancia -según dispone el artículo 32- a la Justicia de donde la haya, el que licenciatario deberá dar tres árboles por cada uno que corte y pagar medio ducado de vellón por cada árbol que cortare al lugar.

RELACION DE ARBOLES

Los artículos 35, 36 y 37 establecen un auténtico registro de árboles en el que se incluirá "relación de los árboles de servicio que se hallaren en su jurisdicción (de los Ministros) y cada año añadirán los que se vayan plantando al respecto de tres por vecino; y en libro separado, o al margen del mismo, se notarán los que se cortaren, con expresión de por -quién, cuando y en virtud de qué licencia; y los visitadores han de foliar y rubricar estos libros en todas sus hojas, con nota al fin que las exprese". Estos libros -continúa el artículo 36- pasarán de unas a otras Justicias según se vayan sucediendo, con diligencia de esa transmisión y deberán presentar esta do

cumentación en las visitas.

LEÑAS

A cambio de estas pesadas cargas, los artículos 21, 22, 23, 24 y 25 regulan el aprovechamiento de las leñas, con control de sus precios por los Intendentes de Marina y en su nombre los comisarios de partidos "si los lugares -artículo 23- intentaren subir a precios excesivos y no regulares la venta... por concurrencia de compradores...". El producto de la venta de leña está sometido también a la "noticia" de los Intendentes de Marina y Comisarios de los partidos, según el artículo 25. Era una ruin compensación a la enorme pérdida que supuso la Ordenanza para las comunidades. "La Ordenanza de Marina -comenta Gibert- limitaba los beneficios a mínimos aprovechamientos de leñas, sujetos a un riguroso régimen de intervención, y a excepcionales posibilidades de tomar maderas, con redoblada obligación de reponer la plantación". (1)

BELLOTA Y HOJA

El artículo 26 permite que los vecinos aprovechen la bellota y hoja de los árboles sin gravamen ni contribución alguna, hasta de los montes reales, "guardándose en esto las constituciones, reglas y costumbres de los mismos lugares".

(1) Rafael GIBERT. Antiguo régimen español de Montes y Caza. pág. 22.

TASA DE MADERA

El artículo 27 tasa la madera de roble en un real de vellón el codo cubico que los Intendentes de Marina deben pagar a los lugares en cuya jurisdicción se corten. Para los asentistas de los astilleros y arsenales que cortaren por concesión rige el mismo precio y los que tuvieran permiso para fabricar bajeles deberán pagar el doble, según establece el artículo 28.

El artículo 29 tasa las maderas de haya, alcornoque, encina, álamo blanco o negro en cuatro reales el pie, con las mismas prevenciones respecto de los asentistas y fabricantes de naves particulares. Faltan, curiosamente, la tasa de la madera de pino y es de señalar la diferencia entre el precio del roble, por cubicación y el de las demás especies citadas y hecho por piés.

En cualquier caso, parece haber cierta desproporción de precios en contra del roble, madera mas escasa, puesto que un metro cúbico y tercio haría los cuatro reales en que se valoran los demás árboles.

VISITAS DE MONTES

Las ordenanzas 38 a 47 regulan lo referente a visitas a los montes. Las realizan los Ministros de las provincias cada dos años, pudiendo acordar el Intendente visitas extras por las que no se devengará salario, salvo que, a su propuesta, se le señale. Tampoco los ministros podrán percibir nada, aparte de sus sueldos ni pretender de los pueblos nada que no sea la casa en que vivir "el corto tiempo que empleen en la visita de sus montes".

A los ministros acompañarán la visita Alguacil y Escribano, nombrados por el Intendente, debiéndose guardar los autos y diligencias, encuadrados en el Departamento correspondiente con separación de los "países" a que correspondan.

MULTAS

El artículo 41 establece que los salarios del Alguacil y Escribano se sacarán de las multas que impongan a los vecinos y a las Justicias "por no haber hecho los viveros, por no haber plantado, por no haber embarazado el descortezo de los árboles, por no haber cumplido los proveídos de las visitas antecedentes, por haber cortado árboles sin licencia" es una larga enumeración pero no "númerus clausus" porque acaba el artículo "...o por otras faltas que se noten en la policía y buen gobierno de esta materia tan importante a mi servicio y al bien de mis Reynos". Es una muestra de la serie de prestaciones personales a que se sujetó a los montañeses de entonces, de la humillación de las Justicias que, aparte de responder con arreglo al artículo 19, de las faltas de los vecinos contra lo establecido en él, son también responsables de lo que refiere este artículo 41. Hoy, aún subsiste esta servidumbre personal que obliga a acudir a la extinción de incendios y que recae, con natural predilección, sobre los serranos.

Las multas no pueden ser indultadas por los visitantes ni intendentes una vez notificadas, por motivo

alguno, aunque antes de imponerlas -dice el artículo 42- se examinarán con mucha reflexión y se justificarán las razones en que se funden. Los autos deben remitirse al Rey por mano del Secretario del Despacho de Marina, para que aquel los haga reconocer, se determine definitivamente y vuelvan a los ministros visitadores con "aprobación desaprobación o moderación de las multas, hasta cuyo caso no deberán exigirse de las partes".

SALARIOS DE ALGUACIL Y ESCRIBANO

El artículo 43 atribuye al Intendente la facultad de señalar, en vista del caudal obtenido y sobre él, los salarios de alguacil y escribano "asignando a cada uno lo que le pareciere con consideración a su trabajo y a lo más o menos caro del país que visitare". Lo que restare debe remitirse a la Tesorería de Marina, con carta de pago y demás intervenciones, pasándome (al Rey) noticia del producto de las multas por medio del Secretario del Despacho de Marina.

Cuando no resulten multas de algún partido, por estar todo acorde con la Ordenanza, pueden los Intendentes aplicar las de otros partidos para los gastos, pero sin escusar nunca las visitas bianuales, aunque haya que costearlas con los caudales de "mi Hacienda".

El escribano de visita debe poner en registros foliados y rubricados por el visitador todas las noches lo que resulte de la visita del monte que se haya visitado aquel día, "con la distinción de su capacidad, linderos,

calidad y número de árboles, su pertenencia y distancia a los rios navegables o puertos en que puedan embarcarse las maderas".

COBRO DE MULTAS

El cobro de las multas se encarga a las Justicias ordinarias "y los visitantes no se detendrán a esperarlas". Como antes, en lo que respecta a exigir de los vecinos el cumplimiento de las obligaciones contenidas en el artículo 6, la tarea ingrata de carga sobre las Justicias, haciéndolas instrumentos de todo lo que podía hacer las odiosas y enfrentarlas con sus convecinos.

PROCEDIMIENTO

El artículo 45 se refiere al procedimiento, puede iniciarse de oficio o por querella de parte, que se seguirá en las visitas.. "Los visitantes procederán suxariamente conforme a Derecho, prendiendo a los reos, tomando con fesiones de sus delitos, y recibiendo si fueren graves, la causa a prueba con término competente y breve, qual conviene para justificación de causas locales, sentencian dolas con parecer de asesor".

APELACIONES

Las apelaciones en primera instancia van por ante el Intendente del Departamento de cuya sentencia se puede recurrir al Rey por medio del Secretario del Despacho de



Marina. Es obvio advertir que el recurso es ante el Secretario de Marina y la forma de expresarse es solo eso, pues los recursos de las decisiones de dichos Intendentes serían obra de los Secretarios de Marina.

GUARDAS

El artículo 48 se ocupa del nombramiento de guardas celadores "si pareciere conveniente". Como veremos posteriormente, "pareció" y la Marina creó un copioso cuerpo de celadores a los que se otorgó, por Real Orden de 5 de junio de 1792, el fuero privilegiado de Marina.

EXPORTACION Y TRANSPORTE DE MADERA

El artículo 49 contiene una prohibición de exportar madera sin expresa orden real, aunque no fuere útil para construcción naval, comprendiendo en la prohibición no sólo la de roble, sino las demás citadas y las de árboles frutales y de cultivo.

Para control de maderas embarcadas por los asentistas para provisión de astilleros y arsenales por mar, exige el artículo 50 que lleven guía detallada de la carga y tener un recibo "certificación o vuelta de guía del Comisario o Subdelegado del astillero o arsenal donde embarcaren visada por el Intendente" para salvarse de las responsabilidades que les cupieren.

El artículo 51 niega a los asentistas de pólvora, los de montajes de artillería de tierra "ni otro alguno"

derecho a solicitar cortas en los montes de Marina, salvo concesión expresa real que deberán presentar al Intendente que deberá informar sobre el particular y, si no hubiere inconveniente, los Ministros de Marina del partido señalarán los árboles que se pueden cortar para éste caso.

JURISDICCION DEL FERROL

Los artículos 52 al 60 inclusive, señalan la jurisdicción en Galicia del Departamento del Ferrol, con algunas normas específicas; los artículos 61 al 64, inclusive, la correspondiente al mismo Departamento en el Principado de Asturias, con ciertas referencias a determinadas clases de madera y lugares adecuados para cierto tipo de árboles; el artículo 65 enumera los lugares de la misma jurisdicción en el Señorío de Vizcaya y el artículo 66 hace lo propio con Navarra.

JURISDICCION DE CADIZ

Los artículos 67 a 73, señalan la jurisdicción del Departamento de Cádiz en Andalucía.

JURISDICCION DE CARTAGENA

Los artículos 74 y 75 señalan la jurisdicción de Cartagena en los montes de Andalucía y Murcia; el 76 en el Reino de Valencia y el 77 en Tortosa, con una referencia específica en el artículo 78 a la "fábrica de pez y alquitrán, que se ha permitido a los vecinos de

Tortosa en el pasado". Se les sigue permitiendo con tal que "no trocen ni desmochen los pinos que la codicia de los betuneros intenta secar" y tengan sus licencias en las que se ha de expresar los parajes en cada fabricante deba tener sus hornos.

Estas jurisdicciones tuvieron ampliaciones posteriores, a las que se hará referencia posterior más detallada:

AGREGACION DE LOS MONTES DE ALCARAZ

La Real Orden 10 de octubre de 1752 agregó a la jurisdicción de Marina los montes del partido de Alcaraz, sujetos antes a la jurisdicción ordinaria y bajo la dirección del Ministro del Consejo que se ocupaba de los montes fuera de las veinticinco leguas de la corte.

AGREGACION DE TERUEL Y ALBARRACIN

La Real Orden de 25 de noviembre de 1768 ordena que se aplicasen y marcasen para el arsenal los árboles útiles en los montes de Teruel y Albarracín, aunque rechaza la agregación formal.

Y una Real resolución a consulta del Consejo mandó extender universalmente a todos los montes del reino el uso de árboles que se reconocen útiles al servicio de la Armada, precedida orden particular de S.M.

En realidad, estas Ordenes concretas eran prácticamente innecesarias ya que el artículo final del texto

legal que examinamos dice:

"Como puede haber algunas jurisdicciones no seña ladas expresamente en esta ordenanza, con especialidad en el curso de los ríos Ebro, Guadiana y otros, de donde por conveniencia puedan sacarse maderas para más abundante provisión de mis arseñales; mando a los Intendentes de los tres Departamentos de Marina, se informen cuidadosamente y envíen visitadores, que desde luego establezcan el método y reglas mandadas observar en esta Ordenanza para la cría, conservación, plantíos, y cortas de los montes; la qual es mi voluntad, se guarde y observe según y conforme va declarado".

Los conflictos que originó esta disposición final y su crítica van en otro lugar de este trabajo que se ocupa de la jurisdicción especial y su choque con la ordinaria.

Visto someramente lo que la Ordenanza contiene en cuanto a normas generales aplicables a los montes de Marina, entramos a examinar las normas que se refieren, en dicho texto legal, a la extensa zona de la Sierra de Segura.

NORMAS ESPECIALES PARA LA SIERRA DE SEGURA

En el artículo 70 viene la primera referencia concreta a los montes en que se centra esta tesis:

"Respecto de que desde el año 1733 está mandado restablecer la conducción de las maderas de pino,

que de los montes de Segura solían baxar por el Guadalquivir; mando, que todas las que por ahora se necesiten en el arsenal de la Carraca, se conduzcan del mismo modo; disponiendo que todas las partes de los montes de Segura, que tienen sus vertientes a los ríos Guadalquivir y Guadalimar, se visiten y cuiden, como que han de ser al presente y en lo venidero los parages de que se han de sacar estas maderas; embarazando que se corten para los particulares, y los incendios y talas que por falta de este cuidado se han experimentado".

Sigue el artículo 71:

"Y porque la falta de población en aquellas - tierras puede ser motivo de que no puedan encontrarse ni saberse los delincuentes, será del cargo del Intendente de Cádiz informarse de los medios más proporcionados a ocurrir a este inconveniente, y dar correspondientes providencias a atajarle, como las de limpiar, y sangrar oportunamente los pinos de mejor calidad para arboladura, respecto de que este beneficio podrá habilitarlos a que tengan la bondad necesaria".

El artículo 72 "inventa" las sierras de agua:

"Siendo tan costosa la fábrica y provisión de tablazones de pino de todas menas, y pudiendo lograrse con mucha ventaja por medio de las sierras de agua que sean menester en los parages más acomodados a este intento en el curso de los referidos ríos; mando al Intendente de Cádiz, que con consideración al beneficio que resultará de esta disposición, la lleve a efecto, en-

viando personas inteligentes, y capaces de perfeccionar esta idea en sitios oportunos, a que sin grave dispendio pueda ponerse en ellos la madera que ha de convertirse en tablazón, y conducirse adonde convenga".

El artículo 73 habla de la repoblación:

"Cuidará el mismo Intendente de que los expresados montes de Segura, que tienen sus vertientes a los ríos señalados, se repueblen mediante la siembra de piñones y en todos los claros que hayan quedado por las anteriores cortas; prohibiendo y embarazando, que los ganados entren en los sitios donde se críen los pinos nuevos, mientras no tuvieren la dureza y altura conveniente a no ser maltratados; nombrando para esto la persona o personas que fuere menester, y haciendo, que con la regularidad prevenida se visiten aquellos montes, para que no sean perjudicados, talados o quemados por falta de esta providencia".

El artículo 74 establece sobre parte de los mismos montes la jurisdicción de otro Departamento, el de Cartagena:

"Al Intendente de Cartagena pertenecerá el cuidado de la conservación de los mismos montes que tienen sus vertientes al río Segura, que desemboca por Guardamar en el Mediterráneo; valiéndose de sus maderas y tablazones para lo que se ofrezca en sus arsenales, disponiendo su conducción por aquel río, y la fábrica de tablazones en las sierras de agua que hay en el parage llamado Fuente del Rey; prohibiendo el uso de ellas,

por lo que destruyen aquellos pinares los vecinos de Segura, a quiénes se permitirá solamente la sierra para la precisa tablazón que necesiten para fábrica y reparación de sus casas, para lo qual se dará permiso; precediendo los informes de que queda hecha mención en esta ordenanza".

Después de recomendar en el artículo 72 las sierras de agua, este 74 prohíbe las que existen en ese momento en el paraje de Fuente del Rey y que en las Ordenanzas del mancomún eran los instrumentos de reparto de la madera y, según dice la ordenanza 57 de las de 1580 "el principal aprovechamiento que esta villa y su tierra". Sólo permite la sierra "para la precisa tablazón que necesiten para fábrica y reparación de sus casas, para lo qual se dará permiso; precediendo; los informes de que queda hecha mención en esta Ordenanza".

X .- LA ORDENANZA DE 1751

La Ordenanza examinada produjo real y profundamente la ruptura del régimen tradicional y la aceleración del proceso de despojo llevado de una manera organizada y rápida. Respecto de la Ordenanza de 1748, la siguiente de 1751 añade poco en cuanto a la zona que estamos examinando, por ello, parece oportuno seguir la exposición de Gibert sobre esta pieza legal y predicar sus efectos generales respecto de la zona en cuestión.

Señala el citado autor (1) cómo quedaron suspendidos los subdelegados cuyas atribuciones pasaban a las justicias que nombraban guardas; los ministros, por su lado, nombraban celadores que "ejercían esta dudosa función cerca de las justicias: representarles oportunamente lo que hallaren contrario a las órdenes del ministro. Con lo cual, en materia de montes, las justicias quedaban sometidas no sólo a los ministros sino a sus celadores".

Un paso más en la degradación de las magistraturas locales y populares que va animando todo el proceso económico del régimen de montes de inspiración despótica.

Siguiendo la exposición y sistemática del profesor Gibert en su trabajo "Ordenanzas reales de los montes de Castilla (1496-1803)", veremos los apartados siguientes:

(1) Ordenanzas Reales de Montes de Castilla (1496-1803).

a) Competencia de las justicias locales. Correspondía a las justicias las causas por contravenciones; las licencias para cortar madera para las necesidades de los vecinos, justificadas por carpinteros y albañiles, respetando siempre los árboles marcados; los árboles reservados para urgencias del servicio, para casas, molinos, etcétera; inventario. Debían guardar las justicias toda la documentación derivada de sus actuaciones a disposición del visitador.

b) Beneficios y aprovechamientos. Precisos, hasta que se publicaran los oficiales, regirían los locales; para la Marina eran especiales; las leñas para forasteros, al parecer, estaban sujetas a los trámites de venta de madera, para los vecinos regía la ordenanza; los particulares debían cumplir la obligación de repoblar por su cuenta o permitir, si los vecinos lo realizaban el aprovechamiento por éstos.

c) Vigilancia sobre la justicia local. Indica Gibert que se advierte en el texto legal una tensión entre las justicias locales y el poder central que sujeta a aquéllas a inspección y al remedio y castigo de sus omisiones y faltas. Respondían solidariamente las justicias por incumplimiento de la obligación de plantar y cuidados pertinentes, por la conducta de los celadores (sometida a inquisición secreta). Las penas eran las establecidas por las leyes municipales y prácticas locales, hasta la publicación de una ordenanza gene-

ral. Las justicias debían también conservar los testimonios de las visitas para presentarlos en las siguientes.

d) Visitas de los ministros. Aparte de las dis-puestas por los Intendentes, los Ministros giraban una visita cada dos años, para señalar los árboles que debían limpiarse y podarse, menester en que no entendían las justicias que debían, sin embargo, llevar cuenta exacta de la producción forestal, leñas, reparto a los vecinos, gastos de plantío, paga de los guardas.

e) Aranceles. Se sujetaban al arancel de Marina, excepto si necesitaban parecer de asesor, tanto en los procedimientos como en la tramitación de documentos.

En realidad, esta Ordenanza de 1751 es un comple-mento de la 1748 y forma con ella el apoyo legal para la nueva situación cuyas consecuencias examinaremos des-pués.

Respecto de ella es muy importante subrayar el juicio del autor que seguimos sobre su significación res-pecto a la jurisdicción municipal:

"Fué un intento, el último, de apoyar el servicio de montes en la jurisdicción municipal, mas como instru-mento de la administración central". Quizá en este par de líneas quede reflejado el significado político de es-tas regulaciones cuya apariencia técnico-económica no es más que el disfraz que oculta la imposición paulatina del entendimiento de la cosa pública radicalmente distin-ta a la tradicional.

Se podría examinar también la Ordenanza de 1800, pero viene ya cuando los efectos de las anteriores se han producido en cuantía suficiente para juzgarlas y, además, no supone ningún cambio importante en el enfoque del problema, sino meros retoques o ampliaciones.

XI .- LA ORDENANZA PENAL

Los Tribunales de Marina, encargados de garantizar la aplicación de la Ordenanza de 1748, tuvieron también un sistema de penas especial contenido en la Real Orden de 12 de diciembre de 1748 que consta de diez artículos breves, sin apartados ni epígrafes. Abarcan los siguientes supuestos:

Corta sin licencia; daños por entrada de ganado en parajes acotados para siembra de bellota o almácigas; cierre, acotamiento o apropiación de extensiones que puedan ser a propósito para plantío de árboles; rompimiento de terrenos; incendio; descortezo; fraude, tolerancia o cohecho de los guardas celadores y alcaldes de Hermandad; extracción de piñas o corte de ramas; incumplimiento de las obligaciones de plantar por los dueños de los terrenos susceptibles de hacerlo.

Penas pecuniarias: en los casos de corta sin licencia, daños de ganado vacuno, cierre, acotamiento o apropiación, incendio, descortezo.

Consisten, para el primer supuesto, en una multa de mil maravedíes por la primera vez, dos mil por la segunda y por la tercera veinticuatro ducados y cuatro campanías. En el caso de que no tuvieran bienes para pagar tales multas, se conmutan por trabajos en beneficio de los montes el tiempo que las Justicias consideren proporcionado. Prevé este artículo primero las diferentes labores en que pueden consistir estas penas sustitutorias: limpiar y desbrozar malezas, guiar y limpiar almácigas o efectuar plantíos y siembras.

Los daños causados por el ganado vacuno en acotados para el plante de bellotas o cultivo de almácigas, se castigan, según el artículo 2, con una pena de mil maravedíes por cabeza.

Con multa de diez ducados por fanega pena el artículo 3 el cerramiento, acote o apropiación de "poca o mucha cantidad" de los montes, pinares o alamedas, tierras baldías o despobladas que puedan ser a propósito para plantío de árboles, aparte de "la reposición a su antiguo estado y ser".

Los incendios se sancionan, de acuerdo con el artículo 5, con una multa de mil maravedíes por pie.

Curiosamente, el descortezo de los árboles se castiga con dureza, puesto que el artículo 6 equipara este hecho a las cortas, talas y quemas (1).

Penas en especie

El artículo 2, después de castigar con mil maravedíes por cada cabeza de ganado vacuno, establece el diezmo de los ganados menores.

Penas aflictivas

Contra los causantes de incendios -dice el artículo 5- se procederá por prisión y embargo de bienes.

En el artículo 7 hay una referencia a las penas corporales que puedan aplicarse contra los autores de daños de montes.

(1) Ver Ordenanza 27.

Los guardas celadores de campo y de montes y los alcaldes de Hermandad que incurrieren en fraude, tolerancia o cohecho por cortas, talas o quemas, son condenados por el artículo 9, "irremisiblemente" a cuatro años de presidio en Africa.

Penas arbitrarias

Se establecen en los siguientes casos:

1º) En los daños causados por ganado cabrío, cuando ocurra reincidencia. El artículo 2 después de establecer el diezmo como pena en el caso de daños por ganado menor, castiga la reincidencia con cabrío con la prohibición "para siempre de tener esta especie de ganado". Los límites de esta pena no existen, pudiendo ir de la casi inocuidad hasta la desmesura, en contra de la norma de precisión de la duración y cuantía de las penas que, por otra parte, corresponde a un estadio posterior de desarrollo del Derecho Penal.

2º) En el caso de rompimiento, corresponde a las Justicias señalar la pena que deben sufrir los culpables "con proporción a los pueblos", igual sucederá en las quemas de tierras abiertas en que no se necesite facultad real y el que omitiera hacer rayas en las quemas de rastrojos, según el artículo 4.

3º) Corresponde igualmente a las Justicias valorar el trabajo sustitutorio del pago de las multas previsto por el artículo 1 para la corta de árboles sin licencia.

4º) Las penas por daños en montes, según el artículo 7, se extienden siempre a más del pago de daños y "de las corporales y extraordinarias que exija la gravedad y malicia de los casos que determinará la prudencia de los Jueces".

5º) La extracción de piñas de los pinares, la corta de ramas y demás daños que no tengan señalada pena especial, deben ser castigados, según el artículo 7, con arreglo a la citada "prudencia de los Jueces".

6º) Aparte de los casos citados, el mismo artículo 7 prevé la posibilidad de las "particulares" que se prescriban en los autos de visita.

Indemnización de daños

Las referencias a la indemnización de los daños causados son varias:

1º) En el artículo 4, al hablar de los rompimientos de tierra sin facultad real, de las rozas en tierras en que no se necesita tal facultad y de las quemas de rastrojos próximos a montes, exige que, caso de haber daños, se pague su importe.

2º) La referencia del artículo 7 es más general, puesto que se refiere a todo tipo de daños en los montes. "Las penas que van determinadas contra los autores de daños de Montes -establece- deben entenderse siempre a más del pago de daños".

3º) Los guardas celadores de campo y monte y los alcaldes de Hermandad, cuando según regula el artículo 9,



disimulan daños ocurridos por cortas, talas o quemas de montes y pinares y demás arbolados, deberán pagar con sus bienes los daños que hayan disimulado.

Responsabilidad personal subrogada

El artículo 8 contiene un caso de responsabilidad personal por subrogación cuando dice:

"En las daños de qualquiera clase en que no se encontrare agresor será responsable al pago el primero que se aprehendiere cortando, talando o introduciendo ganados, en los sitios en que se hubieren cometido los daños, y si no tubiere bienes, sufrirá la pena de prisión, o destierro que se le impusiere".

Esta pintoresca disposición, un caso claro de responsabilidad objetiva, tendrá luego efectos reales como se verá más adelante con el caso concreto de un labrador del que se hará referencia y que consta en el Archivo Notarial de Orcera.

Finalmente, esta Real Orden, en el artículo 8, acabado de examinar, establece el siguiente arbitrio: el que fuere hallado cortando, talando o metiendo ganados en los sitios en que se hubieren cometido dichos daños, es responsable como autor y se librará de la pena que se le impusiere "dando autor cierto del daño que se le carga".

Hay un precepto parejo de responsabilidad de las justicias examinado en la parte correspondiente al estudio del conflicto de jurisdicciones.

De señalar también el especial rigor con que se defiende a los álamos negros recogido en este mismo artículo. En él se establece que "será cuerpo de Delito la sola aprehensión de qualquier utensilio, o cabo de herramienta de árboles de dicha especie, que se sabe aprovechan aún de corto diámetro para semejantes aplicaciones...". No se dice qué pena corresponde a este delito.

La distribución de las penas pecuniarias, según el apartado 12 de la Instrucción para subdelegados que cursó el Departamento de Cartagena, era, en virtud del Real Decreto de 1 de mayo de 1802 la siguiente:

Cuatro partes iguales: "una al Real fisco militar de la guerra, otra al fondo de Montes, otra al Juez, y otra al denunciador. Si no hubiese éste, su parte se aplicará al Real Fisco; y si el reo fuese dueño del Monte en que se haya cometido el exceso, deberá acrecer su cuota de la condenación a las otras partes".

En los daños por ganado estaba prescrito el acorralamiento y la prenda, según la Instrucción para los guardas celadores dada en Cartagena el 30 de agosto de 1749. En ella se previene la distinción entre yeguas, potrancas y potros, que son objeto de prenda, no de acorralamiento, según el apartado 12 de la instrucción. Los demás ganados, según el apartado 13, pueden ser - aprehendidos y acorralados.

Este sistema penal especial, acumulado al de vigencia general, debió de producir efectos devastadores

entre los pobladores según testimonios abundantes entre ellos el tan poco sospechoso del almirante Fernández de Navarrete, el apasionado de Martínez (Juan de la Cruz), los del ministro de Marina Vázquez Figueroa, y los de los diputados en las Cortes de Cádiz. Todo confirma las quejas de los habitantes de la comarca que se suceden, inútiles y tenaces, en escritos y representaciones, de los que después se dará testimonio detallado.

XII .- LA NUEVA GUARDERIA FORESTAL

El cumplimiento de la nueva Ordenanza de Montes, puesto que obedecía a un planteamiento nuevo, no podía seguir encomendada a una guardería dependiente del Concejo como los caballeros de sierra. Estos debían ser sustituidos por nuevos servidores del poder central que tuvieran el carácter servil que el estado absoluto pide a sus agentes de último grado. Por ello, la redundancia en terrior, más que inevitable es indicativa.

Gibert hace notar la diferencia entre los nuevos celadores "gente pobre y dependiente de los ganaderos" y la condición de los caballeros de monte de los fueros municipales (1).

La Ordenanza de 1748, en su apartado 48 prevé que el Ministerio de Marina con acuerdo de la Justicia, o por el Subdelegado con aprobación del Ministro, se nombren guarda o guardas celadores de los montes. También se atribuyen a los mismos funcionarios que reglen "con toda moderación" lo referente a los salarios que hayan de gozar. Esta posibilidad que se encomendaba cumplir "si pareciere conveniente", utilizó, según se ve, con la generosidad acostumbrada en nuestra Administración cuando se carga al presupuesto. De ahí esas "catervas de guardas" de que se habla en la representación del ayuntamiento de Santiago de la Espada y de Villaverde que se examinan en otro lugar.

(1) Rafael Gibert. Ordenanzas reales de montes en Castil (1496-1803). pág. 40.

Para guía de los guardas de montes, se dió una instrucción específica de fecha 30 de agosto de 1749 que contiene dieciséis artículos.

Los tres primeros se refieren a la prohibición general de cortar o descortezar árboles sin licencia del Ministro o Subdelegado de Marina e instruye a los guardas para que los tomen presos, entregados a las Justicias, y pongan a disposición del dicho Ministro o Subdelegado. Una vez entregado, el artículo 4 previene que se haga la denuncia ante los dichos y su respectivo escribano. De no haber subdelegado, debe hacerse ante la misma Justicia y con el escribano del cabildo o de hechos, "pasarán a hacer la correspondiente justificación y embargo de los bienes del delincente" que se depositarán en persona llana, lega y abonada.

Los artículos 5, 6, 7, 8, 9 y 10, contienen instrucciones para la cría y transplante de árboles que son una reproducción casi literal de las disposiciones de la Ordenanza de 1748 sobre esta materia recogidas en los apartados 7, 8, 9, 10, 11 y 12, ya vistos.

El 11 advierte del cuidado de que el ganado no toque las nuevas plantaciones y del aviso a los ganaderos para que lo contengan, bajo amenaza de arrestarlos en la cárcel del lugar más inmediato y formación del correspondiente proceso.

Hay una rara disposición, en el artículo 12, cuyo origen no se alcanza: la distinción entre el ganado caba

llar y el resto, para el caso de que estuvieren haciendo daño; se tomará una prenda al yegüero del que indagará a quién pertenece al ganado. El artículo 13 ordena el acorralamiento para las reses no caballares que entren en las dehesas reservadas para ese ganado. En toda la legislación que estamos examinando no se encuentra referencia expresa al acorralamiento que en esta instrucción parece normal emplear los guardas. De hecho, este procedimiento subsiste en la actualidad en la zona y, probablemente, en casi todo el mundo rural español como advierte Orladis (1).

El artículo 14 recoge el caso de incendio ordenando a los guardas que acudan a apagarlo "llamando la gente que haya más inmediata" para que ayude y procurando hallar a los autores que conducirán y entregarán a la Justicia más inmediata para que los tengan a disposición del Ministro o Subdelegado, a los que darán cuenta, según su jurisdicción territorial, del incendio ocurrido.

El artículo 15 faculta la petición de auxilio de los guardas a "Justicias, Cabos, Militares y demás personas para la conservación y auxilio de los montes".

Finalmente, el artículo 16, último de la Instrucción determina que las causas por daños en los arbolados, luego que estén conclusas y en estado de sentencia, se pasen al Ministro de Marina, o Subdelegado de la Jurisdicción donde haya sucedido para que los determine

(1) José Orladis. La prenda como procedimiento coactivo.

con parecer de asesor, con arreglo a la Ordenanza de 31 de enero de 1748.

Los guardas de montes se sustituyeron, pues, en una plaga para los habitantes de las tierras montañosas y sus intereses. Dependientes directamente del subdelegado de Marina, como se establece en el Real Decreto de 1 de mayo de 1802, artículo 4, gozaban, de acuerdo con el 5, el fuero de Marina y estaban exentos de cargas concejiles. Sus sueldos se pagaban del fondo de Montes, y no habiéndolo, del de Propios y Arbitrios. Caso este último: verdaderamente sarcástico, puesto que la relación entre los ayuntamientos y la nueva organización de Montes era sin paliativos, de enfrentamientos continuos y totales.

Su gestión, en general se expone más ampliamente en el apartado que examina los efectos sociales de la actuación de la jurisdicción especial. En él se reflejan, como defectos muy extendidos, la gorronería de la que se quejan en la visita del subdelegado de Iznatoraf(1); percibir de los ganaderos, según su importancia, donativos en especie; visitar las eras para recibir donativos de los labradores, etcétera.

Respaldados por la prepotencia del organismo al que servían, debieron ser la pesadilla de los serranos, acudiendo a la más variada forma de presiones para obte

(1) Papeles del auditor Olivares. Visita a los montes de Alcaraz. fol. 31.

ner de ellos sobornos o sumisión. Es indicativo lo que se dice en la Orden Circular enviada por el Intendente General del Departamento de Cádiz, Baylio Fr. don Julián de Arriaga, luego Secretario de Estado y del Despacho Universal de Indias y Marina, el 16 de marzo de 1754 y causada porque, según dice el preámbulo de la circular "varios recursos de dueños de montes, que han venido a mí, me persuaden a que la Ordenanza no está bien entendida por los Ministros y Subdelegados de Marina...". Revela esta circular que los subordinados de Marina se entrometían hasta en la suerte de los árboles que los particulares o comunidades "tienen delante de sus casas o en sus huertas, que por comodidad o hermosura llevan su atención...". El fin era como revela la misma circular, que los dueños, bajo amenaza de cortárselos, eran obligados "a que compren y recompren la satisfacción, que manifiestan en que se los dejen en pie...". Sin embargo, el Intendente no ha podido saberlo con certeza para castigar este abuso. "Aunque yo no lo he podido justificar para su castigo", dice textualmente.

Antonio José de Cavanillas aporta otro testimonio de la actuación de la guardería forestal: "Con igual rigor se va extendiendo la prohibición de cultivo a cuantas tierras arrojan un pino o se visten de coscoxa; no bien esto sucede, quando el infeliz labrador se ve en la alternativa o de pagar multas si corta leña sin permiso o de pagar dietas al zelador que envía el Comisario para obtener la leña que necesita. Estas dietas equivalen a un impuesto considerable pues, a más de mantener al zela

dor, debe el pobre labrador contribuirle con doce reales cada día..." (1).

Todos son contestes en esta grave tacha de la guardería forestal, sin embargo es usual que no se puedan comprobar este tipo de acusaciones contra empleados del Ministerio, como se ve en la Orden Circular citada arriba.

Igualmente en la visita a la subdelegación de Alcazar, efectuada por el subdelegado de Iznatoraf, ya citada, las acusaciones son tan concretas, tan verosímiles, tan directas y tan reales que es incomprensible su sobreseimiento. Todas, especificadas en siete puntos, resultan falsas. Sugiere la sospecha de que, salvo en casos concretos, las visitas, al menos en lo referente a la conducta de los empleados, eran meros formulismos. No así en cuanto a los particulares y corporaciones sometidos.

Evidencia esta realidad, a mi juicio, un corrientísimo vicio de la Administración: la proclividad de los funcionarios altos y medios a proteger a sus subordinados incondicionalmente, de manera que éstos, con la garantía casi total de su respaldo a todo evento, actúen con una fidelidad total a la persona de su superior, más que a la función. Se produce entonces una situación muy clara de "patronazgo administrativo" en el que los subordinados son los clientes. La relación de "patronazgo funcional" es particularmente notable en los órganos con jurisdicción territorial, cuando los subordinados deben enfren-

(1) Antonio José de Cavanilles "Observaciones sobre la historia natural...de Reyno de Valencia".pags 25 y 26.

tarse a personas de su mismo nivel a los que deben dominar por "autoridad delegada", aún en ínfimas medidas, que les dé confianza y seguridad en sí. Los funcionarios inferiores con el respaldo de sus jefes, a los que miran como semidioses, se convierten en tiranuelos de bolsillo capaces de esterilizar y hacer contraproducentes las mejores intenciones generales.

Bién es verdad que la falta a las obligaciones propias de su función estaba castigada muy severamente en los casos de "fraude, tolerancia o cohecho en cortas, talas o quemas de los Montes, Pinares y demás arbolados, deberán pagar con sus bienes los daños que hayan disimulado y sufrir además, irremisiblemente, la pena de cuatro años de presidio en Africa" (1).

Esta dura pena, con tan tremebunda formulación, no parece haberse aplicado a los guardas que resultan complicados en el proceso por cohecho del que se hace más prolija relación en otra parte de este trabajo. Los guardas son despachados con severas admoniciones, sin más.

Se aplicó sin embargo, generosamente esa pena a los naturales procesados, como dice Francisco de Bruna en su informe de 1764:

"...en el año de sesenta y tres, sucedieron repetidos fuegos generalmente en los partidos, que unos se abrigaron, y otros no se ha conseguido, y de resultas se

(1) Instrucción de 30 de agosto de 1749. Artículo 8.

han condenado reos a presidio en Africa, a Arsenales a Destierros y otros sentenciados en rebeldía..." (1).

Por contraste, es curioso señalar que, en 1554, Alfonso Gómez, de la villa de Chiclana, se alza hasta la Real Chancillería de Granada para oponerse a lo actuado por Francisco Martínez y Diego Martínez, caballeros de sierra de Segura y los auditores le dan la razón por una sentencia de 20 de junio del año citado que obra en los archivos del dicho tribunal.

La misma existencia de los guardabosques es una manifestación de un vicio común a los órganos "especiales" de la Administración: la proclividad a tener sus propias "mesnadas". Una taifa administrativa necesita contar con su propio brazo armado, fuera de los reglamentos y la disciplina generales. Posiblemente ese vicio sea común a la mayor parte de los países, pero eso no basa un juicio favorable, al menos en nuestra opinión.

(1) Archivo de Simancas. Sección Secretaría de Marina
Legajo 576.

XIII .- LA LUCHA POR EL DERECHO

Aunque la lucha entre la jurisdicción ordinaria y la especial se plantea, cruda y ruda, a partir del establecimiento de la jurisdicción especial de Marina, en la zona correspondiente al mancomún hay una etapa precursora en la que se instituye una jurisdicción especial anuncio de lo que vendrá después en casi todos sus aspectos: mentalidad, organización, funcionarios, efectos, etcétera.

Se trata del Negociado de Montes de Segura en Sevilla que envía sus jueces especiales a la comarca, a partir de 1735, logrando -sin más razón que buscar el lucro de la Administración- el monopolio en el comercio de madera de aquéllas sierras y la atribución de competencia en lo referente a tal comercio y otras cuestiones tangenciales.

Su actuación prefigura en diversos campos la actuación del Tribunal de Montes de Marina:

El primer juez subdelegado de este Negociado, - Gregorio de la Cruz y Tirado, inicia una organización complicada de las operaciones de explotación maderera cuyo patrón seguirá luego Montes de Marina. En el Archivo Notarial de Orcera, sucesor de los anteriores del partido, son, a partir del establecimiento del Negociado, muy abundantes los contratos de transporte con los carreteros, dando idea del típico incremento de la burocracia que anuncia la hipertrofia administrativa. Luego, Montes de Marina organizará también una complicada máquina con carreterías propias, rebaños para carne, anticipos a los ca

rrateros "para mejorar su ganado" (?), estos préstamos se encuentran profusamente en el archivo citado.

Dicho juez es también precursor de los conflictos jurisdiccionales entrometiéndose en una denuncia por daños de unos bueyes, recabando para sí la competencia que no parece corresponderle (1).

Son iguales los funcionarios del Negociado y de Montes de Marina en su actitud mental respecto de sus víctimas. Si Pichardo habla pestes de los serranos, como se verá, Francisco de Bruna, Juez del Negociado, dirige a don Antonio Valdés un escrito en el que habla de "el pernicioso carácter de aquellas gentes" (2) y del "odio de sus habitantes a los montes" (3) o, como luego los funcionarios de Marina, señala "acostumbrados los pueblos a vivir con su libertad, sienten que se les coarte" (4).

Luego, ambas jurisdicciones especiales lucharán contra la ordinaria y entre sí, pero cuando se enfrenten será una lucha por la presa partiendo de presupuestos similares y mentalidades parejas.

Paralela, distinta y, obviamente, contrapuesta a la jurisdicción ordinaria, aparece la especial del Tribunal de Montes de Marina. Fatalmente se desencadena la lucha entre las dos. La de las Justicias está enraizada en

(1) Archivo Notarial de Orcera. Protocolo, año 1742.

(2) Archivo de Simancas. Sección Secretaría de Marina, Legajo 576, 9 -julio- 1789.

(3) Idem. Idem. Idem. Idem.

(4) Idem. Idem. Idem. Reiterando un informe de 26 de abril de 1764.

la tradición y en la realidad del pueblo, la especial servida por un funcionario soberbio y distante, imbuído de cierta mística de clase que, como se verá, desprecia profundamente el ámbito humano al que ha de afectar su actuación. Desprecián también a la antigua jurisdicción y en el expediente tantas veces citado se habla del "envejecido y perjudicial sistema de las Justicias" o de Alejo Gutiérrez de Rubalcalva, "cuyo celo no se satisfizo con el nombramiento de guardas-celadores y establecimiento de subdelegaciones, dictó además con tanto tino algunas providencias, que le proporcionaron el dulce placer de que, a pesar de las continuas pretensiones de las Justicias, se mantuviesen los pueblos en la debida sujeción" (1). Con esta frase tan reveladora queda trazado el panorama de enfrentamiento entre el Tribunal y sus sometidos y adjudicados los papeles del drama: La jurisdicción especial buscando "el dulce placer de sujetar, debidamente, a los pueblos" y éstos solicitando amparo en sus magistraturas tradicionales, "envejecidos y perjudiciales" porque trataban de oponerse, bien que con poco éxito, al "debido" sometimiento y despojo de los pueblos.

La jurisdicción especial, aparte de luchar contra la ordinaria, como es su sino, cumplió también su otra proclividad esencial: su tendencia constitucional e intrínseca a ampliar su competencia en todos los campos.

(1) Expediente sobre los montes de Segura, pág. 46.

En el territorial, pidiendo y consiguiendo la extensión de su jurisdicción a zonas que no habían sido incluidas al principio en la Ordenanza de 1748. En 1751 se agregan al Ministerio en esta zona los montes del partido de Alcaraz por Real Orden de 10 de octubre, sustrayéndolos a la jurisdicción ordinaria y dirección del Ministro del Consejo encargado de la conservación de los montes fuera de las veinticinco leguas de la Corte.

Se consigue también en esta zona el establecimiento de la subdelegación de Cazorla, justificada por la existencia de montes de gran calidad, y la de las llamadas villas del Condado con cabeza en la subdelegación de Santiesteban del Puerto, injustificada por no haber en su territorio maderas, aptas para la construcción naval. Todas estas subdelegaciones se adscriben al Ministerio de Segura.

El Intendente de Marina de Cartagena solicita que se agregen a su jurisdicción los montes de Teruel y Albaracín, petición que se resuelve por Real Orden de 25 de noviembre de 1768 en el sentido de que, sin agregar a la jurisdicción privativa de Marina dichos montes "que sólo servirán de cuestiones y competencias" (según razona la misma disposición), se aplicarán al arsenal todos los árboles y pimpollos útiles que se habían reconocido.

En Real Orden de 6 de junio de 1802, expedida por el Ministerio de Marina, y comunicada al Consejo el 20 de dicho mes, se mandó "hacer saber a las Justicias de la comprehensión y datación de montes de las Reales Fá-

bricas de artillería de Marina de La Cabada, que no solamente deberán facilitar sin dificultad alguna el cumplimiento de los despachos del Juez conservador de La Cabada, sino prestar todo auxilio so pena de severo castigo..." y para mejor asegurar el cumplimiento se manda que se incorpore la providencia entre los acuerdos de los Ayuntamientos o Concejos de los pueblos y se lea por el Escribano al tiempo de tomar los Alcaldes posesión de sus varas.

Ocurre, finalmente, la incorporación de los montes de Cuenca a la jurisdicción de Marina y "que por consiguiente entre tanto el Corregidor de aquella ciudad, como las demás Justicias de los pueblos del distrito de dicha provincia, queden de un todo inhibidas del conocimiento de aquel ramo, trasladándose a los Tribunales de Marina, a quiénes habrán de pasar inmediatamente las citadas Justicias ordinarias todas las causas y demás papeles concernientes a dicho ramo en el estado en que se hallasen".

Estas agregaciones legalizadas se complicaban aún más con las arbitrariedades de algunos Jueces subdelegados de Marina que, según señala Escolano de Arrieta, "de su propia autoridad hicieron en las visitas ordinarias la agregación de varios montes al ramo de marina, fundados en el capítulo final de la Ordenanza (1), y mo

(1) Dice este capítulo final: "Como puede haber algunas jurisdicciones no señaladas expresamente en esta ordenanza, con especialidad en el curso de los ríos Ebro, Guadiana y otros, de donde con conveniencia

tivando producían útiles a los astilleros, de que resultaron varios recursos y competencias; y para evitarlas se promovió un expediente sobre arreglo de estos puntos que se halla aún sin resolver...".

No paraba aquí la dudosa actuación de los subdelegados, sino que, según la Memoria presentada por el archivero de Marina, Sans Barutell, a solicitud del ministro del ramo, Mazarredo, los subdelegados tendían a ampliar sus atribuciones con el menor pretexto. Es decir, querían ampliar también su jurisdicción material:

"La jurisdicción y mando de los subdelegados se reducía al cuidado de los montes de su cargo, al despacho de las licencias a los vecinos de sus partidos, y al seguimiento de las causas de montes; reservaba empero al ministerio la determinación definitiva. También estaban reservadas a éste las licencias a forasteros y extraños, y para arrompidos y desmontes de tierras: ni podían proceder los subdelegados a hacer plantíos, limpias y entresacas sin que precediese orden de aquel.

puedan sacarse maderas para más abundante provisión de mis arsenales; mando a los Intendentes de los tres Departamentos de Marina, se informen cuidadosamente, y envíen visitadores, que desde luego establezcan el método y reglas mandadas observar en esta ordenanza para la cría, conservación, plantíos y cortas de los montes ...". El precepto es un modelo de imprecisión, quizá buscada: se señala lo no incluido en esta ordenanza, empieza una enumeración de ríos que sólo llega a dos y terminaron el esclarecedor "y otros".

Limitada en estos términos se conservó la autoridad de los subdelegados desde su establecimiento, y tal fue su dependencia y sumisión al ministerio, sin que se hubiese atrevido jamás alguno de ellos a propasarse de los límites prescritos, hasta que por la Real Orden de 13 de abril de 1792, expedida al tiempo de la remisión de los autos generales de la visita de montes pertinentes a la provincia de Segura concluída en 1790 se mandó: "que en cuanto a que el ministro de esta provincia tenga facultades para pedir las causas formadas por el subdelegado en cualquier estado a instancia de parte o de oficio no venía S.M. en ello, respecto a que aunque haya vicio de parte de las justicias subdelegadas, quedan siempre a la parte el derecho de apelar a la intendencia donde pueden revocarse las providencias o sentencias del subdelegado".

De resultas de haberse comunicado esta orden, hubo subdelegado que creyéndose revestido de una autoridad igual a la del ministro de la provincia no se contentó con sentenciar las denuncias y causas que se seguían en su juzgado, sino que extendió sus facultades hasta conceder licencias a los forasteros para cortas de árboles, arrompidos y desmontes, hollando todos los principios de obediencia y respeto con que se habían gobernado desde su creación; pero felizmente cortó este desorden la soberana resolución de 10 de mayo de 1796, la que al

paso que ordena se ponga un asesor en cada subdelegación, previene que solo intervenga en las causas y circunstancias precisas para no aumentarse gastos a las partes, escusando su concurrencia a la recepción de declaraciones, y que concluido el sumario se remita por el subdelegado al ministro para que dicte lo correspondiente a sus méritos; con lo que se restablecieron las cosas a su primitivo estado, y quedaron las facultades de los subdelegados ceñidas como era justo (1).

En el ámbito personal, la jurisdicción privativa de Marina tendía también a la expansión porque había individuos interesados en ser incluidos en el fuero especial de Marina que otorgaba determinadas ventajas y privilegios. Unos de tipo honorífico, con su consiguiente valoración social, como el uso de escudo que solicitaba el ingeniero Timoteo Roch que condujo, en un ensayo de modernización de la conducción fluvial, las chalanas por el Guadiana Menor y el Guadalquivir; o la pretensión de Pedro Díaz de Bustamante, Tesorero de Rentas Provinciales y Administrador de las Reales Tercias, encargada de la custodia y beneficio de las maderas pertenecientes a las conducciones de la Marina de disfrutar "de los honores de oficial de la Contaduría y facultad de vestir uniforme igual al de los oficiales para que

(1) Expediente sobre el régimen y administración de los montes de Segura. 1825 B.N. págs. 45 y 46

pueda expedir cuanto concierne a su comisión sin que le estorben extraños y distintos conocimientos de sugetos y jueces incompetentes" (1). La pretensión hecha en Córdoba por escrito de 1 de septiembre de 1776, se admite y se le concede lo que pide. Está también, en otro tipo de privilegios, la solicitud de Pedro Palenciano, enviada al Intendente de Cádiz, Felipe Ruiz Puente, en 1776, en la que el solicitante, guarda-celador de Marina, pide que no se le incluya en el sorteo para el ejército (2).

Estos datos componen la imagen de un cuerpo de individuos privilegiados, poderoso y prepotente que se asentaba a lo largo del camino que recorría la madera, parasitando toda la empresa de principio a fin.

La actuación de un funcionario frío, imbuido de su carácter y su preeminencia, causa pronto la repulsa de los habitantes de los pueblos que tienen que sufrir la jurisdicción especial. Por todas las formas posibles, los pueblos tratan de escapar a ella, buscan amparo en la jurisdicción ordinaria, recurriendo incansablemente a sus tribunales, como se advierte por las quejas de los Ministros.

También las villas sujetas buscan escapar a la jurisdicción especial.

Según parece de un informe del Juez del Negociado de Sevilla, Francisco de Bruna, del que haremos pro-

(1) Archivo de Simancas. Sección Secretaría de Marina. Legajo 576.

(2) Idem.

lija relación, se ejerció sin problemas del 1752 hasta 1762. En aquel año se suspendió la aplicación de la adicción forzada por el Intendente de Cartagena por la cual se daba a las Justicias jurisdicción por petición de don Josef Gutiérrez de Bubalcava "que ejercía el Ministerio, representó los inconvenientes que se seguirían a estos Montes (de Segura), de que esa regla general se estableciese como en los demás partidos, pues el hacer de las Justicias, arvitros de los Montes era facilitar su destrucción a que tenían bastante inclinación los naturales..." (1).

En 1762, el Gobernador de Segura, "desentendiéndose de la práctica observada tantos años, fundándose en la adicción, sin uso para estos partidos, empezó a practicar recursos, y a querrerse apropiar la jurisdicción; lo que turbó en mucha parte las providencias gubernativas, dadas para conservación de los Montes..." (2).

Parece que la "predilección" administrativa por esta desdichada comarca tiene una larga tradición. Ya en el temprano año de 1733, cuando no existía nada parecido en otra parte de España, se estableció el Real Negociado de Montes de Segura en Sevilla. Luego, cuando en todos los demás partidos, la jurisdicción de Montes, por indicación del Intendente de Cartagena, esta-

(1) Informe de Francisco de Bruna. Archivo de Simancas. Sección Guerra y Marina. Legajo 576. Año 1783.

(2) Idem.

ba atribuida a las Justicias, a ruego de uno de los ilus tres miembros de la familia Rubalcava (1), el Rey mandó que en Segura quedara todo como estaba antes por Real Orden de 10 de octubre de 1752 (2).

Esta excepción no debió ser muy del agrado de nadie. Por ello, tras unos años de sumisión, el Gobernador de Segura "empezó a turbar las providencias gubernativas y, en el año 1763, comenzaron a brotar los fuegos en los bosques:

"Presto se bieron los efectos (de los recursos del gobernador de Segura y de la turbación de las providencias gubernativas) pues en el año de mil setecientos sesenta y tres, sucedieron repetidos fuegos generalmente en los Partidos, que unos se aberiguaron, y otros no se ha conseguido, y de resultas se han condenado reos a presidio de Africa, a Arsenales, a destierros y otros que están sentenciados en rebeldía, sin embargo no dexa el citado Gobernador de continuar en la solicitud de conozer de los asuntos, de Montes, y ha empezado a executarlo" (3).

Sería pensar que los contrarios a la jurisdicción especial eran "los malos" y los defensores y beneficiarios "los buenos", juzgar la actuación de la jurisdicción ordinaria fundada en un simple prurito de digni

(1) Los Gutierrez de Rubalcava. Julio Guillén. Museo Naval. Ms 2031.

(2) Informe citado supra de Francisco de Bruna.

(3) Idem.

dad y los fuegos en los bosques consecuencia de la actuación de esa jurisdicción, pero también sería perfectamente lícito invertir el orden de causalidad, atribuyendo los incendios a un clima enrarecido y opresivo al que la jurisdicción ordinaria trataba de encontrar salida recuperando su competencia sobre la materia. O la otra alternativa, quizá más novelesca, pero con posible apoyo en los ejemplos que aduciremos luego de la actuación de las Justicias de La Iruela, que los habitantes de la zona se sintieran en algún modo implicados y apoyaran a una parte en el conflicto, de una manera excesivamente rotunda e incivil, propia de desesperados y suicidas.

Era natural que Segura, cabeza de provincia y de un extenso partido, villa capital de la vieja Mancomunidad forestal, tomara la iniciativa en la lucha por la unidad de jurisdicción. Después, tarde o temprano, todas las villas van entrando en el conflicto por todos los medios que están a su alcance: recursos, tácticas dilatorias, representaciones, etcéteras.

Así Villaverde de Segura de la Sierra recurre al Consejo de Castilla en 1773 y requiere el pago de los pinos cortados por la Marina. En el informe del Ministro aparece que Segura y otras villas de su distrito elevaron iguales recursos que fueron denegados. Esta villa se coloca en situación de franca rebeldía y el 21 de julio de 1773 desobedece, según informan los del Ministerio la R.O. de 18 de mayo del mismo año. El alcal

de recibe la R.O. y suspende su cumplimiento con el pretexto dilatorio de no hallarse en la villa los individuos del Ayuntamiento con los que, según manifiesta, debe asesorarse quando hubiese de resolver (1).

Los edictos sobre incendios, modo y forma de usar se el fuego en los montes son retenidos por las villas Villaverde y Cotillas, suspendidos en su ejecución. En la primera pretextando no estar resuelto su recurso respecto de la R.O. citada y en la segunda por titularse el Corregidor de Alcaraz juez de los montes de su partido. Los edictos se devuelven con "expresiones desatentas para su conductor". Se pasa el expediente al Asesor del Ministerio que provee se libre nuevo despacho con inserción de la Real Orden. El alcalde se queda con él pretextando necesitar asesores, y despide al conductor "sólo con algunas expresiones de desprecio". Sigue la guerra de papeles con un nuevo despacho con diligencia del escribano de Villaverde (2).

La rebeldía preocupa a la Marina y Nicolás Zacagni ni, Ministro de la Marina en Segura insta al Intendente de Cádiz, marqués del Castañar, para que ataje la separación de pueblos del Ministerio, como ha hecho la villa de San Miguel de Bujaraiza, pretextando que es de señorío. Señala cómo los recursos a los tribunales ordinarios son continuos, concretamente al Consejo de Castilla. Por otra parte, parece que Villaverde es la muestra

(1) Archivo de Simancas. Sección Secretaría de Marina.
Legajo 576.

(2) Idem.

de un clima general ya que el escribano de esa villa dice al portador del oficio: "Dígale vuesa merced a Zacagnini que ya lleva ai con qué entretenerse, que los edictos los guarde para conjurar. Dice, además, que la Marina ya no estaba como cuando se hallaba aquí por ministro don Joseph Gutiérrez de Rubalcava" (1).

La rebeldía de Villaverde parece haberse generalizado a todos los pueblos del partido de Alcaraz que se niegan, todos, a convocar a los carreteros para el transporte. Así una carta de Juan Pichardo, subdelegado de Montes en Orcera, de 17 de julio de 1773, dice:

"Lo que se apetece es la libertad... los carreteros de las aldeas de Alcaraz no se sujetan a los transportes de maderas...de la Real Hacienda ni me atrevo a citarlos pues en la respuesta que dió dicha ciudad cuando me presenté con Real nombramiento, una de ellas fué tratarnos a los ministros aquí empleados de tiranos, porque unas pocas veces se hicieron venir aquí algunos carreteros, porque la necesidad exigía emplearlos en la conducción de la madera del Rey, siendo así que si no se emplean en ellas les está prohibido el comercio propio".

La carta está dirigida a don Francisco de Bruna, juez del Real Negociado (2).

(1) Archivo de Simancas. Sección Secretaría de Marina. Legajo 576.

(2) Idem.

La lucha, empieza muy pronto, entre las jurisdicciones especial y ordinaria se advierte también en el conflicto entre la Marina y el Concejo de Cazorla, con motivo de los acostumbrados edictos sobre prevención de fuegos. El juez subdelegado de Cazorla, Extremera, publica las normas nuevas sobre prevención de incendios, prohibiendo el uso de la lumbre extramuros y quemar rastros, cocer teja, etcétera, bajo multa de veinte ducados. Dirige el juez subdelegado exhorto al Corregidor de Cazorla y de las demás villas de su adelantamiento (6 de agosto de 1776) y a otros cualesquiera juez, sobre tal materia (1).

El Concejo de Cazorla "por conservar la buena armonía", accede y prohíbe (él, a su vez) las quemas de rastros por los daños que puede causar en árboles y edificios, bajo multa de cincuenta ducados "porque el pasto ha crecido mucho y sería difícil cortar el fuego". Impone además una pena de quince días de cárcel y la responsabilidad del daño. Todo conforme a los acuerdos del Concejo citados (del 10 de agosto de 1776). (2).

La decisión del Concejo, aparentemente inocua, en vuelve una clara manifestación referida a la jurisdicción que advierte el Juez Subdelegado y señala la mezcla de la jurisdicción ordinaria en la especial por lo cual remite las diligencias al Ministro de Segura el 11 de agosto. Juan Pichardo rechaza la competencia de la

(1) Archivo de Simancas. Sección Secretaría de Marina. Legajo 576.

(2) Idem.

Justicia ordinaria y de la costumbre y da traslado de las Reales Ordenes, entre ellas una de Aranjuez de 28 de mayo de 1764 (Orden, por otra parte, de redacción amplia y de interpretación elástica puesto que señala la jurisdicción exclusiva para lo referente al aumento y conservación de los Montes). Oficia con la dicha fecha (30 de septiembre) al Concejo de Cazorla para que vuelva de su acuerdo. El cabildo rechaza la solicitud aduciendo que los montes más cercanos están a legua y media y que por otra parte más inmediata está por medio el río que baja de esta villa. (1).

El razonamiento del Concejo de Cazorla parece fundado y descubre esa tendencia de las jurisdicciones especiales a expandirse a todo lo que roce su materia, aún lo más tangencial, como puede ser un fuego en un rastrojo a más de seis kilómetros del monte más próximo y con un río por medio.

En el respecto personal se produce también el efecto natural de que los particulares buscan amparo contra la jurisdicción especial en la ordinaria.

Así puede señalarse la actuación de dos alcaldes ordinarios de La Iruela, Gerónimo Carrillo Godínes y Andrés de la Blanca, singularmente de éste último, en la defensa de los del pueblo frente al juez subdelega-

(1) Archivo de Simancas. Sección Secretaría de Marina.
Legajo 576.

do de Montes de Cazorla.

Por ejemplo, hay una denuncia contra Ramón Laínez, del mismo pueblo, por quema de rastrojo en tiempo prohibido. Interviene Joseph Benito de Estremera, juez subdelegado, y diligencia a los alcaldes para que tomen declaración al denunciado. Estos afirman que es costumbre inmemorial quemar los rastrojos a partir del 15 de agosto. Curiosamente, esa prescripción que los alcaldes atribuyen a la costumbre está contenida en la ordenanza 25 de las del común de la Villa y Tierra de Segura de 1580. Aducen además que la quema se ha hecho en tierra rasa, sin montes, y que han dado ellos la licencia. Que el requisito de la licencia por la Marina no debe aplicarse a donde no hay monte alguno y, afirman además, si alguien ha pedido licencia, fuera de los montes habrán sido personas que "por miedo, temor o ignorancia la hayan pedido por excusar sus procedimientos y vejaciones"(1).

Estremera remite lo actuado al ministro principal de Segura (Pichardo) que suspende el auto para enviar a resolución que sea del superior agrado al Intendente General del Departamento de Cádiz.

Hay otro caso por denuncia, en 4 de agosto de 1776, por quema de rastrojo sin haber perjudicado árbol alguno, contra Juan Patricio Cozera, de La Iruela, que presta declaración ante Estremera diciendo que ignoraba la

(1) Fuente citada.

prohibición y llorando su pobreza, mientras los guardas -Javier Riquelme y Manuel Moreno (analfabeto)- se ratifican en la denuncia elaborada de fórmula por el escribano. Es requerido de comparecencia bajo apercibimiento de prisión, pero cuando el guarda va a recogerlo, el denunciado, tras hablar con el alcalde Andrés de la Blanca en el Pósito, sale y dice que no comparecerá por habérselo mandado dicho alcalde.

Vienen en el expediente una providencia de remisión de los autos al Ministro Principal "para que en su inteligencia provea lo que sea de su superior agrado". El Ministro, Pichardo, devuelve los autos a Estremera para que ejecute "llevando a puro y debido efecto la que dió en ellos en diez de agosto último". Esta devolución se hace el 12 de octubre. Estos largos lapsos son generales en la tramitación, lo que indica poca eficiencia o, como aparece de lo que dice Juan de la Cruz Martínez en su Memoria, la existencia de una enorme cantidad de procesos y expedientes.

Estremera se dirige a las Justicias ordinarias el 4 de noviembre y responde el alcalde de la Blanca aduciendo ser costumbre de muchos años la quema y además estar el sitio donde se produjo "muy distante y fuera de los montes".

Y que "su merced inora que haya orden de Su Magestad (que Dios guíe) que inhiba la Real Ordinaria jurisdicción de semejantes uemas de rastrojeras que no tienen conexión con los mntes..." (1) y concluyen afir

(1) Fuente citada.

mando que será competente la Real jurisdicción ordinaria hasta que por dicho juez requirente se haga ver orden expedida por Su Magestad o de su Real Consejo proveyendo el conocimiento de semejantes incendios, por lo tanto no ha lugar a dicho exhorto y provee que sea devuelto.

Entonces, Estremera, según aparece de un nuevo auto añadido al expediente, remite lo actuado al Ministro Principal de Marina que a su vez, el 23 de diciembre, provee auto de remisión al Intendente de Cádiz "para que resuelve lo que sea de su superior agrado".

En este ir y venir de exhortos, autos, providencias y cartas, sobre temas aparentemente triviales, como es la publicación de los edictos sobre prevención de incendios, la consecución de licencias para quema de rastrojeras o las denuncias por haberlas realizado sin ella, se evidencia el problema profundo de la lucha entre las jurisdicciones que se desarrolla en los dos ámbitos señalados: el de las corporaciones con la pugna continua de los municipios por mantener su jurisdicción tradicional y el de los particulares que intentan escapar a la jurisdicción especial, más rigurosa, en la ordinaria que se presta gustosa a esa función interponiendo todo tipo de argumentos y tácticas dilatorias, tal como se ha visto en los casos recogidos, en parte por ese interés de las jurisdicciones de mantener su competencia y, en parte, por interés humano hacia las personas conciudadanos suyas que son reos de unos jueces ex

traños representantes de un lejano ente central en cuyas garras han perecido muchas de las antiguas libertades y las economías de los municipios.

Otra muestra del constante conflicto es el recurso ante el Supremo Consejo de Guerra planteado por el Gobernador de Villanueva de los Infantes contra el Ministro principal de Marina, Juan Pichardo, para que se agreguen a su partido "para la jurisdicción y conocimiento de montes, las villas de Villa Manrique, Chiclana y Veas, que desde el establecimiento de este Ministerio se hacían incluídas en la demarcación de esta provincia de Marina..." (1).

Este Gobernador de Infantes vuelve a recurrir ante el Supremo Consejo de Guerra muy poco después sobre jurisdicción acerca de los pastos del campo y suelo de Montiel (2).

En ambos casos, el Ministro de Marina de la provincia otorga poder a su procurador en Madrid para que asista al sustanciamiento de los recursos citados.

Debe señalarse, subrayándolo de nuevo, que Villa Manrique, Chiclana y Montiel jamás han tenido, al menos en época histórica, montes con madera útil para la construcción naval.

Villa Manrique y Montiel pertenecen a la actual

(1) Archivo Notarial de Orcera. Protocolo de los años 1777-1784.

(2) Idem.

provincia de Ciudad Real y Beas de Segura y Chiclana de Segura a la actual de Jaén.

El conflicto de jurisdicciones lleva consigo el natural efecto de desgaste en los organismos afectados, el costo administrativo normal propio de un papeleo inagotable y el costo social de esa duplicidad que socava lógicamente la confianza ciudadana en los organismos, en la propia justicia. Sería útil tener medios de valorar los efectos que puede producir en la mentalidad popular el sometimiento, durante un largo periodo de tiempo, a dos jurisdicciones enfrentadas en la que una sirve de escapatoria y refugio frente a la otra. Quizá fuera posible rastrear en este tipo de situaciones el origen de esa profunda desconfianza, tan extensamente difundida, que el pueblo llano español siente hacia la Justicia y sus órganos,

Ante la arbitrariedad y la proclividad dominadora, es natural que la pugna por la separación sea continua, ya que supone escapar a un aparato represivo prepotente que, desde la cercanía incontrolada de las subdelegaciones o la lejanía del Departamento, lucha por imponerse contra las magistraturas tradicionales, contemplando este conflicto como un mero accidente molesto que se interpone para el funcionamiento de unas previsiones trazadas en el aire sin contar con la realidad ni con el hecho fundamental de suponer la expropiación de derechos comunales seculares legítimos sin contrapartida digna de mención. Así un informe de la Junta

del Departamento de Cádiz, existente en el Archivo de Simancas, firmada por el Intendente, Felipe Ruiz Puente, Luis de Córdoba, Juan Lángara, Juan Tomaseo y Antonio de Ansoátegui, dice entre otras cosas "...en los montes de Segura se experimentan los propios prejuicios que en los demás de la Marina, dimanadas de una tenaz resistencia de las Justicias a obedecer cuando está prevenido en la Ordenanza de Montes..." (1).

Una breve ilustración de este continuo forcejeo puede ser el certificado sobre servicios al Tribunal del auditor, antes asesor, Olivares, expedido por Prudencio María Pichardo (hijo de Juan Pichardo) en Orcera el 27 de Agosto de 1817 como Ministro que fue de Marina. En esta certificación se habla, aparte del conflicto con los carreteros -que resolvió con buena maña- de la competencia "decisiva" con el Alcalde Mayor y Ayuntamiento de Segura (en 1785) que pretendía se mudase la sede desde el arrabal Orcera a la propia población. También de las

"muchas competencias con las Justicias de los pueblos de la Provincia (Maritima de Segura de la Sierra), incluso el Corregidor de la Villa de Quesada, el Alcalde ordinario de la de Iznatoraf, el Gobernador de la de Segura y su Ayuntamiento, enemigos notorios de la Jurisdicción de Marina y sus condiciones, para sus fines particulares, e injustos resentimientos contrarios al fomento y conservación de estos preciosísimos montes y a otros importantes objetos recomendados por S.M. entre ellos

(1) Archivo de Simancas. Sección Secretaría de Marina. Legajo 576. Año 1778.

varios puntos jurisdiccionales, pribativos del ramo de Marina, y sus comisiones, como son el competente repartimiento de pastos para los bueyes carreteros de éstas y demás ganados de las mismas.. ..en que han sido y son continuos los tropiezos con los capitulares de la Villa de Segura... hemos ganado todas las competencias, sinexemplar alguno en contrario... decididas unas por S.M., otras por las Capitanías Generales de ambos Departamentos y otras por las Superintendencia del Real Negociado de Sevilla" (1).

Lo subrayado es bien revelador: Por un lado el Ministerio de Marina se extiende su conocimiento a lo referente a los pastos -con lo que lesionaba los derechos de pastar-, por otra, las decisiones en las competencias correspondían al Rey (es de suponer que al Ministro de Marina), A las Capitanías Generales de los Departamentos y al Superintendente del Real Negociado de los Montes de Segura en Sevilla. Jueces y parte: la indefensión de los pueblos es trágica.

Hace referencia también Prudencio María Richar-do a una competencia pendiente en que se ha empeñado el Alcalde Mayor de Segura:

"con el mayor calor" para apropiar el dominio de los árboles silvestres nacidos y criados naturalmente en terrenos incultos y montuosos a los llama-

(1) Papeles Olivares.

dos dueños de éstos, siendo realengos, comunes y de común aprovechamiento entre los pueblos de la Mancomunidad para sus necesidades propias, alimento y abrigo de sus ganados de tiempo inmemorial hasta ahora, y pertenecientes en propiedad al privillegiado fondo de montes, sugeto por S.M. a la jurisdicción y ramo de Marina, a cuyas novedades de Segura ha opuesto con sus sólidos dictámenes..."

Parece una burla referirse a esa Mancomunidad de "tiempo inmemorial" a su derecho de aprovechamiento para sus necesidades propias y abrigos de sus ganados, - cuando ha sido la Marina quien acabó con ellos y sus posibles aprovechamientos, aún en los pastos, que perturba, como aparece del párrafo citado antes. Es una novedad aunque responde a la realidad y la mentalidad, que se diga que los montes pertenecen "en propiedad" al fondo de Montes cuando en otros textos también del mismo origen, se habla de usufructo, aunque el resultado es el mismo. (1).

En la misma certificación, mas adelante, se hace referencia a la pugna con el Corregidor de Alcaraz y setenta individuos más que resultaron condenados como consecuencia de la visita realizada a aquella Subdelegación por Josef Antonio Ruiz, subdelegado de Iznatoraf, que duró cuatro años y medio, hacia el año 1796. Según advier

(1) Por ejemplo en el informe de Francisco de Bruna, citado.

te el mismo documento, las multas cobradas fueron para indemnizar a la Real Hacienda de los dispendios de "tan penosa visita y a contener los graves excesos de los taladores de montes".

No aparece, pues, autoridad o pueblo que no entre en conflicto con la jurisdicción especial privilegiada, sin embargo, como expresa Prudencio Maria Pichardo, aun sigue ésta poseída de su razón, después que los montes de Segura habían sufrido tantos graves desastres, las Cortes de Cádiz habían calificado de tiránica la situación y los pobladores del territorio sometido liberados temporalmente de la jurisdicción especial, habían talado, quemado y destrozado tantos bosques y, con singular predilección, los terrenos del arbitrio de Guadalmena y Bañares de cuyos productos se pagaba la guardería forestal de la Marina.

Pero el panorama en las zonas estudiadas era auténticamente aterrador, a la pugna entre la jurisdicción ordinaria y la especial de Marina concurría, en esta zona de la especial, junto con la de Marina, la del Real Negociado de los Montes de Segura que actuaba desde Sevilla. Las dos jurisdicciones especiales turnaban entre sí. Es en realidad una competencia entre predadores, produciendo, aparte de los efectos de devastación material que se examinan en otro apartado, los inconvenientes que son de imaginar. El ministro de Hacienda Francisco Angulo, dirige el siguiente informe al Rey, el 23 de Enero de 1811:

"Una Administración (la de los Montes de Segu

ra) tan importante y tan útil está entregada a dos direcciones independientes entre sí, y que se gobiernan por principios opuestos. La una depende de la Marina real, y la otra del ministerio de Hacienda. Los gastos de explotación y administración se duplican, y los productos se minoran por la misma falta de unión de medios para las mejoras en ambas direcciones". (1).

El reparto entre el Real Negociado de Sevilla y la Marina se hace por años alternos, manteniendo cada organismo su aparato particular, por ello, Juan Pichardo, racionalmente, propone que se unan ambos para efectuar las cortas y conducciones al unísono, de manera que sirva la misma organización a ambos fines, evitando la duplicidad de cortas y gastos. Expone esto Pichardo en una representación de 4 de enero de 1777, insistiendo el 4 de febrero de 1784 por su apoderado Antonio Félix Román (que era también su escribano en Orcera). Oído el asesor general de Marina, Julián de San Cristóbal, aprobó el rey la propuesta, se comunica la real determinación al ministro de Hacienda, conde de Gáusa, el 4 de junio del mismo año. Aquí la propuesta sufre el primer síncope, según la Memoria presentada por Juan Sans, archivero de Marina (2), porque el ministro Gáusa "teniendo antecedentes que calificaban la grande utilidad que resultaba de la alternativa establecida entre el Ne

(1) Expediente sobre.... montes de Segura. 1811. págs 1y2

(2) Incluida en este citado expediente. págs 73 y 74.

gociado y la Marina, y de los gravísimos fundamentos que hubo para determinarla... creyó oportuno oír a don Francisco de Bruna".

Don Francisco de Bruna es juez del Real Negociado y, naturalmente, odia cualquier idea de promiscuidad con la otra jurisdicción especial, representada por Juan Pichardo, subdelegado de Marina en Orcera. Ataca, pues, duramente la propuesta aparentemente juiciosa de Pichardo. Es, de nuevo, el espíritu de taifa, que lleva consigo toda jurisdicción especial; el temor de que, en la unión, se produzca la confusión de la propia parcela jurisdiccional. La argumentación de Bruna se basa sobre todo en razonamientos de tipo económico, singularmente en la buena administración del Real Negociado, sin dejar por ello de rebatir todas y cada una de las propuestas de Pichardo. Triunfa finalmente el dictamen de Bruna, presentado al Rey por el secretario del despacho de Marina, Antonio Valdés. En consecuencia, una Real Orden de 7 de marzo de 1785 manda se continúe como hasta entonces.

Don Francisco de Bruna, sin embargo, en un informe que había presentado el 26 de abril de 1764 a la superioridad, dice en la primera de sus conclusiones "para la conservación y aumento de los montes":

"Lo primero es necesario que la Jurisdicción de Montes la ejerza una sola mano pribativamente con independenciam de las Justicias ya sea el señor Superintendente General de Hazienda y su subdelega

do como estubo al principio de la Negociación o del Ministro de Montes de Marina según su ordenanza en la forma en que la sirvió Don Josef Gutiérrez de Rubalcava guardándose las providencias que por este se establecieron en las visitas..." (1).

Esta opinión, curiosamente, coincide con la de Pichardo, pero, unos años después, ya no es valedera. En realidad, se trataba, en cada caso, de unificar las jurisdicciones especiales a favor del que solicitaba tal unificación. Aunque la unificación de Bruna tenía una parte de favoritismo a favor de "su" parcela. Dice en la segunda conclusión:

"Lo segundo que el conocimiento de Guardas sus nombramientos, separaciones, pago y Administración de los Arbitrios destinados a este fin sea privativo del Subdelegado de la Real Negociación bajo las reglas de Administración que establecen los Reales Decretos y con sujeción a las órdenes del Señor Superintendente General de Hacienda sin que estos caudales puedan imbertirse en otros fines que los de su concepción" (2).

El cambio de rumbo del Juez del Real Negociado es sorprendente, pero en cierto modo está explicado en el texto del informe que examinamos, donde se dice lo siguiente: "Persecución que ha sufrido la Negociación de

(1) Archivo de Simancas. Sección Guerra y Marina. Legajo 576. año. 1783.

(2) Idem.

Sevilla por la Marina que ha tirado siempre a que se finalice":

"Por lo que corresponde a la Real Negociación de Sevilla es constante y notorio que los Intendentes de Marina de Cádiz y Cartagena y sus subdelegados han conspirado siempre contra ella, y por quantos medios han podido discurrir han tirado siempre a sofocarla sin perdonar representaciones y oficios a los señores ministros del Despacho de Marina, pero no habiendo podido conseguir por este camino el suprimirla discurrieron modo de inutilizarla y que por precisión se acabase; esta fué la instancia que hicieron para que el Real Negociado no pudiese cortar sino pino negral o rodano defendiéndole absolutamente el pino blanco salgareño, y que se destinase para la Marina..." (1).

El tesoro es realmente ese tipo de pino. La Negociación lo quería y la Marina también. Sin él, la Negociación perdería mucho de tal, por ello don Francisco de Bruna no duda en mentir afirmando:

"Del pino blanco salgareño es toda la abundancia de los montes de Segura en tales términos que es imposible la seguridad de acabarlos bien conservados aunque la Marina corte para los Astilleros y la Real Negociación para su tráfico" (2).

(1) Archivo de Simancas. Sección Guerra y Marina. Legajo 576. a. 1783.

(2) Idem. Año 1783.

Aún hoy, como puede comprobarse "por vista de ojos", los pinos rodenos o negrales y los carrascos, cubren grandes extensiones en esta Sierra, contra lo que afirma Bruna. Como se ha dicho antes, esta clase de pino, que también tiene ejemplares apreciables y sirve perfectamente para construcción, predomina en todos los pinares de cota inferior aproximada a los mil metros y, desde luego, no tienen la derecho y la belleza de los salgareños, pero son útiles, más que los carrascos y aún estos se usan corrientemente para construcción y tablazón de embalaje.

Argumenta luego que no hay incompatibilidad entre el aprovechamiento de la Marina y el del Real Negociado porque aquella los corta de más de diez varas, mientras éste le basta con cortarlos de cinco a diez, que los pinos rodenos suelen ser torcidos, etcétera.

Esta pugna entre predadores parece continua desde que la Ordenanza de montes de Marina de 1748 turbó el tranquilo monopolio del Real Negociado de Sevilla. Así, en 1817, con fecha 1 de agosto, el Fiscal militar del Almirantazgo, brigadier don Joaquín de Lacroix, informa sobre la pretensión del Ministerio de Hacienda de reorganizar la explotación de los montes de Segura bajo la dirección unificada del Real Negociado de Sevilla (1). La reacción de la Marina, por boca de su Fis-

(1) Dictamen del Fiscal Militar del Almirantazgo. Museo Naval. Mss 443, hoja 412 vuelta.

cal, es furibunda. Se nota claramente que es una herida vieja en la cual se ha removido el hierro y el Fiscal responde con reticencias, graves acusaciones directas y sugiriendo otras.

"La Contaduría (del Real Negociado de Montes de Segura en Sevilla) no contenta con proponer lo que cometía a su jurisdicción y encargo, entró la segur en mies ajena, y en el número 1 de los documentos que acompañan a la reflexión del Intendente, extendió sus reflexiones hacia el método que debería observarse para el cultivo y fomento de aquellos montes, los cuales por la ordenanza de este ramo pertenecen a la jurisdicción privativa de la Marina, pretendiendo separarlos de ella, bajo las apariencias de utilidad que siempre se proponen en semejantes casos..." (1).

Airado por la pretensión del rival, no cae en la cuenta de que tampoco la marina tiene títulos técnicos para desempeñar mejor que un negociado de Hacienda, las funciones propias al cultivo y fomento de los bosques.

Piensa que la unión puede ser conveniente, siempre que sea "su" jurisdicción la que absorba a la otra:

"No hay duda en que la reunión de las dos empresas de madera que existen en unos mismos montes, hubiera podido ser muy útil continuando, como lo es

(1) Dictamen del Fiscal militar del Almirantazgo. Mss 433. Hoja 412 vuelta. Museo Naval.

tuvieron desde 1751 a 1755, bajo la dirección de la Marina y dirigidas con todos los conocimientos, orden y economía que requieren semejantes empresas... por ser más natural, en el caso de incompatibilidad de dos comisiones, que la del Negociado se uniese a la jurisdicción de Marina, que es la más interesada en el fomento y conservación de aquellos preciosos arbolados, los quales deben surtir a los departamentos de Cádiz y Cartagena de las excelentes maderas que producen" (1).

La idea de que se trata de un viejo pleito, indicada por la oposición Pichardo-Bruna ya examinada, se confirma por lo que dice Lacroix en el mismo dictamen (2):

"Aunque fuera necesario escribir una larga memoria para destruir completamente las apariencias con que se presentan las utilidades de este nuevo proyecto (como en desquite de los esfuerzos que se han hecho por parte de la Marina para la agragación contraria, más justa y más natural)" (3).

La conclusión del Fiscal, apoyada en la destrucción de los montes que ha causado el Negociado, los déficits enormes de su gestión, etcétera es que:

"... debe seguir la separación (por ahora) con tanta más razón quanto que S.M. por su Real

(1) Idem que el epígrafe anterior. hoja 413.

(2) Idem que el epígrafe anterior.

(3) Idem.

decreto de 12 de diciembre del año próximo pasado, se dignó conformarse con lo propuesto por este Su premo Consejo para la conservación de aquellos arbolados y mayor utilidad de la Marina, poseedora actual de la jurisdicción de aquellos montes; y como esta ha de recibir una consignación que le está señalada en el nuevo plan de Real Hacienda, en nada puede perjudicar a las que se hagan separadamente al Negociado, por otra parte del ministerio a quien corresponda aquella atención, ni comprende cómo la reunión proyectada pudiera sacar a aquél de los apuros en que hoy día se halla; pues no produciéndole ingresos las cortas que hiciese para la marina sólo pudiera prometerse mayores auxilios en la desolación de aquellos montes" (1).

El Fiscal señala claramente que el principal interés del Negociado por la unión se debe a que ha sido concedida a Marina una consignación en el nuevo presupuesto, con lo que puede solucionar su precaria situación financiera.

Acusa luego el golpe y lo devuelve con cierta ironía:

"El artículo 1º de los que comprende el informe de la Contaduría exige que la jurisdicción privativa, gubernativa y contenciosa de los montes de Segura se le arranque a la Marina y se conceda

(1) Idem que el epígrafe anterior.

al Superintendente del Negociado, con independencia de las justicias, y de otra autoridad por privilegiada que sea; para que de este modo haya en asuntos de montes tres distintas jurisdicciones, la del Consejo de Castilla, la de Marina y la de Hacienda; y en vez de los dos Reyes que supuso en principio y hacia el fin de su escrito, haya una epifanía completa" (1).

Esta "epifanía" de la que habla sarcásticamente el Fiscal está realmente vigente. Excesivos reyes para un solo pueblo al que parasitan disputándose la presa como moscas tenaces las llagas de un burro viejo.

Reitera al final el informante:

"...el Fiscal no encuentra en toda la exposición de la Contaduría, ni en el informe que se ha agregado al expediente, ninguna razón de utilidad general, ni particular, para que la Marina se desprenda de la jurisdicción de los montes de Segura, ni ceda la administración de sus maderas, reuniéndola a la del Negociado; mayormente quando puede ya contar con una consignación bien pagada" (2).

Aparece nuevamente la sospecha de que el interés del Negociado por la unión se deba al deseo de participar de esa consignación dada a la Marina en el presupuesto.

(1) Idem. Hoja 416

(2) Idem. Hoja 422 vuelta.

"Halla sí -continúa- muchas y poderosas razones (en su opinión) para que el Negociado de Sevilla se reuniera de nuevo al de la Marina, pues que a esta se la puede mirar, en cierta manera, como propietaria en el usufructo de toda la parte realenga o común de estos arbolados (1).

Ha tomado estado, en el concepto de estos funcionarios, que la Marina es propietaria del usufructo de los montes comunes.

"La Marina -recalca incansable- debiera ser siempre la única que exclusivamente la hiciese (la especulación -sin sentido peyorativo- sobre los bosques sin perjuicio de los mismos) como tan interesada en llenar todos estos objetos. Ella es el mayor consumidor, y en ella hay más interés inmediato para conservar y multiplicar los arbolados... Si la presente ocasión fuera favorable para restablecer las cosas en el ser y estado en que se hallaban quando se desprendió del negociado el señor Baylio Arriaga; el conseguirlo fuera un triunfo no poco importante y útil para la Marina y para la conservación de aquellos montes... Pero, si en intentarlo se pudiera correr el riesgo de que tuviera efecto la reunión según se intenta en el proyecto, el que suscribe considerará siempre como un mal menor, el que continúe la separación y la alternativa

(1) Dictamen del Fiscal militar del Almirantazgo. Museo Naval. Ms. 443. Hoja 422 vuelta.

de los cortes según se practicaba antes de nuestra gloriosa revolución, siguiendo las cosas en el ser y estado que tenían en 1808..." (1).

Termina el dictamen con una maliciosa sugerencia para la imaginación del Supremo Consejo: "El Consejo, en vista de todo lo expuesto y de lo mucho más que se ha omitido (pero no se habrá ocultado a su sabia penetración) acordará como siempre lo más conveniente"(2).

Se lucha fieramente por mantener la prepotencia. El Negociado, primero en el tiempo, pierde en beneficio de la Marina parte de sus prerrogativas, pero no cede y aún en 1817, sesenta y nueve años después del establecimiento de la Marina, sigue luchando por lograr la unión, en su beneficio, de ambas jurisdicciones especiales. La Marina por su parte, además de resistir al Real Negociado se ocupa de ampliar su jurisdicción, consiguiendo agrandaciones territoriales mediante el señalamiento de una franja a lo largo de las riberas de los ríos y, es de suponer, actuando en esta zona del mismo modo con que actuaba en general, según expone el diputado Borrull ante las Cortes de Cádiz:

"...y por más que se hablara en la citada ordenanza (la de 1748) de los montes situados en las inmediaciones de la mar, con todo, se puso en eje

(1) Idem. que el epígrafe anterior. hoja 423 y vuelta.

(2) Idem. Hoja 424.

cución en sitios muy distantes de la misma, y de los cuales nunca se ha llegado a sacar árboles algunos para su uso, y se extendió también a las llanuras, a los campos cultivados, y hasta a las huertas más preciosas: de suerte que si por casualidad nacía en estas algún álamo, roble o encina, desde luego quedaba sujeto a la jurisdicción de marina, privado el dueño de usar de él o cortarlo, aunque lo necesitase, y obligado en tal caso a pedir licencia, con la condición de plantar por cada uno tres en su lugar, sin hacerse cargo del perjuicio que causaban a la tierra..." (1).

Como coronación, incluso la jurisdicción de Marina se dividía en dos en esta zona, según fueran aguas vertientes al Segura (jurisdicción del Departamento de Cartagena) o aguas vertientes al Guadalquivir (jurisdicción del Departamento de Cádiz); según establece la ordenanza de 1748..

En este maremagnum, los vecinos del común tratan de defenderse acudiendo a sus tribunales y, lo que es más patético, a sus viejas libertades. Un llabrador llamado Lázaro López Gil, vecino de Santiago de la Espada y afincado en La Garganta de Hornos, denunciado por un incendio ocurrido en sus tierras, sin que se sepa el autor, "so pretexto de estar en su tierra", es vuelto a denunciar cuando corta los pinos quemados y se le em-

(1) Sesión del 21 de diciembre de 1811. Diario de sesiones pág. 2458.

barga una cabalgadura y se le quiere tomar preso. Se opone apoyándose en la ordenanza que prohíbe prender a los vecinos, y tomarles prendas vivas; y solicita que se le manifiesten los autos. Aduce también que se trata de pinos carrascos "de que no habla la ordenanza" y da poder a Juan Izquierdo de Frías para que actúe en su nombre. Es el 6 de septiembre de 1742, cuando el Negociado de Sevilla goza aún la exclusiva en lo referente a Montes en la Sierra de Segura (1).

Ocorre también, como suele, que los que pueden ampararse en algún fuero especial para escapar a otros del mismo jaez, se refugian o intentan refugiarse en el suyo. Así en el expediente que se sigue para "castigar" la insolencia de unas pensionistas del Ministerio de Marina que han solicitado, por una representación al Rey, sus pensiones y que se sospecha ha sido redactada por el sargento de los voluntarios realistas José María Romero, el comandante primero del batallón de voluntarios realistas de Segura, Genaro Lope de Aguilar, emplea la táctica dilatoria, para la presentación del sargento, de aducir, como también lo hace con otro procesado, escribano del mismo Tribunal, el fuero de que gozan los pertenecientes al Cuerpo (2). Y retrasa el envío de dicho sargento hasta que recibe órdenes superiores (3).

(1) Escritura de poder ante el escribano Zorrilla. Archivo Notarial de Orce. Legajo de los años 1837-185

(2) Los voluntarios realistas. Federico Suárez. AHDE, 1956

(3) Papeles del auditor Olivares. Expediente de las pensionistas.

También se acudía a otros medios indirectos que, de alguna manera, contribuyeran a desprestigiar a la parte contraria. Bernabé Picarzo de Almazán, auténtico campeón en la defensa de los derechos de la villa de Segura, inicia un expediente para demostrar y denunciar que el Real Negociado ha cortado piezas superiores a las diez varas que le permiten los reglamentos, que se reservan a la Marina. La fecha de iniciación es 29 de abril de 1783.

La circunstancia es que Juan Pichardo desempeña, interinamente, las funciones simultáneas de subdelegado del Negociado de Segura en Sevilla (dependiente, como sabemos, de Hacienda) y de Ministro interino de Marina. La diferencia, que el Real Negociado tenía un enfoque puramente mercantil y el fin de abastecer de madera a los particulares, por lo que cabe suponer interés sospechoso en los funcionarios de dicho Negociado.

Reunidos el gobernador y justicia mayor de Segura, con los regidores perpetuos y anuales y los dos diputados del Común, proveen que una comisión de tres personas pase a reconocer las maderas cortadas por el Real Negociado en los sitios de arriba y abajo de la Navalasna, Cañada del Muerto, Royo Trapero, Majadal de las Burras, Prado de Puerco, Cerecera, Alameda y Majadal del Borriquillo y las midan. Se les notifica la comisión el 29 de abril de 1783 y comparecen a presencia del Gobernador el 7 de mayo del mismo año.

Bajo juramento y por ante escribano, informan

del resultado de su investigación cuyo resultado es que, de las tres mil cuatrocientas treinta y una piezas labradas por los hacheros, sólo son reglamentarias sesenta y cinco, menores de 10 varas. Hay ciento ochenta y nueve de esa longitud y las restantes, tres mil ciento setenta y siete, exceden de diez varas, siendo las más abundantes de 15 varas (cuatrocientas dieciséis) y de 16 varas (quinientas veintisiete).

La relación de los peritos está realizada por longitudes, de vara en vara, desde 8 a 23 varas. Señala también una circunstancia en la cual la corta del Real Negociado ha quebrantado el reglamento: existen, entre las piezas cortadas, cuatrocientas veintisiete "de vuelta" es decir curvadas de cierta manera que las hacía especialmente útiles para construcción naval, a cuyo fin estaban expresamente reservadas. (1).

La queja del Gobernador y Concejo de Segura llega al Rey, o a sus más cercanos en la materia, y el conde de Gausa recibe una orden para que entregue a la Marina las tres mil ciento setenta y siete piezas de 11 a 23 varas de largo y las 427 que son de vuelta (2).

Francisco de Bruna salva la situación convenciendo a las alturas de ser todo una maquinación del concejo de Segura y producto del "pernicioso carácter de aquellas gentes". Afirma que únicamente se han cortado

(1) Archivo de Simancas. Sección Secretaría de Marina. Legajo 576. Año 1783.

(2) Idem. Idem. Idem. Idem.

1566 piezas, de las cuales exceden de las diez varas só lo 41 y que las piezas de vuelta sirven para encauzar el río para el paso de la madera (1).

Sin embargo, la detallada relación de los peritos, la petición de que se haga una inspección, apoya la rea lidad del informe que no haría más que confirmar el pa norama general de mala administración revelado a lo lar go de este estudio.

El informe-respuesta de Bruna revela cierta ten sión pues dice haber sido amenazados los hacheros (más bién avisados, tratándose de gente del país, vecinos y por tanto conocidos) para que no cortaran piezas de más de diez varas. Insistimos en que el episodio no es sino uno más del enfrentamiento entre las jurisdicciones, pues al Concejo tanto le importaba que cortara el Real Negociado como la Marina, ambos producción "la extinción de sus montes" (2). Lo importante para el Concejo era hacer presente "el ningún arreglo que se observa en di- chas cortas... originado de hallarse las dos respecti- vas comisiones a cargo del Señor Don Juan Pichardo..." (3) y tratar de apoyarse en los intereses de Marina pa ra ir contra el Negociado, argumentando con el interés de la Real Hacienda para sostener el propio.

Los vecinos no protegidos por algún fuero espe-

(1) Archivo de Simancas. Sección Secretaría de Marina. Legajo 576. Año 1789.

(2) Idem. Idem. Idem. Idem.

(3) Idem. Idem. Idem. Idem.

cial, los antiguos vecinos libres aunque pobres que podrían haber conocido una nueva y merecida prosperidad, son las víctimas de este duro conflicto de las jurisdicciones especiales con la ordinaria y de aquellas entre sí. Ellos y su comunidad son los perdedores directos, pero la pérdida es para la nación que se queda sin unas enormes riquezas idas a los bolsillos de funcionarios prevaricadores y consumidas en pleitos, papeles y burocracias inútiles.

XIV .- LA INUTIL TIRANIA

Puede afirmarse sin reparos que ...
nuestra potencia naval del siglo
XVIII se obtuvo a costa de los mon-
tes.

Aurelio Guaita. Derecho Administrativo Especial

LA INUTIL TIRANIA

QUE LOS ARTESEROS APROVECHEN TODO EL PINO QUE CORTAREN.

Item ordenamos y mandamos que los cadice-ros y arteseros que cortaren pinos para hacer sus officios aprovechen enteramente todo lo que ellos buenamente se pudiere aprovechar aunque sea hacer trabillas o ar-tesones pequeños de ellos so pena que el que no aprovechara assi los pinos que obiere cortado pague por cada pie seis-cientos maravedíes aplicados segun desu-so.

(Capítulo 61 de las Ordenanzas del Val de Sigura de 27 de julio de 1580)

El marqués González de Castejón comunica a don Juan Tomaseo una R.O. para que no se sirva en las mesas, después de la so-pa y el cocido, más de tres platos fuer-tes.

(El Pardo 12 de marzo de 1780)

Todo el aparato represivo, el montaje administrativo y la jurisdicción especial, con el alto costo social que conlleva y al que se hace referencia en otra parte, no se traduce en una eficacia económica de la gestión encomendada que es, como señalan las disposiciones, garantizar el abasto de madera a los arsenales, conciliando este fin con la conservación de los montes y su aumento. Parece que ninguno de ambos fines de cum
plió satisfactoriamente.

En un documento existente en el Archivo de Simancas, de 28 de mayo de 1770 (1), veintidós años después del establecimiento del régimen especial, se pregunta desde el Departamento de Cádiz por qué no se han hecho cortes de madera en los montes de Segura, no obstante tocar ese año a la Marina. Se contesta no ser aún estación oportuna. Este documento y su respuesta parece indicar cierto desconocimiento en quién pregunta ya que las épocas de corta son sabidas (menguentes de enero y agosto) y da un indicio de que, al menos en ese año, los encargados del asunto en el Departamento no tenían excesiva capacitación.

En 1776 aparece un informe firmado por el ingeniero comandante del arsenal de La Carraca, Antonio de Ansoátegui en el que señala la inutilidad de muchas de las maderas que llegan de Segura, algunas por cortas,

(1) Archivo de Simancas. Sección Secretaría de Marina. Legajo 576. Año de la fecha.

y el retraso en su llegada, aunque el delineador destacado en la Sierra manifestó haberlas cortado de "unos tamaños utilísimos". Otra de las barcadas viene en las mismas condiciones por lo cual se imagina Ansoátegui este destrozo "se ha hecho en la conducción". Aparte del inútil tamaño de las madres (1) y con la advertencia de que hay veinticinco procedentes de pinadas antiguas, según informa Juan Lángara, ayudante de construcción encargado en ramo de maderas, y no sirven por estar pasadas de sámago (2) ni para pañoles de azogue(3).

El siguiente año se pide, por el encargado del ramo, al Intendente de Cádiz Felipe Ruiz Puente, informe circunstanciadamente sobre los defectos que advierte y exponga todo el proceso.

Responde el Intendente con una breve exposición y acompaña una nota del mismo Ansoátegui en la que dice que los setecientos cuartones de la pinada sirven para cajas de azogue y no son caros...

Va incluido en el mismo expediente un informe de Nicolás Zacagnini, fechado el 31 de marzo del año 1775 en el que se comunica haber pasado la pinada por Puente de Génave sobre el río Guadalimar el 27 del mismo

-
- (1) Madre es, en construcción naval antigua, un cuartón grueso de madera que va desde el alcázar al casti-
llo por cada banda de crugia.
 - (2) Sámago: albura de los árboles.
 - (3) Archivos de Simancas, Sección Secretaría de Marina,
Legajo 576. Atado del año 1776.

mes y haberse botado al agua el 27 de diciembre del año anterior, dos leguas más arriba.

Acompaña testimonio del escribano Román dando fe de que se hayan detenidas en Arroyo Zángano porque no hay agua para navegar, el testimonio incluye una declaración jurada del maestro Juan Merenguel y del aperador Antonio Carlos aseverando la falta de agua.

Posteriormente hay una carga del mismo Zacagnini el 22 de abril de 1775, comunicando a Felipe Ruiz Puente, Intendente de Cádiz no haber agua aún para navegar.

Este episodio del embarque de maderas el 27 de diciembre es realmente extraño, pues lo normal es que las conducciones se hicieran en la primavera aprovechando el máximo caudal de los ríos por las lluvias y el deshielo. No parece claro que una pinada botada al río en diciembre, deba detenerse por falta de agua y sólo recorra dos leguas en dos meses, porque se supone que en diciembre el caudal fluvial está estabilizado dentro de unos límites. Es posible que el retraso obedezca a otras causas y oculte algún tipo de irregularidad: hay otro episodio oscuro que protagoniza el mismo Zacagnini.

Ante la acusación del Ayuntamiento de Villaverde de que la Marina y el Real Negociado han arrasado los montes del término y "han hecho las cortas con tanto exceso que, no obstante las muchas maderas sacadas y conducidas, permanecen aún en mucha abundancia por tierra perdidas e inutilizadas... comprobándose de los mismos

autos que no sólo fueron hechos los citados cortes para los fines destos Reales encargos si (no) además, en diversas ocasiones, para los propios y particulares de los mismos ministros y encargados..." Zacagnini responde en carta al Marqués de Castañar que "por lo áspero de los barrancos y no haber tiempo y porque los hacheros que los labran suelen perder el tino y no dan con las piezas" (1). Argumento especioso a todas luces pues, con el sentido de orientación que tienen los naturales, es un error poco verosímil, por otra parte los hacheros suelen trabajar, hasta hace poco lo han hecho, en cuadrillas, por lo que es imposible se pierda la noticia de dónde estaban situadas las piezas. Añádase que cobran a destajo por pieza labrada para colegir la falsedad de la disculpa, en este caso concreto, que arroja la sombra de la duda sobre el de la navegación.

Estas pérdidas las señala también Martínez en su "Memoria histórica" ampliándolo del "Informe" de Fernández de Navarrete, que examinaremos más ampliamente. Citando el reconocimiento realizado por Prudencio María Pichardo, en compañía del delineador Guillén, el día 14 de agosto de 1815, de las maderas pertenecientes al Real Negociado existentes en el sitio denominado El Volador, señala que la sexta parte de ellas estaba próxima a la corrupción, y la otra parte bastante deslucida. La causa

(1) Archivo de Simancas. Sección Secretaría de Marina. Legajo 576.

de estas graves deficiencias las expone por menudo el almirante Fernández de Navarrete en su dictamen de 1811, recogido en el expediente referente a la Sierra de Segura reimpreso en 1825, adicionado con una serie de informes técnicos y geográficos sobre la Provincia marítima de Segura de la Sierra sacados del archivo de Marina por su archivero:

"No puedo omitir en este lugar otro vicio gravísimo de la antigua administración de los montes por la Marina, sobre el cual clamé con celo y vehemencia en desempeño de mi oficio de fiscal del supremo consejo de Almirantazgo, y convendrá por lo mismo evitar cuidadosamente en lo sucesivo. Por lo común en los presupuestos anuales para las grandes empresas de la Marina se pedían las cantidades o codos cúbicos de madera según las carenas, construcción de buques u otras obras que se juzgaban o presumían de urgencia o de necesidad para el año siguiente, y rara vez o nunca era la medida de las peticiones y de los acopios la suma del dinero de que se podía disponer, ya porque unas veces se rebajaban arbitrariamente las consignaciones por la superioridad, o no se libraban con exactitud; ya porque otras no alcanzaban a cubrir las necesidades comunes por ocurrencias imprevistas o extraordinarias; o ya finalmente porque los gastos de administración hacían subir el valor de los materiales o primeras materias a mucho más de lo que se

dencias que juzgué oportunas en aquella coyuntura para aprovechar lo que se pudiese de las maderas ya cortadas, y evitar para en adelante abusos de tan perjudicial trascendencia" (1).

Estos graves defectos en el origen que señala Navarrete se agravan con otros señalados por el ingeniero Tomás Muñoz:

"...el Real Negociado corta cualesquiera árboles y aquellos que no le sirven enteros, los asie-ran y arreglan a sus largos y gruesos en perjuicio y menoscabo de los montes, cuyo principal objeto debe ser el aprovechamiento. Por otra parte la Marina cota los árboles grandes que son preciosos para los arsenales, y como los necesita de iguales y anchos con corta diferencia en el pié y en la punta, y de determinados largos, para darle estos y que en ambos extremos tengan las dimensiones prefijadas, que lo menos son de diez y seis a dieciocho pulgadas en cuadro, y de diez y seis y dieciocho codos de largo, derriban árboles que pueden dar estas dimensiones cortándoles al largo prefijado y que en él den los gruesos dichos, dejan en el monte todo lo que resta de tronco hasta la copa del pino, a lo que dan el nombre de cogolla, de la cual bién pudieran sacarse una pieza de

(1) Expediente sobre los montes de Segura, ya citado en páginas 102 y 103.

las mayores que se necesitan para el consumo público.

"Al derribo de estos árboles grandes caen - otros menores, y no siendo tampoco útiles a la Marina, se quedan perdidos en el monte, donde se pudren como las cogollas, perjudicando la reproducción de los nuevos."

"Para sacar estas piezas es necesario abrir carriles, y como el arbolado es espeso, derriban para hacerlos los árboles que se encuentran en su dirección. Los grandes, que son los menos, se aprovechan; pero los pequeños se quedan perdidos en el monte, donde se pudren. De este modo se han ido aniquilando estos montes, los que ya no producen las maderas tan exquisitas que antes, como son de árboles nuevos con mucha albura o samago, la cual no pudiéndose emplear en la construcción (naval), para dejar piezas, limpias de ella no sólo necesitan pedirse de mayores dimensiones en perjuicio de los montes, sino que se perjudica el Rey en la pérdida de esta madera que costado su conducción por tierra y agua".

"No se crea -sigue el informe del ingeniero- que esta pérdida es de corta consideración: lo menos es de dos pulgadas por cada lado de la pieza o toza, que es decir, cuatro pulgadas en todo el largo; esto es una cuarta parte de madera entera-

mente inútil". (1).

En la conducción de la madera también se producen inconvenientes. Para el transporte por tierra se utiliza el concurso de los carreteros del país, de cuya situación casi servil se hablará luego, y las carretas de la carretería real que son, en el año 1778, según informe de Pichardo, trescientos cincuenta pares de bueyes (2). De ellos dice el mismo Tomás Muñoz: "Para hacer este primer transporte tenía el Rey un apero de bueyes y carretas, que no me atreveré a asegurar sea medio mejor y más económico que el de acerlo por un asiento".(3).

El transporte fluvial es un auténtico caos. Parte de lo indicado al principio de este apartado sobre cierta ignorancia de los encargados en cuanto a época de corta y de transporte, el citado Muñoz dice textualmente:

"Aún cuando se entregase al conductor o director por cuenta el número de palos de que se componía la pinada, como tenía siempre el especioso pretexto del extravío de los palos, el cual era inaveriguable, a la llegada a Sevilla entregaba los que llevaba: el importe de algunos que decía había vendido por muy internados, y a pretexto de extraviados, cubría el resto que faltaba de los que ha-

(1) Expediente citado páginas 4 y siguientes.

(2) Archivo de Simancas. Sección Secretaría de Marina. Legajo 576.

(3) Expediente citado, página 11.

bía recibido, si es que se le hacía cargo: que se gún tengo entendido no había semejante cuenta ni razón, o al menos no la hemos visto en el departamento. De los palos que se daban por extraviados, es muy posible fuesen vendidos, en vista de que todas las orillas del Guadalquivir eran puntos de mercado para la venta de maderas, según me han asegurado".

"Las pinadas se entregaban en Sevilla y la Marina se encargaba de la suya y de su transporte al departamento, de cuyo costo solamente se tenía conocimiento. Se ignoraba el de la corta, labra y conducción, como asimismo el número de los palos de que se componía y los que se habían perdido en la navegación; de consiguiente no se podía averiguar lo que costaba al Rey cada codo de madera de las piezas que llegaban al departamento, que como he dicho era exorbitante. En el año 802 y 803 fue tal la pérdida de palos, que solo un corto número llegaron al arsenal: motivo por el que el comandante general del departamento Don Juan Joaquín Moreno hizo un viaje a Sevilla por el río, al que le acompañé yo, para enterarse de la causa de tanto extravío y piezas dispersas, para las que se tomó providencia de meterlas en el agua, mandando oficiales de mar y marineros que recogiesen las extraviadas desde Sevilla a Sanlúcar".

"Este extravío y pérdida de piezas, después

dé gravar al Rey en tanto grado sus intereses, perjudicaban no menos los montes aumentando las cortas, y era otro motivo de su destrucción". (1).

Este extravío de piezas, robos, fraudes, etcétera que señala Tomás Muñoz, se suma a la duplicidad de costos que la alternativa de corta entre el Real Negociado de Sevilla y la Marina que aparece también en el informe del Archivero de Marina, Sans Barutell:

"Según lo que asegura don Juan Pichardo, que obtuvo largos años aquel ministerio de montes y subdelegación del Negociado, sería útil alterar el sistema establecido para sus respectivas cortas entre la Marina y el Real Negociado de Sevilla, que aún después de la publicación de la ordenanza de montes de 1748 ha conservado siempre la facultad de cortar los pinos que necesite para seguir su comercio, como no sean de los salgareños que exceden de diez varas, o tengan vueltas".

"Cada una de estas comisiones hace su corta el año que le corresponde, prepara su pinada y la remite a Sevilla. En la Marina (como se ha dicho) se emplean en la conducción un comisionado, un oficial de libros, o llámese interventor, un maestro de río, mayores, pastores, carreteros, aperadores, pineros, carretas, ganados, tiendas, pertrechos, co-

(1) Expediente citado páginas 14 y 15.

mestibles, etc.: pues todo esto se necesita igualmente para la comisión del Negociado, según afirma Pichardo, duplicándose por consecuencia los gastos de ambas comisiones, sin otra causa que la de dirigirse por dos distintas manos, no obstante de ser todo caudal del Estado".

"Dice también que como la Marina debe cortar muchos pinos para maderas menores, que sirven para preparar y acanalar el río, y son a corta diferencia de los mismos marcos que usa el Negociado, se evitaría esta duplicidad de cortas y gastos dirigiéndose por una sola persona ambas comisiones; haciéndose todos los años la corta para una y otra; disponiéndose la transportación de las piezas de Marina con el auxilio de las destinadas al Negociado dejando algunas de estas en la factoría de Córdoba y en alguna otra que se necesitasen para el consumo de los pueblos, conduciéndose el resto al almacén de Sevilla; y que el surtimiento de los demás, desde Andújar y sus cercanías hacia Segura, podría hacerse por las carreterías del país con los viajes de maderas que se les permite extraer francamente".

"Todo esto lo representó Pichardo en carta de 4 de enero de 1777; y no habiendo tenido solución, volvió a instar por medio de su apoderado don Antonio Félix Román en 4 de febrero de 1784. Oído el asesor general de Marina don Julián de San Cristó-

bal, halló el Rey por conveniente cortasen promiscuamente Negociado y Marina, valiéndose de unos mismos dependientes para el mayor ahorro, y evitar el desperdicio de piezas menores".

"Comunicó esta real determinación el señor secretario del despacho de Marina don Antonio Valdés al de Hacienda el señor conde de Gáusa en 4 de junio del propio año de 1784, diciéndole al mismo tiempo quería el Rey viese él y le notificase el mejor modo de practicarlo con presencia de lo que manifiesta Pichardo. Teniendo el señor conde antecedentes que calificaban la grande utilidad que resultaba de la alternativa establecida entre el Negociado de Marina, y de los gravísimos fundamentos que hubo para determinarla, habiendo precedido un reconocimiento exacto de los montes, declaraciones de muchos prácticos, y otros informes creyó oportuno oír a don Francisco de Bruna. Este manifestó en su informe al señor conde que Pichardo se contradecía abiertamente en la propuesta de unión de pinadas a lo que en calidad de subdelegado del Negociado le representó varias veces: que pudo y debía remediar los abusos de cortarse los árboles a una vara de alto en lugar de ser a raíz de la tierra, pues que estaba con los hacheros: que las mismas piezas se cortaban con la alternativa para labrar el río, fustas de carreterías y demás en las pinadas de Marina y Negociado que si fuesen unidas; y que si para ello no se aprovechaba el monte, fal-

taba a su obligación: que las piezas chicas podían venderse en la navegación acabados los sitios peligrosos dejándolas en las factorías de tránsito, y por último en el almacén de Sevilla, donde se les daría salida: que era imaginaria la duplicación de dependientes que expresaba, pues aunque había para cada comisión un comisario de pinadas, el que quedaba de hueco le servía a él de oficial de subdelegación en su respectivo ramo: que el maestro del río estaba asalariado todo el año por punto de economía conocido, proyectado y contestado por Pichardo con el fin de que adelantase la navegación, porque cuando tenía salario temporal procuraba dilatarla para gozar más tiempo esta utilidad; y que este mismo maestro de río en el año de hueco cuidaba del monte: que los aperadores y pineros que servían en la Marina lo ejecutaban en el Negociado en su año; y que si bien el hato de cabras era diverso no por eso se duplicaba el gasto, porque las mismas deberían consumirse estando unidas las pinadas: por último, que las utilidades que aparentaba de surtir con las carreterías del país todos los pueblos desde Orcera hasta Andújar y sus cercanías, eran inverificables, y un pensamiento perjudicial; pues persuade la sola razón natural que el surtimiento de maderas por agua debe ser más útil y barato que en carreterías".

"Decía además Bruna que desde el establecimiento del Negociado hasta el año de 1763 no había per-

cibido la real hacienda de su producto ni un real de plata; pero que con el plan de economía establecido en 1764, en que se dispuso la alternativa, habían entrado en la tesorería 3.423.444 reales, y que había existente un fondo de 100.000 reales para fomento de los montes; lo que acreditaba el buen manejo y progresos del Negociado" (1).

Sin embargo, la propuesta de Pichardo debía tener otros motivos que el de ahorrar gastos "al Real Servicio", según aparece de lo que dice Tomás Muñoz en otra parte de su informe:

"Clamé siempre sobre que fuese un ingeniero destinado a estas cortas y dirigiese la conducción: conseguí a propuesta mía fuese nombrado don Rafael Clavijo; pero un escribano de Segura llamado Román hizo una propuesta a la Corte, la cual destruyó todo mi proyecto: vino la contraorden del destino de Clavijo, y este escribano enredó la cosa en términos, que a no haber representado yo a la Junta los perjuicios que iba a sufrir el Rey, y la destrucción total de dichos montes con la aprobación que había dado a la propuesta de Román, seguramente a la hora de ésta no habrá ni un árbol". (2)

Si se recuerda que Román era el escribano de Pichardo, su "genio malo", según la representación de San

(1) Expediente citado páginas 73, 74 y 75.

(2) Idem pág. 7 y 8.

tiago de la Espada, y su apoderado en algunos negocios puede deducirse que no convenía a ninguno de los dos que se llevara un control estricto de la explotación maderera. Puede que la desconfianza de Bruna, Juez del Real Negociado al tiempo que Pichardo era Ministro, fuera una de las causas del rechazo de una propuesta aparentemente tan racional; aparte, claro, del prurito "foral" de defensa de su propia jurisdicción.

El resultado de todo este aparato era, según se deduce del expediente examinado, que las maderas llegaban mal, que se perdían, se robaban y se vendían en el trayecto, los montes se destruían y la madera se desperdiciaba ya en la corta. Al final, después de arrasar los montes, sucedía que, como dice el almirante Fernán-
des de Navarrete:

"Imposible era que de tan viciosa y complicada administración se pudiesen lograr maderas buenas y baratas. No buenas, porque ningún interés había en perfeccionar su cultivo, ni en practicar con esmero y oportunidad aquellas operaciones facultativas que tanto contribuyen a mejorar la calidad, y dar mayor valor a esta clase de producciones vegetales. No baratas, porque una administración mercenaria, el pago de empleados, de guardas y conductores, y otros gastos que son harto notorios absorben caudales inmensos, que tal vez no pueden calcularse; y que ciertamente serían menores y bien conocidos si los montes fueran de

propiedad particular, y su dueño el que dirigiese las cortas y la administración de los productos"(1).

Efectivamente, sus dueños eran los pueblos que fueron expropiados lisa y llanamente, para alimentar funcionarios mayores y menores, que vivían sobre el terreno (sobre todo los últimos) y complicó inútilmente su función (como aparece de la visita del subdelegado de Iznatoraf en la que se acusa al asesor de Alcaraz de evacuar dictámenes innecesarios) (2) no sirvió para mejorar los bosques, sí para acelerar su ruina, articulando para esa función un perfecto mecanismo de codicias, ni cumplió el fin que se le habían encomendado de surtir de madera a los arsenales en cantidad y calidad suficiente. Y en cuanto al precio, el mismo almirante dice:

"Un ejemplo nos hará evidente esta verdad. Los ingenieros de Marina don Tomás Muñoz y don Honorato Buyón, que han residido mucho tiempo de comandantes de su ramo en el arsenal de La Carraca, aseguran que jamás se llegó a saber en el Departamento las maderas que se cortaron en los montes de Segura, ni los costos de corta y su conducción, para deducir el que le tenían al Rey las que se recibían en dicho arsenal; pero que ciertamente no ha bajado de 200 a 300 reales el codo: precio exorbitante

(1) Expediente citado pág. 97.

(2) Papeles del Auditor Olivares. Vista a los montes de Alcaraz.

y escandaloso (dicé Muñoz en su informe) que hacía ascender el costo de las obras a mucho más de lo que se presuponían. (1).

Independientemente, pues, de los graves efectos que la jurisdicción especial llevó consigo en cuanto a la paz social, la Justicia, la libertad y el derecho de una parte del pueblo español, ni siquiera consiguió el fin propuesto de surtir de madera a los astilleros y la que llegó, después de la que se perdía en los lugares de corta, en el transporte por tierra y río, lo hacía en deficientes condiciones y su costo "jamás se llegó a saber en el Departamento". El resultado de esta pequeña tiranía -por su localización- fué totalmente negativo en el aspecto material.

Así como se dice que el crimen no paga, podría decirse que la injusticia no es fructífera. El almirante Fernández de Navarrete dice a este respecto:

"Pasma a la verdad y causa cierta especie de lástima, el ver que tanta vigilancia y celo de parte del gobierno, tanta fatiga y afán de comisionados muy beneméritos, tantos reconocimientos y visitas facultativas, tan repetidos y estudiados informes, tan meditadas y menudas providencias y preceptos, tanta severidad con los infractores de las leyes, y tan considerables dispendios, no solamente hayan frustrado el objeto a que se encaminaban, sino

(1) Expediente citado. pág. 106.

que hayan acelerado la decadencia y próxima ruina de los mismos montes". (1)

Y es que de una situación radicalmente injusta instaurada por la Ordenanza de 1748, que fue una auténtica expropiación sin indemnización, no podía seguirse ningún efecto beneficioso para nadie.

El fracaso del organismo "mal llamado conservador" se corona con la explosión final que provoca la supresión en 1812. Según dice Juan de la Cruz Martínez "los pueblos respiraron con la destrucción del Ministerio, y creyendo que los arbolados eran la causa de su desventura (y lo fue la codicia administrativa que despertaron) hicieron asombrosos destrozos en los bosques, talaron, quemaron y allanaron los amojonamientos del arbitrio de Guadarmena..." (2).

Para este penoso final se habían mantenido un organismo cuya composición era la siguiente, según el mismo autor: un Ministro, con once mil reales de sueldo; un auditor, con cuatro mil seiscientos; un fiscal, con dos mil doscientos; un delineador, con ocho mil ochocientos; un guarda mayor, con dos mil doscientos; un alguacil portero, con dos mil doscientos.

Las subdelegaciones de Alcaraz y Cazorla tenían un jefe subdelegado, un asesor, un práctico guarda mayor y diez o doce guardas menores. Se establecieron

(1) Expediente citado. pág. 80 y 81.

(2) Memoria histórica citada. págs. 92 y 93.

también subdelegaciones en Iznatoraf, Santiesteban del Puerto y Yeste. Hay que añadir los escribanos (principal y auxiliar) y "otros muchos empleados", según dice Martínez. Aparte de ellos, actuando sobre el mismo ámbito y entendiendo en la misma materia, el aparato del Real Negociado de Sevilla que contaba también con sus propios servidores, en Sevilla y en Segura.

En esta época, un maestro de escuela ganaba, según las cuentas del Ayuntamiento de Benatae, sesenta reales.

Si el expuesto era el panorama de la actuación de la Marina en los montes de Segura, la gestión del otro organismo que compartía con ella la explotación de dichos montes no era menos lastimosa. Fundado el Real Negociado de los montes de Segura en Sevilla por el simple motivo de lucro que sugirió la abundancia de maderas en la conducción para el edificio de la Fábrica de tabacos, una clara intención de expolio guió siempre la actuación de tal organismo. "Es un hecho incontestable -dice don Joaquín Lacroix, Fiscal militar del almirantazgo- que el objeto del Negociado es el de sacar la mayor utilidad posible; y para ello nunca ha economizado, ni se podrá esperar que economice los arbolados por más que se prometa y diga lo contrario."(1)

El citado fiscal, en su argumentación para de-

(1) Dictámen del Fiscal militar del Almirantazgo. Museo Naval. Ms. 443-Hoja 415.

fender a la Marina de la unión de las jurisdicciones propuesta por el Real Negociado a su favor, señala toda la desastrosa administración de este afirmando además:

"¿Pues qué pudiera decirse, si reuniendo datos y tiempo, el Fiscal demostrase que la utilidad que rinde el Negociado no ha tenido nunca proporción con el daño que ha causado en los montes, y que la conservación de estos está en total contradicción con que se surten de madera todos los pueblos de Andalucía y aún más allá al tránsito de sus pinadas" (1).

Porque el Real Negociado era un aparato dispuesto con el fin confesado y único de hacer negocio para la Hacienda a costa de los derechos de determinadas comunidades. La Marina, en el plano teórico, pretendía cumplir un fin nacional, un interés público cuyas específicas características podían justificar cierta suerte de expropiación total o parcial aunque nunca fundamentar el establecimiento de un aparato represivo cuyas consecuencias aún están vivas, o muertas, en las montañas españolas y en el fondo de los corazones del campesino y el pastor.

El Negociado, repitámoslo, era una simple manera de que la Hacienda ganara dinero, a costa de cual-

(1) Dictámen del Fiscal militar del Almirantazgo. Museo Naval. Ms. 443-Hoja 415.

quier cosa. Tampoco era cuestión de que en Sevilla o Madrid se preocuparan por unos lejanos montañeses que disfrutaban, sin valorarlo demasiado, de una riqueza y una libertad de siglos atrás. Pero lo penoso es que ni siquiera el Negociado llenó los fines para que había sido creado. Fue una odiosa empresa que supuso un alto costo para la Administración y, a cambio de ganarse el odio de unos ciudadanos, sólo le aportó unas crecidas pérdidas:

"El documento nº 2 es un estado general de las maderas cortadas y vendidas desde 1800 hasta 1811, correspondiendo a las cinco últimas pinadas del Negociado. Para formar una exacta idea de todo lo que presenta en él, falta un dato qual es el número de pinos cortados para cada una de ellas y sus dimensiones...

El Fiscal militar que no tiene tiempo suficiente para entrar en todos estos por-menores... no omitirá sin embargo una reflexión que se presenta a primera vista, y es, que la venta de las maderas producidas por las cinco pinadas, ha empleado todo el tiempo de los 11 años transcurridos desde 1800 a 1811; y que para obtener en este tiempo (supuesta la buena fe y exactitud de los cálculos) una utilidad líquida de 4.147.853 reales... que corresponde a menos de 400.000 por cada un año, se han ocasionado los gastos de 7.058.055 reales, según el número 3 del mismo estado, o más de 700.000

en cada año; de que resulta un déficit que pasa de 300.000 reales en cada uno, sin comprender el de las deudas, ni el valor de las maderas quemadas o empleadas por los enemigos, etc. todo lo qual entra como efectivo en la distribución nº 4 del mismo estado. Consiguientemente este déficit hubiera resultado siempre aunque no hubiera habido semejantes pérdidas; que se hubieran vendido todas las maderas y cobrando todas las deudas en el discurso de los once años" (1).

La referencia a las perturbaciones que la guerra de Independencia causó revela que la invasión francesa (Segura, por ejemplo, fue incendiada por hacer resistencia) debió ser utilizada para cubrir y justificar pérdidas o irregularidades. El mismo Fiscal aplica el arbitrio a la Marina, cuando habla de la deuda que el Negociado afirma tener a ella, aduciendo determinadas entregas al ejército de Andalucía.

¿Cómo puede producirse este desastroso resultado económico?. Precisamente en una empresa dirigida a proporcionar ingresos a la Hacienda, no sólo faltan las ganancias pretendidas, sino que se producen abultadas pérdidas. Y no hay razón para suponer que esas pérdidas confesadas por el estado de cuentas de la propia entidad fueran sólo en esos años. Las causas aparecen

(1) Dictamen del Fiscal militar. Museo Naval. ms 443-
hoja 418.

en el curso de la oposición del Fiscal a la pretendida unión:

1ª) La falta de control de la explotación en origen. Como se dice en el expediente de 1825, el Fiscal repite aquí que el negociado corta árboles sin medida y luego carece de medios para llevarlos a su destino en buenas condiciones:

"... sin previsión se haya derribado un número quantioso de árboles que se perderán en la mayor parte (con todo el numerario expendido en su derribo, labra y gastos consiguientes) por haber faltado a aquella empresa los auxilios pecuniarios suficientes para el arrastre, conducción a los aguaderos y navegación por el río... porque los comisionados de maderas (hablando en general) se han parecido siempre a aquellos hombres glotonnes que al tiempo de enchar el plato, todo les parece poco, y más quieren exponer su salud a los efectos de un artazgo (o que se pierda la mayor parte de lo que han servido) que observar aquella moderada sobriedad que dicta, como más conveniente la parquedad que el exceso" (1).

Esta "glotonería" de que habla el brigadier don Joaquín de Lacroix tiene también una vertiente clara de lucro personal según hace ver el acuerdo del ayunta

(1) Dictámen del Fiscal del Almirantazgo. Museo Naval. Ms. 443. Hoja 413 vuelta.

miento de Villaverde que se incluye en una carta del Marqués de Castañar a don Julián de Arriaga, secretario del despacho universal de Marina:

"... no hay árboles útiles por habérselos llevado y cargado con todo la Marina y el Real Negociado... comprobándose de los mismos autos que no sólo fueron hechos los citados cortes para los fines destos Reales encargos si además, en diversas ocasiones, para los propios y particulares de los mismos ministros y encargados..." (1).

Ministros de Marina y subdelegados del Real Negociado sostenían un aparato impresionante de carretas y bueyes, hacían anticipos, contrataban suministros para la conducción, comprando cabras, vino, aceite y pan, etc. y, de paso, cortaban para su propio beneficio.

2ª) Falta de control en la conducción. Ya se ha señalado al comienzo de este apartado lo que dice el ingeniero Tomás Muñoz sobre las conducciones de Marina. Ahora el Fiscal cuenta lo que sucede con las que realiza el Negociado:

"Tal es la naturaleza de este Negociado, que fuera posible hallar contratistas que se obligaran a dar de valde a la Marina los 30.000 codos cúbicos que según el proyecto, podría pedir anualmente; con tal que se les concediera libertad para

(1) Simancas. Sección "Secretaría de Marina y Guerra". Legajo 576. año 1774.

poder surtir de maderas a Sevilla y a los pueblos de las Andalucías que en su tránsito proveen las pinadas de aquél. En concepto del Fiscal, en pocos años, se haría poderoso, tal asentista, cuyas ganancias excederían en mucho a las que figuran en el estado número 2. ¡Mas qual sería aquél (estado) en que dejaran aquellos preciosos montes!(1).

3ª) Excesivo número de empleados y altos sueldos. Lacroix así lo indica, como al paso, cuando expone la desastrosa gestión económica del Negociado:

"Bastando este pequeño cálculo (el de la diferencia entre gastos e ingresos, expuesto arriba) para deducir que las ventajas de esta empresa nunca han sido ni serán tantas como han aparentado los muchos empleados en ella..." (2).

En cuanto a los sueldos, el mismo fiscal hace referencia a ellos sarcásticamente:

"... El tercer documento es otro estado en el que manifestando los sueldos que en la actualidad disfrutaban los empleados del Real Negociado, se propone al mismo tiempo el aumento que deben tener...El Fiscal, al ver que la Contaduría asegura que para hacer estos aumentos ha tenido presente las escaseces de fondos en que se halla la Real Hacienda, sólo se contentará con decir lo que se

(1) Dictámen del Fiscal del Almirantazgo. Museo Naval. Ms. 443. hoja 421.

(2) Idem.

refiere del señor don Carlos III, de gloriosa memoria, y es; que quando al final de un proyecto, que le leían sus ministros, hallaba que de qualquiera modo se mezclaban las utilidades del proponente con las ventajas supuestas que deberían resultar a la Real Hacienda, decía inmediatamente: este es el proyecto; y lo despreciaba" (1).

Esas son las causas, ya sugeridas antes, que, en base a la exposición del Fiscal, concurren a hacer del Real Negociado una empresa ruinosa. Pero casi iguales circunstancias concurren en la gestión de la Marina y el Fiscal, en su acaloramiento, las va desvelando.

Rechaza, por ejemplo, los elevados costes de la madera puesta en arsenales. El precio de 300 y más reales en que se ha calculado no le parece admisible" a pesar de toda la autoridad y peso que los empleados pudieran dar a la de sus autores". Debe recordarse que los autores de este informe, citado al principio de este apartado, eran los ingenieros de Marina Tomás Muñoz y Honorato Bouyón, este último autor también de un informe sobre los montes de la Isla de Cuba. La salida del Fiscal para sustentar su opinión es pintoresca:

"... a menos que hayan querido comprender, como elementos precisos de sus cálculos, una infi

(1) Dictámen del Fiscal del Almirantazgo. Museo Naval Ms. 443- Hoja 419 vuelta, 420.

nidad de abusos, que si tan exorbitantemente existieron, debieron sin duda, y deberán en todo tiempo, corregirse". (1)

La "glotonería" de que hablaba antes también es vicio de la administración de Marina, a la cual también se le quedan maderas sin aprovechar, como ya se indicó y confirma ahora este dictamen, por falta de numerario para completar el ciclo:

"Si esto sucede al Rey del Negociado (quedar árboles cortados sin aprovechar) ¿Qué habrá de extrañar que al Rey de la Marina, que no corta para negociar, sino para su servicio, y a - quién tanto se han escaseado, hasta de ahora, los presupuestos ofrecidos y no cumplidos, haya experimentado alguna vez, antes de ahora, las consecuencias de esa falta de previsión?" (2).

"... Todos los defectos que se suponen en la administración de los cortes efectuados por la Marina, de los cuales tal vez pudiera demostrarse, que aquel que ve la paja en el ojo ajeno, que no distingue la viga en el suyo, aún quando hayan existido (que no lo duda el Fiscal, porque ha tenido ocasión de observarlos por sí mismo) han dependido de hombres que por ignorancia, ma-

(1) Dictamen del Fiscal del Almirantazgo. Museo Naval Ms. 443. Hoja 420 vuelta y 421.

(2) Idem. Hoja 423 y vuelta.

licia, error de concepto, han dado ocasión a ellos; y hombres son los que han manejado, manejan y manejarán el Negociado..." (1).

Toda la argumentación radica en una defensa propia con el argumento de "más erés tú" o "igual has hecho tú", que efectivamente, revela una situación parecida en ambos organismos rivales.

El Negociado, en su argumentación, ha ofrecido poner sujetos con celo e inteligencia para dirigir adecuadamente las cortas. El Fiscal, en la misma línea de argumentación, afirma que también la Marina puede hacerlo:

"... pero si en la dirección de este (el Negociado) debe esperarse inteligencia y celo para evitar los mismos inconvenientes en adelante, dirigiendo su empresa con toda la economía de que es capaz, tampoco hay razón para creer imposible el que la Marina pueda hallar sujetos adornados de las mismas circunstancias para dirigir sus cortas..." (2).

Todo esto se plantea, se discute, cuando el Real Negociado lleva ochenta y cuatro años de expolio y la Marina sesenta y nueve. De ahora en adelante, di

(1) Dictamen del Fiscal del Almirantazgo. Museo Naval. Ms. 443. Hoja 414.

(2) Idem. Hoja 414 y vuelta.

cen los dos, "van a ser buenos" porque, según afirma el mismo Fiscal, y probablemente le hubiera gustado decir al Superintendente del Real Negociado:

"Los abusos nada prueban en contra (de que la Marina se ocupe en exclusiva de todo lo referente a la especulación con los montes de Segura) pero sí la necesidad de cortarlos de raíz"(1).

Peregrino razonamiento que descuida, al menos, un aspecto entre muchos: ¿Quién es el responsable, los responsables de esos abusos?. Falta cualquier referencia a esa investigación de responsabilidades que debe preceder a los propósitos de enmienda y es consecuencia del reconocimiento de faltas.

Como se ha dicho es una disputa entre predadores ante cuyos rugidos la ordenanza 61 ("Que los arteseros aprovechen todo el pino que cortaren") suena como un lejano eco, ingenuo y patético, de los antiguos dueños de la presa, reducidos ahora a espectadores y víctimas pasivas de esta dura pelea en la que no hay acuerdo ni en la forma de medir -la Marina por codos cúbicos y el Negociado por cargos- el despojo. En lo que sí hay acuerdo es en continuar realizándolo, junta o separadamente.

El nulo resultado práctico de estas empresas montadas por la Administración puede resumirse en palabras del Ministro (secretario) de Marina, Vázquez

(1) Dictamen del Fiscal del Almirantazgo. Museo Naval. Ms. 443. Hoja 423.

de Figueroa ante las Cortes de Cádiz el 5 de octubre de 1811:

"El fin de la Marina no fue otro que el de aprovecharse de las maderas criadas en los montes de la corona para emplearlas en construir navíos de guerra, persuadiéndose que así las maderas serían mucho más baratas que si las comprasen; !pero quanto engaño se ha padecido!. Ha sido tanto, que no habiendo en España toda la madera que a veces se ha querido, o que habiéndola se tenía por empresa de suma dificultad su arrastre por falta de carriles, ha sido preciso traerla del extranjero, pagándola a precios tanto más altos, quanto mayor era nuestra escasez, y era la distancia del punto de donde se conducían aún las mismas que se extraen de los montes de la península, si se sacase cuenta de su valor, introduciendo el costo de guardas y demás empleados, el de los carretones, el de los arrastres y conducciones por mar, y finalmente la diferencia de calidad, dimanada de no estar cuidado el arbolado, o de no hacer los cortes en el tiempo debido, o de hacer el derribo de qualquiera manera, o de tener abandonados a la intemperie los árboles caídos, o del mal trato que en los arrastres reciben, se vería quan a menos precio se conseguirían en los arsenales las maderas compradas a un propietario libre, y

quanto iría baxando ese precio a proporción que creciesen los arbolados" (1).

La desastrosa administración de la que se han dado muestras en este capítulo quizá aparezca explicada por un informe del Fiscal militar del Almirantazgo, el ya citado Lacroix que afirma:

"... y escribirá con tanto mayor interés sobre la materia de arbolados, quanto se halla íntimamente convencido de que no hay otra materia que sea tan absolutamente ignorada en España, particularmente por los empleados superiores, - por los Tribunales y por todos quantos intervienen en la administración y dirección de este ramo." (2).

Ambas opiniones se emiten casi al final de la gestión examinada (1811, el informe del Ministro de Marina; 1817, el del Fiscal militar del Almirantazgo).

Y después de que una instrucción de 23 de abril de 1800, comunicada por vía reservada de Marina para administración de los caudales de montes a los distintos Departamentos comience con el siguiente preámbulo:

-
- (1) José Vazquez de Figueroa. Memoria sobre la Ordenanza de matrículas y reglamentos de montes, leída el 5 de octubre de 1811 ante las Cortes. Museo Naval. 1050/14.
 - (2) Informe sobre montes del Fiscal militar del Almirantazgo, brigadier don Joaquín Lacroix. Museo Naval. Ms. 443. Hoja 386 vuelta.

"La inobservancia de tan repetidos preceptos soberanos sobre un objeto que además de su grande interés hacia el Estado, debe influir en beneficio de los mismos pueblos, las frecuentes quiebras de Depositarios, la arbitrariedad y ningún principio de buena cuenta que resaltan en tantos recursos y expedientes que estoy examinando (S.M.), y la lastimosa insolvencia que aparece en los descubiertos sobre que versan... me dictan formar desde luego unas reglas..."(1).

Y la que se dirige al cumplimiento "más exacto y puntual" del Real Decreto de 2 de mayo de 1802 incluya el siguiente preámbulo:

"La decadencia en que se encuentran los Montes del Reyno, particularmente los que están destinados a la Marina, resulta de varios principios, todos por omisión, o comisión de los Subdelegados, Fiscales, y Zeladores de ellos..."

"No es de menor consideración el fraude que se executa en las licencias que se solicitan de esta Capitanía General, sin embargo de venir autorizadas con diligencias judiciales, y las declaraciones de los peritos; porque unos por otros

(1) Instrucción conforme a Ordenanza y repetidas Reales Ordenes. Museo Naval signatura 10.585. Documento 4, págs. 47-53.

piden con exceso, para sacar de los mismos árboles el costo total de la obra en que se han de invertir; y aún se repite este daño con las guías para sus conducciones o extracción, que no poniéndoles el cumplimiento se vuelven con las mismas a reiterar fraudulentamente la saca de madera, y en lugar de cien cargos, por exemplo, para que se concedió licencia, se extraen trescientos" (1)

"Para evitar pues estos y otros escandalosos procedimientos..." sigue la Instrucción examinada, pero ya vemos por el testimonio del mismo Fiscal del Almirantazgo que las cosas seguían igual en 1817.

Ante esta realidad contrastada desde todos los puntos, las lamentaciones de los propios miembros de los organismos, corporaciones, cuerpos o entidades culpables cobra un tinte jeremiaco e hipócrita que produce repulsa e indignación. El mismo Fiscal que revela todas las lacras de las Administraciones especiales se da, en un informe del mismo mes que el anterior, a líricas manifestaciones sobre el "benéfico influjo" de los árboles por el terreno...

"... privado del benéfico influjo de los arbolados, de los pastos y de los abrigos que ellos

(1) Instrucción relativa a montes dada a los subdelegados del Departamento de Cartagena. Museo Naval Signatura 10587. Documento 25, pág. 129.

proporcionan, han hecho decaer más y más nuestra agricultura, desaparecer las fuentes, disminuir su caudal los ríos, hacer más caluroso y menos sano el clima, alejar y encarecer los combustibles, aumentar el precio de los productos... disminuir la población..." (1).

Igual efecto produce cuando se rasga las vestiduras por el "exterminador decreto de las llamadas Cortes Generales" o concreta:

"En tierras de Don Diego de los Ríos, a dos leguas de Orcera se derribaron desde el año pasado, hasta de ahora, 116 o 17 pinos y se continúa este destrozo en virtud de la libertad que creen tener los dueños para verificarlo así, con lo que nace en el terreno de su propiedad (acreditada o no acreditada) (2).

Y pide para prevenir esos daños, que:

"En quanto a ese primer arbitrio si S.M. lo aprobase, fuera necesario una Real Orden, mandando al Ministro de Segura que entregase a Pichardo los pinos cortados, y los que se cortaren en adelante, por los supuestos dueños (o verdaderos taladores) (3).

(1) Informe del Fiscal del Almirantazgo. Museo Naval. Ms. 443. Hoja 384.

(2) Idem. hoja 408.

(3) Idem. hoja 408.

Los 116 ó 17 pinos que corta don Diego de los Ríos despiertan la indignación del Fiscal, pero son una ridiculez con los 5.800 cortados en Villaverde por el Real Negociado cuyo pago pide el ayuntamiento en acuerdo de 1 de agosto de 1773 y consigue años después sólo por 4.800 a razón de 3 reales cada uno. Los pinos los cortó Pichardo el cual no da, según el apoderado del ayuntamiento en la corte, Manuel Ruiz, razón de su destino (1). Si se tiene en cuenta el tamaño de los pinos, la diferencia en mil del número pedido por el ayuntamiento al concedido por el Consejo de Castilla, los años transcurridos y la falta de justificación del destino de los pinos, queda claro que Pichardo no es, precisamente, la persona indicada -como solicita el Fiscal- para que se le entregue ningún genero de cosas.

La calidad de la gestión de Pichardo queda complementada con la afirmación de Picarzo de Almazán, en una representación al Rey de la que haremos más prolija referencia, sobre la connivencia entre Pichardo y Diego de los Ríos en diferentes asuntos poco claros de negociación de maderas y, sobre todo, de un intento de adueñarse de pinares pertenecientes a la villa, en contra de los derechos seculares de ésta. En esa "sociedad" interviene también, según las afirmaciones de Picarzo, el escribano de Marina, Antonio

(1) Archivo de Simancas. Sección Secretaría de Marina. Legajo 576. Año 1773 y 1776.

Félix Román.

Es característica del despotismo esa "fiereza" para hacer cumplir sus fines, encarnada en el rigor con el súbdito, sincronizada con la ignorancia, real o fingida, de las faltas propias y el desinterés por la autocrítica y la depuración de su comportamiento. La vía "mística" hacia esa posición es a través de la asunción de parcelas, grandes, pequeñas o mínimas, de soberanía de las que pasan a ser usufructuarios. Se convierten entonces de administradores y servidores en titulares revestidos de atributos que no les pertenecen: "maiestas", principio de autoridad, autarquía, autonomía, etcétera.

No estaban descaminados los vizcaínos cuando formaron sus propias ordenanzas en 1752 y lograron que la superintendencia local de Montes fuera suprimida "para servicio del rey y alivio de los naturales en gastos infructuosos". (1)

El alivio no era chico, ni los gastos baldíos.

(1) Rafael Gibert. "ANTIGUO REGIMEN ESPAÑOL DE MONTES Y CAZA".

XV .- EFECTOS JURIDICOS Y POLITICOS

En cualquier cuerpo civil, cual es la Ciudad u otra congregación política, son necesarios cabeza y miembros, y ligaduras con los cuales cada miembro esté trabado, y como los nervios dan fuerza al cuerpo así la dan y lo son a la República dineros y rentas, sin lo cual, según Cicerón, no pueden tener consistencia. Así los dichos bienes de los pueblos no son de los Emperadores ni de los Reyes, ni ellos pueden apropiárselos así.

Política de Corregidores y señores de Vasallo. (Medina del Campo 1508).

Castillo de Bobadilla.

La Ordenanza de Montes de Marina de 1748 y disposiciones concordantes desplazan, de hecho, del terreno de lo vigente a las Ordenanzas del Común de junio de 1580. Quedan sin efecto real los capítulos relativos al comercio de la madera, caballeros de sierra y todo lo referente al sector forestal, parte principal de su contenido. Pero el preámbulo de la Ordenanza de Marina, dada por Fernando VI, es taxativo:

"...he resuelto expedir la ordenanza siguiente, que se observará inviolablemente en las provincias y distritos que en esta cédula se expresan, sin embargo de los privilegios, derechos o costumbres que puedan autorizar la práctica en contrario".

Si a ese grave síncope en la economía forestal, se añaden las serias perturbaciones señaladas en la ganadera, los conflictos sociales y de jurisdicción, la suerte de Segura y su tierra, una comunidad de villa y tierra al estilo de las castellanas, erigida a raíz de la reconquista de estas sierras, está sentenciada. Sin sostén económico, la Mancomunidad empieza a languidecer y arrastra una larga agonía hasta más de mediado el siglo XIX, prueba de su profundo arraigo y plena vigencia.

Una Administración, intérprete de una nueva filosofía del Estado, socavará los fundamentos económicos, políticos y jurídicos de esta entidad comarcal hasta terminar con ella - para segregar una comunidad envilecida, cuyo único "común" - es la sumisión al despojo.

La quiebra inicial es consecuencia del establecimiento de la primera jurisdicción especial, la del Real Negociado de Montes de Segura en Sevilla, que logra la exclusiva de la madera en la sierra.

Es el principio: Atraído también por esa riqueza que - asombró a los del Negociado, el arrendador de la Encomienda trata de cobrar diezmos sobre la madera extraída en la Sierra. El Concejo de Orcera se opone aduciendo que

"de ziento, doszientos y mas años a esta parte, -- que memoria de hombres no es contraria, a estado este lugar y sus vezinos en la costumbre y posesión inmemorial, inconcusamente observada y guardada, como se notizia que a estado dicha villa (de Segura) y demás de su Partido, de no pagar Diezmo a la Encomienda de ella de la madera de todos jeneros que se corta en el término común y sa-- can los vezinos deel para el Andaluzia y Mancha, ni de - la que se fabrica en las sierras de agua como ni tampoco de la pez que se aze de los pinos..." (1).

Otorga poder a don Rodrigo de Angulo, agente de nego- cios en Madrid, para que defienda su derecho. Este hecho re- fuerza la imagen de la concurrencia de animales de presa so- bre la riqueza que, en ese momento, ha cobrado valor.

Para el común, la exclusiva del Real Negociado primero y la práctica expropiación por la Marina después, de la madera, debió de producir unos efectos mortales, como acabamos - de apuntar y confirman dos datos reveladores. En las "Rela-- ciones Topográficas", entre los ingresos de la villa de Segura se cita la madera: "y otro derecho hay de los pinos que - vende que si acerta a vender cantidad, le vale al Concejo ca- da año cien mil maravedíes, y otros años más, según la canti- dad que se vende..." (2). Es el año 1575.

(1) Archivo Notarial de Orcera. Protocolo. Poder de Gabriel Antonio Fernández Zorrilla, regidor perpetuo de Segura y alcalde ordinario de Orcera y concejo, regidor y Justicia a Rodrigo de Angulo, fecha 12 de enero de 1738.

(2) Relaciones Topográficas. fol, 470

En 1764, Francisco de Bruna, Juez del Real Negociado, afirma: "La referida villa de Segura... las ventas de los - Arboles, por conputo prudente le rendía solo quinientos reales anuales..." (1).

Calculando el real a treinta y dos maravedíes, la diferencia entre lo que quinientos reales de Bruna y los tres -- mil ciento veinticienco de las "Relaciones..." es notable. -- Añádase doscientos años de devaluación de la moneda y la probable exageración a la baja de las "Relaciones...", señalada por Salomón como una constante fundada en la prevención del fisco y la que cabe suponer en Bruna, y se calibrará la situación ruinosa a que había llegado la hacienda forestal del Concejo. Debe, además, considerarse que el establecimiento -- de los regímenes especiales lesionó forzosamente los derechos comunales de aprovechamiento tallar correspondientes a los vecinos, con lo que el daño fué doble afectando a la entidad y a sus miembros.

Se ha visto en apartado las perturbaciones que la jurisdicción especial, con su excesiva rigidez, produjo en la ganadería, la emigración de ganaderos --singularmente de vacuno-- a tierras fuera de esa jurisdicción. El perjuicio debió ser notable, puesto que según las mismas "Relaciones..." el Concejo de Segura ingresaba por los ganados de fuera que venían "a herbajar" doscientos mil maravedíes, más o menos.(2) Aunque, como afirma Bruna, (3)en el año citado, los pastos -- son el principal aprovechamiento de Segura, no se expresa si

(1) Archivo de Simancas, Sección Secretaría de Marina. Legajo 576. Año 1789.

(2) Relaciones Topográficas. Fol. 470.

(3) Archivo de Simancas. Sección Secretaría de Marina. Legajo 576. Año 1789.

es por los rebaños forasteros o los propios, de cualquier modo, las dificultades de afectar a unos y otros.

La diferencia que hay, a mi juicio, entre uno y otro ingreso es que el derivado de la madera era más importante económicamente para los vecinos y, quizá, el de los pastos de mayor valor para la villa.

En cualquier caso, es evidente que el casi cegamiento de las dos fuentes de recursos económicos de la comunidad, desvió la actividad de sus miembros hacia una agricultura marginal con la cual se buscaba obviamente recursos de subsistencia más también ámbitos sustraídos a la jurisdicción especial.

Si los resultados económicos son sensibles, los políticos y jurídicos son todavía más lamentables:

Para el vecino supuso merma de su libertad y el sometimiento a una jurisdicción tiránica. De gozar de unas garantías personales que podrían encajarse dentro del concepto de "habeas corpus", pasó a sufrir prisión preventiva y penas corporales o pecuniarias no determinadas taxativamente. Su principal horizonte de trabajo se redujo a convertirse en asalariado de la Administración, cegándole cualquier posibilidad de iniciativa individual o societaria dirigida a cubrir la demanda de la madera "recién descubierta". Que probablemente hubiera surgido, visto el establecimiento de sierras de agua particulares, bajo licencia del concejo.

Para Bruna, sin embargo, aún tendrían que estar agradecidos puesto que "ellos mismos deven su subsistencia a las dos Comisiones (de Marina y Real Negociado) que con sus cau-

dales mantienen aquel País" (1). Es el año 1789. Parece, como veremos después, que en esta Comarca, y aún en la actual provincia de Jaén, la Administración ha tenido como norma arruinar la economía propia y presentarse luego como protectora y salvadora.

Para el Común de Valle de Segura fué el comienzo de su liquidación. Los perjuicios económicos se han señalado, pero son más decisivos los derivados de la degradación de las normas que regían la vida de la comunidad, produciendo el vacío jurídico al sustituir por un reglamento y la arbitrariedad funcional una legislación comarcal de aplicación cotidiana, de profundo arraigo y plena vigencia, pues que cubría los supuestos sencillos de una comunidad forestal y pastoril, cuya distancia a los principales núcleos de población permitía las condiciones de aislamiento necesarias para mantener, con cierto retraso respecto a otras zonas, un sistema de normas (2).

El recurso a las regulaciones propias (Fuero y Ordenanzas particulares y del Común) es continuo. Como hitos pueden señalarse los siguientes:

Denuncia por tala contra Juan Paulino de Robres, vecino de Santiago de la Espada. Incluye un testimonio, por el escribano Pablo Gómez, del capítulo de las Ordenanzas del Común que autoriza a "cortar y talar e sacar de quaxo y rozar e quemar todo el monte" con tal de que, si hubiere carrascas, robles o pinos salgareños o donceles, "de dental arriba" dé aviso al concejo... para que si fueren de

(1) Francisco de Bruna. Carta al Ministro de Marina, Antonio Valdés, ya citada de 9 de julio de 1789.

(2) García Gallo, Alfonso. Crísis de los Derechos locales y su vigencia en la Edad Moderna.

provecho los mande aprovechar el dicho concejo". Y en el recurso que eleva a la Chancillería de Granada aduce el procesado a su favor que la denuncia "no está puesta por cauallero de sierra ni con las solemnidades que por las ordenanzas se prebienen" (1). Este proceso se inicia en 1726 y hay resultas del mismo en 1728.

En el poder que otorgan los vecinos de Orcera, ya citado, para oponerse a la pretensión de cobrar diezmos de madera para la Encomienda, se apodera al agente para que, con arreglo a "todas las legales disposiciones de el fuero, Partida y Reyno", los defienda, así como por la "costumbre y posesión inmemorial inconcusamente observada y guardada" (2). Es el 12 de enero de 1738.

En el conflicto entre Santiago de la Espada y el subdelegado de Montes de Marina en Orcera, por la solicitud, denegada repetidamente, de licencia para ramoneo, el letrado defensor del pueblo (captado luego por la Administración) aporta testimonio, sacado del ejemplar existente en Segura, de las ordenanzas pertinentes. Luego el concejo de Santiago, en una representación posterior al rey, al tiempo de aducir los principios teóricos contenidos en la Ordenanza de Marina de 1748, referentes a evitar el perjuicio a los particulares, apoya su petición en "las Ordenanzas generales y municipales de estos pueblos confirmadas y mandadas obserbar por la Magestad del señor Rey don Phelipe -

(1) Archivo de la Real Chancillería Granada. Cab. 3 Legajo 1269 - 4.

(2) Poder citado arriba. Archivo Notarial de Orcera. Protocolo del año 1738.

el segundo, que santa gloria haya..." (1). E inserta testimonio de las mismas. Es el año 1779.

Bernabé Picarzo de Almazán, intenta evitar el despojo iniciado por Diego de los Ríos, en connivencia con Juan Pichardo, de los montes del concejo. Para probar la propiedad que pertenece a Segura, argumenta, en segundo lugar con "las Ordenanzas Generales que... celebró esta villa con todas - las del Partido el año 1580..." (2). El escrito de Picarzo de Almazán al rey está fechado en Segura el 20 de abril de 1782.

En 1820, el alcalde de Segura, protagonista continuo - de conflictos con los Ministros y subdelegados de Marina, - manda sacar testimonio de las Ordenanzas del Común en lo re - ferente a los caballeros de sierra, la necesidad de licencia del concejo para cortar y regulación de las sierras de agua (3) para apoyar, aún, el derecho de Segura a sus montes.

En 1838, la villa de Benatae, de acuerdo con normas -- emanadas con carácter general, elabora un "Reglamento para la administración de los predios rústicos y urbanos de la - villa de Benatae y fomento de la ganadería de sus vezinos". En él las referencias a la comunidad son continuas, así como a sus Ordenanzas reguladoras:

"Siendo muy conforme a justicia y derecho de man-
comunidad que tienen los pueblos de esta sierra sobre -

(1) Archivo de Simancas. Sección Secretaría de Marina. Lega - jo 576. Atado año 1779.

(2) Idem. Idem. Idem. Atado año 1782.

(3) Reproducido por Juan de la Cruz Martínez en "Memoria - histórica del partido de Segura de la Sierra". Apéndice documental.

los pastos y montes de su extensión como se acredita - por las antiguas Ordenanzas del Partido formadas por - sus representantes en el año de mil quinientos ochenta y sancionadas por la Real persona en mil quinientos - ochenta y uno..." (1).

El derecho de mancomunidad sigue vigente, pero la referencia a los montes es una simple resonancia de tiempos pasados, como el recuerdo y la función de los representantes, en reunión para "formar" Ordenanzas.

Más ajustado a la realidad contemporánea es el párrafo siguiente, limitado a pastos y abrevaderos: "para protección y fomento de los Ganaderos y Labradores vecinos de los Pueblos del Partido entre los que hay mancomunidad de pastos y abrebaderos..." (2).

Confirma después el reglamento que examinamos una de las manifestaciones de esta comunidad consistente en la - preferencia de los ganaderos de la Sierra sobre los forasteros en las subastas de pastos de cada pueblo del común:

"...Si verificada la adjudicación (entre vecinos del mismo pueblo) en el día que hubiesen convocado... resultasen sobrantes algunos sitios o Dehesas, lo anunciará el Ayuntamiento a los Pueblos que tienen mancomunidad de pastos con expresión de sus tasas y del día - que se adjudicarán...pasado el dicho día... se busca-rán pastores forasteros y rematarán..." (3).

Se advierte clara la idea de forastero como extraño

(1) Reglamento citado. Folio 1.

(2) Idem. Idem.

(3) Idem. Fol. 1 v.

al Común, no aplicable al de otro pueblo del mismo común, considerado como vecino.

El cumplimiento del requisito de comunicación era ~~una~~ condición de validez para la subasta de pastos:

"Será válido el remate y subasta... siempre que conste que se dió abiso, por medio de oficio circular a los - Pueblos del Partido y que dejaron pasar el tiempo señalado sin hacer uso de su derecho de petición y mancomunidad". (1).

Efectivamente, en los archivos de los ayuntamientos hay numerosos ejemplares de estos oficios con diligencia de haber estado expuestos en el tablón de anuncios "...si careciere de este registro (la diligencia de exposición) y hubiese reclamación de parte de algún Pueblo o Ganadero de la Comunidad del Partido, por no habérsele dado abiso ~~del~~ del sobrante, será a cargo del Ayuntamiento infractor los daños y perjuicios que se originen, cuya responsabilidad se le impondrá según lo considere S.E. la Diputación Provincial" (2).

Nueva referencia a las Ordenanzas del Común se encuentra en este Reglamento:

"Si alguno de estos (forasteros) entrase sus rebaños o piaras al disfrute de los pastos comunes que se han distribuído entre las villas del Partido, incurrirán en la pena de ser quintados conforme a las antiguas ordenanzas que se acordaron entre todas las villas y fueron consentidas y aprobadas para beneficio

(1) Reglamento citado. Fol. 1 v.

(2) Idem. Idem.

y fomento del interesante ramo de la ganadería y cuya decadencia proviene, en parte, del abuso que se ha -- echo y reprobada negación de dar acogida en este suelo a ganados estraños, postergando a los que de la -- crianza y labranza de los moradores de estas Sierras"(1)

Recordemos que el quintar de los ganados, regulado en el capítulo 20 de las Ordenanzas del Común, está tomado del fuero de Segura (Cuenca).

Como consecuencia de este sentido de vecindad comarcal y reflejo de su concepto en el Fuero y las Ordenanzas derivadas de él, el Reglamento tolera a los vecinos colindantes con términos que puedan extenderse por el contiguo, con ciertas condiciones, a la distancia de un careo. (2).

Testimonio último de la vigencia de esta mancomunidad, reducida ya, obligadamente, a los pastos, es una comunicación dirigida por el Gobierno de la Provincia de Jaén al Ayuntamiento de Hornos de Segura, con fecha 19 de septiembre de 1859. Es referente al problema de si el deslinde pendiente de una finca impide a los ganados entrar en ella. Dice así, en la parte que interesa:

"... Y considerando que cualquiera que sea el fallo de la superioridad en el expediente del deslinde -- que egecutó dicho comisionado en los días 10, 11, y 12 de noviembre último (1858) el aprovechamiento de los pastos de la Sierra de Segura siempre quedará en favor de la Mancomunidad de los Pueblos, por ser una servidumbre de que no puede privarseles sin su consentimiento, he acordado que los ganaderos de este término con-

(1) Reglamento citado. Fol. 2.

(2) Idem. Fol. 2 v.

tinúen en el aprovechamiento de los pastos de la Fuente del Chorro y agregados..." (1).

Hay, finalmente, un documento, referido al mismo pueblo de Hornos, que testimonia el punto final del proceso -- de degradación y expolio de los derechos comunales que, en ese momento, afecta también al último residuo, la mancomunidad de pastos, del viejo común. El 8 de diciembre de 1878, el propietario de dos importantes fincas situadas en el -- término solicita sean segregadas de la mancomunidad de pastos y el Ayuntamiento "lo tiene a bién", acordándolo veinte días después. El solicitante argumenta para la segregación que él "no ha prestado su consentimiento a la mancomunidad" (2). Hecho evidente, ya que había sido establecida muchos siglos antes.

Este efecto de aniquilamiento de la entidad histórica es quizá la consecuencia más lamentable de la aplicación de la Ordenanza de Marina de 1748. Y resulta curioso y ejemplar subrayar que, en los últimos Planes de Desarrollo y -- en todos los planteamientos modernos de ordenación del territorio, aparece como una solución la comarcalización, así como, en el plano estrictamente político, la descentralización y devolución a entidades intermedias de parcelas de -- competencia. La destrucción de entidades históricas para -- conseguir unidades administrativas homogéneas y "standard" comenzó aquí su proceso.

Resulta también digno de reflexión la actitud de -- Felipe II, el autócrata por excelencia, encomendando a los mismos pueblos del Común que, como tienen por costumbre, --

(1)Papeles del auditor Olivares.

(2)Papeles de la familia Olivares.

se reúnan y formen las ordenanzas para solucionar sus problemas, aprobándolas posteriormente y ordenando, cinco - años después, que se reúna concejo abierto para aceptar o rechazar su aplicación, en contraste con la del bondadoso Fernando VI, el de la dulce esposa y las tardes con Farinelli, poniendo su firma al pie de la Ordenanza de Marina de 1748, disposición conculcatoria de aquellas leyes y costumbres que Felipe II había respetado escrupulosamente.

En el mismo terreno, la señalada coincidencia de su presión y establecimiento de la jurisdicción especial con los períodos liberales o absolutistas en el reinado de - Fernando VII, muestra la profunda vinculación de dicha jurisdicción con el absolutismo.

Y, volviendo a referirnos al documento de 8 de diciembre de 1878, citado más arriba, debe notarse su producción en los años de la Restauración, época áurea del caciquismo en España.

El efecto deteriorador de la moral pública que produjo el despojo de los montes realizado por la Administración, llevó a una especie de levantamiento de veda para que algunos particulares avispados lo intentaran a su vez. Y consiguieran, cuando estaban debidamente pertrechados de conocimientos e influencias. Nadie había imaginado, antes de la desgraciada actuación del Real Negociado de Montes de Segura y del Real Negociado de Montes de Marina, que se pudiera discutir al concejo el derecho a los montes. Después de ella, la sugestión nació en los que tenían valedores suficientes.

Dos casos pueden ejemplarizar esta nueva mentalidad, consecuencia e hija de la actuación administrativa.

En una de ellas parece que el Ministro de Marina Pichardo prestó una colaboración que debió ser decisiva. Colaboró también la ignorancia natural del Intendente de Marina de Cartagena y la s^ólita connivencia entre poderosos para no producirse molestias mutuamente que, traducido a lenguaje pedestre y actual, se llama compadreo.

Una representación al Rey, de don Bernabé Picarzo de Almazán, fechada en Segura el 20 de abril de 1782 expone el proceso por el cual un Diego de los Ríos intentaba, y debió consumir, el despojo de los pinares que pertenecían al Concejo.

Picarzo de Almazán, regidor perpetuo y decano de Segura, y abogado, reincide en los argumentos expuestos en un memorial anterior de fecha 26 de enero del mismo año.

El dicho De los Ríos, regidor que había sido, deja a su muerte encargo a los herederos que cobren las maderas cortadas en la finca de Las Herrerías, en la que tenía tierras de labor, en virtud de supuesto mandamiento del Intendente de Cartagena para tal pago: Mandamiento que, según afirma Picarzo, no se ha podido ver ni sería título para cobrar en contra de la "posesión inmemorial de esta villa". En cualquier caso, dice Picarzo, dicha orden o mandamiento se limita a decir que el Intendente no comprende "o alcanza el fundamento porque se el niegue a Don Diego de los Ríos el pago de las maderas que

se le cortaban en los montes de sus tierras; pues le era mui fácil, como notorio a este Ministerio, haverle satisfecho" (1). Evidentemente, el Intendente no entraba en el fondo del asunto que, con seguridad, el solicitante no le había expuesto: el régimen jurídico de los montes en aquellas tierras. "Porque esta villa -dice más adelante la representación- estaba en quieta y pacífica posesión inmemorial; no se pagaba y havia pagado jamás a ningún particular las Maderas que se habían cortado en sus tierras; y don Diego de los Ríos no había manifestado ningún privilegio distinto contra los de la villa; y esta omisión en el Ministro, y después de haver ocultado esta orden, dando a Don Diego subrepticamente sus certificaciones, para que haya cobrado las Maderas de la Real Hacienda, da mucho que sospechar en la legitimidad de dicha orden" (2).

Y añade, después de pedir que se manifiesten los documentos, que

"se puede hacer una información plenissima de testigos que ningún particular dueño de tierras de este término ha cobrado ni se le han pagado los pinos, que se han cortado en ellas... es más, que habiendo tenido el mismo Don Diego, y sus Padres, y su Hermano Estevan de los Ríos labores propias con Pinares en esta jurisdicción, tampoco lo han cobra-

(1) Archivo de Simancas. Sección Secretaría de Marina. Legajo 576.

(2) Idem.

do, ni pretendido, ni otro alguno que Don Diego por el favor que ha hallado en el Ministro, sin embargo que son antiquísimas, y mui repetidas estas cortas; pues siempre se ha reconocido por dueña única a esta villa... puede acreditarse por testimonio que en ninguna partición de tierras montuosas, que ha havido, y ay en los términos y partido de esta villa, aunque se diga de doscientos o trescientos años a esta parte, en ninguna se ha dado valor ni estimación a los montes ni pinares... por la propia razón de no tener derecho a ellos y haverse considerado siempre por dueño a esta villa..." (1).

La posición de Picarzo en este asunto es particularmente indicada para afirmar esto, pues, según manifiesta, él mismo vendió la finca de Las Herrerías a Diego de los Ríos y la compró de otros antes y en ninguna de las escrituras "se dá el menor valor ni estimación a los pinares por dicha consideración (considerarse a la villa dueña) de donde se infiere que no habiendo tenido los que me vendieron ni yo derecho a los montes, no pudimos transpasarle a Don Diego..." (2).

En la conspiración para el despojo intervienen, - aparte del citado Pichardo, el Alcalde Mayor de Segura y Auditor de Marina, Juan Francisco de Rivera, "olvidándose de las obligaciones que tiene... de mirar y defen-

(1) Archivo de Simancas. Sección Secretaría de Marina. Legajo 576.

(2) Idem.

der los derechos y regalías de sus caudales de propios, juradas al tiempo de su recepción" y el escribano del Ministerio, Antonio Félix Román, al que acusa de estar implicado con Diego de los Ríos en "esta malipulación de maderas" y haberse encargado de la conducción a las nuevas poblaciones de Sierra Morena de una gran partida de rollizos, dejando para ello su cargo durante dos meses.

No sabemos cómo terminaría este intento. Las Herreñas, finca forestal en su mayor parte, aún subsiste de propiedad privada, debe deducirse en consecuencia que finalizó con pleno "éxito".

Otro intento del que tenemos todos los datos se consuma lastimosamente, algunos años después. Entonces, la villa de Segura ni siquiera tiene fuerzas para comparcer a defender su derecho. El despojo lo lleva a cabo un relator de la Chancillería de Granada que reclama el derecho a aprovechar los pinos existentes en sus labores, citando el precedente de otra sentencia anterior de la misma Chancillería en un pleito entre un vecino de Infantes y la villa de Segura. La Chancillería, en rebeldía de Segura, dicta sentencia favorable en 1804.

La sentencia es injusta, pero no es todo: en base a unas propiedades pequeñas, apoyándose en la sentencia, se deslinda como propiedad del relator una extensión enorme de terreno que debe andar por las mil hectáreas. Este proceso consta en el Archivo de la Real Chancillería (1).

(1) Cab. 507. leg. 1822-3.



En la representación de Picarzo de Almazán examina da se hace referencia a un caso similar pendiente también en ese tiempo y promovido por Antonio León de Lara, veci no de Santiago de la Espada, al que hemos hecho referencia en otra parte. Ahora, con el dato aportado por este documento, la actuación de Antonio León de Lara cobra su verdadero significado y da todos los indicios de una con nivencia con los funcionarios de Marina y la imagen de una renuncia de la villa a defender sus derechos, en el caso de la pretensión del relator de la Chancillería. En este punto, el concejo ha llegado ya al último grado: es tá exhausto e inerme.

El Común, como anticipará Chaves sin creerlo posi ble, muerto y arruinado.

XVI .- EFECTOS SOCIALES

La actuación de los funcionarios de Marina en los ochenta y ocho años (de 1748 a 1836) en que desenvuelve sus actividades, con los pequeños interregnos que marcan el decreto de las Cortes de Cádiz de 14 de enero de 1812 que rige hasta 1814, la renovación del decreto de 1812 que rige desde 1821 a 1823, está marcada por una radical oposición a los pobladores y el desprecio de sus costumbres y sus intereses. Los funcionarios, alguno de los cuales se mantiene durante décadas, están imbuidos de un claro espíritu de suficiencia y de superioridad sobre las personas a las que afecta su actuación.

Hay tipos que resultan auténticamente nefastos y que debieron despertar el odio de los naturales de una manera congruente con su propio sentimiento hacia éstos. Juan Pichardo, ministro interino de Marina en Segura, dice en 1776, en una especie de informe que dirige al Intendente de Cádiz "como en veintiseis años de estancia en este país, tengo adquirido conocimiento de los genios y obrar de estas gentes he experimentado que sus instancias y representaciones las dicta la pasión..." (1). Por ello, previene al Intendente de la malicia de las gentes de Segura por si intentaran calumniarle.

La conducta de este ministro interino en el largo tiempo que cita el mismo no parece la más adecuada para granjearle el afecto de los naturales. Ya en 17 de julio de 1773 se dirige a don Francisco de Bruna, superintendente del Real Negociado de los Montes de Segura en Sevilla, diciéndole en una carta: "Lo que se apetece es la libertad..." (2), extra

(1) Archivo de Simancas, Sección Secretaria de Marina. Legajo 576.

(2) Idem.

ña apetencia, según el punto de vista de un funcionario típico en un régimen de despotismo ilustrado. En la misma carta dice también:

"...los carretaros de las aldeas de Alcaraz no se sujetan a los transportes de las maderas de la Real Hacienda, ni me atrevo a citarlos pues en la respuesta que - dió dicha ciudad cuando me presenté con Real nombramiento, una de ellas fue tratarnos a los ministros aquí empleados de tiranos, porque unas pocas veces se hicieron venir aquí algunos carreteros, porque la necesidad exigía emplearlos en la conducción de madera del Rey, sien do así que si no se emplean en ellas les está prohibido el comercio propio" (1)

Parece, pues, que se sujetaba a los carreteros a una prestación personal, a la que, lógicamente, se resistían, ayudados por sus ayuntamientos, así el de Villaverde cuyo alcalde se niega a convocar a los carreteros para el transporte, como lo hicieron todos los pueblos del partido.

El mismo Juan Pichardo afirma en el informe citado: "los carreteros están reacios a completar el transporte de las maderas del Real Servicio porque quieren emplearse en conducción de particulares, sin atender a la urgencia del Real Servicio, llevan a mal que se les apremie mie, bien que hasta ahora sin extorsión, más las notificaciones y hacer descargar las maderas que no son del - Rey..."

Y continúa:

" Con estas alteraciones tiran los malcontentos a sacu-

(1) Archivo de Simancas. Sección Secretaria de Marina. Legajo 576.

dir la importante limitación para conservación de estos preciosos montes, preparando sus ideas a conseguir la entera libertad que apetecen y que cortó la Orden de Marina de 31 de enero de 1748 y entre otras Reales Ordenes - la de 28 de mayo de 1764 en que su Magestad manda continúa la jurisdicción y se observen las reglas de Joseph - Gutierrez de Rubalcava..."

Después de reconocer que la Orden de 1748 ha cortado la entera libertad que existía antes de ella se extraña de que - "éstas se guíen por la pasión" (1).

El citado Pichardo tiene ocasión, en 1779, de producir nuevos conflictos con los naturales con ocasión de una grave sequía. Bienservida, pueblo hoy de la provincia de Albacete, solicitaba, con fecha 28 de Noviembre, licencia para el ramoneo de robles y encinas. La respuesta de Pichardo no puede ser mas seca, ni mas irrazonada: "por no tener los arbolados destino para ramoneos de ganados y si para fines del Real Servicio..." (30 de octubre del mismo años, es decir, - un mes después). (2).

Que la petición no debe ser caprichosa se advierte en que Santiago ha hecho igual petición el día 8 de octubre a través del alcalde ordinario, Juan González Ojeda, que acompaña la solicitud con la declaración de siete testigos aseverando la situación extrema de los ganados por la sequía. La respuesta, con amenaza de la vía reservada de Marina empieza: "Exagera vuesa merced en su carta de 8 de octubre ...". Cita los artículos 28 y 29 de las Ordenanzas de Montes y - avisa con "el mas severo pronto castigo a la primera insi--

(1) Archivo de Simancas. Sección Secretaría de Marina. Legajo 576.

(2) Idem.

nuación que vuelva a hacer don Juan Pichardo a esta via reservada de Marina " (3). Es el comienzo de un largo debate que se prolonga durante años.

De cualquier manera, en ambos pueblos solicitantes, - la negativa no detiene la actividad de los ganaderos que tratan de salvar sus ganados echándoles ramón.

Santiago de la Espada, sin embargo, seigue solicitando autorización para el ramoneo y dirige un pedimento al Marques González de Castejón, firmado por Juan Antonio Martínez Robles, procurador síndico general del común de Santiago, en - el que expone que no se han podido conseguir por los inten-tantes licencias de ramoneo "en perjuicio notorio de este común de ganaderos y labradores de quien depende el pago y satisfacción así de las Reales contribuciones como de las de-- más cargas concejiles que anualmente se reparten y corresponden a toda república bien ordenada". La respuesta es recomendar a Pichardo "que contenga a los vecinos".

Pichardo escribe posteriormente al Marques González de Castejón diciéndole que el alcalde de Santiago niega haber - recibido la Real Orden por lo cual se remite por duplicado - con la amenaza de que "a la menor infracción tomará S.M. -- con ese y los demás pueblos de esa provincia que no se suje-tasen a sus Reales disposiciones la providencia que convenga ..." (2).

Hay también, en el Legajo de este año una carta del -- mismo Pichardo al Marques González de Castejón en la que afirma que tiene muchas causas pendientes. Eso confirma lo que -

(1) Archivo de Simancas. Sección Secretaría de Marina. Legajo 576.

(2) Idem.

dice Juan de la Cruz Martínez en su "Memoria Històrica" de - que "llegaron a acumularse el asombroso número de mil doscientas a dos mil causas criminales".

No se conforma Santiago y recurre por medio del letrado Pedro Ambrosio López de Olivares que, como base jurídica, aduce las Ordenanzas del mancomún que una Real Provisión de 24 de marzo de 1585 manda guardar, confirmándolas y aprobándolas. Adjunta testimonio sacado por Francisco Fernández de Evia, escribano de Segura de las ordenanzas que hablan sobre ramoneo, la 28 y la 68. A la nueva petición que inicia Joseph Antonio Endara, auxiliado por Olivares, se adjuntan testimonios de diferentes personas que atestiguan la necesidad extrema en que se encuentran los ganados, la inutilidad de los árboles para el Real Servicio y lo conveniente que es para los árboles el ramoneo.

Se suceden los testigos. Cristóbal Martínez Serrano de setenta y ocho años, declara:

"... pero, de cualquier forma que los vecinos ganaderos hayan hecho uso del ramaje para sus respectivos ganados, con licencia o sin ella, siempre han experimentado crecidos desembolsos por las causas de denuncia que les han seguido y sustanciado en el Ministerio de Marina de este Departamento sufriendo gravísimas bejaciones, con dilatas prisiones de sus personas como en el día lo están padeciendo tres o cuatro ganaderos que por no ver perecer los que tenían a su cargo los encontraron socorriendo con algunas ramas de roble o encina..."

Juan Martínez Ojeda, de cincuenta y seis años, dice:

"... habiendo pedido licencia... no dudando de su concesión y que algunos ganados estaban para perecer, se han

maron algunos vecinos a socorrerlos con alguna rama por cui a razón están oy sufriendo una larga prición de sus personas, con parte de sus ganados muertos de necesidad ... habiendo muertos muchos de que tiene alguna inteligencia, como ha sido a Pedro Tomás Zaragoza doscientos primales de lana, siete u ocho vacas a Juan Puente Fernández, otras tantas a Juan González Oxeda, ocho al síndico del año pasado, seis a Francisco de Paula Baños ..

." habla de lo beneficioso del ramoneo como se vé en el Pinar del Duque (la Bidriera) en que se dejaron los árboles con agujas, horca y pendón. Añade, igual que el anterior:

"... de cualquier manera que se haya hecho uso de dicho ramaje, siempre se les ha denunciado a estos vecinos por los Guardas de Montes y por ellas se les ha exigido crecidas cantidades de maravedises, además de haver muchos trabajos personales de prisiones y comparecencias en - aquel Juzgado de Orcera..."

Fernando Aybar, de setenta y dos años, afirma que:

"no tiene memoria que con orden de Su magestad se haya cortado para el Real Servicio, en prueba de lo cual la tiene de haver venido algunos comisionados de la Intendencia del Departamento de Cartagena y haviéndolo reconocido no han encontrado quasi que marcar a excepción - de algunos pinos..."

y añade:

"... pero de cualquier modo que estos vecinos usen del Ramón para sus ganados en los tiempos de necesidad, con lizencia o sin ella, siempre se les denuncia por los -- guardas zeladores del Ministerio de Marina, en donde experimentan muchas bejaciones de prisiones, comparecen--

cias y crecidas exacciones de maravedíes por cuyos fundados miedos y temores se han salido muchos vecinos de este término y el común de Segura, en este año y el otoño anterior para el de la ciudad de Huéscar y otras partes especialmente los dueños de ganados bacunos" (1).

La muerte de ganado a consecuencia de la sequia está - testimoniada también en el otro pueblo que solicitó, trás de Santiago, licencia de ramoneo. Una representación del concejo de Bienservida al Rey, en 10 de Junio de 1780, dice:

"... y teniendo presente la esterilidad del año, de modo que se hallaban sin pastos algunos para el socorro de sus ganados, validos de esta necesidad, y considerando que - las multas que pudieran imponerseles no podían ascender a el pierde total de sus ganados, deliveraron socorrer a estos por medio del ramoneo, y sin embargo de este socorro, ha perecido una tercera parte de dichos ganados... hademás de haverse perdido en este año la cría de estos ganados por no atreverse a continuar con el socorro del ramón, por el temor de los continuos comisionados de dicho Ministro de Marina (Juan Pichardo)..." (2).

Congruentemente con esta situación las denuncias por - ramoneo se reflejan en el Archivo Notarial de Orcera en el - aparecen en este año diversas escrituras de poder que los denunciadados otorgan para ser defiendidos ante el Tribunal de - Marina. Estos poderes son aún más numerosos en el año siguiente, aunque en ocasiones las denuncias están referidas a ramoneo en el anterior.

En el otorgamiento de poder abundan frases parecidas -

(1) Archivo de Simancas. Sección Secretaría de Marina. Legajo 576.

(2) Idem.

para justificar el ramoneo:

"... a causa de la escasez de pastos que se había experimentado por la falta de llubias...".

"... con motivo de la esterilidad de pastos que es notoria...".

"... para socorro de su ganado..." (1).

Los otorgantes son distintos de los que aparecen como testigos en el recurso planteado por el letrado Olivares y - también de los que ese recurso cita como perjudicados por la falta de pagos.

Es curioso señalar, aunque quizá no tenga relación directa con que se haya ramoneado o no, que aún hoy el Pinar del Duque (llamado así porque perteneció al de Alba) o de la Vidriera es un espléndido bosque, una mancha verde enorme en mitad de la desolación de los montes que se encargó de conservar el celoso Pichardo por cuenta de la Marina.

Hay también una representación al Rey encabezada por "El Concejo, Justicia, Regimiento, Diputados y Procuradores síndicos general y personero de esta villa de Santiago de la Espada en la que se solicita al Rey que conceda el permiso - para ramonear que "se denegó sin embargo de la justísima razón con que se pedía... sin más motivo que el de su desafeción (la de Juan Pichardo) y la del escribano de dicha subdelegación a estos infelices vecinos". Dice que "los dichos - Pichardo y Román (el escribano), temerosos de que revocaran su decisión aparecieron ante su Magestad, por mano del marqués González de Castejón, Secretario de Estado y del Despa-

(1) Archivo Notarial de Orcera. Protocolo del mismo año.

cho Universal de Marina, con los autos originales..." con --
ello se produce, como dice la representación, "una falta de
methodo" pues impidió al síndico sacase testimonio que pidió
para los recursos y defensas que debía hacer. Hace referen--
cia a la Real Pragmática de 11 de enero de 1770, pero se des-
cubrió no ser el fin de los dichos subdelegado y escribano --
el que procuraran aparentar y sí el dejar indefensos a estos
vecinos.

Sigue la representación de Santiago de la Espada hacien-
do alusión a "las Reales Ordenanzas Generales y Municipales
de estos pueblos confirmadas y mandadas observar por la Mage-
stad del Rey don Phelipe el segundo, que Santa Gloria haya, -
en diferentes capítulos de ellas que comprende el adjunto tes-
timonio..." (1).

Aducen en su apoyo la Real Ordenanza de 31 de enero de
1748, sus artículos 16 sobre poda de los árboles y 19 y 20 -
sobre corta de árboles por el pié. En el primero se dice: --
"Porque las podas de los árboles son convenientes para que -
crezcan y estén limpios y sanos; se determinará los montes
que han de podarse, según lo que las Justicias y hombres in-
teligentes en esta materia informaren a los visitadores... -
se executen precisamente en las meguantes de luna de Noviem-
bre, Diciembre, Enero y Febrero". En estos meses, precisamen-
te, se desarrolla el conflicto. Las 19 y 20 señalan qué se -
entiende por cortar árboles por el pié o el corte o roza que
los seque, prohibiéndolo sin los debidos requisitos. Cita -
también el artículo 24 de las Ordenanzas de 1748 en la parte
en que manda "a los Intendentes de Marina que con considera-
ción a que mi ánimo es de que se haga mi servicio sin perjui-

(1) Archivo de Simancas. Sección Secretaría de Marina. Lega-
jo 576.

cio ni atraso, antes bien con ventaja de mis vasallos, permitan las podas de los montes con tal proporción y método - que ninguna herrería o fábrica se pierda o para por falta - de materiales para su continuación..." La representación es tima que los fines expresados en este artículo 24 son de me nos importancia que "el que se intenta socorrer por la pre sente súplica" afirma luego que "... el mismo subdelegado - de Marina en Orzera...ces público y nadie puede negar que - ha echado y está hehcando ramón en esta Sierra a los bueyes de la Carretería que administra de su cargo, habiendo diso- nado este hecho con la denegación tan rígida y absoluta con que ha repelido a los demás vecinos que han solicitado su - lizencia... No ha sucedido así con el subdelegado de Cazorla cuias sierras están contiguas con éstas y aún son menos des+ templadas y ha concedido licencia..." (1).

La autenticidad de esta situación apurada y el hecho de que afectaba igualmente a la carretería real viene confir- mada por otra fuente de distinto origen. En un poder que e otorgan el 6 de abril de 1780 los carreteros de Siles para solicitar, con otras reivindicaciones que se verán, indulto de las denuncias que se les ha puesto por ramoneo, hablan - también la situación de extrema necesidad en que se hallan - sus bueyes, hasta el punto de que no podrían servir para la conducción de la madera real, y ha ocurrido el caso memora- ble de que "la misma Real Hacienda se ha bisto obligada a - comprar paja, por cima de tres reales por arrova, en tiempo de cosecha..." (2).

Aporta también el dato revelador de que el Concejo ha

(1) Archivo de Simancas. Sección Secretaría de Marina. Lega- jo 576.

(2) Archivo Notarial de Orcera. Protocolo del año 1780.

concedido "para esta ymbernada, libertad para la entrada de ganados en viñas y olivares" (1).

Debía ser cierto que los bueyes de la carretería real ramoneaban como los demás, obligados por la extrema escasez de pastos debida a la sequía.

Argumenta el alegato de Santiago a continuación que - los solicitantes son los primeros "en la conservación de los árboles ramoneables pues zede a nuestro beneficio el aprovechamiento del fruto de bellota por cuya razón no es presumible que intentemos su destrucción y vajo la seguridad de - nuestra palabra, que ponemos a Vuestra Magestad, de ser los más zelosos fiscales por la conservación de los plantíos - que sean útiles al real Servicio". (2).

Razones de todo tipo parecen avalar la petición de los labradores y ganaderos de Santiago de Espada. La solicitud sincrónica del pueblo de Bienservida, situado en el valle, - el ejemplo del subdelegado de Cazorla, los apoyos legales en las Ordenanzas del Mancomún de Segura y su Tierra aprobadas por Felipe II, y en la propia Ordenanza vigente de 31 de enero de 1748 y, por fin, el hecho público y notorio de que el mismo subdelegado que niega la necesidad y por cuyos informes responde la superioridad "exagera vuesa merced", ha echado y está echando ramón a los bueyes reales, no bastan para conseguir la licencia de ramoneo. ¿Por qué?.

En la misma representación se dice:

"La denegación de dicho subdelegado de Orcera, don Juan Pichardo, acalorada por su escribano Antonio Félix Román no proviene del zelo al servicio de Vuestra Magestad y sí de la enemiga que profesan a este pueblo, haciendo de

(1) Archivo Notarial de Orcera. Protocolo del año 1780.

(2) Archivo de Simancas. Sección Secretaría de Marina. Legajo 576.

mostrables sus positivas culpas, omisiones, disimulos y tolerancias en otros puntos que son más propios del Real Servicio y obligaciones de sus empleos con expresas contrabenciones a los establecimientos de Marina y conservación de los pinos". (1).

Han pasado ya más de tres meses de la petición primera y parece claro que lo que interesa es el fondo de la cuestión; delimitar el derecho al ramoneo que pueda corresponder al Mancomún y también defender al pueblo de las "bejaciones", prisiones, multas y parasitismos del aparato administrativo de Marina. Representado por Pichardo al que todos los datos, incluso su propia declaración, ya reproducida, señalan como un funcionario autocrático, cuya posición contraria al interés de los pueblos parece el "leit motiv" de su conducta durante los treinta años al menos que lleva en su cargo, en 1780.

Dentro de esta lucha, aparece el vicio viejo de anteponer el principio de autoridad a la Justicia. Esta enfermedad funcional consiste en sentir los problemas públicos como contrastaciones de poder personal en las que se pone en juego la dignidad y el orgullo individual. El cumplimiento de las normas generales que se les encomienda lo convierten en problema de amor propio y piedra de toque de su poder frente a sus semejantes. Este enfoque mental se exacerba cuando está proyectado en relación con un grupo humano al que se considera inferior y se desprecia pero que, sin embargo, se defiende y contraría la voluntad del prepotente. Ante esa exacerbación, no valen ni significan nada los derechos o las súplicas que no vayan acompañadas de la más humil

(

(1) Archivo de Simancas. Sección Secretaría de Marina. Legajo 576.

de sumisión.

Por ello, Pichardo vuelve a la carga el 12 de febrero de 1780 dirigiéndose al Marqués González de Castejón para informarle, por un expediente adjunto, de las omisiones y aún oposiciones de los alcaldes de la villa de Santiago, Juan González Ojeda y Nicolás López Palomares, y los gastos causados por el recogimiento o devolución de cinco despachos que tratan de:

- 1º) La corta de árboles para ramón el pasado año.
- 2º) El incendio de monte y árboles en Poyo Tello, mandando comparecer testigos para diligencia de ca-reo.
- 3º) La quema de carrascas y un pino salgareño de la Hoya del Maguillo, para evacuar cierta comisión.
- 4º) Denuncia de ramoneo en la Umbría del Prado de las Yeguas, perteneciente a Segura de la Sierra.
- 5º) Ramoneo de encina y roble en la Fuente del Osico hasta el Higueral.

Como aparece de la enumeración, es un nuevo episodio de la guerra, Pichardo quiere sobre todo que se aligeren -- los trámites de la denuncia por ramoneo, aunque intercale -- otros asuntos que pueden ser llamativos, como el incendio -- de Poyo Tello y el de la Hoya del Maguillo.

La villa se defiende por medios dilatorios y el subdelegado se queja de que, enviados los expedientes a Santiago por medio del guarda Miguel Segura, se quedan con ellos sin evacuarlos y al nuevo comisionado le dicen que los tiene -- Olivares en Segura y no los ha despachado por enfermedad.

Acuerda entonces el subdelegado por auto que se libre nuevo despacho general por todos y lo conduzca Thomas Ruiz,

soldado de los Batallones de Infantería de Marina de este - partido con pasaporte y orden de no retirarse hasta que se le prevenga. Deberá recoger en el término de seis días naturales los referidos diez despachos, cumplimentando y evacuando sus diligencias o con las respuestas que tengan por convenientes bajo multa de cien ducados y cincuenta al escribano.

Las autoridades de Santiago apuran el plazo. Vuelve - Thomas Ruiz, declara que llevó el encargo el 14 y el día 21 le dan un pliego cerrado llegando a Orcera esa noche y presentándose el día 22. Son ocho días en total. Abierto el -- pliego resulta que sólo contiene tres despachos: uno referente al incendio en Poyo Tello, causa pendiente contra Bartolomé Teruel y otro para comparecencia de testigos. El tercero no tiene nada que ver con los solicitados.

No hay nada sobre las denuncias por ramoneo, que parece el punto central del conflicto (1).

El asunto del ramoneo continúa en 1781. Juan Pichardo organiza una especie de encuesta particular a la que responden, citados por él, el Guarda Mayor, dos celadores, dos carreteros, dos labradores y ganaderos y Nicolás Cabeza de Vaca, delineador. Se trata de demostrar que hay demasiado ganado en el partido; existen otros pueblos y territorios en la provincia que mantienen su ganado sin ramoneo; éste perjudica a los árboles; todos los robles y encinas, por pequeños y despreciables que sean tienen destino y servicio y, -- finalmente, que los árboles desmochados no producen fruto -- de bellota. Todos los preguntados responden a la medida de los deseos de Pichardo y, algunos, dicen que es mejor no --

(1) Archivo de Simancas. Sección Secretaría de Marina. Legajo 576.

echar ramón a los ganados porque así éstos "se buscan mejor la vida".

El punto más importante es, sin duda, el primero porque intenta demostrar que hay exceso de ganado en el partido. Por contra, el Juez Bruna del Real Negociado de Maderas de Segura afirma en un informe del 26 de abril de 1764 que los ganados del partido eran escasos y no bastaban para consumir los pastos por lo cual venían ganados forasteros a utilizarlos. Bruna lo adjunta a otro informe de 9 de julio de 1783 dirigido al ministro de Marina, Antonio Valdés, sin modificar parte alguna. (1).

Se originaron también situaciones de violencia extrema, como la relatada por ante el escribano Antonio Félix Román el 8 de febrero de 1780: Dos vecinos de Santiago de la Espada son denunciados por el guarda Matheo Moreno por cortar ramón de encinas en el Calar del Mundo y Pardal de la Loma de Buenache. Admitida la denuncia, se les manda comparecer y se niegan respondiendo "que se entendieran con sus amos". Los mandan prender con auxilio de la Real Justicia de Siles, como lugar más próximo, y de Segura, cuya es la jurisdicción, y se comisiona para ello a Manuel de Segura, Guarda mayor, acompañado de los guardas Matheo Moreno y -- Francisco García Segura.

Se dirigen a detener a Josef Sánchez en El Guijarral. Este toma un hacha pequeña o escodijo en actitud defensiva y arroja luego una piedra contra los guardas que dió a Moreno

"en una texuela y a no bajar la cabeza lo hubiera muerto

(1) Archivo de Simancas, Sección Secretaría de Marina. Legajo correspondiente al año 1783.

to" y "diciendo que no quería darse al Rey con otras expresiones insolentes y habiendo hecho fuga, volvió a poco rato adonde estaba dicho comisionado y demás que le asistían, trayendo una escopeta en las manos, que la -- montó antes de llegar, cercándose hablando muchas blasfemias, y amenazas, diciendo también que no quería darse al Rey, encarando con la escopeta montada, y hechando maldiciones, por lo que tuvieron dicho comisionado y asistentes que refugiarse de distintos troncos de pinos que en aquel sitio había, prosiguiendo el dicho Josef - Sánchez encarando con la escopeta haber si podía descubrir alguno. Por lo qual procuró dicho comisionado sosegarlo con razones adbirtiéndolo tan despechado por evitar una desgracia, temeroso también de que siguieran -- otras si llegaba a disparar, sospechoso también de que dicho Sánchez hubiera convocado alguna gente de los muchos ganaderos de Santiago que andaban en el uso del ramoneo, por no caber duda de que dicha escopeta se la -- subministraron inmediato a aquel sitio por el poco tiempo que tardó en bolber con ella y no tener tal arma en su ato..." (1).

Este episodio, revelador de la tensión existente, muestra también que llegaba hasta el punto de producir un sentimiento de inseguridad en los guardas que "estaban muy temerosos y en estado de separarse de sus empleos, por las amenazas y proposiciones atrevidas que se vociferaban por los ganaderos de dicha villa de Santiago, diciéndose de público que habían de escarmentar dichos guardas..." (2).

(1) Archivo de Simancas. Sección Secretaría de Marina. Leg. 576. Atado del año 1781.

(2) Idem.

Se había llegado al extremo de que uno de ellos, Blas Asensio, había desaparecido cuando estaba haciendo una ronda por los montes y no se había sabido nada de él. Eso había ocurrido, según el documento que seguimos, "el año setenta y seis o setenta y siete". Josef Sánchez llega a decir durante su parlamento a los guardas que quieren detenerlo que "en la misma sepultura donde está el otro, hay sitio para muchos más".

El episodio acaba con la retirada de los guardas, por dolerse el apedreado del hombro o tejuela y con nuevo procesamiento de Sánchez en base a sus manifestaciones sobre la suerte del guarda desaparecido.

Esta oposición a los pueblos y sus intereses se completa con una actuación opresiva en otros campos. El mismo Pichardo se queja de que los pineros o gancheros desertan - "sin que hayan bastado providencias y aprecibimientos por la indolencia o malicia de las Justicias de sus pueblos...". El relativo entusiasmo de estos "sirvientes", como se les llama se explica, por él mismo, a continuación: estos Sirvientes - no saben lo que ganan hasta concluido el trabajo,"cuya práctica los estimula a su cumplimiento...". Para lograr que volvieran al trabajo se acudía -como dice arriba- a las Justicias de los pueblos, por medio de oficios, para que "con rigor y prisión los obliguen y compelan, pero sin el castigo que merecían por la deserción (!) por no haber pena establecida contra los tales, lo que motiva que repitan las deserciones a su voluntad, y aún cuando se logra volverlos a reducir a el trabajo, ya carece de remedio la falta o atraso que ha padecido la navegación". (1).

(1) Archivo de Simancas. Sección Secretaría de Marina. Legajo 576.

Respecto de los carreteros, los otros empleados por la Administración a su servicio, ya se ha señalado los conflictos con los de la jurisdicción de Alcaraz. En este escrito (un informe elevado al Departamento de Cádiz el 4 de enero de 1777) (1) aparece el derecho que se les daba de hacer dos viajes francos de maderas menores "con el fin de subsistan en este tráfico o empleo, y proporcionarles los medios de su fomento" pero resulta que el segundo viaje no lo suelen hacer "porque se acaba tarde el transporte para el Rey y a ninguno se le permite separarse y como los buques salen bastante estropeados, pocas veces emprenden esta segunda caminata". Es decir, que el servicio público al — que estaban obligados, del que no podían separarse y debían cumplir para poder ejercer su oficio, les impedía ejercer este derecho "resuelto por la autoridad desde el principio". El rigor que Pichardo pedía para el cumplimiento de los deberes de los carreteros y pineros no parecía exigible en la conservación de sus derechos, aún reconocidos por la autoridad. Esta falta del segundo viaje debía repercutir en el abastecimiento y precio de artículos de primera necesidad — que faltaban o eran escasos en la Sierra pues se dice en el mismo informe que estos viajes de madera sirven "para surtimiento de los primeros pueblos de Andalucía, de cuyo modo — en la Primavera traen de aquel Reyno trigo y aceyte a precios moderados con lo que se surten para mantenimientos de los sirvientes, en el tiempo de la conducción, sin cuyo beneficio se expondría por falta de medios y carestía de ambos géneros en este Pays..." (2).

(1) Archivo de Simancas. Sección Secretaría de Marina. Legajo 576.

(2) Idem.

El tráfico de los carreteros y sus viajes afuera del país era fundamental para que hubiera trigo y aceite baratos, eso confirma la fundamental estructura ganadera y forestal de la economía de esta zona, dislocada por la expropiación auténtica que supuso la Ordenanza de 1748 para dar entrada a un componente agrícola, de agricultura marginal materializada en roturaciones de tierras inadecuadas que -- todavía en esta época tenían su destino más productivo. -- Hoy, aunque en cereales sigue siendo deficitaria, produce aceite suficiente para consumo y exportación. Fundamentalmente, todavía en el tiempo del informe, la situación es = reflejo de la que hacía necesario que en las Ordenanzas del Común de 1580 se dispusiera, en la número 40, que "ninguno pueda sacar cargas de madera y otra cosa sin meter las mismas de proveimiento" en cualquiera de los pueblos de la Sierra. Dedicó a la misma regulación los números 41 y 42, lo que demuestra la gran importancia de que dichos productos ("pan o vino o aceite e fructo de legumbres e pescado") tenían para el abastecimiento adecuado. La manifestación de Pichardo sugiere que la falta frecuente de este segundo viaje franco de los carreteros redundaría en la escasez y elevación de precios de esos productos de primera necesidad.

La actuación opresora se ejercía incluso respecto de un gremio como el de Carreteros que tenía para su amparo -- una jurisdicción especial, encomendada a un Ministro protector, perteneciente al Consejo que atendía a la conservación de la Hermandad de carreteros de la Cabaña Real. Y los conflictos con este gremio en la Comarca están ilustrados por la hoja de servicios del asesor del Tribunal, Olivares, que fué abogado de la Real Hacienda "contra el Gremio de Carreteros que aspiraban a un aumento exorbitante por la extrac

ción y transporte de maderas de Marina y Real Negociado des de sus astilleros hasta el aguadero..." (1).

Existe también un poder que otorgan por ante el escribano de Siles, el 6 de abril de 1780, los carreteros de esa villa Alonso Garrido Rubio, Juan Ruiz Espinosa, Pedro Martí nez Vázquez, Patricio Donayre, Francisco Serrano, Antonio - Olivares Baptista y Roque Kiménez a fin de que un tal Baz- quez, aparte de solicitar el indulto de las denuncias ya - mencionado, pida nuevas condiciones de trabajo "... porque la Real Hacienda no asegura las carretas durante el imbier no" y piden que "las cosas queden en el tono, arreglo, ser y estado que han llevado las carreterías de Linares y otras, como son Cartagena, Sevilla, Pinilla, Madrid y Mancha, con arreglo a la ordenanza y ley establecida del reyno (2). Y - piden lo que hoy se llamaría un "plus" de peligrosidad:

"... bien que en la sierra, por el más peligro e intra- table caminata es de tener algún más aumento (sic), y - libertades, como se deja considerar: entendiéndose que las maderas se regulen por codos, o cargos, teniendo - los peritos con mapas y yerros acostumbrados (3), con los gruesos, latitud y longitud y expresando el más o menos sitio peligroso en que el alle la construcción de dicha madera, a prudente regulazión..." (4).

Este panorama de opresión que supuso el establecimiento de un aparato administrativo que debía dar cumplimiento

(1) Certificado de Prudencio María Pichardo, Ministro prin- cipal de Marina y Montes de la Provincia de Segura y -- subdelegado del Real Negociado (27-agosto-1817).

(2) Archivo Notarial de Orcera, Protocolo del año 1780.

(3) Idem.

(4) Idem.

a una verdadera expropiación se completaba por la actuación de la guardería forestal. En la visita de Montes efectuada por Josef Antonio Ruiz, subdelegado en propiedad de Marina y Montes de la villa de Iznatoraf y su partido, como Juez - interino de la ciudad de Alcaraz, en el año 1796, aparecen los cargos que luego se repetirán contra los guardas: 1º - Aceptar sobornos de los ganaderos, en especie, saliendo a pedir y recibiendo en relación con el número de cabezas, -- mandando por cereales a las eras, recibéndolos de los cosecheros; 2º Permisión, mediante dinero, de cortas de ramas y desmoche para el ganado y 3º, Gorronería en varias formas.

En la Representación al Rey que hace el Ayuntamiento de Villaverde (24 de octubre de 1773) se habla del

"... absoluto dominio de los Ministros y dependientes de Marina que tenían a las Justicias amedrentadas, como a las demás gentes, y aún temORIZADAS; pues sucedía que los guardas de Marina se solían constituir en un pueblo con capa de celar y afectando destrozos y cortas hechas por los vecinos les amenazaban con que los habían de denunciar y aún conducir presos a Segura, por cuyo medio conseguían su manutención de vecino en vecino y por último se componía y cubría cualquier exceso, corta o tala con que por estos se contribuyese a dichos guardas con las cantidades de maravedises que refieren los testigos de varios casos particulares y señaladamente los que fueron examinados por las Justicias de Cotillas y Riopar..." (2).

- (1) Papeles del Auditor Olivares. Visita a los montes de - Alcaraz.
- (2) Archivo de Simancas. Sección Secretaría de Marina. Legajo 576.

Esta "constitución" de que habla la representación en la que refiere también cómo los guardas "voceaban" por las calles las denuncias que traían para causar ese temor, parece cierta porque concuerda con lo que dice la representación al Rey de "El Concejo, Justicia, Regimiento, Diputados y Procuradores síndico general y pregonero de esta villa de Santiago de la Espada", que, con fecha enero de 1780, recoge una imagen similar

"...se hallan rígidamente procesados (algunos vecinos) en dicha subdelegación, presos muchos pastores, mandados prender otros y comparecer a sus dueños, destacando para ello con estrépito escandaloso diferentes carterbas de guardas, auxiliados de Ministros y otras personas asociadas..." (1).

La amenaza de sanciones que desemboca luego en un -- cohecho se da también en niveles más altos: Por oficio del subdelegado de Yeste, Andrés Quijada, al Ministro en Segura, Camacho, de fecha 16 de junio de 1829, le comunica que los guardas de Montes de las villas de Ayna y Elche (de la Sierra) se le han presentado repetidamente para que, como juez del ramo más inmediato, les acoja las reiteradas quejas sobre "el ningún interés con que las Justicias miran sus reiteradas denuncias sobre los desórdenes que se producen en las continuas talas y quemas..." (2). En virtud de esta comunicación decreta el Ministro de Marina que el Auditor de la Providencia examine el expediente y en su visita se sirva acordar la providencia que en justicia corresponda.

(1) Archivo de Simancas. Sección Secretaría de Marina. Legajo 576.

(2) Papeles del Auditor Olivares.

El dictamen del Auditor es que

"debe hacerse un exactísimo reconocimiento de los montes de las citadas villas de Elche y Ayna para depurar la certeza de los daños... para deducir el cargo - que aparezca contra las enunciadas Justicias y que experimenten el justo castigo de su indolencia y criminal - apatía... También debe justificarse la conducta de los guardas pues de nada vale que ellos digan que no se les han admitido las denuncias y que no se han presentado a este Ministerio por la larga distancia que media...pues bien pudieron dirigirlas por el correo ordinario. Conozco, señor Ministro, se necesita adoptar medidas agrias para enfrenar varios pueblos y personas particulares... que se han entregado a toda clase de excesos... por lo que urge la evacuación de los extremos que dejo indicados, y como quiera que yo estoy animado de un verdadero celo y deseo poner en orden cuanto esté a mis alcances, conociendo que la ejecución de lo expuesto es bastante delicado por lo que pueda presentarse, desde luego estoy dispuesto en obsequio del servicio, a encargarme de la ejecución de todo lo dicho, pasando a las enarradas villas, acompañado del escribano auxiliar de este tribunal, del Alguacil mayor y delineador del mismo, con dos dependientes dél, y exigido cumplimiento de precitadas Justicias proceder a la práctica de ellos..." (1).

De conformidad con el dictámen, el Ministro decreta - que quede al cuidado del Auditor el cometido de que se trata "para que con el pulso, prudencia y tino que corresponde, lleve adelante el proyecto indicado y pueda conseguirse el

(1) Papeles del Auditor Olivares. Proceso por cohecho.

laudable objeto que se ha propuesto, tan interesante al servicio de S.M." (1).

Se traslada el Auditor, con el aparato que solicita, a los pueblos de Ayna y Elche a dilucidar los extremos referidos en el oficio del Subdelegado de Yeste. El resultado, después de diferentes testimonios y diligencias, está reseñado en el Auto de 29 de agosto de 1829 en que el Auditor - concluye que no puede hacerse cargo alguno a las Reales Justicias, ni tampoco a los guardas celadores "porque cumplieron con su deber, constando así mismo no haberse tolerado - exceso alguno... acordó su merced declarar por concluída su comisión y regresarse el día de mañana a la capital". (2).

Este auto encubre en realidad un cohecho en el que -- han participado los miembros de la Comisión que ha persibido (el Auditor, el Escribano auxiliar y el Delineador) 601 reales del labrador Francisco Córcoles por haber sembrado - en el sitio Rambla de la Cantera y cuatro mil seiscientos - cuarenta de los Alcaldes desde 1826 al 1828 inclusive. El - asesor de Alcaraz se encarga de examinar el expediente de la visita, por delegación del Ministro que tiene otras ocupaciones, y encuentra serios reparos que le hacen hablar de confabulación y simulación en los expedientes, por lo que - propone se amplíen las diligencias con nuevas declaraciones de los guardas y diligencias que cubran diversos datos, mediante reconocimientos de los terrenos incendiados, etcétera.

El ministro lo acuerda y, después de un largo proceso, resultan condenados por cohecho el Auditor, el escribano y

(1) Papeles del Auditor Olivares.

(2) Idem.

auxiliar (que era el que percibía directamente el dinero) y el delineador. A pesar de que ellos habían hecho firmar a los alcaldes un auto de oficio en el que declaraban que a la Comisión "no se le habían franqueado cantidades algunas por vía de cohecho, y sí por multas y dietas...". (1).

En un auto asesorado que firma el asesor de Alcaraz, - junto con el Ministro Camacho, por ante el escribano, se re vela el fin de este proceso:

"... se sacarán otros dos testimonios en prolija relación de todo lo actuado por la Comisión del señor - Auditor, y hasta el folio 33, y literal de lo restante hasta el día... para ser elevados, uno a la vía reserva da de Marina, y otro al Exmo. Capitán General del Departamento a fin de que les coste la formación de esta causa acordada con el objeto indicado de satisfacer a las leyes, y al igual tiempo a la vindicta pública; no menos que con el de darse una prueba de integridad a los habitantes en la provincia, quienes casi desde el estableci miento del juzgado p**ri**blegiado de Montes de Marina, lo murmuran e inculcan y mucho más a sus dependientes de - estafadores y auxiliadores de los excesos en el arbolado por cohechos y rapiñas..." (2).

Esto se dice el dieciocho de octubre de 1829, cuando la jurisdicción especial lleva ochenta años de funcionamiento y ha mediado el decreto de las Cortes de Cádiz de 14 de enero de 1812 que la suprimió por primera vez, el restablecimiento de 1814, la renovación del decreto de 1812 y la --

- (1) Papeles del Auditor Olivares.
(2) Idem.

postrera resurrección del Tribunal en 1823. Cuatro años después de este auto, en el que se confiesa una tardía intención purificadora del proceso, cesará definitivamente el régimen, aunque las actuaciones del Ministerio en Orcera se prolongarán hasta agosto de 1836.

Ya es tarde para todo, como dice Fernández de Navarrete

"la lectura del informe de don Tomás Muñoz me excusa del disgusto de entrar en la pintura de éstos y - otros desórdenes semejantes, hijos unos de la ignorancia del fraude y del cohecho, y otros del abandono, de la desidia y de la falta de interés... y es fácil deducir de los hechos anteriores cuánto han debido contribuir a la mengua y ruina de estos montes desórdenes tan continuados y escandalosos. También ha contribuido a producirlos y perpetuarlos la falta de unidad en el mando y sistema de gobierno, que era incompatible con la multitud de jurisdicciones y autoridades que han oprimido este partido; resultando de aquí las competencias, disputas, odios, personalidades, procedimientos judiciales, compromisos, y ruina de familias, de que dan claro y triste testimonio tantos expedientes y procesos como existen en los tribunales y archivos del ministerio".(1)

El saldo no puede ser más penoso, sobre la ineficacia, la ruina de unas comunidades, el despojo del pueblo (sin demagogia alguna) en beneficio de una Administración inepta y corrompida. No parece exagerada la lamentación, jeremíaca - en la forma, de Juan de la Cruz Martínez que dice en su "memoria" cuando se refiere al establecimiento del Ministerio:

(1) Expediente sobre régimen y administración de los montes de Segura. pág. 97.

"Un gobierno inepto, egoista, incapaz, precisamente anheloso de mejorar su situación la empeoró terriblemente y esparció el luto y la desolación en las risueñas márgenes del Guadalabiad. Los montes, los preciosos arbolados de este territorio fueron presa de este gobierno fatalísimo; y este acto fué un soberano escándalo, - porque ocupó lo que por derechos santos y legítimos pertenecía a las villas del partido y les arrancó por la ley de la fuerza y la violencia lo que de inmemorial poseían, y disfrutaban quieta y tranquilamente, y, formaba la base de su primera y colosal riqueza.

"Entonces se lanzó un horroroso anatema a los sencillos, buenos y honrados labradores y pastores del antiguo municipio; entonces se estableció el Ministerio de Marina en Orcera, y la provincia marítima de Segura, y entonces empezaron a correr largamente las lágrimas - de los habitantes de los Alpes españoles, y comenzaron los duelos y los infortunios." (1).

Porque ni siquiera a sus propios servidores supo tener contentos este rígido organismo. En el proceso de cohecho contra el auditor, escribano y delineador, el segundo pide compensación por los sueldos que le adeudan. Al asesor, luego auditor, Olivares, que emplea fondos del Tribunal en atenciones propias, se le apremia aunque sus créditos por sueldos superan lo empleado. A pesar de sus largos servicios al tribunal, reconocidos cuando se ordena que lo dejen tranquilo. Una viuda y una hija de guardas de la Marina no consiguen cobrar sus pensiones y cuando lo reclaman al Ministro de Marina y Montes Antonio Ximénez Camacho (año 1829)"

(1) Memoria Historia del partido de Segura pág. 77

que son diez y ocho meses a razón de dos reales diarios no consiguen más que desayres y malas expresiones del citado Ministro y biendo infructuosas quantas gestiones han hecho y no queriendo exponerse a ser sofocadas otra vez por el - supradicho Ministro, no les queda otro recurso que acudir al Trono de S.M. suplicando que por efecto de su bondad se digne mandar se les satisfaga a las suplicantes lo que tan justamente reclaman..." (1).

El Jiménez Camacho "empapela" a las dos pensionistas acusándolas de injuriarle y ellas en seguida se retractan de su representación, afirmando que el dicho Ministro nunca había tenido con ellas "desaires ni las habían intimidado con su genio altivo y orgulloso", sino que les había dicho que no había dinero en los fondos de Marina. El proceso incluye declaración del hijo de una de las solicitantes, de trece años, que había leído un borrador de la representación o recurso; exhorto al comandante del Batallón de Voluntarios Realistas para que haga declarar a su sargento, presunto escritor del recurso sobre un borrador de otra persona. El borrador se hace en Orcera, se remite a dicho comandante en Segura por medio de un presbítero de Santiago de la Espada y lo escribe finalmente el citado sargento. Es una pequeña conspiración contra el Ministerio de Marina en la que participan gustosamente una serie de enemigos -- del Ministerio.

El hecho debe ser cierto porque también el asesor Olivares, y sus descendientes sufren el rigorismo del Ministerio y también en este caso se aduce haber caudales suficientes en los fondos del mismo para atender tales pagos.

(1) Papeles del Auditor Olivares.

Antes, los familiares de los que servían al Ministerio tampoco tuvieron una situación muy brillante. En el año 1774, Francisca Xaviera Zorrilla, viuda del Guarda Mayor, - Joseph Díaz de Miranda, pide algo para aliviar su situación y se le concede, "por vía de limosna", cuatro pagas de real y medio, por una sola vez. En 1776, María Ximénez, viuda de Francisco Ximénez Román, solicitaba "algún alivio a su extrema pobreza". Se le concede, también como limosna, una paga por una sola vez". (1).

Así pues la función social del Ministerio de Marina, del Tribunal de Montes de Marina, fué causar la desolación y la ruina, promover conflictos, posibilitar cohechos, parasitismos, opresión, delitos, condenas y destierros. Ese fué su saldo.

No parece, pues exagerado lo que en las Cortes se dice sobre lo que supuso para agricultores y ganaderos la actuación de este organismo. Así dice el dictamen de Agricultura sobre el asunto:

"Los pueblos han sufrido visitas, denuncias, condenas, estafas y vejaciones de toda especie..." (2).

Es curioso señalar, que en todo lo que se habla del asunto, la palabra más usada es "vejación". Aparece continuamente en los escritos de los pueblos como Santiago de la Espada, en las manifestaciones de Cazorla, Villaverde, etcétera, en las sesiones de las Cortes.

"Los labradores -continúa el dictamen- han visto -- arrebatarse sus cosechas y aún el resto de sus bienes por -

(1) Archivo de Simancas. Sección Secretaría de Marina. Legajo 576.

(2) Dictamen de la Comisión de Agricultura. Sesión de 17 de oct. 1811. Diario de Sesiones pág. 2435

haber sembrado en tierra de rozas y quemado al darles fuego algunos árboles contra su voluntad" (1).

En el Archivo Notarial de Orcera consta un poder otorgado por un labrador para que lo difiendan en una denuncia por sembrar en terreno quemado de hacía muchos años. (2).

La suspicacia, o la codicia, de los funcionarios se traduce en otra manifestación que señala también el dictámen:

"...si una tempestad o huracán destruye y arrasa algunos árboles, se ve precisado a diligencias judiciales que lo acrediten, porque de omitirlas se vería expuesto a sufrir una denuncia y las vejaciones consiguentes a ella..." (3).

Otra vez la palabra vejación, que parece, por los datos concordantes, la justa, dado el espíritu de los funcionarios encargados de aplicar la Ordenanza.

Este párrafo citado termina con otro de cierta belleza literaria:

"...conjurándose así en su daño las desgracias del cielo con las injusticias de la tierra." (4).

Todo el peso de la prepotencia administrativa, dirigida a conseguir un fin, esterilizado luego por la ineficacia, el cohecho y la tiranía, cae sobre los que han tenido la des

(1) Dictamen de la Comisión de Agricultura. Sesión de 17 de oct. 1811. Diario de Sesiones pág, 2435.

(2) Archivo Notarial de Orcera. Protocolo del año 1777.

(3) Dictámen de Agricultura. Sesión de las Cortes de Cádiz 17 diciembre 1811. Diario de Sesiones pág. 2436.

(4) Idem.

gracia de vivir en los bosques o en sus cercanías. Ni los accidentes de la naturaleza pueden detener esa voluntad de clase de hacer que se logre algo:

Ni siquiera la nimiedad del daño o su involuntariedad. Dice, en las mismas Cortes al diputado González:

"Señor, yo he sido testigo ocular de casos tan es candalosos en este particular, que he visto familias - perdidas por cortar un madero que acaso no valía veinte reales". Por lo mismo soy de opinión que se apruebe el dictámen de la comisión, dándole aún más ensanche si - fuera posible". (1).

Ante este cúmulo de desgracias que conlleva el ser -- simple vecino o habitante de los montes, la reacción humana es tratar de librarse de la circunstancia que las causa. Lo dice el dictamen de Agricultura:

"...Y de aquí ha nacido su indiferencia en el cui dado de los montes, porque debiendo ser para ellos un - fundamento de riqueza y prosperidad, los miran como manantial, perenne de desgracias... Así es que alguna vez ha llegado su despecho a ver con indiferencia abrazarse los montes comunes, o talarlos con sus propias manos, y preferir que los suyos propios quedaran incultos, al -- riesgo de sufrir vejaciones y condenas, y el resultado es verse la ganadería privada del fruto del arbolado y la labranza de excelentes tierras que, cubiertas ahora de malezas, sirven de abrigo a las fieras y otros anima les que destruyen los ganados y sementeras contiguas". (2)

(1) Cortes de Cádiz. Sesión del 21 de diciembre de 1811. -

Diario de Sesiones pág. 2458.

(2) Dictamen citado. Diario de Sesiones pág. 2435.

En la parte en que se refleja la desastrosa gestión - técnica y económica del Real Negociado de Sevilla y de la - administración de Marina se señalan los múltiples errores, dilapidaciones, cohechos, excesos, malversaciones y todo ti - po de irregularidades cometidas por los funcionarios. Sin - embargo, hay ya, evidentemente, un espíritu de cuerpo a cau - sa del cual los errores de esos funcionarios, aunque señala - dos, no merecen los dictérios dedicados a los particulares.

El almirante Fernández de Navarrete está en la misma línea que los que, en 1812, en Cádiz, suprimieron la juris - dición especial de Marina. Dice el mismo, sin embargo:

"Así ha sucedido en los montes de Segura, donde - aún antes de establecerse jurisdicción del Gobierno, los naturales derribaban arbitrariamente y sin regla ni co - nocimiento alguno cuantos árboles les dictaba su antojo o su codicia, comerciaban con ellos libremente como si fueran propios por todos los pueblos del curso del Gua - dalquivir hasta Córdoba y la provincia de la Mancha; y aunque con el objeto de contener estos desórdenes toma - ron las jurisdicciones de Hacienda y Marina varias provi - dencias que parecían oportunísimas y convenientes, fue - ron tan ilusorias e ineficaces como demuestra la expe - riencia, y como debén serlo atendiendo a que lejos de - promover y acrecentar el interés particular le oprimían y sofocaban en su mismo origen". (1)

Y más adelante:

(1) Martín Fernández de Navarrete. Reflexiones sobre los - montes de Segura... pág. 88.

"...y mientras los carreteros y tragineros cortaban en Segura arbitrariamente maderas y comerciaban con ellas, los mismos ganaderos y labradores del país talaban y quemaban impunemente los montes para proporcionar se unos terrenos donde pastasen sus ganados y los otros donde poder sembrar y aprovecharse de los beneficios de la labranza" (1).

Esta actuación irregular de los habitantes de la Sierra de Segura merece del comentarista la calificación de codiciosa y de sórdido interés. El despilfarro que supone el que la Marina corte mal, el Negociado desperdicie árboles grandes que podrían servir para la Marina y ésta abandone en el monte miles de troncos y, siempre, desaproveche las copas de los árboles, el ramaje y los tocones, no le sugiere calificaciones tan graves; igualmente, cuando cita el informe del ingeniero Tomás Muñoz sobre "estos y otros desórdenes semejantes, hijos unos de la ignorancia, del fraude, y del cohecho, y otros del abandono, de la desidia o la falta de interés", estas tremendas palabras que califican una actuación pública (ignorancia, fraude, cohecho, abandono, desidia y falta de interés), no le sugieren emplear expresiones parejas, en dureza, a las que usó para la actuación de los particulares. "La lectura del informe -dice- me excusa el disgusto de entrar en la pintura de estos y otros desórdenes..." (2).

Tampoco las "disputas, odios, personalidades, procedimientos judiciales, compromisos y ruina de muchas familias"

(1) Martín Fernández de Navarrete. Reflexiones sobre los montes de Segura... pág. 89.

(2) Idem. pág. 97.

que causa la multitud de jurisdicciones y autoridades, llega a sugerirle unas invectivas contra el sistema y, sobre todo, los funcionarios que han sido su causa directa. Ahí, aunque lo repudie, Fernández de Navarrete guarda cierta compostura y expone razonamientos técnicos, no juicios despectivos.

Es curioso también leer lo que el Ministro de Marina, Mazarredo, dice en su contestación al ministro secretario - de Estado el 25 de enero de 1811:

"...ya sea por Marina o por cualquier otra dependencia, los montes comunales y reales necesitan severísimas ordenanzas con la espada del castigo levantada - contra toda dilapidación... y ... no quedará la cosa en la luz necesaria hasta la oportunidad de tener a mano a alguno de los dichos don Josef Rodríguez Camargo o don Domingo Delfino, que han trabajado con tan loable constancia y celo en aquel encargo (comisarios por Marina - larguísima años en los montes de Segura" (1).

Curioso porque el citado Delfino que trabajó "con tan loable constancia y celo", según Mazarredo, es citado en el informe del Fiscal del almirantazgo, don Joaquín Delacroix y no adornado de excesivas virtudes ya que su figura es utilizada por el Negociado, organismo rival, como ejemplo de la mala administración de la Marina y la conveniencia de que - se reúnan en el primero las facultades de ambos:

"Nada prueba contra la utilidad de la separación, ni en favor de su reunión en manos del Negociado (emancipando la Marina los más preciosos montes que posee)

(1) Expediente sobre el régimen y administración de los montes de Segura. pág. 3.

la buena o mala conducta de Don Domingo Desfino..." (1)

El mismo citado Fiscal después de hablar de los graves fallos de ambos organismos se detiene en los daños causados por los particulares:

"Nadie más convencido que el Fiscal de los destrozos que han sufrido los montes por las cortas de los particulares, talas, fuegos y descuajo a que dieron lugar - las llamadas Cortes generales con su exterminador decreto de abolición de las ordenanzas de 1748..." (2).

Cuando aparece claro que lo más exterminador fue la actuación de ambos organismos desarrollada, principalmente, - con anterioridad al "exterminador decreto".

Es curioso señalar cómo una de las personas que aparecen como "taladores" de montes en Santiago de la Espada, Antonio León de Lara, sostenía pleito por la propiedad escriturada a su favor de terrenos en los que había montes, como - consta de un poder otorgado a procuradores por el mismo en - 17 de marzo de 1779, ante el escribano de Orcera (3).

Y este pleito se ha planteado en base a otro similar - interpuesto por Diego de los Rios en connivencia con el Ministro de Marina, Juan Pichardo, en contra del principio, constante a través de la historia secular de la Mancomunidad de Segura y su tierra, de que los bosques pertenecían al común. De manera que los funcionarios, al tiempo de quejarse y plañir, cooperaban a despojar, de acuerdo con despabilados particulares, a los vecinos de sus derechos. Por el medio indi-

(1) Informe del Fiscal del Almirantazgo. Museo Naval. Ms.443 Hoja 413.

(2) Idem. hoja 413 v.

(3) Archivo Notarial de Orcera, Protocolo del año citado.

recto de conseguir mandamientos de pago del lejano Intendente del Departamento, se intentaba cobrar los pinos cortados por la Marina que sólo debían pagarse a la villa. Creo claro que, al tiempo de hacer negocio, se buscaba debilitar al contrario en la lucha jurisdiccional y política entre la Mancomunidad y el organismo central. Ambos casos, el de Diego de los Ríos y el de Antonio León de Lara, aparecen testimoniados en la representación al rey de Bernabé Picarzo de Almazán, regidor perpetuo de Segura, abogado y asesor durante algún tiempo del Ministerio. (1).

De todo esto resulta que no se consiguió, ni se intentó siquiera, como proponía en sus "Reflexiones", relativamente equilibradas, y bienintencionadas, Fernández de Navarrete, "promover los progresos de la agricultura y el fomento de los montes de un modo que, respetando y extendiendo la propiedad, reúna y estreche del interés de los particulares con el interés general del Estado" (2).

Por contra, a los "abusos" de los carreteros, que no eran tales hasta que la madera cobró un nuevo valor, sucedieron los enormes abusos de los organismos que los cometieron en grande y con el efecto desmoralizador de realizarse cubiertos con la capa del "Real servicio" que disimuló, bajo su amplio vuelo, fraudes, cohechos, ignorancias, malversaciones, opresión, ruina y odio.

Había también un tipo de abuso que señala Antonio José de Cavanilles: "Les hacen sembrar nogales y los multan cuan-

(1) Archivo de Simancas, Sección Secretaría de Marina. Legajo 576. Atado del año 1782.

(2) Martín Fernández de Navarrete. Reflexiones sobre... - pág. 90.

do alguno falta... y lo que tienen los cortan y les dan por ellos cuatro reales cuando producen nueces que valen cien.. .." (1).

Con estos abusos extraordinarios y el cercano ejemplo de unos funcionarios que arrasaban los montes, muchas veces en su propio beneficio, no era de esperar que los serranos se sintieran estimulados a conducta alguna dirigida a la conservación de los bosques.

Además, al menos en un caso concreto, la administración de montes de Marina hizo posible que los forasteros, - ciertos forasteros, gozaran de los montes cuya conservación era responsabilidad que recaía sobre los vecinos:

"Los vecinos de Cazorla y Pozo Alcón -dice el Fiscal militar del Almirantazgo- claman con la mayor amargura, porque siendo ellos responsables de los destrozos de sus arbolados y costándoles tantas denuncias, disgustos y aún vejaciones, el menor descuido en esta materia; ni permitiéndoles hacer una negociación, aun de solos - dos pinos, los Granadinos (especialmente el señor Triviño) que son unos advenedizos tan extraños (respecto a - los vecinos de los referidos pueblos) cortan millares - de árboles para hacerse con ellos poderosísimos, al paso que ellos más y más miserables..." (2).

Quedaba esta pincelada del señor fiscal para tener el cuadro completo. La actuación de estas jurisdicciones especiales puede resumirse, respecto de sus efectos sociales, -

(1) Antonio José de Cavanilles "Historia natural... del Reyno de Valencia" pág. 26.

(2) Informe del Fiscal... Museo Naval. Ms. 443. hoja 405 v.

en la palabra que más frecuentemente aparece al hablar del tema, desde la representación al Rey de los vecinos de Santiago de la Espada, hasta el informe, nada sospechoso, del Fiscal militar del Almirantazgo, pasando por los debates en las Cortes y el discurso del ministro de Marina antes las mismas: vejación.

XVII .- EFECTOS ADMINISTRATIVOS (LA PROVINCIA MARIT
TIMA DE SEGURA DE LA SIERRA)

Una de las consecuencias más sobresalientes de la legislación forestal de 1748 fué, en el plano administrativo, el nacimiento, en la zona estudiada, de la llamada Provincia Marítima de Segura de la Sierra, una de las entidades más extrañas que haya podido conocer la historia de la Administración española. Y, también, de las más absurdas pues no respondía a criterio alguno histórico o estrictamente político, sino al puro y simple de facilitar hasta el extremo la aplicación de la Ordenanza citada, acotando un espacio para la jurisdicción especial comprensivo de partes muy heterogéneas cuya única similitud era tener bosques maderables, teóricamente útiles para construcción naval.

Puede decirse que en esta Provincia Marítima, a trescientos kilómetros del mar más cercano, se encarnó el sueño de cualquier jurisdicción especial de cualesquiera tiempos pues se creó para ella, "ad hoc", una entidad administrativa nueva en la que se ejerciera.

El núcleo inicial de la provincia estuvo constituido por la Sierra de Segura en sentido estricto, es decir el territorio correspondiente al Común, más Yeste y Nerpío, pertenecientes entonces al partido de Segura. Es el ámbito señalado por la Ordenanza de 1748. Ampliado posteriormente con los montes de Alcaraz, por Real Orden de 10 de octubre de 1751, alcanzó su máxima extensión con la agregación de los montes de Cazorla, el llamado Condado (de Santisteban del Puerto, zona comprendida entre el río

Guadalimar y la linde actual de Ciudad Real) y los pueblos pertenecientes al partido de Villanueva de los Infantes: Chiclana de Segura, Beas de Segura, Terrinches, Villamanrique y Puebla del Príncipe, con Albadalejo, perteneciente a Segura.

Dentro, pues, de tan extraña provincia se incluían unidades históricas o administrativas diferentes:

El partido de Segura de la Sierra, constituido por el Común del Val de Segura, más Yeste y Nerpio (hoy provincia de Albacete) y Albadalejo (hoy, Ciudad Real) que pertenecían al partido, pero no al Común. Excepto, al menos no está demostrado que lo tuvieran, los pueblos citados, estaba aforado al de Segura-Cuenca-Teruel.

El Adelantamiento de Cazorla, que incluye villas de diverso régimen. Cazorla, según muchas probabilidades, se regía por el Fuero de Cuenca (1), como Iznatoraf (2) y La Iruela (3). Villanueva del Arzobispo tenía fuero y ordenanzas concedidas por su señor, don Pedro Tenorio, arzobispo de Toledo (4).

El partido de Alcaraz, dentro del cual cabe distinguir dos zonas: Alcaraz y sus aldeas, aforada al de Cuenca (5) y los pueblos de señorío del Conde de Paredes que

(1) Muñoz y Romero así lo cree "Catálogo de Fueros y cartas pueblas" pág. 70.

(2) Ureña y Smenjaud. "Fuero de Cuenca".

(3) Muñoz y Romero "Catálogo de Fueros y cartas pueblas". pág. 115.

(4) Idem. Idem. pág. 284.

(5) Idem. Idem. pág. 11.

son Bienservida, Cotillas, Riopar, Villapalacios y Villaverde del Guadalimar, de los cuales éste último al menos tenía derechos de aprovechamiento tallar comunal que subsiste aún hoy.

El Condado de Santisteban del Puerto, perteneciente a la casa de Benavides que comprende el pueblo cabeza, el de Castellar de Santisteban y la aldea de las Navas. Santisteban tuvo en algún momento fuero de Cuenca (1).

Pueblos pertenecientes al campo de Montiel, partido de Villanueva de los Infantes, aforados por Cuenca-Segura (2), son Villamanrique, Puebla del Príncipe y Terrinches. Chiclana de Segura y Beas de Segura, incluidas primero en este partido, fueron luego agregadas a Segura, según consta en las Relaciones Topográficas respecto a Beas, de que se dice no estaba especialmente aforada (3) y de Chiclana se afirma tener las escrituras de sus libertades en el Archivo de Uclés (4) y haber sido privada, "que no saben la causa porque su magestad lo mandó", del privilegio de primera instancia (5) y de los dos oficios de es-

-
- (1) Rafael Gibert. Derecho municipal de León y Castilla AHDE 1961 pág. 744.
 - (2) Muñoz y Romero "Catálogo ..." pág 127 y Bernabé de Chaves "Apuntamiento..." fol. 42.
 - (3) Relaciones Topográficas, pág 121 de la edición citada a continuación.
 - (4) Relaciones de los pueblos de Jaén, de Felipe II por I. Luis Rafael Villegas Díaz y Rafael García Serrano, en Revista del I.E.G. núms 88-89. págs 121-122.
 - (5) Idem. Idem. Idem. Idem, pág 129.

cribanía propios del concejo (1). Lo primero diez años antes (1565) y lo segundo dos (1573).

El predominio territorial del Fuero de Cuenca es - claramente apreciable, como se anticipó en la introducción a esta tesis. Hay que señalar, además, el hecho ya citado de que Férez, Liétor y Litur estaban aforados a Cuenca-Segura (2).

En esta nueva unidad administrativa creada se realizaron subdivisiones que según un estado de 11 de marzo de 1780 (3), eran las siguientes:

Pueblos al cuidado del Ministro de la Provincia con la villa de Segura de la Sierra como capital:

Segura de la Sierra, su arrabal Orcera (sede del Tribunal de Montes de Marina), su aldea Puerta; Hornos de Segura; Santiago de la Espada; Nerpio; Férez; Socobos; Letur Ayna; Elche (de la Sierra); Yeste; Siles; Villa Rodrigo; Villaverde; Cotillas; Bienservida; Villa Palacios; Terrinches; Albadalejo; Puebla del Príncipe; Villa Manrique; Beas de Segura; Génave; Torres; Benatae; Bujaraiza.

Dependientes de Segura, se establecieron cuatro subdelegaciones:

La de Alcaraz comprendía las siguientes poblaciones:

(1) igual a la (4) de la pág. anterior.

(2) Bernabé de Chaves "Apuntamiento..." fol. 44.

(3) Archivo de Simancas. Sección Secretaría de Marina. Leg 576. atado año 1780. Reproducido en el apénd. document

La ciudad de Alcaraz; Riopar; Peñas de San Pedro; Lezuza; Bonillo; Villanueva de la Fuente; Barrax; Boga--rra; Munuera y Bazalote.

La de Villanueva del Arzobispo comprendía:

La villa cabeza ; Iznatoraf; Villacarrillo; Sorihuela y Chiclana.

La de Cazorla incluía:

La villa de Cazorla; La Iruela; Quesada; Ynojares; Pozo Alcón y Albánchez.

La subdelegación de Santiesteban abarcaba:

La villa cabeza; Castellar de Santisteban (lugar) y Las Navas (lugar).

En este estado, obra del Ministro de Marina, Juan Pichardo, aparece la provincia en su máxima extensión, ocupando una superficie algo mayor que la actual de Jaén e incluyendo partes de las actuales de Ciudad Real, Albacete y Jaén.

Sufrió después reducciones superficiales:

La primera, de poca importancia, se dispuso en Real Cédula de 13 de marzo de 1775 y consistió en la segregación de la jurisdicción de Marina de un coto de una legua de circunferencia para las fábricas de latón establecidas en el término de Riopar (1). Sin embargo de lo cual, hay

(1) Archivo de Simancas. Sección Secretaría de Marina. Legajo 576.

entre los papeles del Auditor Olivares un oficio del Intendente General de Marina del Departamento de Cádiz, en que se hace referencia a "la esacción de las Multas y Condenas al Director de las fábricas de latón Dn Juan Graubner" (1) y lleva fecha 21 de abril de 1797. El problema era la necesidad de combustible para las fundiciones, en las que se utilizaba madera de encina, que no solucionó el señalamiento del coto arriba dicho.

La segunda, ocurrida entre 1786, y 1790, como consecuencia de una visita del mismo Pichardo, causó la separación de los pueblos de Albaladejo, Terrinches, Puebla del Príncipe, Villamanrique, Albánchez, Barrax, Balazote, Santisteban del Puerto, Castellar de Santisteban, Las Navas y Chiclana de Segura (2). En realidad, era sorprendente que estos pueblos hubieran sido adscritos a esa jurisdicción, ya que carecían de montes aptos para construcción naval. Sorprende también que Pichardo, celoso defensor de su extensión sin medida, fuera, en este caso concreto, agente de la reducción. No se alcanzan los motivos.

Como se advierte, haya un claro predominio de los ámbitos regidos por fueros de la familia Cuenca-Teruel. Ello hizo, sin duda, más violenta la ruptura que supuso

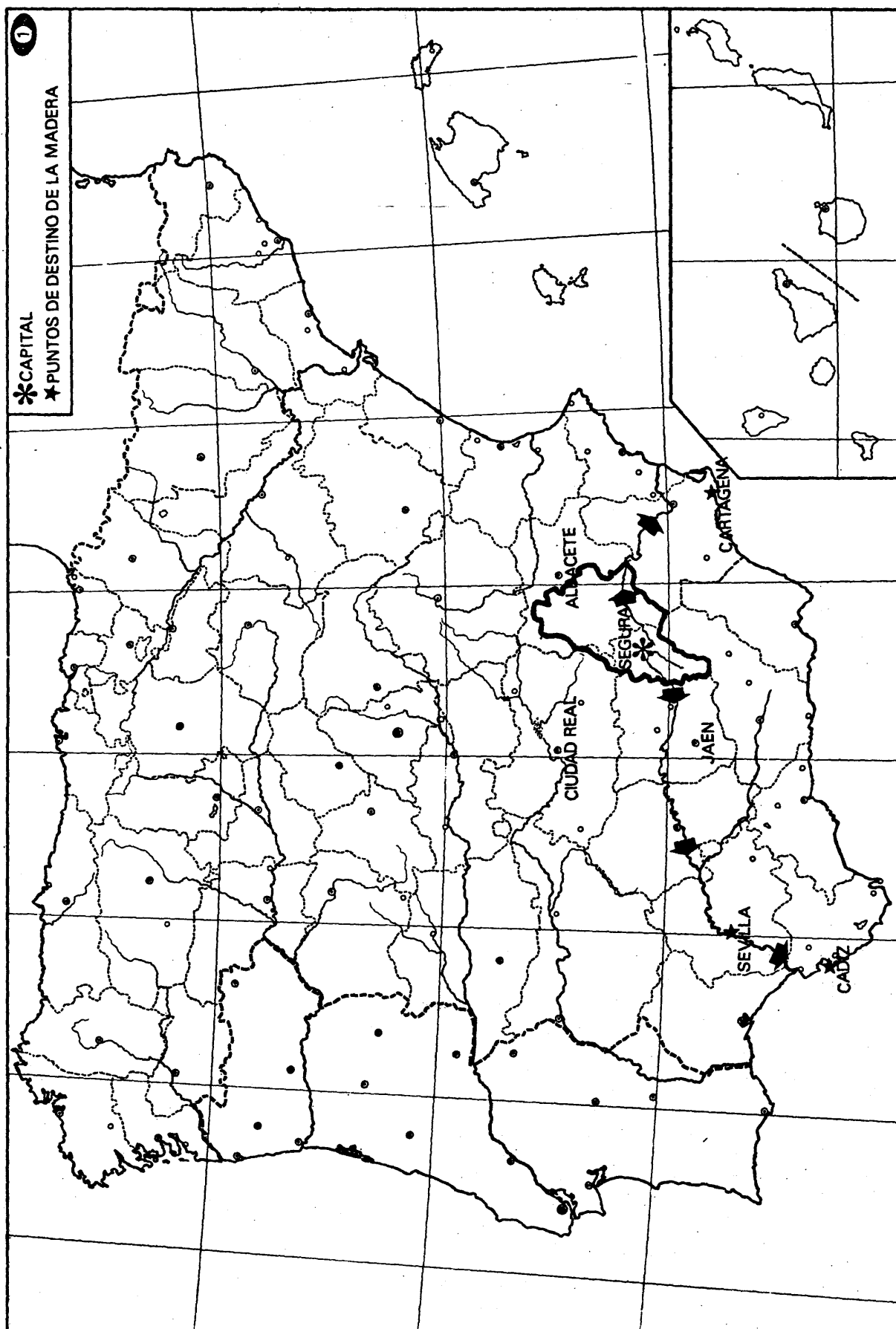
(1) Papeles Olivares. Certificación se servicios..Fol. 1.

(2) Archivo de Simandas. Sección Secretaría de Marina.

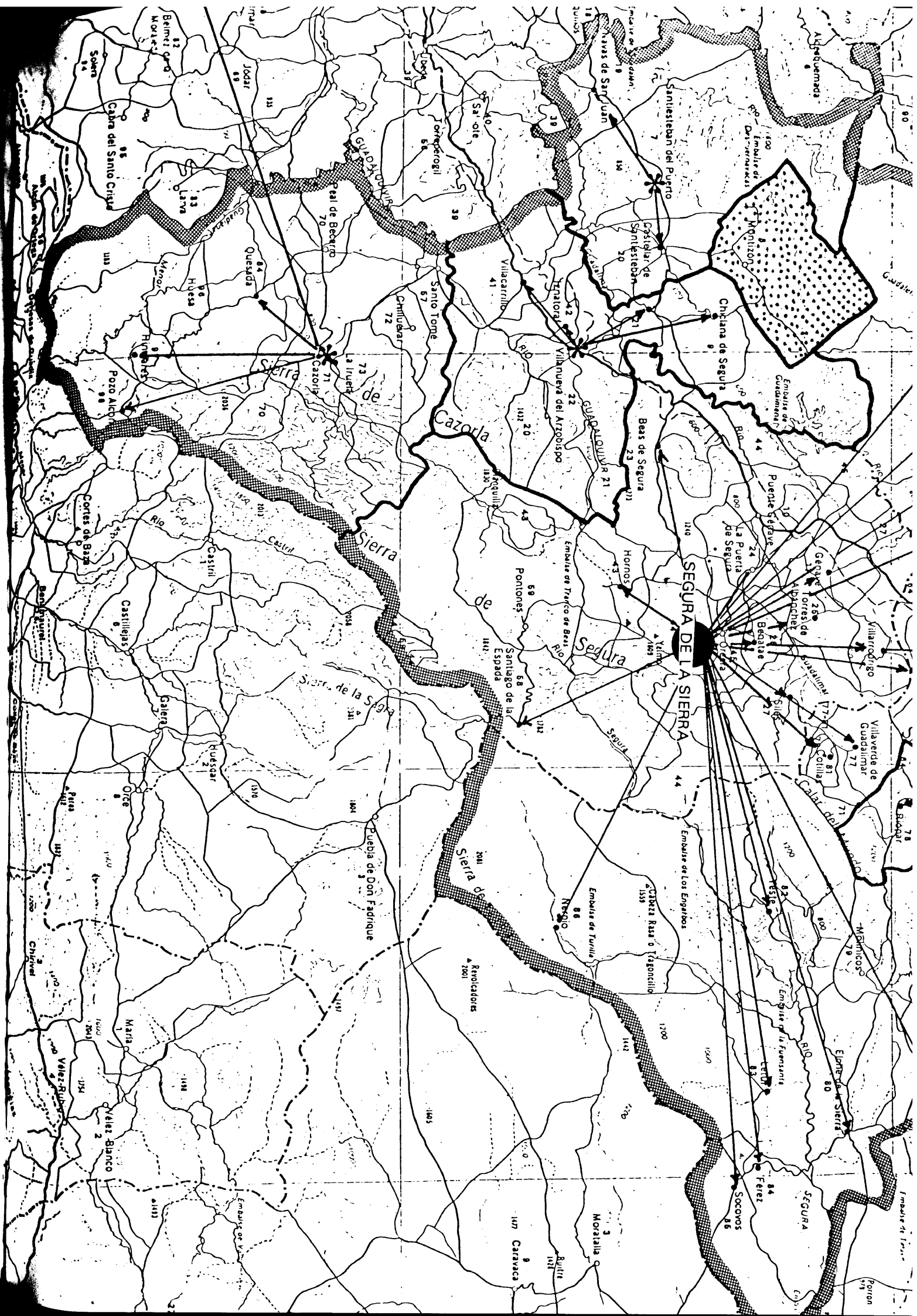
la Ordenanza de 1748, sus complementos y ampliaciones, y debió lógicamente de agudizar el conflicto del que se ocupa esta tesis.

Queda por preguntarse si la formación de esta extraña provincia respondió a la necesidad, sentida, sabida o intuída, de doblegar más fácilmente a los pobladores, respaldados por uno de los fueros más generosos, completos y perfectos de los castellanos.

Hoy ha desaparecido hasta el recuerdo de aquella secular entidad administrativa. Sólo queda, en Orcera, el caserón deshabitado que fué sede del Tribunal de Montes de Marina.

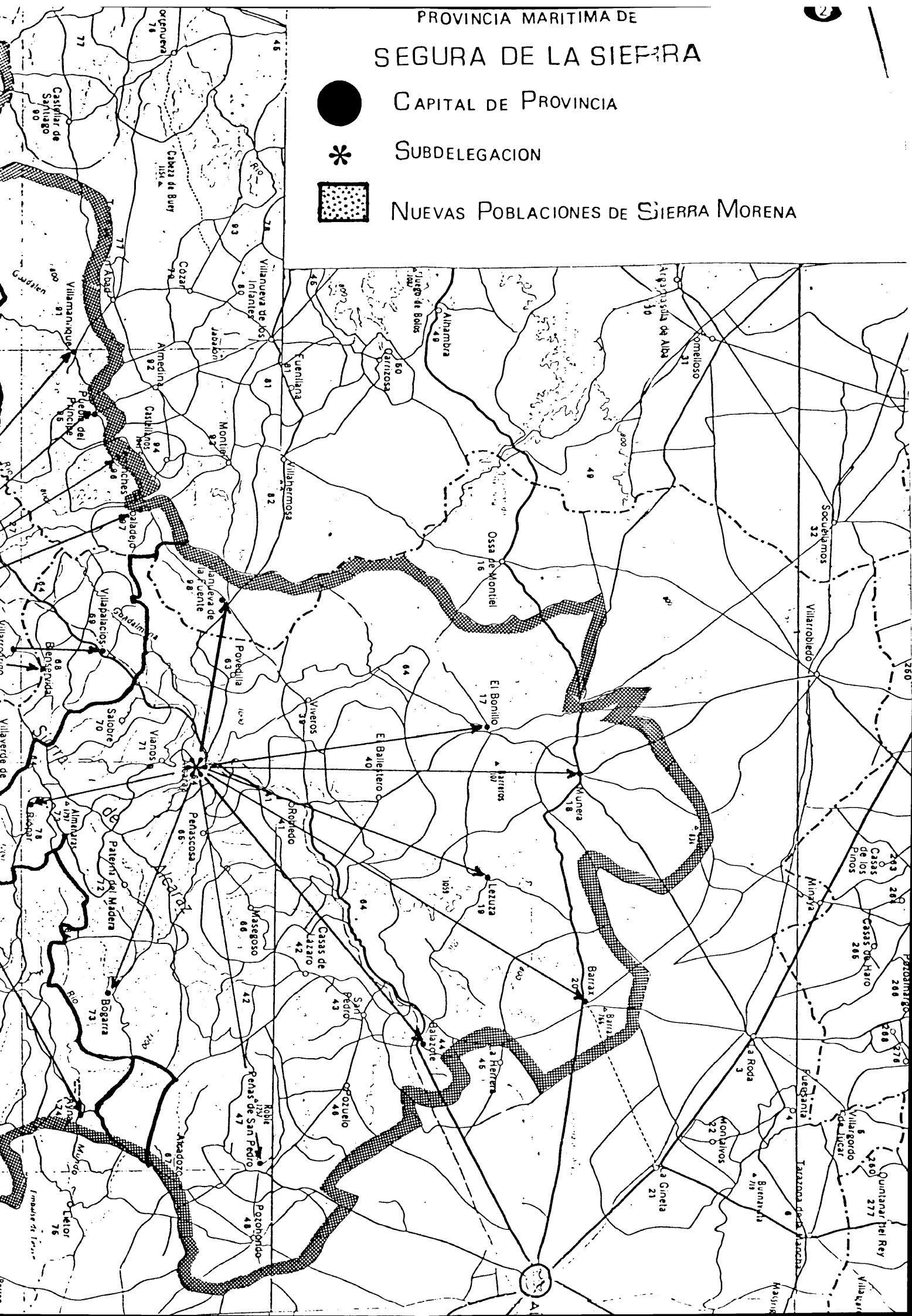


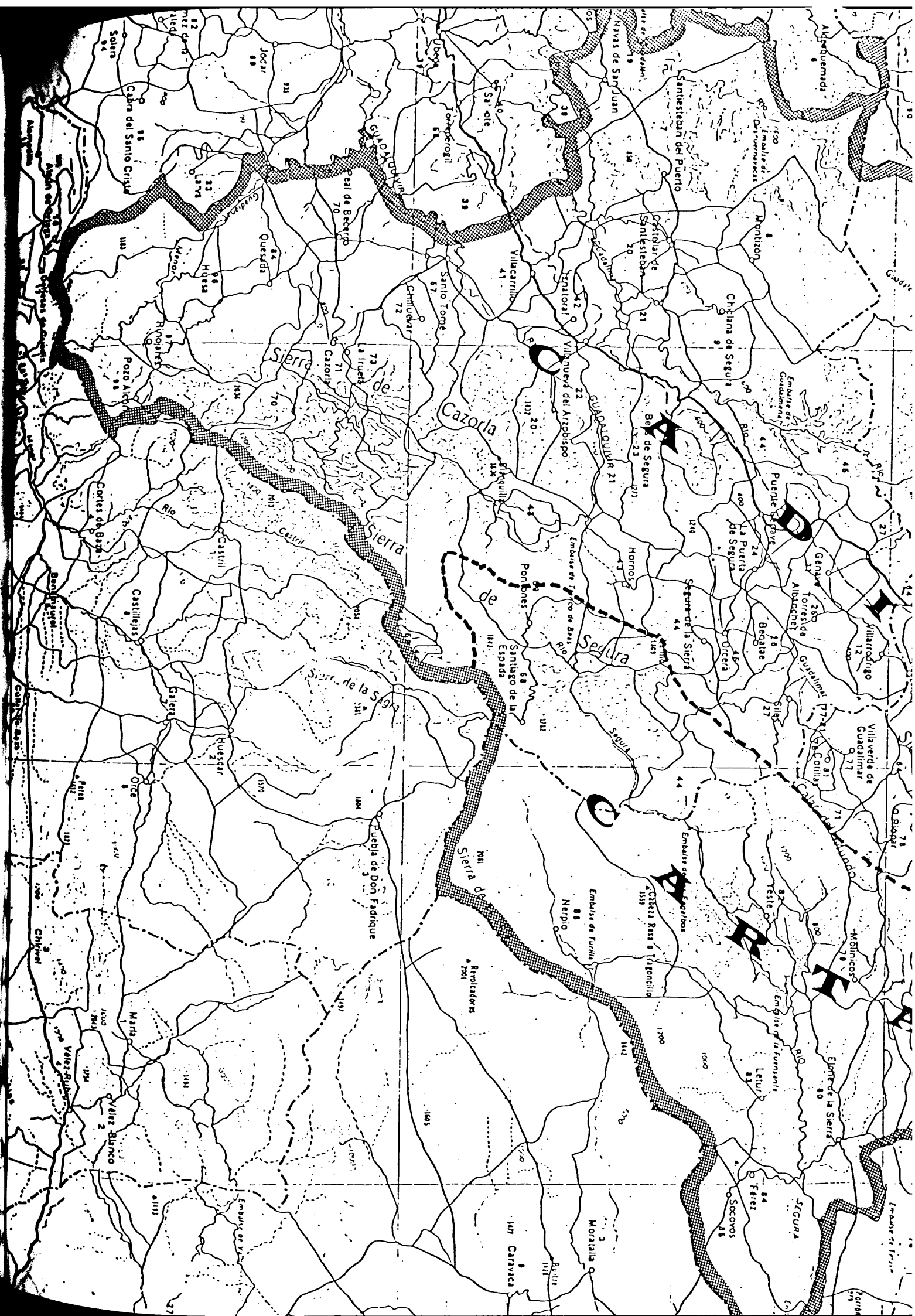
PROVINCIA DE SEGURA DE LA SIERRA
(SITUACION)





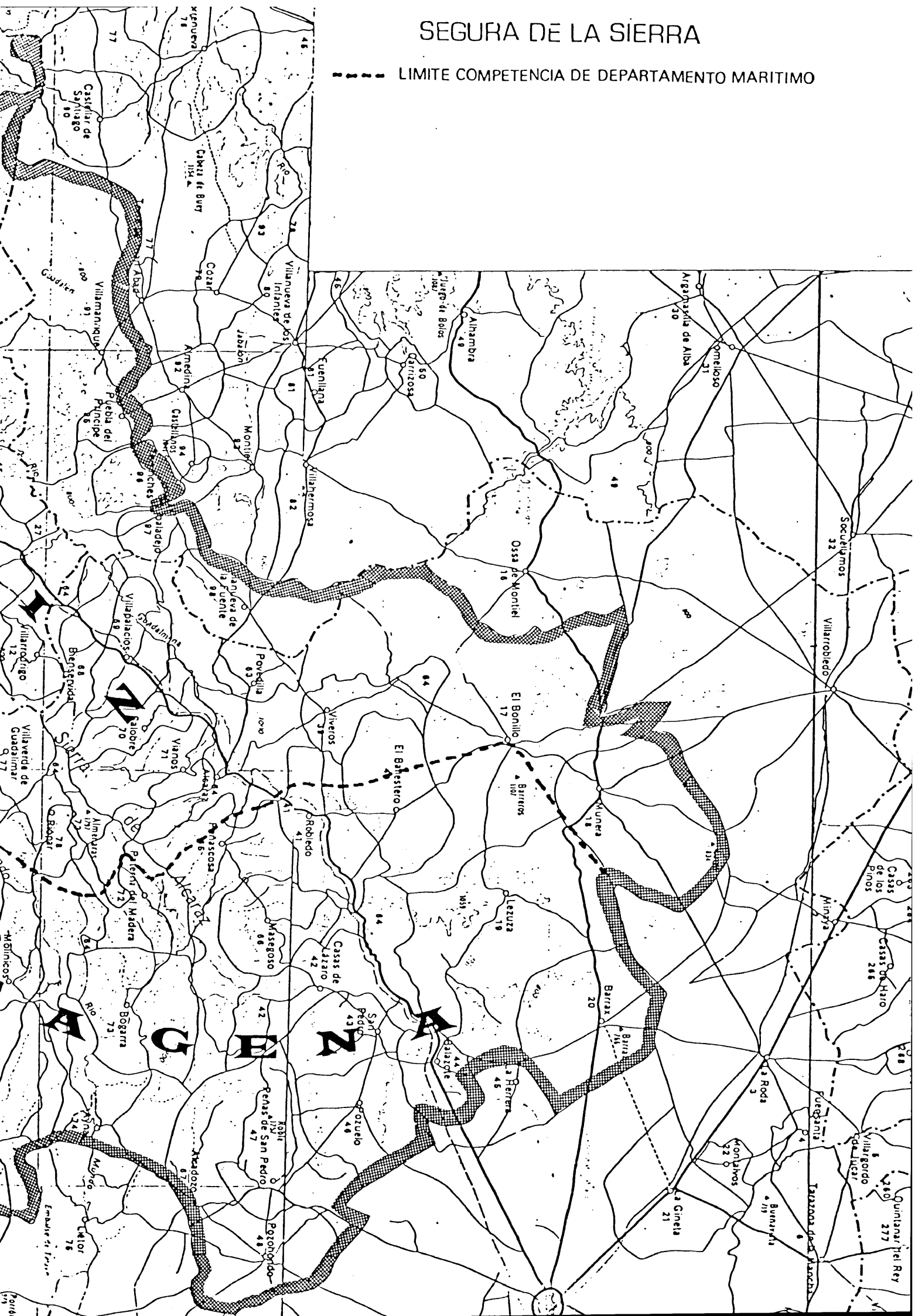
NUEVAS POBLACIONES DE SIERRA MORENA

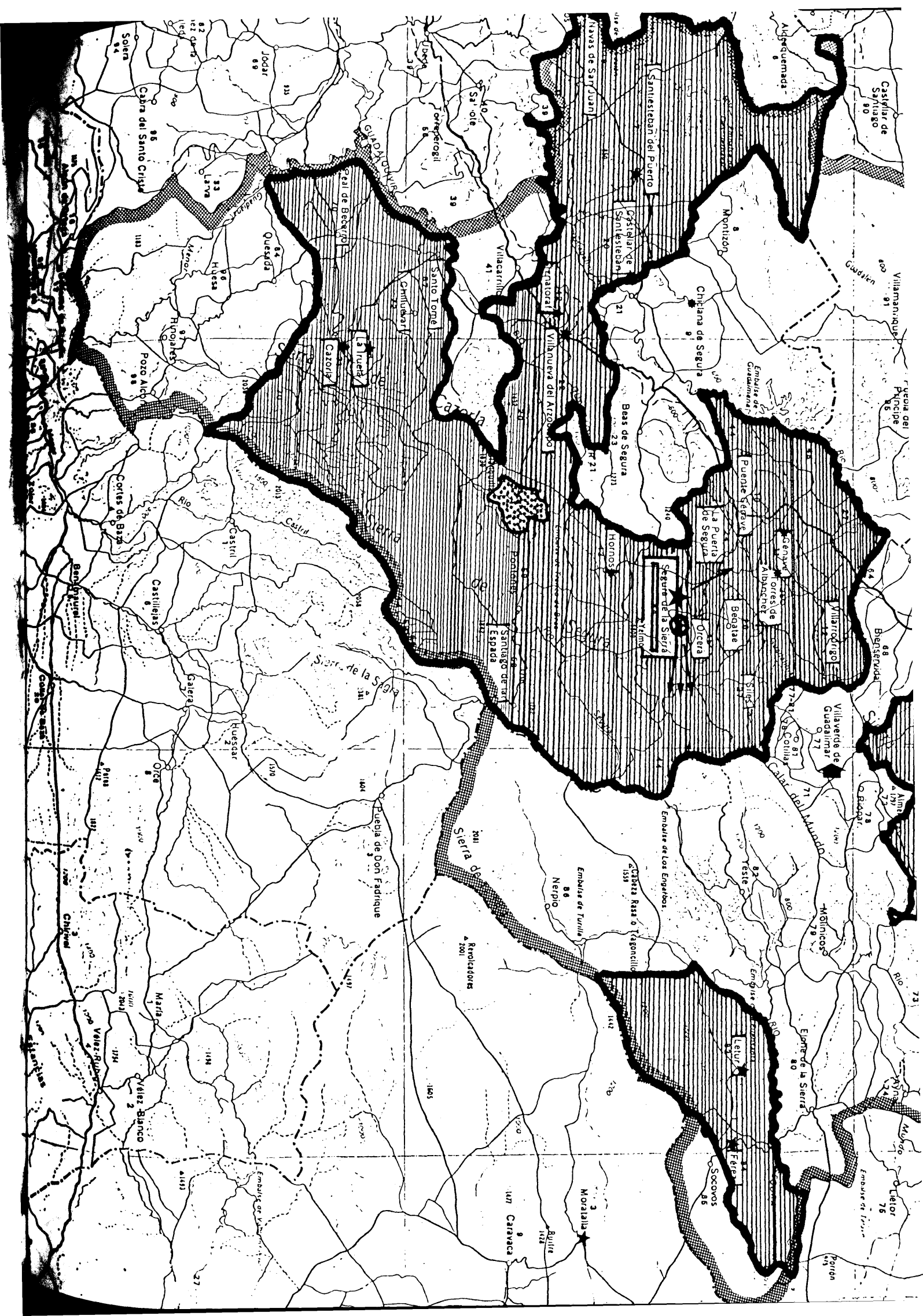




SEGURA DE LA SIERRA

--- LIMITE COMPETENCIA DE DEPARTAMENTO MARITIMO

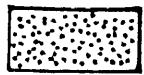




SEGURA DE LA SIERRA



FUEROS FAMILIA CUENCA-TERUEL



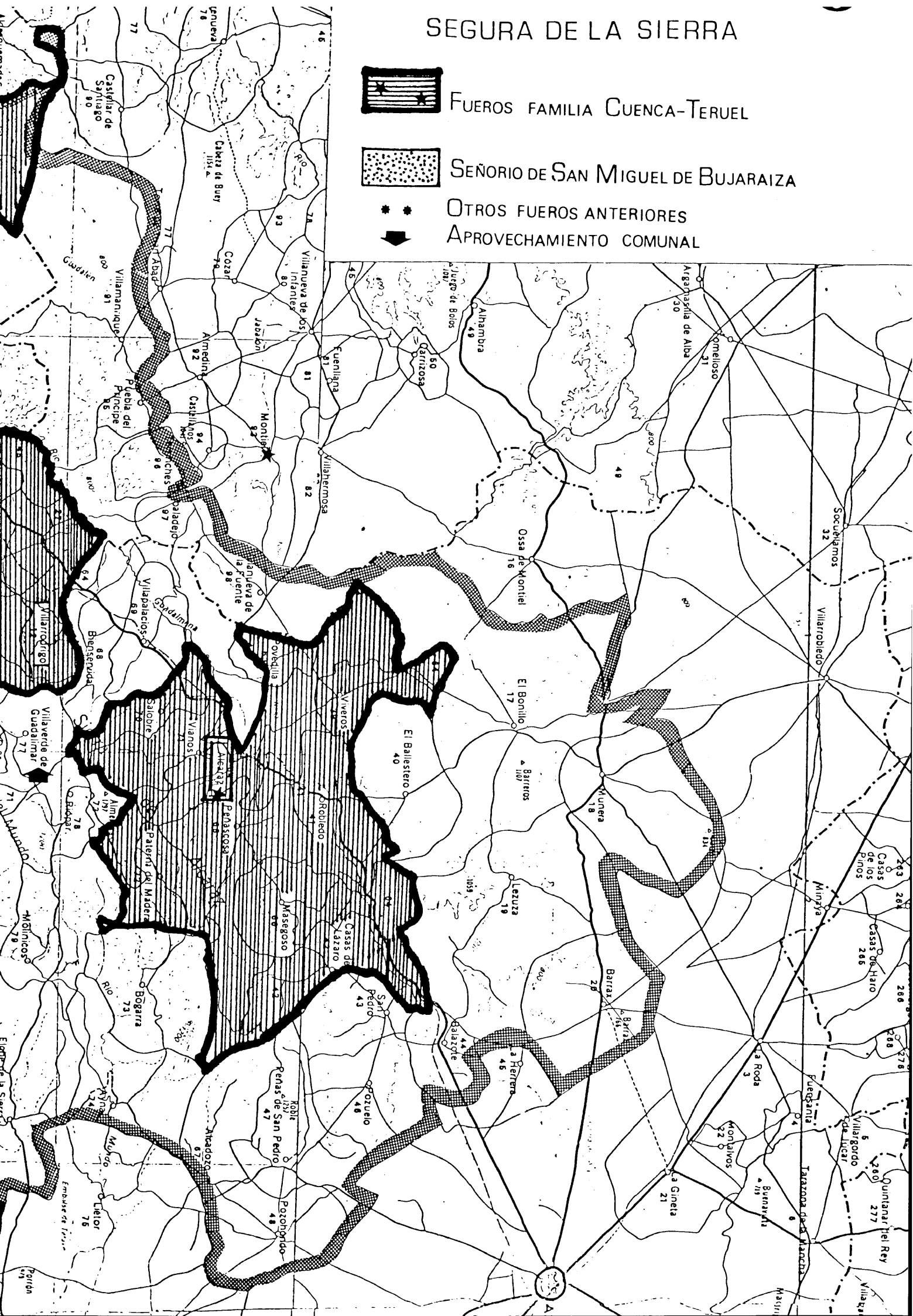
SEÑORIO DE SAN MIGUEL DE BUJARAIZA

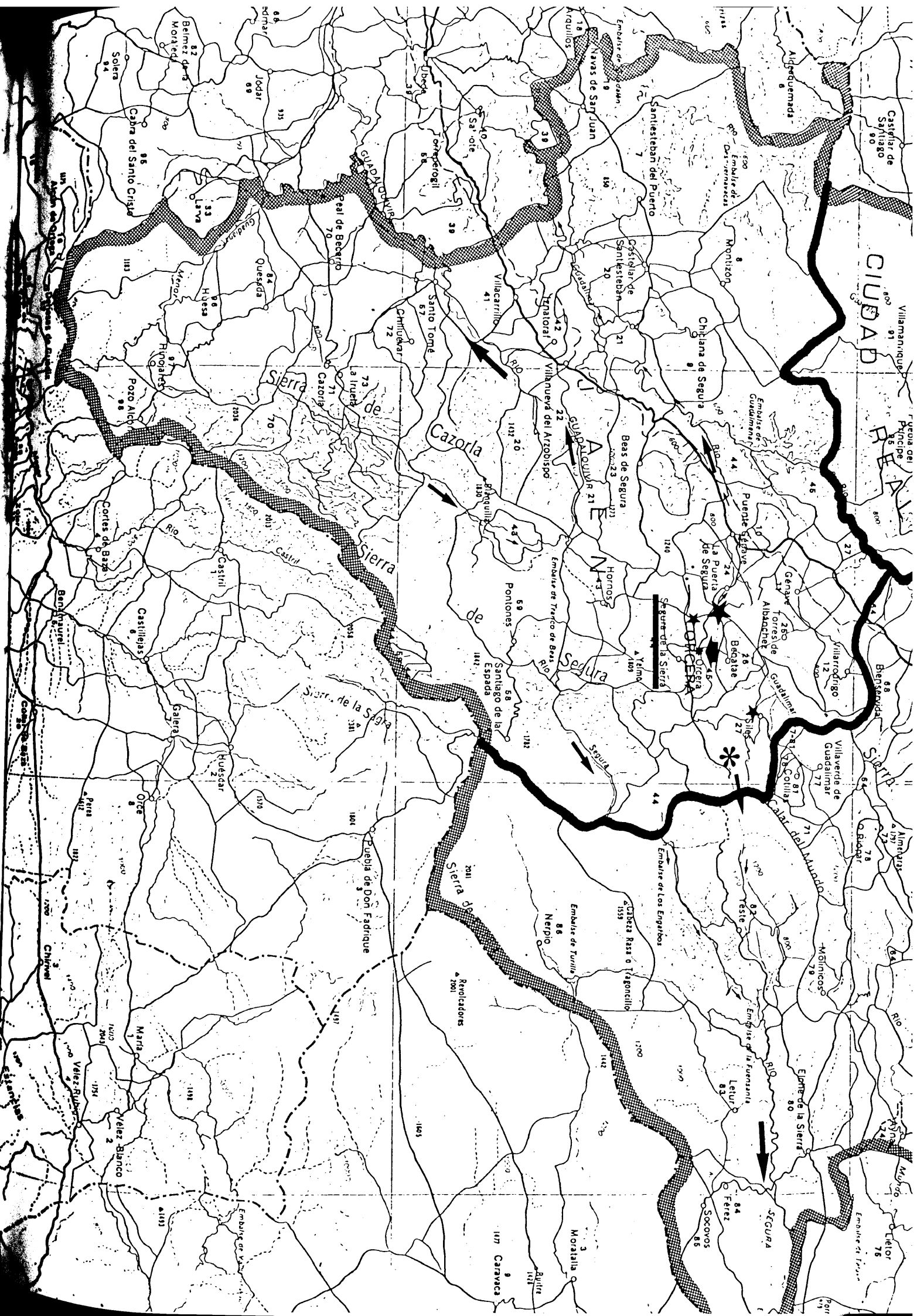


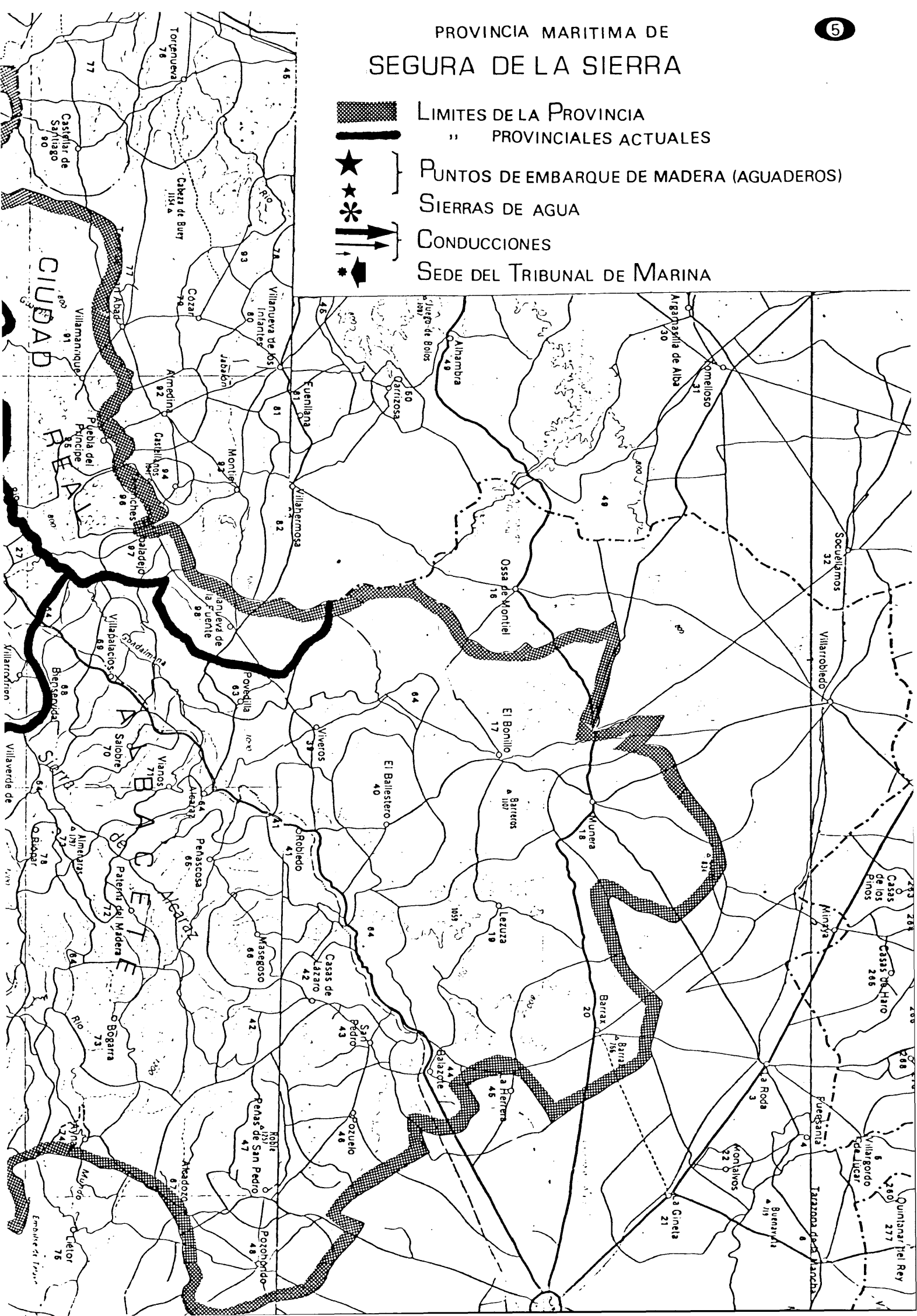
OTROS FUEROS ANTERIORES



APROVECHAMIENTO COMUNAL







XVIII .- LOS MONTES DE MARINA ANTE LAS CORTES DE
CADIZ

La legislación, cuyas consecuencias hemos examinado referidas a una zona concreta, aunque muy extensa e importante desde el punto de vista forestal, se abolió por un decreto de las Cortes de Cádiz de 14 de enero de 1812. Nos ha parecido imprescindible examinar la gestación de ese decreto en las sesiones de dichas Cortes y conocer la opinión de los diputados que llevaron a ellas el examen del tema y fueron autores de la derogación de la Ordenanza.

Seguir los debates sobre ella en las Cortes ha reportado una utilidad plural:

En primer lugar, los argumentos para la supresión, aportados en su día por los procuradores, subrayan, confirmándoles, los asertos que se hicieron sobre consecuencias de la actuación de la jurisdicción especial de Marina.

En segundo término, la similitud de los expuesto para diferentes regiones sobre los efectos de la Ordenanza permite, sin excesivo riesgo de error, predicar, de todas las comarcas o zonas afectadas por ella en la Península, lo que se ha dicho respecto de la zona estudiada.

Finalmente, gran fortuna, una intervención del diputado Giraldo, a la que se hará referencia más circunstanciada, encaja tan bien en la idea generatriz de esta tesis que parece buscada de encargo.

El Tribunal de Montes de Marina se restablece en 1814. El 4 de febrero de 1818 se comunica un plan aprobado para el establecimiento en la Provincia de Segura de la Sierra de un negociado de maderas por cuenta de la Marina para abastecer de las que sean necesarias a los pueblos limítrofes. En 1821 se restaura la vigencia del decreto de 14 de enero de 1812. En 1823, forma el Tribunal especial. En 1833 hay una nueva ordenanza de montes y se separa de la Provincia de Segura una gran parte. Las Reales Ordenes de 29 de enero de 1834 mandan que, por ahora, continúen los Subdelegados y Comandantes de Marina en sus cargos. Aún el 19 de noviembre de 1842 se permite a los encargados de Marina la corta de las maderas de construcción que necesiten de las existentes en los montes pertenecientes al Estado y procedentes del clero regular y secular.

Estos vaivenes de la jurisdicción especial van al compás de las oscilaciones del constitucionalismo al absolutismo, de manera que el primer restablecimiento del régimen especial es consecuencia de la derogación general de la Constitución y los Decretos de las Cortes de Cádiz dispuesta por el decreto de 4 de mayo de 1814, aunque su realización fuera paulatina (1),

(1) José FONTANA. La quiebra de la Monarquía absoluta 1814-1820. págs. 86 y 87.

pero puede decirse que las Cortes de Cádiz significan el fin para el organismo estudiado. Sin embargo, que da vivo un espíritu administrativo cuya manifestación continuada sigue produciendo en la actualidad males parecidos, aunque de menor entidad a los expuestos. Quizás porque queda menos que destruir.

Es realmente curioso que, al tratar sobre los montes en España, en los últimos tiempos de nuestra Historia, no se haga una referencia más circunstanciada a lo que significó la vigencia, durante casi un si glo, del régimen de montes de Marina que afectó a la mayor parte de los de la Península. Sin embargo, en un acontecimiento político relativamente próximo como las Cortes de Cádiz tuvieron una presencia destacada.

Hasta el punto que en el Cádiz sitiado de 1811 el tema de los montes de Marina es tratado muy tempranamente y el procurador González dice en la sesión del 21 de diciembre de 1811:

"... tres cosas, desde que se instalaron las Cortes, han sido objeto de mayor atención, la libertad de imprenta, el contrabando y los montes de Marina" (1).

Sin embargo, ni siquiera en antologías recién

(1) Diario de Sesiones, página 2458.

tes como la dirigida por Tierno Galván aparece seleccionado ni un texto que hable sobre el tema cuyo debate comenzó con el discurso leído ante las Cortes por el Secretario (ministro) de Marina, Vázquez Figueroa, siguió con la sesión de 17 de diciembre del mismo año en la que se presenta un dictamen de Marina y otro de Agricultura sobre dicho asunto, continuó en la del 21 de diciembre, con la intervención de diferentes procuradores y finalizó con una proposición del diputado Caneja en la de 26 de diciembre del propio año.

La culminación de estos debates es el decreto de 14 de enero de 1812 que recogen dándole fuerza legislativa, la propuesta hecha en la sesión inicial por el dictamen del ministerio de Agricultura, excepto el artículo 4º del proyecto.

No hay, a lo largo de los debates, ni una voz que se levante para defender el régimen de montes anterior. Sólo algún procurador trata de salvar la parte técnica de la Ordenanza de 1748 y es rebatido fulminantemente. Igual que otro, lo veremos después, que intenta sean concedidas ciertas preferencias al Estado en cuestión de montes.

El ataque a la Ordenanza lo inicia el ministro de Marina, Vázquez de Figueroa, con la lectura ya citada ante las Cortes de un discurso que tenía tres partes distintas, referidas a la Marina, la última de las cuales debía responder a la pregunta siguiente:

¿Es útil o perjudicial el reglamento de montes?

El comienzo de la parte del discurso referente a esa pregunta es éste:

"Extraño y sobremanera perjudicial ha sido el empeño con que el Gobierno Español ha intentado proteger los ramos de agricultura, industria y comercio, dictando reglamentos... y ya sólo son partidarios de los reglamentos de esta especie los que son empleados por ellos, o aquellos que inútiles para toda ocupación fructífera no pueden vivir sino es a costa del bien ajeno" (1).

Con ese principio, ya está indicado el tono general del discurso o dictamen de Vázquez de Figueroa. Adelanta en su informe muchos de los argumentos que luego se esgrimirán en los debates, más ampliados, inicia también una interesantísima distinción, de la más pura esencia jurídica, en la que se incidirá frecuentemente después: la ley frente al reglamento, como pieza legislativa de segundo rango que puede ir, y de hecho va con excesiva frecuencia, en contra del espíritu de la ley a cuyo servicio debe estar. En las Cortes, al menos en los debates dedicados al problema de los montes de Marina, aparece continuamente esta contraposición entre la ley y su servidor, tantas veces respondón, el reglamento. Después aparecerá, y

(1) Discurso citado. Museo Naval. Vázquez de Figueroa.

se señalará, esta contraposición.

A Vázquez de Figueroa, el reglamento, entendido como regulación de menudencias, le parece una fatalidad ("Esta fatalidad de los reglamentos" dice en el curso de su informe) y el de montes de Marina (es decir, la Ordenanza de 31 de enero de 1748) "el primero que debería desaparecer... porque su maléfica influencia es tan grave, quanto precioso y absolutamente indispensable el fruto de aquéllos" (1).

En un párrafo posterior, el ministro de Marina, quizá sin darse cuenta y desde luego incidentalmente, desvela la mentalidad del funcionario absolutista:

"... pero también es cierto que la mayor parte de los hombres, teniendo en el examen de si mismos el libro más abundante de sabias lecciones no lo consultan, y se juzgan sabios por recibir sin acuerdo ni meditación las ideas ajenas, aunque no las entiendan; siendo por desgracia el principio de muchos males de la sociedad esta irreflexiva adopción de ideas no entendidas, que a proporción que se trasmiten, aumentan su oscuridad, y creciendo con esta dificultad de concebirlas, vienen a considerarse como sublimes productos del entendimiento los más monstruo

(1) Discurso Vázquez de Figueroa ante las Cortes, 5 octubre de 1811.

sos delirios de la imaginación" (1).

Propone luego Vázquez de Figueroa, esbozándolos muy generalmente, los remedios que él cree oportunos para conseguir el fomento de los bosques. Son principios de un radical liberalismo económico, propio del momento, que no son tema de este apartado.

Además de los párrafos ya citados, aporta el ministro un dato precioso: el autor de la reglamentación de montes, don Joaquín de Aguirre, era totalmente contrario a la norma que estaba elaborando y en discurso inédito se queja amargamente de la tarea a la que se veía obligado:

"pues habiendo de luchar contra sus naturales ideas, estaban en la obligación de sujetarse a las que como bases fundamentales se le habían prescrito", por lo que reaccionó tratando de demorar su tarea en espera de que el transcurso del tiempo obviase las dificultades. Actitud que, según sigue diciendo el ministro en su discurso, le valió al fin "probar los desdenes de la humana grandeza, padeciendo los desastres que siempre han sido el premio de los grandes ingenios" (2).

Tras la lectura del dictamen, el Presidente agradeció la actuación del ministro encargado de Ma-

(1) Discurso Vázquez Figueroa ante las Cortes 5 oct, 1811.

(2) Idem.

rina y afirmó que:

"S.M. hará uso de la sabia memoria que acaba de presentar y leer el encargado del Ministerio de Marina y espera que continuará con la actividad y celo que acostumbra, dirigiendo sus importantes tareas al grande objeto de poner a la marina española en el estado más floreciente y cual desea la nación" (1).

En la misma sesión, luego de discutir qué se debía hacer con la memoria leída, resolvieron las Cortes se imprimiera y pasase a las comisiones de Marina y Agricultura para que dieran su dictamen. (2).

Estos dictámenes se presentan ante las Cortes en la sesión del día 17 de diciembre del mismo año. Versaban, igual que el del ministro, sobre tres puntos que se enuncian en el dictamen de Marina así:

- 1º) Si deberán o no continuar en la Península las matriculas de mar para el servicio de las escuadras y bajeles de guerra bajo el sistema establecido en las ordenanzas de este ramo.
- 2º) Si en el caso de estimarse conveniente la continuación de dichas matrículas en la Península deberán continuar también en las

(1) Diario de sesiones. pág. 1995.

(2) Idem. pág. 1995.

Américas, o será más ventajoso abolirlas en todas las provincias de Ultramar.

- 3º) Si es útil o perjudicial el reglamento que se observa al presente en el ramo de montes para la construcción de los bajel-les de guerra.

La comisión de Marina declara ceñirse exclu- / sivamente a los dos primeros puntos y remitirse en todo a lo que la Agricultura tenga a bien sobre el tercero que "lo habrá ilustrado está con las juicio- sas reflexiones que acompañen siempre a sus dictáme- nes". Sin embargo de esta remisión a la opinión de agricultura, Marina emite también su juicio sobre la Ordenanza de montes:

"... para que desde luego queden los mon- tes en la más plena libertad, aboliéndose a es- te fin el citado reglamento, el cual, al mismo tiempo que vemos atropellando del modo más in- justo el respetable y sagrado derecho de la pro- piedad, se hacen padecer a los dueños mil odio- sas trbas y tan humillantes vejaciones, que pa- ra redimirse de ellas han preferido abandonar el cuidado y plantío de los bosques con notable daño del Estado, que al cabo habrá de resentir- se algún día de tan dolorosas faltas" (1).

(1) Diario de sesiones. pág. 2434.

La orientación liberal-económica, ya advertida en la Memoria del ministro de Marina, aparece aquí también y estará presente en casi todas las intervenciones de los diputados que la aducen con una pasión excesiva, adjetivándola con desmesura, como se verá después.

Huelga decir que el dictamen de Agricultura discurre sobre los mismos principios de rechazo absoluto de la Ordenanza que:

"por desgracia ha producido un efecto contrario del que se propusieron sus autores". Estos creyeron conseguir su objeto, prescribiendo reglas y señalando épocas precisas en que debían hacerse las plantaciones, los cortes y las podas; quisieron guiar la mano del labrador estableciendo penas contra los que se desviasen de sus preceptos" (1).

Se critica en esta parte del dictamen el ordenancismo de que adolece la legislación sobre montes de Marina y que ya hemos comentado al examinar la Ordenanza base de 1748. Continúa luego esta parte del dictámen:

"... y crearon un juzgado particular, y bajo sus órdenes subdelegados en las provincias con escribanos, visitadores, celadores y peri--

(1) Diario de sesiones. pág. 2435.

tos". (1)

Late en el párrafo la idea de un organismo hi pertrofiado que casa perfectamente con las manifestaciones de, por ejemplo, los ganaderos de Santiago de la Espada cuando hablan de "caterbas de guardas" o el Ayuntamiento de Villaverde empleando parecidas expresiones. Es oportuno recordar la opinión del Fiscal del Almirantazgo sobre el Negociado de montes de Segura en Sevilla y sus "muchos empleados", para completar la imagen de una burocracia y un funcionariado excesivamente numeroso que, en cualquiera de los dos organismos, pesaban sobre la gestión y los costos de la administración de los montes.

Y pretendieron también que los pueblos se incorporaran, a su propia costa, a toda la prolija burocracia que los organismos examinados sostenían. El dictamen de la comisión de Agricultura hace también alusión a ello, como una de las tachas de señalar en la normativa que se dictaminaba:

"Aún no satisfechos con estas medidas, exigieron que los pueblos remitiesen anualmente, y en meses determinados por la Ordenanza, testimonios que acreditasen su observancia" (2).

Todos estos defectos, con algunos más que después se enumeran, hacen decir a la comisión de agricultura:

(1) Diario de sesiones, pág. 2435.

(2) Idem.

"Esta simple idea bastará para convencer a V.M. de que una ordenanza fundada sobre principios tan equivocados... como agenos de equidad y justicia, no podía por menos de producir muchos males. La comisión cansaría la atención de V.M. si se detuviera en hacer una prolija enumeración de todos ellos" (1).

Hay más referencias a los graves defectos de que la administración de Montes de Marina adolecía, pero están citados en otros lugares adecuados a la sistemática de este trabajo. Queda por decir, respecto del dictamen de Agricultura, que termina con una proposición de ley coincidente con lo que luego fue el decreto de 14 de enero de 1812, menos el artículo 4º, devuelto a la comisión.

Con ello se cierra la sesión de este día y se dió paso al debate sobre la proposición que comenzó en la sesión del 21 de diciembre de 1811, aunque el presidente había señalado para ello la del día anterior.

Se inicia con la intervención del procurador Torres Guerra que dice, luego de haberse releído el dictamen de la comisión de Agricultura ya examinado:

"... Quedamos acordes en que los dueños de los montes pudiesen disponer de ellos a su ar-

(1) Diario de sesiones, pág. 2435.

bitrio; pero no puedo conformarme en que la ordenanza de 48, que trata esta materia, quede de rogada absolutamente..." (1).

La opinión del señor Torres Guerra, casi la única que se alza en defensa de dicha ordenanza, se basa en las bondades técnicas que encierra:

"En ella -dice- hay muchos artículos que son benéficos para los dueños y para los montes". Argumenta que conviene que se reserven los terrenos destinados a viveros, plantar árboles por los que se corten y sangrar y podar los mismos para aumentar la producción de madera, propone en consecuencia que se respete la parte conveniente de la Ordenanza de 1748

"pues contemplo que no conviene que es libertad sean tan absoluta que pueda abusar de ella el propietario. Este debe ser libre en el uso de sus bienes; pero para su propia utilidad es preciso fijar algunas reglas con que se atienda también a la marina" (2).

En cierto modo, en abstracto, no dejaba de ser una opinión juiciosa, vista desde un punto de vista actual, pero los diputados de las Cortes de Cádiz, en plena fiebre de liberalismo, no podían admitir que se pusieran limitaciones al derecho de propiedad individual que tantas veces, a lo largo de es

(1) Diario de sesiones, pág. 2457.

(2) Idem.

te y otros debates, fué adjetivado de "sagrado" y de ahí para arriba. El señor Aner, ministro interino de Marina, responde enseguida a la proposición de Torres Guerra:

"Señor, toda la ley que coarta al dueño de una cosa la facultad de disponer de ella libremente, es contraria al sagrado derecho de propiedad, y es un obstáculo que se opone a la felicidad del Estado. La Constitución, Señor, asegura del mismo modo al ciudadano la propiedad que su libertad individual. Fundado en estas razones, tan obvias como poderosas, el Ministro de Marina, ha propuesto a V.M. la total abolición de las ordenanzas establecidas para los montes de dominio particular, y la comisión de Agricultura manifiesta a V.M. la absoluta necesidad de abolirlas... pero al señor preopinante le parece que no deben abolirse absolutamente dichas ordenanzas a trueque de que en ellas hay capítulos muy beneficiosos para los mismos particulares, y bajo pretexto de que restituyendo a los dueños una libertad absoluta quedarían exentados de pagar contribución cuando de todas las cosas se paga". (1).

En el concepto de Aner, fundado en el más extremo liberalismo, el propio interés de los propieta

(1) Diario de sesiones pág. 2458.

rios les hará aceptar esas reglas técnicas si ven que es beneficioso para los montes. Está muy lejano un concepto social de la propiedad en la pregunta del mismo Aner: "¿Por qué se ha de obligar al dueño a conservar el monte si le es lucrativo convertirlo en - tierras de pan llevar?".

También es cierto que, todavía, no estaba planteado de forma absolutamente angustiosa el problema de la deforestación con su grave influencia en el régimen de lluvias, la regulación de caudal, la rentabilidad y vida útil de las grandes obras hidroeléctricas. Aún no se veía el bosque como una necesidad de la comunidad toda, un servicio a ella que, si no se podía confiar al puro interés individual, tampoco se debía cargar sobre ciertos y determinadas espaldas.

O quizá fuera mejor decir que el problema, ya planteado, no había calado en la conciencia colectiva, ni estaba expuesto en libros o en exposiciones de motivos.

Termina Aner diciendo:

"Dejemos, pues, de una vez a los dueños la libertad, que tanto reclama el sagrado derecho de propiedad, y dejemos obrar libremente al agente principal de las riquezas, que es el interés particular. Por todo lo cual, mi dictamen es que se apruebe lo que propone la comisión, y ¡ojalá

se hubiera hecho un siglo antes!". (1)

Interviene luego el señor González afirmando, como ya se ha citado anteriormente, que el problema es de los que más preocupan en ese momento. Dice textualmente:

"Señor, desde que se instalaron las Cortes, tres cosas se han presentado dignas de la mayor atención. Primer, la libertad de imprenta, que ya se ha sancionado, para honor de V.M., confusión de los malos y satisfacción y beneficio de la Nación. Segunda, el contrabando, que es la desgracia de la humanidad y que continuará hasta que con abolir trabas y estorbos se ponga un re medio radical; y la tercera, el punto que hoy se está tratando. Señor yo he sido testigo ocular de casos tan escandalosos en este particular, que he visto familias perdidas por cortar un madero que acaso no valía 20 reales. Por lo mismo soy de opinión que se apruebe el dictamen de la comisión, dándole aún más ensanche si fuera posi ble". (2).

Es decir, insistimos, que en el Cádiz sitiado, mientras las tropas francesas bombardean la ciudad a diario, las Cortes tienen entre sus preocupaciones so bresalientes el tema que nos ocupa.

(1) Diario de Sesiones. Pág. 2458.

(2) Idem.

La intervención del diputado señor Borrull es la más extensa y circunstanciada de todas. Se ha citado fragmentariamente en otras partes de este trabajo por lo que bastará señalar que su exposición incide sobre los graves defectos que la Ordenanza llevaba, sobre todo en su aplicación, por la excesiva rigidez que contenía y con que se interpretaba; citando casos concretos, como los de la siembra de bellota en los montes de Catí o las perturbaciones del riego ocurridas en Forcall (1), en que la insaciable ampliación de la jurisdicción especial causaba serios perjuicios a los vecinos. De cuyas anomalías, afirma, "pudiera citar muchos ejemplares" y añade "clamaban los vecinos, pero en vano". (2).

Intervienen a continuación los señores Giraldo, Terrero, Martínez, Moragues y, de nuevo, don José Martínez que propone se otorgue en el artículo 2º un derecho de tanteo al Estado, en contra del rechazo ex preso en cualquier tipo de preferencia con que acababa la proposición de ley ("ni el Estado ni la Nación tendrán derecho de preferencia en caso de necesitarlo").

Le responde Morales Gallego:

"Tanto importa derecho de preferencia como la coartación de la libertad... de manera que...

(1) Diario de sesiones. Pág. 2458.

(2) Idem.

jamás tendrá el dueño entera libertad, y vendría mos a destruir con una mano lo que hiciésemos con la otra". (1).

Se aprueba el artículo 2º, sin modificaciones con respecto a la propuesta, y el 3º, leyéndose a continuación el 4º, cuya discusión es útil seguir respecto al tema que nos ocupa porque el diputado Villanueva, aunque de manera indirecta, señala el auténtico sentido de los derechos tradicionales sobre el monte, como aprovechamientos comunes plenamente diferenciados de la propiedad de la tierra que puede ser varia:

"Señor, hay muchos pueblos en los cuales estos arbolados propios y baldíos tiene su objeto de grande utilidad para todo el común, y para cada uno de los vecinos, especialmente de los pobres... Esto (y otros motivos que cita) debe tenerse presenta para no establecer ahora una ley que se oponga a los fines porque algunos pueblos, al tiempo de enajenar estos suelos, no quisieron desprenderse de los arbolados con cuyos provechos contaron para socorro de los vecinos menesterosos, para dotación de escuelas, médicos, cirujanos, etc. Deseo, como la comisión, toda la libertad que pueda darse a los propietarios para que se fomente la cria de árboles; pero hágase esto de suerte que no quede perjudicado el procomunal, ni ninguno de los vecinos, que por

(1) Diario de sesiones. pág. 2459.

serlo tienen derecho a los frutos y desperdicios de los arbolados y montes comunes" (1).

En la intervención del diputado Villanueva aparece la defensa de los derechos tradicionales y sugiere pensar que las enajenaciones de montes no se extendieron a los arbolados porque los concejos, al vender, podrían tener conciencia de que sus facultades de enajenación no incluían derechos pertenecientes a la comunidad, no al ente municipal.

En cualquier caso, la extensión de estos derechos del común, aparece con una formulación más amplia en la intervención, anterior a la de Villanueva, del diputado Martínez (D. José) que había dicho:

"... quisiera que se tuviese en consideración lo que sucede en el reino de Valencia. De los 572 pueblos de que consta, los 73 son sólo de realengo y los demás de señorío; y aunque los señores territoriales son dueños absolutos de los montes, los vecinos, en unos más, y en otros menos, gozan de ellos disfrutando en unas poblaciones la leña, en otras el monte alto y bajo y en todas los pastos". (2)

La variedad de contenido que estos aprovechamientos comunales presentan a lo largo de la Historia,

(1) Diario de sesiones. págs. 2459 y 2460.

(2) Idem. pág. 2459.

aparece aquí perfecta y escuetamente expuesta en la intervención del diputado Martínez. Los pastos, efectivamente, es el derecho comunal más generalmente reconocido, ligado con el de abreviar, su complemento natural; la leña, en cuanto a generalidad, va en segundo lugar, con muy poca diferencia; después, el monte bajo, y finalmente, el monte alto. Los primeros forman bajo la denominación clásica de "pastar, leñar y abreviar"; el último "tallar", era el de más entidad económica, pero también frecuente en muchas comunidades, como en la que estamos tratando en esta tesis, según creemos haber demostrado.

Es de advertir que, en el concepto popular, el monte bajo se considera como leña, de suerte que hay una clara distinción con el monte alto. Así el derecho de leñar comprende las ramas secas y piñas, del monte alto y el monte bajo, aún cortado por el pié.

Estas juiciosas intervenciones que, bajo su apariencia tradicional, encerraban la más verdadera defensa de los derechos populares comunales, chocaron con los auténticos fanáticos del derecho individual y de la "sagrada" propiedad privada, dogma intocable que -como sucedió con la desamortización- frustró una gran ocasión para el pueblo español y puso en manos de los despabilados un inmenso patrimonio común, intacto en muy gran parte.

Se indicó cómo, a lo largo de los debates,

aparece continuamente la distinción, de la más pura juricidad, entre ley y reglamento. Es una muestra de la clara consciencia jurídica de los procuradores que conocen la posible contradicción entre ambas piezas legislativas. Parece como si tuvieran presente una frase atribuída al conde de Romanones un siglo después: "Que hagan ellos las leyes, si me dejan a mi los reglamentos".

El diputado Giraldo aporta un dato muy interesante respecto al efecto que la aplicación de la Ordenanza de 1748 tuvo. Es un dato diferencial puesto que se refiere a las provincias en las que no se aplicó:

"No es posible manifestar los males que ha causado ("la destructora ordenanza de 1748") a los montes, a los pueblos, a los vecinos y a los dueños particulares; son muchas las Memorias escritas sobre este punto, y cada uno de nosotros tiene pruebas bien convincentes y tristes de esta verdad en sus respectivas provincias, yo puedo asegurar a V.M. que en el reino de Navarra y provincia de Guipuzcoa hay abundancia de montes y se conservan los plantíos porque no se admitió en estos países esta ordenanza..." (1)

Raymond Carr dice sin embargo:

(1) Diario de Sesiones, págs 2460 y 2461.

"El vasco era un agricultor cuidadoso: los bosques, destruidos en otros lugares de España sin la menor contemplación, fueron conservados merced a complicados sistemas de repoblación que compensaban el consumo de forjas y astilleros" (1).

No parece, y creo debe concederse más autoridad por cercanía física y cronológica al diputado Girraldo, que la causa fuera un complicado sistema de repoblación, sino la simple, pura y sencilla inaplicación de una ley torpe. y Giraldo insiste sobre ello:

"Siento no tener a mano las noticias que sobre montes recogí en Navarra, en donde, como en Vizcaya y Guipúzcoa, hay gran consumo de madera y leñas para sus fábricas, sus ferrerías, etc., y en donde se conservan los montes y plantíos con el mayor esmero, y sin poner trabas a la propiedad, a la industria, ni causar perjuicios a los pueblos. Suplico a los señores de la comisión se sirvan tener presentes las particulares leyes de estos países..." (2).

Confiesa el autor de este trabajo, permítase le, la profunda alegría sentida cuando, leyendo el Diario de Sesiones, llegó a esta intervención del diputado Giraldo en la que estaba formulada la idea generatriz de esta tesis: el poder conformador y crea-

(1) Raymond Carr. "España 1808-1939). pág. 21.

(2) Diario de sesiones. págs. 2460 y 2461.

dor del Derecho, su valor como suprema instancia de ordenación total de la sociedad.

El procurador Giraldo recomienda a las Cortes que "se sirvan tener presentes las particulares leyes de estos países" no que se informaran sobre "complicados sistemas de repoblación". Pura técnica al fin que, con seguridad, no debe llevarse el mérito de la conservación de los bosques en las provincias citadas.

Continúa el debate sobre el tema en la sesión de 22 de diciembre que se centra sobre los aprovechamientos comunes en los montes. Se advierte claramente un bando que conoce muy bién la realidad y sabe que esos aprovechamientos son un auténtico remedio de la comunidad a favor de los más necesitados. En el campo contrario los que creen ciegamente en la propiedad privada como panacea de cualquier mal y estiman que, con ese régimen, hasta los pobres saldrán más beneficiados que conservando el derecho a los aprovechamientos comunes.

En la sesión del 23 de diciembre se aprueba el quinto y último artículo de la propuesta legislativa contenida en el dictamen de Agricultura con algunas pequeñas modificaciones.

Finalmente, en la sesión del día 26 del mismo mes y año, el señor Caneja lee la siguiente proposición:

"Que los jueces, en el conocimiento de las

denuncias de montes, procedan con arreglo a las leyes comunes, quedando derogadas las penas que señalan los reglamentos e instrucciones particulares" (1).

Ya vimos las penas especialmente establecidas para sanción de la Ordenanza de 1748. El razonamiento de Caneja es convincente:

"Si los jueces, pues, a quienes ahora se encarga el conocimiento de las denuncias sobre daños en montes de propios o baldíos, se han de dirigir por los antiguos reglamentos, y han de imponer sus penas, los pueblos gemirán poco menos que hasta aquí, y les será indiferente que les condene un juez ordinario o un antiguo subdelegado" (2).

Con esta intervención acaban los debates parlamentarios que anteceden al decreto de 14 de enero de 1812, derogando la Ordenanza de 30 de enero de 1748 sobre montes de Marina, que resurgirá y morirá varias veces en un corto plazo, al compás de los avatares políticos de la época hasta su muerte definitiva en 1833.

En los debates del artículo 1º, expresivo de la derogación del régimen de montes vigente y clave, por tanto, del futuro decreto, el peso del ataque con

(1) Diario de Sesiones. pág. 2477.

(2) Idem.

tra la Ordenanza vigente recae sobre el diputado catalán Aner y el valenciano Borrull.

Felipe Aner Esteve, diputado por Cataluña, natural del Valle de Arán, interviene fogosa y prontamente para rebatir la propuesta de Torres Guerra de que se conserve la parte técnica de la Ordenanza de 1748. Pero curiosamente, sus razonamientos se fundan en el más riguroso liberalismo económico, sin que por un momento aparezcan o se trasluzcan preocupaciones por los numerosísimos casos en que el régimen de montes supuso la lesión y la expropiación de derechos comunales:

"... Toda ley que coarta al dueño de una cosa la facultad de disponer de ella libremente, es contraria al sagrado derecho de propiedad... ¿Por qué se ha de obligar al dueño a conservar el monte si le es lucrativo convertirlo en tierras de pan llevar?. ¿Quién ha visto jamás sino entre nosotros prescribir reglas al interés particular?..." (1).

El interés particular como suprema guía de comportamiento es el argumento central de Aner.

Borrull (Francisco), diputado por Valencia, hace la exposición más fundamentada jurídicamente, mejor documentada y más amplia en el ataque a la Ordenan

(1) Diario de Sesiones. pág. 2458.

za. Corresponde a su calidad de doctor en utroque, sus notables estudios sobre los Fueros de Valencia. Aporta también datos concretos de lo que ha supuesto la actividad de los funcionarios de Marina en su región y cita el informe de Antonio José de Cavanilles, aportando el ejemplo de otros tiempos en que no existían reglamentos y el reino de Valencia, Cataluña y Mallorca sostuvieron formidables armadas, combatieron con los genoveses y los vencieron en las batallas de Constantinopla y las costas de Caller, en los años 1352 y 1353; también hacer referencia a la labor de Pedro I de Castilla en pro de la Marina.

Giraldo, diputado por La Mancha, se adhiere totalmente a lo dicho por Borrull.

Finalmente, llega la intervención breve de Gonzáles, ya reproducida en otro lugar, que aporta un dato directo sobre los efectos sociales de la intervención administrativa en los montes. Volvemos a hacer referencia a la intervención de este diputado porque se ocurre la duda de la identidad de este personaje. Hay dos González que pueden ser: el diputado por León y el representante de Jaén. En mi opinión se trata de representante de Jaén, señor González Peinado, puesto que alude a su experiencia personal y directa: "yo he sido testigo ocular de casos tan escandalosos... que he visto familias perdidas por cortar un madero que acaso no valía 20 reales..." (1).

(1) Diario de Sesiones. pág. 2458.

A León no extendió la jurisdicción de los montes de Marina por lo que, por exclusión, la experiencia personal del diputado debe referirse a la provincia de Jaén, con lo cual se aporta un dato precioso al estudio de la actuación de la jurisdicción especial en la zona a que se refiere esta tesis.

La intervención aludida, defendiendo parcialmente, en su aspecto técnico, la Ordenanza de 1748 corresponde al diputado de Cádiz, Torres Guerra. Se explica esta intervención al considerar, en primer lugar, que este diputado es sevillano, de manera que para él los montes de Marina sólo se le aparecerían en su cara agradable: la llegada a Sevilla de las maderas que aportaban una riqueza más a la ciudad desde la cual actuaba el Negociado. Por otra parte, Torres Guerra era marino, y de los más ilustres y valientes desde que sentó plaza como guardiamarina en Cádiz (septiembre de 1770) hasta su elección como diputado por Cádiz en 1810. Era natural la preocupación que expresa al final de su intervención:

"... Este (el propietario) debe ser libre en el uso de sus bienes; pero para su propia utilidad es preciso fijar algunas reglas con que se atienda también a la marina. ¿Quién asegura que la actual estrechez no estimule a los dueños de montes a que derriben los mejores árboles para remediarse, y dentro de poco tiempo lleguemos a carecer de los que necesitamos para la marina y

otros usos de pública utilidad?..." (1).

Es normal que, como marino, se preocupe por los abastecimientos de materia prima para construcción naval y le caigan lejos los sufrimientos y las injusticias que ese objetivo mal cumplido ha supuesto para los lejanos habitantes de la cabecera del Guadalquivir. Consecuentemente propone que vuelva el artículo a la comisión para reexamen en el sentido propuesto por él.

Tras una corta intervención de Martínez (D. José) respecto de los montes de mayorazgo que contesta el señor Moragues. queda aprobado ese artículo 1º del texto, íntegramente conservado en el decreto definitivo, sin modificación respecto al proyecto.

En las Cortes de Cádiz, el ataque contra el régimen especial partió de todo tipo de ámbitos. No hay un denominador común entre los diputados que intervinieron en los debates, ni siquiera el que cabría encontrar entre los procedentes de provincias o regiones con fuerte tradición jurídica comunal. Quizá el tipo de argumento más abundante, el que más importa, el más acertado, el de más profunda raíz jurídica, es el apoyado en los viejos derechos comunales que surge en el debate una y otra vez, como una flor preciosa de otros tiempos.

(1) Diario de Sesiones. págs. 2457 y 2458.

No hay tampoco relación de correligionarios entre los intervinientes. Mientras, por ejemplo, Borrull y Aner colaboran luego con los regímenes absolutos y se oponen a las reformas demasiado profundas, algunos de los actuantes conocen suerte más negra; en la represión absolutista que sigue al decreto de 1814: son condenados:

José María Calatrava, ocho años de presidio en Melilla.

Joaquín Lorenzo Villanueva, seis años en el convento de La Salceda.

Manuel García Herreros, ocho años en el presidio de Alhucemas.

José de Zorraquín, ocho años en el presidio de Alhucemas.

Conde de Toreno, pena capital. (1)

El ministro de Marina, Vázquez de Figueroa, dimitió cuando dió la Regencia un decreto por el cual, a juicio de Figueroa, reasumía ésta toda la autoridad, dejando la responsabilidad a los ministros, y creyó deber hacer renuncia de su cargo, que no fué aceptada, pero insistiendo en su propósito, tuvo efecto con testimonios altamente honrosos de la misma (Regencia).(2)

(1) Modesto Lafuente. HISTORIA DE ESPAÑA: Tomo 18, págs. 181 y 182.

(2) Jorge Lasso de Vega. Biografía de Vázquez de Figueroa. pág. 22.

Fué Vázquez de Figueroa desterrado después a Santiago, como consecuencia de su actitud en el sucio asunto de la flota comprada a Rusia. Volvió en 1820, como consejero de Estado, a propuesta de las Cortes y elección del Rey, permaneció en el Gobierno hasta -- 1823, cuando la entrada de los Cien Mil Hijos de San Luis, en que fué desterrado, por un decreto de 4 de octubre, a treinta leguas de la Corte y Sitios Reales. A poco, rechazó un nuevo intento de nombramiento "por no estar conforme con el sistema o plan de gobierno que se seguía" (1). Propuesto en enero de 1834 para el ministerio, con María Cristina, rehusó para aceptar finalmente.

Parece, pues, que el régimen de montes de Marina era una pieza clave en el sistema absolutista, puesto que, como dijimos, desaparecía y aparecía al compás de las penduladas políticas.

La oposición a la Ordenanza, además, no se hacía sólo en la parte leal, sino que en el campo contrario se seguía un proceso paralelo documentado en el expediente tantas veces citado con anterioridad y del que resulta una condena casi total del régimen examinado.

Interesa examinar el desarrollo de ese expediente en cuanto que muestra la generalidad de la -

(1) Jorge Lasso de Vega. Biografía de Vázquez de Figueroa. págs. 26 y 27.

preocupación por el tema en las dos partes en que estaba España dividida. Con la circunstancia reveladora de interesar en el bando afrancesado, con particularidad, lo referente al asunto en los montes de Segura. No debe olvidarse que estos eran una provincia entera en la que podía ejemplarizarse todos los desastres que había conllevado la jurisdicción especial.

El expediente se inicia casi un año antes, el 23 de enero de 1811, al primer "toque" de las Cortes de Cádiz sobre el tema, con una propuesta del ministro de Hacienda, Francisco Angulo, al Rey (José I Bonaparte) para que ponga solución al estado caótico de la administración de los montes de Segura "tan importante y tan útil... entregada a dos direcciones independientes entre sí, y que se gobiernan por principios opuestos". Se pide al rey intruso que encargue a los ministerios de Marina e Interior el examen del asunto para que, junto con el de Hacienda proponente, presenten el plan más adecuado para el fomento y buena administración de dichos montes.

Contesta con fecha 25 de enero del mismo año, el ministro de Marina de José Bonaparte, Josef de Mazarredo, comunicando que se pone a la labor.

Sigue un informe del ingeniero Tomás Muñoz, de 3 de febrero de 1811 y una memoria del archivero del Ministerio de Marina, Juan Sans y de Barutell, sobre los datos que constan en aquel archivo acerca de los

montes de Segura, de fecha 1 de abril de 1811. Ese conjunto se pasa a dictamen del almirante Martín Fernández de Navarrete que lo evacúa el 12 de mayo de 1811, un mes y dos días después de haber recibido el material del ministro Mazarredo.

El expediente se imprime en 1811, a su elaboración, y se reimprime en 1825 con una advertencia previa: "Este expediente fué impreso en 1811 por disposición del gobierno intruso; pero contiene noticias tan importantes sobre la situación y extensión de los montes de Segura de la Sierra, así como en cuanto a utilidad y aprovechamiento de sus maderas para la construcción naval, y acerca de su régimen gubernativo y económico, que se ha mandado reimprimir por órdenes superiores para circularlo a las autoridades que conviene tengan estos conocimientos para arreglo de su proceder en utilidad del servicio de S.M."

Es útil ver que en el campo afrancesado también existía una profunda inquietud respecto del problema, lo que da más amplio valor a los juicios sobre el régimen de montes de Marina y, asimismo, sugiere que la concreción geográfica del ámbito de este estudio no impide su valor general, dada la importancia de dicho ámbito -que prueba el expediente examinado- y la generalización posible de las conclusiones demostrado por el examen del tema en los debates de las Cortes.

En ambos lados, lo mejor de la Marina Español-

la, lo más ilustrado estuvo en contra del régimen de montes especial. Las críticas fueron unánimes, sin importar el bando en que formaban los que las emitían.

Falta saber si el debate de las Cortes de Cádiz fué consecuencia de la actitud revisora del bando afrancesado, como medio de atraerse a su vez a los que sufrían la situación o la coincidencia, más que una emulación de intención política, fué puramente la coincidencia de hombres de buena voluntad en la búsqueda de la justicia. Me inclino por esta última alternativa.

XIX .- ENLACE CON SITUACIONES ACTUALES

En agosto de 1836 cesa, efectivamente, la autoridad del Ministerio de Marina en Orcera.

Teóricamente en 1833 se promulga una nueva Ordenanza de Montes que lleva consigo una nueva división del territorio. Se disgrega la Provincia Marítima de Segura, separándole Yeste, Alcaraz, Cazorla y Villacarrillo.

Marca esta fecha el fin de la etapa sobre la cual se centra el estudio presente. Quedaría examinar con detenimiento las etapas intermedias. Por razón de extensión, no es tema de esta tesis, que sólo busca indicar los males que causó la aplicación de las teorías del despotismo ilustrado, sus efectos devastadores de los bosques, opresores de sus habitantes, envilecedores de las viejas entidades, etcétera y señalar cómo la actuación de la Administración, en esos años que van desde 1733 y 1748 hasta 1833, causa la expropiación y el despojo inicuo de unos derechos tradicionales y seculares que corresponden a las comunidades silvícolas y tiene su raíz en las más lejanas fuentes del Derecho clásico; es origen de una actitud de odio de los campesinos hacia el árbol y se prolonga hasta nuestros días con situaciones paralelas, menos acusadas, menos dramáticas, pero básicamente iguales puesto que el proceso de despojo sigue actuante camino de agotar toda su virtualidad.

En las etapas intermedias, sin ampliar, puede afirmarse que sigue vigente, a través de los diferentes avatares políticos, un espíritu asumido por la Administración,

en sus clases funcionariales del ramo específico de "re-bañar" para el Estado todo lo que pertenecía a lo comunal asimilando, burdamente, lo público estatal a lo público colectivo. Los que se oponen, en el ingenuo ejercicio de sus derechos, que ellos no saben siquiera que lo son, porque los han ejercido de siempre, son anatematizados.

La Administración está por el despojo. Como señala Gibert, con referencia a los montes sujetos a la Marina, una real orden de 24 de febrero de 1838 los declaró nacionales y presumía pertenecientes al Estado los montes que disfrutaba el común de los pueblos, a menos que estos presentasen documentos justificativos de su propiedad (1). Parece una constante desplazar la carga de la prueba de forma que la Administración tenga en el litigio una posición privilegiada. Esa real orden está en línea con la anterior de 28 de mayo de 1764, en la cual se prohíbe el rompimiento de aquellas tierras de monte que, por los que se suponen dueños de ellas, se hayan dejado poblar de bosque sin que primero se justifique la propiedad. Y es el puente hacia la norma del artículo 10 de la Ley de Montes de 1957:

"La inclusión de un monte en el Catálogo otorgará la presunción de posesión por el Patrimonio Po

(1) Rafael GIBERT. Antiguo Régimen español de Montes y Caza. pág. 28.

restal del Estado o por la entidad pública a cuyo nombre figure, sin que esta posesión pueda ser combatida ante los Tribunales de justicia por medio de interdictos o de procedimientos especiales. Uno y otra serán mantenidos en la posesión y asistidos para la recuperación de sus montes por los Gobernadores civiles en todos los casos".

Esta última disposición supone:

1º) Una presunción posesoria en base a un registro técnico, no jurídico.

2º) Rechazo de los medios rápidos (es decir, baratos) para los particulares.

3º) Inmixti3n de lo gubernativo, nada matizada, que anuncia y sugiere lo que pudo suceder a su amparo.

Como ejemplo de esta mentalidad de la administraci3n de Montes puede ponerse, en la zona concreta examinada, un expediente del Ayuntamiento de Benatae iniciado en diecisiete de enero de 1865: El ayuntamiento solicita el aprovechamiento de quinientos pinos rodenos y carrascos en las dehesas de Oruña y Montanares, propiedad del municipio, que se deniega afirmando que el monte de Oruña pertenece al Estado. Este monte aparece en las cuentas del ayuntamiento de Benatae, que obran en el archivo del año 1700. La negativa origina la protesta de la corporaci3n y un largo expediente cuyo final no consta.

Sin temor a equivocarse y puesto que el esp3ritu supervive, como se indicará en el lugar adecuado, en la

actualidad, puede afirmarse que se mantuvo vigente en este espacio de tiempo en cuyo examen por menudo no entramos.

La legislación en el período entre la supresión de los Montes de Marina, la definitiva de 1833, y la ley de 5 de mayo de 1855 adoptó, según GIBERT, un aspecto puramente represivo. (1)

Pero hay un dato más, respecto de la zona estudiada, que señala el verdadero vicio de la nueva situación: la indefensión del ciudadano ante unos funcionarios despóticos, fuera de cualquier fiscalización, causada por la degradación de los entes municipales y comarcales.

El testimonio que aducimos se refiere al período inmediatamente posterior a la supresión definitiva de la jurisdicción de Marina y ocurre bajo la vigencia de la nueva ordenanza de montes. Se trata de dos alegatos, uno de los cuales hemos citado anteriormente, obra de Pedro Fernando Martínez, individuo de ideología liberal que desempeñó diversos cometidos por cuenta de la Administración, entre ellos formar en un tribunal a cátedra de Agricultura en Toledo y participar en el deslinde de la provincia de Jaén por su parte oriental.

El primero de dichos opúsculos consta de tres folios impresos en Jaén, en 1836, en la imprenta de Doblas

(1) Rafael Gibert. Antiguo régimen español de montes y caza. pág. 29.

está dirigido al presidente de la Junta Provincial y referido a la gestión del nuevo subdelegado de Montes, Martín Foronda.

El segundo es una réplica -mejor, una dúplica que dirige el mismo autor para rebatir la respuesta de Foronda al primer escrito. Se trata de un folleto titulado "Dedica al público de Jaén la presente respuesta que da a don Martín Foronda, Pedro Fernando Martínez". Está impreso en octavo, en la imprenta de Orozco y compañía, en 1837. Advierte haberse impreso con cierto retraso respecto de su redacción y consta de dieciséis páginas en letra de pequeño tamaño.

Los defectos que señalan parecen calcados de los que se atribuían a la anterior administración:

"Lejos de adoptar el nuevo Subdelegado las economías y reformas que prescribe la ordenanza: aumentó guardas y sueldos para su tren y boato, siendo gravosos al Estado..." (1)

La repetida idea del excesivo número de guardas aparece, como una constante natural, Pero tampoco descuidó sus propias utilidades:

"...y aún él mismo se supuso merecedor de 22.000 reales de sueldo, porque el antecesor los gozaba perso-

(1) Pedro Fernando Martínez. Exposición al Presidente de la Junta Provincial. Folio 1.

nalmente por ser cesante de otro destino de más rango; siendo así que el de Subdelegado principal no podía ascender a 8.000 reales; y aún según los finados reglamentos solo cobraba el que se titulaba Ministro de marina 11.000 reales." (1)

Las arbitrariedades, en beneficio propio, se perpetúan en este funcionario que, en teoría, debería ser distinto:

"Cuando ha querido surtirse de leña para su cocina, ha dado papeletas a los leñadores para que corten en cinas en agenas jurisdicciones y terrenos de propietarios, sin obtener otro permiso que el de su despotismo". (2).

La licencia para quemar rastrojos que aparece en las cuentas del ayuntamiento de Benatae tiene su continuación, o su renovación en las guías que Foronda exige a los tragineros:

"Antes, nada pagaban los tragineros por la firma del Juez en las guías; y ahora exige este arbitrariamente cinco reales por cada una" (3).

Igualmente "inventa" una cuota por cada res para conceder licencias de ramoneo y otra por cada par de la-

(1) Pedro Fernando Martínez. Exposición al Presidente de la Junta Provincial. Folio 2.

(2) Idem. Idem. Idem.

(3) Idem. Idem. Idem.

bor "por fustas para arados" (1) "estableciendo -según dice Martínez- nuevas maneras de socaliñas contra los labradores y ganaderos" (2).

Al tiempo, señala el autor negociaciones oscuras con los pinos, realizadas falseando las dimensiones de los cortados: "Dice el señor don Martín que los pinos vendidos no son de 15 a 20 pulgadas de diámetro ni de 12 a 20 varas de longitud; y yo atestiguo con los troncos cortados y con sus despojos, que ellos dirán la verdad y se probará el celo del subdelegado por la conservación de los pinos más avegetados e interesantes de la Sierra de Segura" (3).

Igual sospecha recae sobre determinada venta a unos vecinos de Villanueva, para una conducción por el río, al precio de real y medio más de dos mil pinos -cuya licencia valió 64 reales- cuando, por su tamaño y calidad "no debieron bajar de tres o cuatro reales" (4).

La negociación con los pinos era reconocida por la respuesta de Foronda a la primera queja de los serranos, representados por Martínez. Se hacía para pagar a los guardas porque, dice Foronda, no había fondos. Martínez rechaza que no hubiera fondos y exige a Foronda declare dónde fueron a parar los pertenecientes a montes. Señala también que los guardas debían pagarse de

-
- (1) Pedro Fernando Martinez. Respuesta a Don Martín Foronda. pág. 8
 (2) Idem. Idem. pág. 4
 (3) Idem. Idem. pág. 9
 (4) Idem. Idem. Idem.

los productos de los pastos de Guadalmena, productos que se había apropiado el subdelegado para sí. Además, la ordenanza prevenía que los ayuntamientos se hicieran cargo de la custodia de los montes y pago de los guardas, pero "entonces se habría disminuído la turba de tales dependientes "y" se hubiera ahorrado la dirección el sueldo de cuatro o seis de estos zánganos y famélicos cuadrupladores" (1).

Martínez acusa al subdelegado de "haber desempeñado tan arbitrariamente y sin sugestión a ordenanza el empleo que al gobierno no ha producido ningún buén resultado". Es, más o menos, lo que se ha visto para el régimen anterior y Martínez continúa: "En los montes ha causado daños que jamás se pudieron pensar, ya los naturales del país les ha vejado y causado las mayores vejaciones" (2).

Se repiten, pues, las características del período anterior de la administración de montes, incluso las perturbaciones en la justicia que pueden dejar indefensos a los habitantes de la zona, según explica el testimonio que seguimos:

"Con las atribuciones de esta Subdelegación, se agregó (el subdelegado) las del poder judicial; y despojando de hecho a la Audiencia de Granada de sus facultada

(1) Pedro Fernando Martínez. Respuesta a don Martín Foronda. págs. 9 y 10.

(2) Idem. Idem. pág. 12.

des para juzgar a los jueces de primera instancia, invocó en auxilio de sus miras las del Sr. Gobernador Civil y Sr. Comandante general de las armas para delatar al Juez de letras de Segura; mandándole comparecer en esta capital; y así se hizo otro atropello con la ley de juzgados, pues debiendo quedar regentando el de Segura el Alcalde ordinario se nombró al Auditor que fue de montes, confidente del Subdelegado; que de estas maneras extendía su letal influjo al Juzgado de primera instancia, para obrar como el cáncer corrosivo sobre el cuerpo humano". (1)

Expurgado de retórica, este texto muestra nuevamente el repetido axioma de que la tiranía se cumple por la vía de la privación del Derecho. También da una cabal imagen de algo que, en palabras, aún examinado - etimológicamente, sugiere una idea confusa: toda la historia del régimen forestal que hemos venido estudiando, está marcada por el surgimiento de una auténtica oligarquía: desplazados los entes públicos tradicionales, los funcionarios se alían entre sí y con los poderosos. En este texto, el nuevo subdelegado confía en un antiguo miembro del régimen caído, cuando, en pura teoría, tendría que ser la persona más alejada de la nueva situación que rompe, al menos en la intención de los gobernantes, con la anterior que estos juzgan tiránica y perjudicial.

(1) Pedro Fernando Martínez. Exposición al presidente de la Junta Provincial. Folio 2.

No es sólo esta evidente colusión entre el antiguo funcionario de Marina y el nuevo Subdelegado de montes, sino que, para los pobladores de la zona, nada cambia. De nuevo son vejados y expoliados y, además, como suprema muestra de que lo único que ha cambiado es el titular de la opresión, el subdelegado "asume" los créditos de su antecesor y se emplea en hacer efectivas multas puestas por éste:

"Los muchos oficios y despachos que en agosto y septiembre del año pasado (1836) se enviaron a los pueblos del partido para cobrar deudas viejas y denuncias de treinta y cuarenta años puestas y sin calificar, con los apremios que para el cobro de cuotas de sus tasaciones se prodigaron; hicieron arrancar lágrimas de sangre a los que se vieron reconvenidos y estrechados por denuncias puestas a sus padres y abuelos que fallecieron ignorantes de tal responsabilidad..." (1).

Nada cambia porque, en realidad, la ley conformadora de la situación viene revestida de los mismos atributos: es una ley también despótico ilustrado que no restaura a los serranos en sus derechos, sino que intenta, de nuevo, hacerlos felices sin su concurso, y sigue considerándolos sin personalidad colectiva. Reducidos a puros individuos, que se relacionan directa y aisladamente con la Administración y su omnipotente representante,

(1) Pedro Fernando Martínez. Respuesta a don Martín Foronda. pág. 9.

indemne a los mecanimos previstos para evitar o sancionar el incumplimiento de sus deberes.

El despojo de los tradicionales derechos comunales sobre el monte, reducidos en los últimos tiempos a su expresión mínima de "leñar, pastar y abrevar", continúa bajo formas parecidas y por motivos diferente. Siguiendo con la localización geográfica de los avatares jurídicos de esta amplia zona española, dando un salto, no muy grande, en el tiempo, nos situamos en la actualidad. Ha cambiado el régimen de propiedad, ha pasado por la Sierra de Segura la desamortización. Los destrozos que causaron tantos desórdenes se reconocen al comparar los documentos antiguos con los lugares de que se habla en ellos. Pero, básicamente, repetimos, el despojo continúa, con formas parecidas y con efectos parejos, sobre los residuos de los antiguos aprovechamientos.

¿Cómo discurre hoy ese proceso que se aceleró hace más de doscientos años?.

Con parecido mecanismo:

Al terminar nuestra guerra, es un interés nacional la repoblación. Los técnicos encargados se entregan a ella con un celo místico y en amplias zonas de la Sierra la plantación de pinos impide el pastoreo que se ha venido practicando secularmente. Llueven las denuncias y las detenciones. Llegan a Orcera, cabeza de partido, los detenidos en grupos, conducidos por la Guar-

dia Civil. Los pleitos entre Montes y los particulares se multiplican. Muchos de estos, titulares inscritos, emplean para su defensa la facultad que les concede el artículo 41 de la Ley Hipotecaria, por la cual, con certificación del Registro que acredite la vigencia, sin contradicción alguna, del asiento correspondiente, puede el titular inscrito dirigirse contra quienes, sin título inscrito, se opongan a aquellos derechos o perturben su ejercicio.

El Juzgado de Primera Instancia de Orcera, junto con el de Cangas de Onís son los que acumulan los "artículos 41" por docenas. Los técnicos se desesperan como antes los dependientes del Ministerio de Marina, cuando los serranos acudían a la Justicia ordinaria. No advierten que están sirviendo un interés nacional a costa sólo de una parte de la población, casualmente, la más pobre y la más abandonada. Ignoran también, pues no están formados para ello, que están quebrantando derechos milenarios que vienen desde la antigüedad, siglo tras siglo. No piden una jurisdicción especial, quizá por menos ilustrados que sus antecesores, pero si consiguen un privilegio odioso contenido en la Ley de Montes en la que se establece (artículo 10- párrafo 6 de la Ley de 10 de junio de 1957) que el artículo citado de la Ley Hipotecaria no será aplicable a los montes catalogados.

La disposición de la Ley de Montes dice:

Art. 10, 6). La pertenencia o titularidad que en el Catálogo se asigne a un monte sólo podrá impugnarse en el juicio declarativo ordinario de propiedad y ante los Tribunales civiles, no permitiéndose el ejercicio de las acciones reales del artículo cuarenta y uno de la Ley Hipotecaria con referencia a los montes catalogados o parcelas que de los mismos formen parte. Acreditada esta inclusión mediante certificación de los Servicios forestales, se dejará sin curso la demanda del procedimiento hipotecario, sin perjuicio de que pueda promoverse el correspondiente juicio declarativo..."

Salvador Grau, tras afirmar que este artículo es "uno de los preceptos sustantivos de la Ley de Montes y de más frecuente aplicación" (1), hace notar que la certificación del Catálogo aludida antes no cristaliza un "ius possidendi", sino que presume una posesión de hecho. Como sutileza doctrinal, es válido, pero el efecto práctico es que la posesión de hecho es la base del interdicto y esta protección jurídica, sumaria, queda desplazada por la citada certificación.

Esta norma supone que los propietarios de montes catalogados deben recurrir al juicio declarativo, más

(1) Salvador Grau. "Comentarios a la Ley y Reglamento de Montes, con notas de jurisprudencia". pág. 141.

largo y más caro, y renunciar a hacer cesar la perturbación, aunque sean titulares inscritos. Calificar de tiránica esta norma no es más que valorar objetivamente. La Exposición de Motivos, sin embargo, despacha así su fundamentación:

"Merece singular atención cuanto concierne a la firme defensa de la propiedad forestal pública, la que salvada esencialmente del alcance de las le yes desamortizadoras, en sus más importantes masas, ha sufrido, sin embargo, al correr de los tiempos, fuertes ataques y segregaciones que realizaron avisados y logreros, manejándose hábilmente en la complejidad y entresijo de disposiciones, preceptos y procedimientos a veces interferentes y no siempre bien diferenciados en las jurisdicciones administrativa y judicial...."

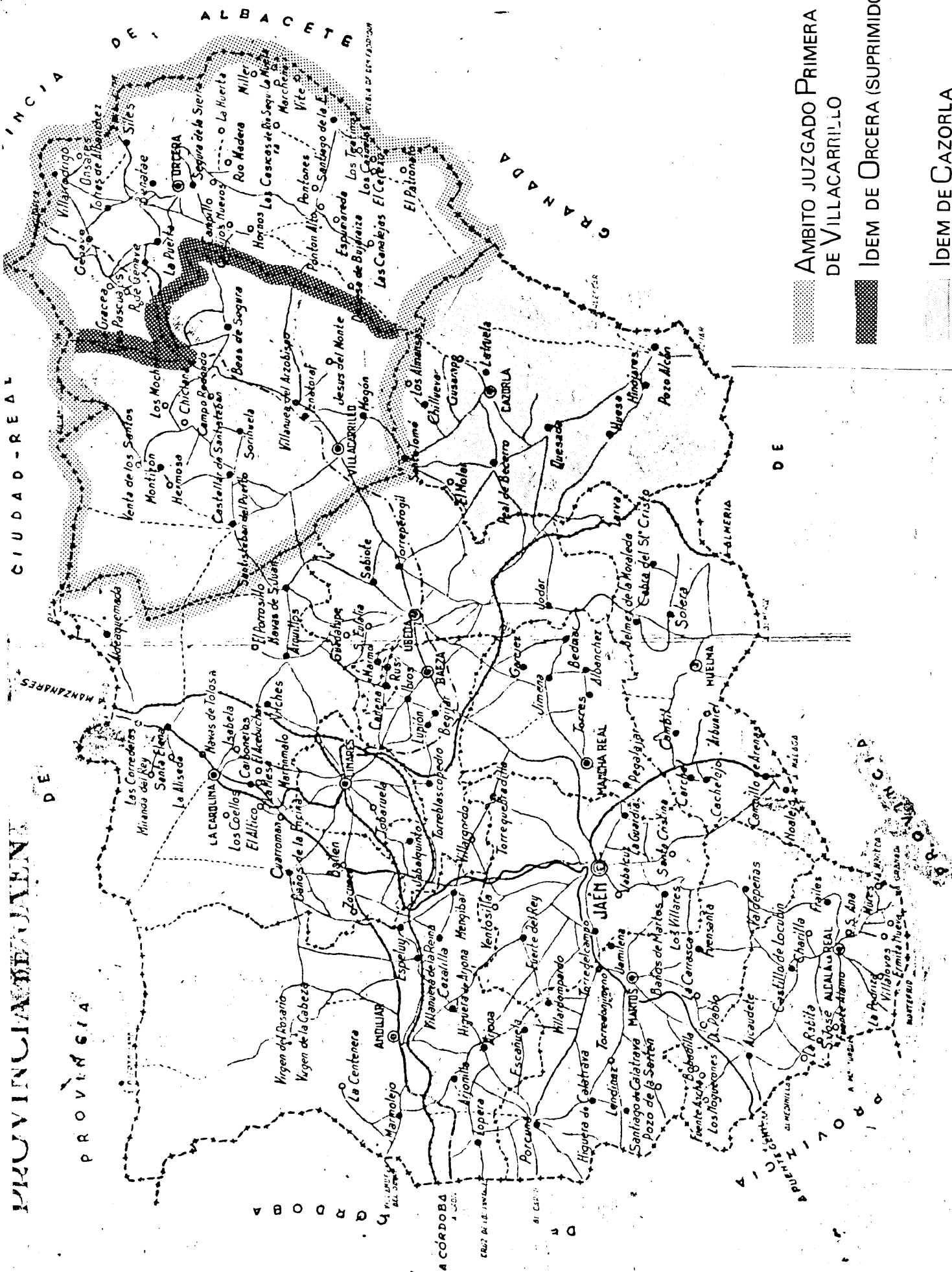
Parece que el camino para impedir la acción de esos imprecisos, e insultados con cierta galanura literaria de perfume rancio, "avisados y logreros", es mejorar las disposiciones, preceptos y procedimientos interferentes y diferenciarlos bien en las jurisdicciones administrativa y judicial, no quitarse de enmedio al - posible contrincante ante los tribunales por medio de un privilegio que dificulta gravemente la defensa de los particulares frente a la Administración, encareciendo innecesariamente la Justicia -cuya baratura debe ser siempre un imperativo social- dejando inerte en un pri-

mer momento a la parte más débil en el proceso. Si ese criterio se hubiera aplicado siempre que la Administración perdiera excesivos pleitos, privando de las defensas baratas a los particulares, todo el orden jurídico hubiera acabado en la tiranía.

Igual efecto de encarecimiento de la Justicia, igual secuela antisocial, tiene la exigencia del mismo artículo en el apartado a) del párrafo 6 de que estos problemas se sustancien ante las Audiencias. Supone ese precepto alejar a los interesados de los Tribunales a distancias astronómicas, ya que los montes suelen estar en las partes más lejanas de las grandes poblaciones. Concretándonos a esta extensa zona, el alejamiento de la Audiencia es de más de doscientos kilómetros.

Puesto que el principal tema que se debatía en el Juzgado de Primera Instancia de la comarca, situado en Orcera, quedó fuera de su competencia, los asuntos se redujeron en gran proporción causando la supresión de dicho Juzgado con arreglo a un criterio utilitario de la prestación de justicia, muy próximo a los estudios de mercado de una empresa mercantil.

Los que se enfrentaron a la Administración no sólo fueron "castigados" con la indefensión en esos primeros estadios, tan importantes, de la perturbación en la posesión, sino que incluso recibieron, por la misma causa obrando indirectamente, la sanción adicional oculta de que se les distanciara en unos sesenta kiló-



AMBITO JUZGADO PRIMERA INST.
DE VILLACARRILLO

IDEM DE ORCERA (SUPRIMIDO)

IDEM DE CAZORLA

metros más la Justicia en todo lo que es materia de un Juzgado de Primera Instancia e Instrucción.

El paralelismo con situaciones precedentes no acaba ahí: Otro interés nacional de la posguerra es la reparación de ferrocarriles y una empresa filial de RENFE, como antes hiciera la Marina, cae sobre los montes de esta Sierra para proveerse de traviesas. En principio, el interés nacional de la reconstrucción de ferrocarriles es diáfano, por eso es inevitable aunque haya que lamentarlo, que se talen algunos de los pinares mejores de España para conseguir traviesas, desperdiciándose tamaños y calidades superiores (aquí viene el recuerdo del desperdicio que el Real Negociado y el Ministerio de Montes de Marina, cada uno por su lado, hicieron cortando tamaños inadecuados, desaprovechando las partes bajas o las copas de los árboles). Igualmente lamentable, aunque evitable, es el régimen de trabajo y trato que sufrían los que se vieron obligados en aquellos durísimos años a trabajar para Explotaciones Forestales de RENFE, en que no entraremos por no interesar directamente al tema de esta tesis.

Sí entra dentro del tema que Explotaciones Forestales consiguiera -también- su privilegio exorbitante: Un Consejo de Ministros, en 1969, autoriza que los montes del Estado de esta provincia sean adjudicados directamente a dicha empresa, como una excepción al régimen general de contratación administrativa, principio capi-

tal de diaphanidad contractual y autenticidad contable de la Administración. El precio se establece con arreglo a ciertos datos que parecen garantizar un resultado objetivo, sin embargo la diferencia entre el precio de adjudicación y el corriente de mercado ha llegado a ser en ocasiones de 10 a 1. A pesar de ese privilegio, las serrerías de Explotaciones Forestales de RENFE en esta zona han liquidado con fuertes deficits lo que habla de una mala administración y recuerda la de los organismos que el despotismo ilustrado encargó de manejar las maderas de estas Sierras. Igual que el Negocio desperdiciaba enormes árboles troceándolos o la Marina no utilizando más que los cuellos, Explotaciones Forestales RENFE trocó pinos para traviesas y, a costa del Erario, realizó pintorescos experimentos con "contenedores" para madera que acabaron en el fondo de los barrancos. Después, conseguido ese extraño privilegio, extraño cuando las traviesas son de hormigón armado y los vagones metálicos, comercia con la madera compitiendo deslealmente con los particulares y, además, perdiendo dinero.

Sigue, en una tercera fase, este continuo y secular proceso de despojo con otra apoyatura diferente: - ahora el interés nacional, cumplido a costa de esos derechos no escritos, es el de la conservación de la Naturaleza. Un viento roussoniano soplando sólo en las velas de la fauna. En parte de las tierras de esta --

Sierra y la vecina se ha establecido un Coto Nacional en el que, además de realizarse la conservación de especies indígenas tan interesantes como la "capra hispánica", se han importado otras como el muflón de Córcega o el "black bass" de Estados Unidos, con lo que se ha pasado de la conservación de la Naturaleza a la invención de una naturaleza proyectada en los despachos. Pero lo que interesa a los fines de esta tesis es señalar que, de nuevo, este fin nacional se está cumpliendo a costa de los derechos comunales de "leñar, pastar y abrevar". Las reses, criadas por ICONA, disputan físicamente los pastos al ganado doméstico, aparte de lesionar los simples derechos de propiedad de los agricultores puesto que, con mucha frecuencia, jabalíes y ciervos destrozan los sembrados. Si antes el camino para facilitar el despojo fué declarar inaplicable el artículo 41 de la Ley Hipotecaria, en este caso es el de la lentitud burocrática. Los daños son teóricamente indemnizables, pero la peritación corre a cargo de una de las partes puesto que se hace por ICONA y, cuando se solicita por particulares, debe adelantarse los gastos de dicha peritación que no son pequeños. Añádase a ello los requisitos de redacción de instancias y solicitudes que pueden ser, para muchos pobres montañeses analfabetos, inconveniente más grave que cualquier otro.

Esta situación es causa directa de que, año tras año, se sucedan los incendios intencionados dentro del

espacio del Coto Nacional, mientras que en las mismas Sierras, fuera de aquel ámbito, son casi inexistentes y de poca importancia. Puede asegurarse que la elevación de penas para los incendiarios no ha producido ningún efecto regresivo del número de incendios. Y sus autores, que los realizan con una técnica elemental ya utilizada en tiempo del Tribunal de Montes de Marina, seguirán sin ser sabidos, aunque los guardas forestales molesten a los visitantes motorizados tomándoles la matrícula y los nombres en el significativo "control" que da entrada al Coto.

El proyecto de convertir toda la zona en un Parque Nacional con todas las consecuencias permite augurar, en función de lo sucedido en el ámbito del Coto, un verdadero desastre, una especie de "Götterdämmerung" en el que perecieran juntos los milenarios derechos y su objeto restante: derechos de leñar, pastar y abrevar cuyo concepto permanece difuso, todavía constante, en la conciencia campesina. Moriría quizá la "silva" y sus moradores, estos desarraigados e inmersos en las masas grises de la plebe urbana. Un posible final dramático que no evitarán las modificaciones del Código Penal dirigidas a los que ni siquiera saben que existe ni qué es un Código.

En los deslindes de montes, los ingenieros trazaban las lindes con sorprendentes jerigonzas, imagi-

nando que los pinos viejos testimoniaban la extensión del bosque antiguo. Hubo otro nuevo expolio ya que, si recordamos el capítulo 23 de las Ordenanzas del Común de 1580, se ordenaba a los labradores dejaran en sus labores dos pies de carrasca, roble o pino salgareño por cada fanega de tierra, con lo cual hay pinos centenarios en mitad, precisamente, de las labores viejas.

Los habitantes de estas sierras, como la mayor parte de los del país, después de despojados, siguen sometidos a la servidumbre de acudir a los incendios forestales con relativa frecuencia. Es una prestación personal peligrosa que se retribuye con el jornal base y con una atención deficiente: puede ocurrir que, por descuido, unas cuadrillas de hombres estén sin comer un día entero o que, por un entendimiento excesivo de la sobriedad del pueblo español, se suministre un pan y una lata de sardinas para dos hombres un día entero. Por eso, cuando hay fuego, en los pueblos, los hombres desaparecen en las habitaciones interiores, los bares se vacían y las mujeres cosen tranquilamente en las - puertas de las casas mientras la pareja de la Guardia Civil recorre las calles buscando voluntarios. Sólo en las cortijadas, donde todos son controlados fácilmente por el guarda forestal, y, de hecho, dependen de él para tener unos jornales en los trabajos de monte, los voluntarios nutren las cuadrillas para apagar fuego. Estas cuadrillas actúan sin medios especiales de ningún tipo,

con herramientas de labranza y sin prendas de protección personal.

En el aspecto público, los entes municipales y sus autoridades están mediatizados en gran parte por la administración de montes que es cauce de la mayor parte de las inversiones públicas en la zona. Gran parte de las comunicaciones entre cortijadas y aún con dos pueblos de la Comarca se hacen por pistas forestales. Los presupuestos municipales se nutren con los aprovechamientos cuya concesión está también en manos de la administración. Puede decirse, pues, que la administración forestal, ICONA, es el auténtico señor jurisdiccional de la Sierra.

Esa prepotencia le otorga la posibilidad de intervenir la vida de los pueblos de diferentes maneras:

Imponer actuaciones en determinado sentido. Como la creación de pastizales en Santiago de la Espada, sin contar con los ganaderos, ausentes en los pastos de invierno.

Dirigir la política comarcal. En la última elección de diputado comarcal, ICONA, por medio de uno de sus hombres, canalizó votos en determinado sentido prometiendo realizaciones en su término a algún alcalde.

Coartar el ejercicio de derechos reconocidos por la vigente Ley de Montes. Concretamente el de disposición de las aguas nacidas en montes de propios, en la

cual se interfiere la administración, cuyo papel es sólo peritar los posibles daños causados en el monte por una canalización o el ejercicio de los derechos de riego. En la actualidad, los ayuntamientos propietarios piden permiso a ICONA para conceder unas aguas con destino a abastecimiento público domiciliario.

El ámbito del Coto Nacional está defendido fieramente, por los antiguos furtivos que agotaban antes la caza ahora transformados en guardas. Ha habido denuncias por tender ropa dentro de él. Un asno que traspasó sus lindes fué muerto de un tiro por los guardas...

Esa energía ha sido ineficaz para oponerse a las tales de Explotaciones Forestales de RENFE que año tras año sigue arrasando los mejores bosques de esta Sierra y, exactamente igual que el Real Negociado de Montes de Segura en Sevilla, comerciando con la madera, compitiendo deslealmente en el mercado con unos resultados económicos que hacen dudar de la probidad de sus gestores.

De manera que los montes en esta zona de las Sierras de Segura y Cazorla están gobernados con un sistema idéntico al establecido por el despotismo ilustrado a partir de 1733 y 1748: ICONA, con sus pretensiones de conservador provoca la destrucción, lo mismo que el Negociado de Montes de Marina; Explotaciones Forestales de RENFE, igual que el Real Negociado de Montes de Segura, destruye directamente el bosque con pretexto de negociar a favor del erario, a través de una empresa pú-

blica, fin incumplido pues liquida con crecidas pérdidas.

La administración de ICONA es también singularmente cara. Siguen, como en los tiempos del Tribunal de Marina, las "catervas" de guardas, excesivos a todas luces sobre todo después de estar casi todos motorizados.

En una Comarca que carece de establecimientos hoteleros, el ICONA dispone de una docena de residencias completamente equipadas, algunas hasta con cubertería de plata, que exceden holgadamente las cien plazas. La mayor parte, en su ámbito "noble" destinado a ingenieros, está deshabitada y alguna, como la de Valdemarín, jamás ha sido estrenada. Son palacetes estilo rústico, revestidos de madera los más viejos y los demás con varios cuartos de baño y agua corriente que no sirven para nada, sin que se haya aceptado la propuesta hecha en un Congreso turístico provincial de dedicarlos a residencias veraniegas. El último de estos "forestal-palace", como se les dice humorísticamente (1) ha sido construido en un inmenso coto de caza, realizado a fuerza de expropiaciones en la parte de Sierra Morena jurisdicción de los pueblos de Sierra de Segura, con una extensión de diez mil hectáreas, con diez guardas de servicio a los cazadores dotados de elementos

(1) José Bautista de la Torre. "Más sobre la Sierra de Segura...". "Sábado Gráfico" número 997.

de todo tipo. La subasta de la caza de este coto, "nacional" por los fondos empleados, no ha salido al público y está concedido por 500.000 pesetas, siendo su valor estimado en arriendo de al menos dos millones de pesetas.

En el arriendo de la caza se da frecuentemente esta situación: los cotos se arriendan "ab-hasta", por precios ridículos y son disfrutados, según evidencia, por los ingenieros de ICONA y sus allegados.

El grado de entendimiento entre la Administración y los administrados lo indica la cifra de 7.000 denuncias presentadas por aquélla en el año 1974 y el caso extremo de un ganadero de Pontones que se ahorcó abrumado por las deudas de denuncias (1).

Una carta enviada a varias revistas, firmada por diecinueve habitantes de las Sierras de Segura y Cazorla dicen, entre otras cosas: "...Este organismo estatal (ICONA) lleva años repoblando estos montes de ciervos, jabalíes, cabras hispánicas, etcétera. Dichos animales destrozan nuestros sembrados, comen nuestras frutas y agotan los pastos destinados a nuestro ganado lanar y vacuno. ICONA nos promete indemnizaciones por dichos destrozos, pero éstas son ridículas y tardías, al ser tasados los daños por el propio personal de ICONA

(1) José Bautista de la Torre. "Más sobre la Sierra de Segura...". "Sábado Gráfico" número 997.

y ser víctima de la lenta maquinaria burocrática estatal....".

"Miles de familias han tenido que emigrar y los que quedamos pronto nos veremos obligados a hacerlo ante el omnipotente avance devorador de ICONA. Hemos sido víctimas de intimidaciones de los grados más variables. No podemos defendernos de sus animales y somos objeto de multas desproporcionadas cuando alguno de - nuestro ganado pasa el monte de su propiedad o cuando rompemos alguna de las normas que rigen el campo de concentración de ICONA ha hecho de estos bellos parajes. Aquí se valora la vida de un jabalí muy por encima de la de familias enteras".

"Se ven con más frecuencia incendios provocados por hombres llevados al borde de la desesperación, mientras la versión oficial habla de incendios provocados por domingueros descuidados o condiciones climatológicas extremas, tratando de ocultar la terrible lucha empezada por ICONA contra los campesinos y pastores de la zona".

"ICONA ofrece precios ridículos por nuestras tierras. Nosotros preferimos el hambre antes que regalárse las. Estamos acostumbrados a la libertad de nuestras montañas y nos resistimos a engordar las filas de los cientos de miles que viven prisioneros de las grandes ciudades..." (1)

(1) Revista "TRIUNFO". Número 670. Un grupo de habitantes de las Sierras de Segura y Cazorla.

Evidentemente, el texto ha tenido una elaboración literaria impropia de campesinos y pastores, pero el contenido es radicalmente auténtico. Probablemente sea obra de hijos de la tierra, de campesinos y pastores, que han vertido a lenguaje culto el relato oral de los afectados directamente.

Posteriormente, otros testimonios de personas individualizadas apoyan los asertos reproducidos:

"En el número 670 insertaban una carta firmada por diecinueve habitantes de la Sierra de Segura y Cazorla en la que se decían colonizados (aunque no mencionaran dicha palabra, creo que es la más adecuada) por nuestro querido y protagonizado ICONA. Y no puedo más que sentirme unido a sus quejas".

"Desde mi último destino como maestro pude ver numerosos incendios provocados no por domingueros ...sino por esos campesinos "al borde de la desesperación" que no tienen donde echar a pastar su ganado..." (1).

En el mismo sentido, en el mismo órgano periódico, se inserta otra carta de un lector:

"A las voces que claman por la defensa de nuestra Naturaleza ... se han unido las de un grupo de habitantes de las sierras de Segura y Cazorla (Jaén) ... ellos

(1) Revista "TRIUNFO". Número 672. Jesús Suárez González

son, sin duda, los portavoces de un sentimiento cada vez más extendido en estas comarcas ante la progresiva confiscación de las tierras y propiedades por el ICONA que está suponiendo, de hecho, la expulsión más o menos encubierta de la población... Aunque el pretexto parece ser la conservación de la Naturaleza; esto no es así porque no creemos que sea conservar la Naturaleza convertir en "museos" amplias zonas de estas sierras, arrasando su economía (pastoril y forestal, principalmente) en provecho de las grandes empresas, como la RENFE, y de las dedicadas a organizar monterías en lo que será un gigantesco coto "nacional"... El ICONA no va a proteger la Naturaleza, la va a reservar para que la disfruten unos pocos, convirtiendo la sierra en un museo caro, fotogénico y folklórico a costa del éxodo de sus habitantes, a los que previamente se ha despojado de sus medios de subsistencia..."

"Si repasamos la Historia, comprobamos que las únicas devastaciones producidas y la deforestación de grandes zonas ha sido debida a la mano del Estado...Hoy día es la RENFE la que explota (y agota) los recursos forestales, y no precisamente los pastores, leñadores y campesinos segureños o cazorleños" (1).

Es curioso, sin embargo, comprobar la persistencia de una mentalidad administrativa despectiva hacia

(1) Revista "TRIUNFO". Núm. 972. Carta de Jaime Axel Ruiz.

los administrados y de espaldas a los intereses de las comunidades silvícolas: si el ministro de Marina de Segura, Pichardo, afirmaba que los serranos "se guían por la pasión" y previene, mediante precavido informe, "que lo pueden calumniar", y el subdelegado del Real Negociado de Segura en Sevilla, Bruna, explica ciertas cosas al secretario de Marina, Antonio Valdés, "para que tenga una idea del pernicioso carácter de aquellas gentes", un director provincial de ICONA calificaba a los serranos, ante el gobernador civil, señor Calderón Ostos, de "mala gente".

Y es que se ha producido una curiosa solidaridad funcionarial, ya señalada en otra parte, en virtud de la cual la Administración nunca es culpable. A veces, se ocurre pensar que quienes imaginaron y lograron para RENFE la exclusiva de los montes estatales en esta comarca, y sólo en esta comarca entre todas las de España, tenían a la vista la "gloriosa empresa", y sobre todo productiva para sus mentores, del Real Negociado de Segura en Sevilla. Sólo con esa ciega solidaridad de clase, perpetuada a través de generaciones profesionales, se puede explicar el siguiente texto, publicado en 1976:

"La adscripción de gran parte de los montes oros pedanos a la Marina Real ha sido factor fundamental, a través de una sabia gestión, de la conservación de unos bosques que, en la actualidad, constituyen el principal

núcleo de producción maderera de Andalucía..." (1). En contra de lo comúnmente sabido y admitido, juzgando los efectos de deforestación y abstrayendo cualquier calificación moral sobre la gestión de aquéllos organismos.

Hay, asimismo, otra actitud similar que aproxima a los administradores de antes y de ahora: El citado Bruna dice en el mismo informe citado arriba que "ellos mismos (los de Segura) deben su subsistencia a las dos comisiones que con sus caudales mantienen aquel País", extrañándose de su encono; hoy es normal que ICONA, en sus autoloas en el periódico provincial, se presente como benefactor porque emplea jornales en la Comarca, como si los trabajos dirigidos a la repoblación forestal y las pistas para saca fueran concesiones gratuitas. El organismo citado es denominado publicamente, en tono de alabanza, "tutelar de Sierra de Segura". Es un triste final para aquel concejo de Segura y para el Común del Val de Segura, porque sólo se tutela a los incapaces o menores.

(1) Juan Ruiz de la Torre (profesor de la Escuela de Montes) en "Cazorla y Segura", pág 114. Instituto de Estudios Giennenses y Confederación de Cajas de Ahorro.

XX .- CONCLUSIONES

El examen antecedente del régimen de montes de la Sierra de Segura, objeto de esta tesis, nos lleva a las siguientes conclusiones:

1ª) La Administración de montes, desde época temprana, pero aceleradamente desde la Ordenanza de Marina de 31 de enero de 1748, ha llevado a cabo un despojo sistemático de los derechos de las comunidades silvícolas, formulados desde los albores históricos, protegidos por el derecho foral y consagrados por la costumbre.

2ª) Si antes de la Ordenanza de 1748 los ataques a esos derechos fueron esporádicos, dicha pieza legislativa abrió -para más de la mitad de las zonas de bosque de España- un período marcado por la represión y el enfoque técnico, ajurídico y destructivo de las comunidades forestales y ganaderas.

3ª) El espíritu que anima la actual administración de montes y su legislación reguladora siguen la línea de la Ordenanza de 1748, observada hasta hoy sin solución de continuidad.

4ª) Esa administración y las leyes por que se rige son las culpables directas y más importantes de la enemiga -aparentemente irracional- de los españoles a los bosques.

5ª) Igual causa tienen las enormes destrucciones sufridas por los bosques en los dos siglos últimos, que superan atterradoramente a las anteriores. Porque la Administración se organizó para talar, asistiéndose de -

"imperium", erigiendo una jurisdicción especial al servicio de una explotación mercantil y dilapidando los bosques para beneficio personal, en bastantes ocasiones, de sus funcionarios. Paralelamente, al debilitar a las entidades municipales o supramunicipales, titulares de los bosques, los convirtió en presas de los "avisados y logreros". Reflejamente, los labradores y ganaderos, los forestales (permítase aplicar esa denominación a los que viven del bosque), privados de sus medios de vida, de sus jueces tradicionales, vejados, oprimidos, punidos y desterrados, reaccionaron contra lo que era causa externa de su desgracia y se sumaron a la destrucción de lo que sólo les traía desventuras.

6ª) La conclusión final, que engloba a todas las demás, es que la dramática historia última de los bosques españoles es una crisis de la convivencia entre las comunidades silvícolas y el resto de la nación. Como el derecho es la suprema fórmula de convivencia, en la ley está la defensa real de los bosques. Se hace imprescindible, pues, una ley civil nueva que ofrezca protección a los montañeses, sin hacerlos únicos soportes de las necesidades nacionales sucesivas, los ponga salvos de la arbitrariedad y distinga perfectamente entre política de montes (que ouide a las gentes) y técnica de montes (ocupada en los árboles). Una ley que cumpla, real y garantidamente, la propuesta del almirante Fernández de Navarrete:

"¿Cual es y ha sido siempre la tendencia de una

buena legislación, sino enlazar y unir estrechamente los intereses del Estado con el de los particulares, de modo que trabajando estos con celo y actividad por el suyo privado y personal, resulte al mismo tiempo el del público o el de la sociedad en general a que pertenecen ?" (1)

y, como dice también el mismo autor:

"Podrá calificarse de justa y conveniente una ley que carece de requisito tan esencial e indispensable?" (2).

En la respuesta adecuada a esa pregunta está la solución de la mayor parte de los problemas forestales españoles. Y esa respuesta está en manos de la Administración, que sigue sin encontrarla, como demuestra su reciente opción por la ley penal, tras la cual ha seguido creciendo el número de incendios.

(1) Expediente citado, pág. 90.

XXI .- APENDICE DOCUMENTAL

Para que non lleuen derechos algunos de mil pinos que se han de traer para la obra de los alcaçares de Cordoua.

Donna Ysabel por la gracia de Dios reyna de Castilla, de León, de Aragón, de Secilia, de Toledo, de Valencia, de Gallisia, de Mallorcias, de Seuilla, de Cerdenna, de Córdoua, de Córcega, de Murcia, de Jerusalem, de los Algarbes, de Algesira, de Gibraltar, condesa de Barcelona e sennora de Viscaya e de Molina, duquesa de Atenas e de Neopatria, condesa de Ruysellón e de Cerdanna, marquesa de Oristán e de Gociano, a vos los concejos, justicias, regisdores, caualleros, escuderos, oficiales e omes buenos de todas las cibdades e villas e logares que ay desde el Val de Segura fasta esta cibdad de Córdoua e reiberas del Guadalquivir, e a otras quales quier personas a quien lo en esta mi carta contenido attane e attaner puede en qual quier manera e a cada uno e qual quier de vos, salud e gracia. Sepades que yo he mandado a Juan de Frías, veinte e quatro desta cibdad de Córdoua, que para lauor de mis alcaçares de la dicha cibdad de Córdoua de que él tiene cargo, traya e faga traer de la Sierra de Segura mill pynos que son manester para la dicha lauor. E por su parte me fué fecha relación que el se teme e recela que en algunas desas dichas cibdades e villas e logares les demandarán e llauarán del pasaje de los dichos pinos veintenas e pasos e otras nuevas ynpusiciones o se porman otros ynpedimentos en el traer de la dicha madera, e

me suplicó e pidió por merced que sobre ello prouiese como la mi merced fuese, e yo touelo por bien. Porque vos mando a todos e a cada vno de vos que dexeys e con syntays al dicho Juan de Frias, e al que dicho su poder ouiere, traer libremente los dichos pinos de la sierra de Segura a esta dicha cibdad de Córdoua para la lauor de los dichos alcaçares, e non les pidaís nin lleueis nin consintais que le sean lleuados nin pedidos nin demandados del pasaje de los dichos pinos vein^{tenas} nin pasos ni portadgos nin otras ynpusiciones al gunas, saluo los derechos que antiguamente solían ll^{lleuar} antes del anno de sesenta e quatro, e si algunas personas tentasen de lo pedir e lleuar contra el tenor e forma desta mi carta, esecutedes en ellos e en sus bienes las penas contenidas en la ley por el rey mi sennor e por mí fecha en las cortes de Toledo que sobre este caso fabla. E los unos nin los otros non fagades nin fagan ende al por alguna manera so pena de la mi merced e de dies mill maravedís/ para la mi cá-mara.

Además mando al ome que vos esta mi carta mostrare que vos enplase que parescades ante mí en la mi corte doquier que yo sea del dia que vos enplasare fasta quinse dias primeros siguientes so la dicha pena. So la qual mando a quialquier escriuano público que para esto fuere llamado que de ende al que vos la mostrare testimonio signado con su signo por que yo sepa como se cunple mi mandado. Dada en la noble cibdad de Córdoua, treinta dias de junio, anno del nascí-

miento de nuestro sennor Ihesu Xristo de mill e quatro cientos e ochenta e quatro annos.

Yo la reyna. Yo Ferrand Aluares de Toledo, secretario de nuestra sennora la reyna lo fis escreuir por su mandado.

Rodericus, doctor. Johannes, doctor. Andraus, doctor.

TRASLADO DE LA REAL EJECUTORIA DE LA CHANCILLERIA DE
 GRANADA
 SOBRE
 LA GUARDA DE LAS ORDENANZAS DEL
 PARTIDO DEL VALLE DE SIGURA

Don Phelipe por la gracia de Sios Rey de Casti-
 lla, León, de Aragón, de las Dos Sicilias, de Jerusa-
 lem, de Portugal, de Navarra, de Granada, de Toledo,
 de Valencia, de Galicia, de Mallorcas, de Sevilla, de
 Cerdeña, de Córdoba, de Córcega, de Murcia, de Jaén,
 de los Algarbes, de Algecira, de Gibraltar , de las is-
 las de Canaria, de las Indias Orientales y Occidenta-
 les, Islas Indias orientales, Islas Indias occidenta-
 les, Islas y Tierra Firme del mar Oceano, Archiduque
 de Austria, duque de Borgoña, de Brabante y Milán, con-
 dedde Ampurias, de Flandes y de Tirol, señor de Vizca-
 ya y de Molina a los nues-
 tros corregidores, asistentes, gobernadores, alcaldes
 mayores y entregadores y ordinarios y otros qualesquier
 nuestros jueces y justicias ansí de las villas de Sigu-
 ra de la Sierra, Torres, Génave y Villarrodrigo, como
 de todas las ciudades y otras villas y lugares de los
 nuestros reinos y señoríos ante quien esta nuestra car-
 ta executoria fuese presentada, o su traslado della sig-
 nado de escriuano público, sacado con authoridad de -
 juez, alcalde, en manera que haga fe y a cada uno y -
 qualquier de vos en vuestros lugares y jurisdicciones,
 salud y gracia. Sabed que pleyto passo y se tractó en

la nuestra corte y chancillería ante el presidente y oidores de la nuestra audiencia que está y reside en la ciudad de Granada, entre los concejos, justicias y regimientos de las dichas villas de Torres, Xenave y VillaR^o y su procurador en sus nombres de la una parte y concejo, justicia y regimiento de la dicha v^a de Sig de la Sierra y el licend^o García Toledano, alcalde mayor en ella y su tierra y procurador en su nom, de la otra, el qual se còmençó en la dicha nra, Audiencia por via de querella y de/manda y fué sobre razón que parece que en la dicha ciudad de Granada en quinze días del mes de febrero del año passado de mil y seiscientos y ocho, estando los dichos nro. Presidente y oydores haciendo audiencia pública, Joan Serrano, procurador en la dicha nra, Audiencia, presentó una petición por la qual, como substituto de Gaspar de Torres, procurador en ella en nombre de los concejos de Xenave, Torres y VillaRodrigo, junto a Sigura de la Sierra, y por virtud de su poder se querelló ante nos del licenciado Toledano, alcalde mayor de la dicha villa de Sigura de la Sierra, y de los demás culpados diciendo que sus partes eran villas eximidas y tenían jurisdicción civil y criminal, merom mixto imperio privativamente en todas las causas civiles y criminales y auian proçedido en lo que se auia ofrecido conforme a las ordenanças por no confirmadas y hechas en conformidad del concejo de la dicha villa de Sigura de la Sierra y teniendo como tenían, para la dicha execución y jurisdicción, privilegios sobre carta y ex^a (executoria)

ganada en la dicha nra audiencia, y ansí, conforme a las dichas ordenanças, todas las causas y den^{es} (denunciaciones) que se hiciesen a los vecinos de las dichas villas en lo que auia de pasto común, ansí por los alguaciles de la dicha villa de Sigura y guardas de campo como las demás justicias y guardas de las dichas villas, se sentenciasen y determinase conforme a ellas y auiendo requerido sus partes ael dicho alcalde mayor de la dicha villa de Sigura y las demás justicias della sentenciasen las dichas causas y denuncias conforme a las dichas ordenanças, no lo auian querido ni querían hacer, antes auian sentenciado y sentencian las dichas causas y denunçiaçiones contra los dichos vecinos, conforme a las ordenanças que la dicha villa de Sig^a tenía en particular para sus dehesas cerradas y sus vecinos, de todo lo qual omisso y denegado contrassus partes, por ellos auia sido apelado y si era necess^o, de nuevo en su nom^e apelaua y se presentaua ante nos de hecho con su persona, suplico-nos mandásemos darle nra providencia compulsoria para que qualquier escriuano en cuyo poder estubiesen las dichas ordenanças, o estando en el archivo de las dichas villas, las sacasen y diesen a sus partes un traslado dellas y de los requerimientos que por sus partes se auian hecho a los alcaldes mayores para que las guardasen y cumpliesen y ansímismo diesen traslado de los processos y denunciaciones que ubiesen causado en contravención de los susodicho y pidió justicia y costas y que le mandásemos reciuir en el dicho grado de



apelación, la qual por los dichos nro, presidente y oydores fue receuida y le fue mandada dar y se le dió la dicha nra, provisión compulsoria para que qualquier escriuano le diese un traslado de todo lo susodicho, en virtud de la qual truxo y presentó y su tenor de las dichas ordenanças que entre los dichos autos venían insertas es como sigue:

Diego de Escouar, escriuano del ayuntamiento desta villa de Sigura, yo os mando que de las ordenanças que esta villa tiene confirmadas por el rey nro, - señor saquéis un traslado dellas con su pié y caueza de su confirmación y en pública forma y en manera haciendo fe, las tened de manifiesto para cada y cuando en este ayuntamiento y fuere a el fuere - necessario para las ver y entender su disposiçión, para que el original dellas esté en el archivo en la custodia y guarda que conbiene para que no se rompan ni maltraten, porque ansí conbiene al servicio del Rey nro, Señor y bién de la República y su común, que yo os mandaré pagar vuestros derechos justos. Y lo cumplid ansí luego, so pena de prisión que siendo necesario a ello interpongo la authoridad del decreto judicial, tanto como con fuero y con derecho se requiere. Fecho en la villa de Sigura de la Sierra, en veinte y tres días del mes de octubre de mil y quinientos y noventa y tres años. Bernardino de Adrada Godines, por su mandado, Diego de Escouar, escriuano.

Yo el dicho Diego de Escouar, escriuano digo que me di por notificado el dicho mandamiento y en cumplimiento saqué del archivo deste cauildo el original de las dichas ordenanças y dellas saqué un traslado que es del tenor siguiente. Diego de Escouar, escriuano.

Sigue con un encabezamiento igual al reseñado de Felipe II que inicia un texto que comienza así:

....por quanto auendosenos hecho relación por parte de la villa de Hornos que estando ella y las demás del común del Valle de la Villa de Sigura de la Sierra en costumbre y posesión muy antigua que, quando la villa de Sig^a quisiera hacer ordenanças, por provisión nuestra, especialmente para la guarda y conservación de los términos de las dichas villas, no las puedan hacer sin que junte todos los concejos del común y estén presentes a las hacer y contra dicha costumbre, sin sauiduría del común de la dicha villa de Sigura y auia hecho ciertas ordenanças y confirmandolas y executaua las penas en ellas contenidas en gran daño y perjuicio de las villas y lugares del dicho común y suplicándonos mandásemos dar nra, provisión para que las dichas villas y lugares del dicho común se juntasen y pudiesen nombrar un procurador universal para que en nombre de los dichos concejos contradixese las dichas ordenanças, mandándolas traer ante los del nro, consejo de las Ordenes originalmente, donde las partes

fuesen oydas sobre ello e su justicia, nos, por una prouisión en el dicho nro, consejo, mandanos al licenciado don Francisco de Bargas, nro, alcalde mayor del dicho partido de Sigura, diese licencia a las dichas villas y lugares del dicho común para que, en su presencia, se juntasen a tractar y conferir las cossas que ael dicho común tocasen y, auiendo sido requerido con ella el dicho alcalde mayor, dió cierta respuesta a cuya causa, por otra nra. provisión, mandamos a - Francisco de Molleda, nro. escriuano, fuese a la dicha villa de Sigura y, en presencia del dicho alcalde mayor, hiciese juntar a los officiales del dicho común y hiciesen las ordenanças que pareciese conbiniesen, sin permitir ni dar lugar que los caualleros de sierra ni otra persona, fuera de los officiales del dicho común, se hallasen en la junta, mientras en ella, a tractar de lo tocante a las dichas ordenanças. En cumplimiento de lo qual, a tractar de lo tocante a las dichas ordenanças. En cumplimiento de lo qual, el dicho Francisco de Molleda hiçe juntar los officiales de las villas y lugares del dicho común y, en presencia del dicho alcalde mayor, hicieron ciertas ordenanças e fueron traydas y presentadas ante los del dicho nro. q (¿Consejo?). y por ellos vistas, hicieron en ellas ciertas enmiendas y adiciones cuyo tenor, con lo añadido y enmendado es lo siguiente.

COMIENZAN LAS ORDENANZAS PROPIAMENTE DICHAS.

1.- PRESENTACION DE LOS CAUALLEROS Y CALIDADES DELLOS

Primeramente ordenamos y mandamos que para la guarda de los dichos términos y montes cada un año guardándose se las leyes del fuerona que esta villa está poblada usada y guardada en lo que toca a los caballeros de sierra y solemnidades de su presentación que por el día de san Miguel de septiembre después de echados los officios públicos desta villa de Sigura se presenten ante los oficiales concejo justicia y regimiento de la dicha villa por tales caualleros de sierra todas las personas que quisieren usar y exercer el dicho oficio todos juntos y en el día que para ello fuese nombrado y señalado por el cavildo los quales tengan cauallo en sillado y enfrenado a la gineta que valga doce mil mrs sin la silla e adereços e sus armas conviene a saber capaçete e babera celada y morrión o las coraças o cota y espada y daga e puñal lança y adarga y ansimismo que tenga bienes raíces que sean propios cuyos desembargados en contía de los cien florines del cuño de Aragón con el doblo conforme a la ley del fuero que montan y hacen cinquenta mil mrs. de la moneda que al presente corre los quales bienes raíces haya poseído por tales suyos a lo menos por seis años antes de la tal presentación quando los demás caualleros se presentaren segun dicho es viniere a se presentar no sea ni pueda ser admitido ni reciuido a el dicho oficio y en esta ordenanza hubo ciertas contradicciones por las villas del común y por esta villa de Sigura que

fué en las ordenanzas confirmadas por su magestad antes desta y por su magestad vista esta con las demás fue respondido y mandado a esto que haya veinticuatro caualleros los doce puestos por Sigura y los doce - puestos por las villas del común y que estos caualleros usen sus officios por el tiempo que tuviere el officio de el gobernador que fuere en este partido y den residencia quando el tal juez la diere en este común se aprobó y tuvo por buena esta hordenanza.

2.- DEL JURAMENTO DE LOS CAUALLEROS Y DE SU EXAMEN.

Item que en el dia de su presentaci^on antes los dichos officiales del concejo y los dichos jueces nombrados para ello por el dicho cavildo para el examen de las tales armas y caualllos sean obligados los tales caualleros no habiendo impedimento ligítimo a correr la carrera con las dichas sus armas y jure cada uno en forma devida de derecho ante el escribano del cabildo y officiales como son suyas las dichas armas y caualllo y que no son prestadas ni las prestara a otro para que se presente con ellas y que usará bien y fielmente el tal officio de cauallero y guarda de los - términos guardando el servicio de Dios Nuestro Señor y de su magestad y mirarán por el bién y pro común desta villa y sus términos y de las villas y aldeas dellas y del común desta villa de Sigura y que en todo guardarán las ordenanzas desta villa y harán todo aquello que buenos y leales caualleros y guardas de

los dichos términos y montes deben y son obligados a hacer y a la conclusión del juramento digan sí juro y amen.

3.- QUE LOS CABALLEROS TENGAN RECUDIMIENTO.

Item que los caualleros ansí presentados y examinados sus armas y caualllos y dado todo por bueno y bastante por los dichos officiales y jueces no puedan usar el dicho officio de caualleros y guardas destos términos sin que primero les sea dado recudimiento por el dicho concejo y como es admitido por el tal cauallero de el dicho tiempo el qual sea obligado a sacar de el escrivano del cavildo y firmado de uno de los alcaides como se tiene de costumbre y por el tal recudimiento lleve el tal escrivano diez mrs.

4.- QUE LOS CAUALLEROS TENGAN SIEMPRE ARMAS Y CAUALLO.

Item ordenamos que para que el tal cauallero haya de ser admitido al uso y exercicio del dicho officio y guarda de los términos sea obligado a tener ordinariamente las dichas armas y cauallo sin lo vender prestar ni alquilar y si lo vendiere en qualquiera parte del año sea obligado a lo comprar dentro de un mes y aquél passado no pueda gozar de la dicha cauallería hasta que lo compre y lo manifieste para que se examine conforme a la ordenanza y si se le muriere sea - obligado a le comprar dentro de dos meses los quales

passados no pueda usar el dicho officio si no comprare y manifestare el dicho cauallo conforme a la dicha ordenanza - declarase más en esta ordenanza que si passados los dichos términos el tal cauallero no hubiere comprado el dicho cauallo y manifestado para que se - examine la toma y tomas y prendas que hiciere sin tener el dicho cauallo y recudimiento para usar el dicho officio no le bala ni el juez pueda admittilla ni el tal cauallero lleve derechos della y sea ninguna la tal denunciación y sea libre el denunciado o denunciados y para que en esto haya cumplido efecto lo que se ordena aquí se manda que cada y quando a el tal cauallero se le muriere el tal cauallo y lo vendiere sea obligado dentro de tres días de como lo vendiere o se le muriere el tal cauallo a lo registrar y registre a el cavildo y ante el escrivano de el para que se sepa y averigue desde quando corren los términos dichos y si no se hicieren estas diligencias no valgan las tomas que el cauallero hiciere como dicho es.

5.- DE LA PENA DEL CAUALLERO QUE FINGIDAMENTE TIENE
LOS DICHOS BIENES ARMAS Y CAUALLLO.

Item se ordena que si para se presentar el tal cauallero trajere cauallo o armas compradas o hiciere compra de bienes fingidamente o otras escrituras fingidas para poder ser habido por tal cauallero que cada y - quando se averiguare no le valga y pierda las tales

armas y caualllo y bienes lo qual sea aplicado y por la presente lo aplicamos en esta manera la tercia parte para el denunciador y la otra tercia parte para reparos de caminos y puentes del común a dispossição del concejo de la dicha villa de Sigura y la otra tercia parte para el juez que lo sentenciare.

6.- QUE LOS CAUALIEROS VISITEN LOS TERMINOS POR SUS PERSONAS Y DE LA ORDEN DE LLEVAR COMPANIA.

Item ordenamos y mandamos que los tales caualleros as si admitidos a el uso y exercicio del dicho officio sean obligados a visitar y andar los dichos terminos por sus personas y que cada uno puede llevar consigo un hombre el qual hombre lleven el que pareciere con veniente con parecer del cavildo de la dicha villa el qual ha de jurar ante todas cosas en forma de derecho de usar bién el tal cargo de testigo aprobado y se guarde esta dicha ordenanza que el tal testigo sea creído solamente quando con juramento declarare que vido por vista de ojos hacer la tal corta o otro conflicto declarando la parte y lugar y dia que lo vido hacer y por este dicho siendo el delinquente vecino deste comun si no fuere abonado en aquella cantidad se arraigue de fianzas llanas y abonadas desta jurisdicción para pagar lo juzgado y sentenciado y si fuere forastero por solo este dicho se prenda hasta que dé las dichas fianzas = y demás de esto para más justificación el tal cauallero tome prendas muertas del

vecino comun que es hacha o escodixo o manta o caldero o otra qualquier prenda que no sea ganado ni bestias ni dineros y al forastero le pueda tomar prendas que asigure el valor de la tal denunciación y delicto y por oidas mandamos no haga fe el dicho testigo aprobado y también ordenamos que ningun cauallero no haga fe, ni prueba en denunciación que otro cauallero hiciera por escussar malicias y otros inconvenientes y se ordena que el cauallero que llevare consigo el tal testigo no le pue~~da~~ dar ni dé de presente ninguna de las tomas que se hiciera sino que le pague el salario o jornal que por cada día justamente mereciere e no más.

7.- QUALES BONDADDES HAN DE TENER LOS CAUALLOS DE LOS CAUALLEROS Y EL TIEMPO QUE SEAN OBLIGADOS A TENELIOS ANTES QUE SEAN ADMITTIDOS.

Item ordenamos que los tales caualleros que ansi se presentaren al dicho officio hayan de tener cauallo quando se presentare el qual sea de tres años y dende arriba de manera que con potro de dos años no se pueda presentar ni les valga porque conviene que tengan buenos caualllos sanos que sean tales que con ellos en servicio de su magestad y en defensa de su tierra y reino puedan defender y ofender y para mayor conservación y guarda desta ordenanza declaramos que la justicia desta villa de Sigura ni regidores della por sí solos no puedan examinar los dichos caualleros ni sus

armas ni caualllos ni bienes si no fuere estando juntos en su cavildo e ayuntamiento y que concurran en el tal nombrado las calidades contenidas en estas ordenanzas y no de otra manera y que el examen que de otra manera se hiciere no valga ni el cauallero pueda usar el dicho officio ni valgan las prendas y penas que hiciere y el cauallero que estubiere suspendido o privado o de aquí adelante lo estuviere no pueda usar del dicho officio sin que por su magestad sea habilitado y si de otra manera lo usare no valgan las prendas o penas que hiciere y se proceda contra él conforme a derecho.

8.- AL QUE DENOSTARE A LOS CAUALLEROS.

Item ordenamos y mandamos que los tales caualleros guardando los dichos términos e andando por ellos usando sus officios si alguna persona o personas deffendieren las prendas o hicieren reprehendas o otra cualquier resistencia o les denostaren o hicieren o dixeren otros denuestos o palabras sobejanas o de injurias incurran en las penas establecidas por leyes del reino.

9.- QUE DEN FAVOR A LOS CAUALLEROS Y LA PENA QUE TIENE QUIEN NO SE LE DIERE.

Item ordenamos y mandamos que cada y quando los tales caualleros andando guardando los términos prendaren a qualesquier personas que hubieren incurrido en quales



quier penas de estas nuestras ordenanzas y para el hacer de las prendas requieran a otras personas pidiendo les favor y ayuda y que vayan con ellos a prender los tales culpados sean obligados las tales personas a lo hacer y si no lo hicieren luego como sean requeridos y llamados por cualquier cauallero incurran en las penas establecidas por las leyes del reino.

10.- QUE LOS CAUALLEROS VAYAN A VISITAR LAS MOJONERAS QUANDO LES FUERE MANDADO POR LA JUSTICIA O EL CONCEJO.

Item ordenamos y mandamos a los tales caualleros que cada y quando por la justicia desta villa de Sigura o por el dicho concejo les fuere mandado que visiten los términos y requieran las mojoneras o bayan con las justicias a visitallas según se contiene en otra ordenanza desuso sean obligados a lo hacer y si fueren a visitar la dicha mojonera con la justicia u a otra necesidad que ocurriere al dicho concejo que sean obligados a lo cumplir como les fuera mandado y que el concejo les de alimento a los dichos caualleros e a sus caualleros quando el concejo lo diere a los oficiales del concejo que a los tales cassos salieren y que el cauallero que lo contrario hiciere y fuere contra esta ordenanza y las demás ordenanzas desta villa tenga de pena que pierda el dicho officio de cauallero y no lo use por tiempo de tres años y qualquiera vecino lo pueda denunciar.

11.- LO QUE HAN DE HACER LOS CAUALLEROS COMO Y QUANDO
DELINQUIENDO Y COMO SE HA DE PROCEDER.

Otrosí ordenamos que cuando los dichos caualleros visi
tando los dichos terminos hallaren algunas personas de
linquiendo en ellos y quebrantando nuestras ordenanzas
o qualquiera dellas talando o fuego encendiendo o otros
excesos haciendo se guarde en la orden de prender e -
proceder lo que contiene en el capítulo sexto antes
deste en que se declara que el cauallero que de vista
hallare haciendo algun exceso contra estas ordenanzas
por el dicho testigo aprobado siendo el que el tal de-
licto hiciere vecino deste comun no siendo abonado en
aquella cantidad que fuere prendado se araygue de fian-
zas en la dicha cantidad y los forasteros de fuera del
común sean presos con solo la denunciación del caualle-
ro y dicho del aprobado y en caso de decir de oídas no
valga el tal testigo para prender sino que el caualler-
ro lo pruebe juridicamente y se ordena que por los ex-
cessos que los vecinos deste comun hicieren contra lo
contenido en estas ordenanzas no sean pressos siendo
abonados en la cantidad que se les pidiere y los que
no fueren abonados despues de estar araygados y dadas
fianças también sean sueltos y se les pida a los unos
y a los otros hordinariamente y no sean pressos hasta
haber determinado la causa deffinitivamente y confor-
me a derecho se haga el apremio de la execución de
las tales sentencias declarándose por abonados todos
los señores de ganado y labradores que por sus perso-

nas excedieren contra estas ordenanzas y si fueren sus criados destos susodichos los que excedieron estos se araygen de fianzas llanas de estar a derecho y pagar lo juzgado y sentenciado = Item se ordena que las citaciones que se han de hacer a los dichos vecinos deste común araygados y abonados ha de ser a costa del que denunciare hasta la determinación de la causa deffinitivamente porque entonces pagará las costas aquel que de derecho las debiere pagar y otrosí se ordena que porque cessen gastos y molestias injustas de que los vecinos desta villa y su comun reciben mucho daño y agravio y para lo remediar se ordena que los tales - caualleros denuncian justa y derechamente aquello que tuviere averiguado y se pudiere averiguar y probar so pena que el cauallero que hiciere denunciaciones no las provare ni averiguare y el tal demandado fuere dado por libre pague el tal cauallero todas las costas y gastos del denunciado y sea obligado a pagar la parte del juez y concejo desta villa de la tal denunciación como si fuera sentenciado contra el tal denunciado y esto se guarde así por cessen muchos inconvenientes.

12.- EN QUE TERMINO HAN DE DENUNCIAR LOS CAUALLEROS
LAS PRENDAS QUE HICIEREN.

Item ordenamos y mandamos que las dichas denunciaciones que así se hicieren los tales caualleros de qualesquier cosas destas nuestras ordenanzas lo que acae

ciere de una legua alrededor desta villa sean obligados a la denunciar dentro de tres días después que lo supieren e la tal toma que hicieren e lo que acaeciere de la dicha legua en adelante hasta en fin de los terminos hayan de denunciar y manifestar dentro de cinco con la solemnidad que en otra ordenança se dirá so pena que no le valga a el tal cauallero la prenda que así por toma o por sabida hiciere ni dello pueda llevar cossa alguna y si algo llevare lo vuelva y haya perdido con el quatro tanto aplicados por tercias partes para la cámara de su magestad denunciador y juez que lo sentenciare.

13.- CAPITULO DE LA PENA QUE TIENE EL CAUALLERO QUE ORDENANZA QUEBRANTARE.

Item ordenamos y mandamos que porque por experiencia se ha visto el gran daño que a el bien público y terminos ha venido de causa de se atrever los tales caualleros y otras personas por su mandado aeechar fuego y hacer talas y a sacar madera vedada así por Rio como en carretas fuera de estos términos y para eximirse de las penas lo hacen sauer a algun otro cauallero su amigo o pariente para que lo denuncie y no se lo pida otro cauallero y así denunciado nunca más se lo pide ni sigue la causa en lo qual dios nuestro señor y su magestad son deservidos y la República queda muy offendida por tanto que ningun cauallero ni guarda de los términos ni otra persona por su mandado sea osado

hacer los tales excesos so las penas desuso contenidas con el doblo y que cauallero otro no se aparte para lo denunciar, de tal manera salvo que contra el cuallero culpado qualquiera persona lo pueda denunciar y acusar porque así cesen los dichos inconbinientes y la dicha pena sea aplicada en esta manera de tertia parte para el acusador denunciador y la otra tertia parte para el concejo de la dicha villa de Sigura y la otra parte para el juez que lo sentenciare.

14.- CAPITULO QUE PUEBAN PRENDAR LOS CAUALLEROS EN PANES FUERA DE DEHESAS Y DE OTROS VEDADOS.

Otrosí ordenamos que los dichos caualleros ayan poder de prender a todos y cualesquiera ganados mayores y menores que hallaren haciendo daño en los panes y heredades con fructo del término común y el orden que a de aver y se a de guardar en estas dichas prendas ha de ser de esta manera que los dichos caualleros han de prender de vista y toma y no de oídas ni de otra manera aunque después venga a su noticia y la pena que se ha de llevar ha de ser esta: de cada res mayor baca o buey caballo o yegua o otras bestias mulares o e otras cualesquiera bestias tengan de pena por cada una caueza que hallaren haciendo daño hallándola de día un real y de noche dos reales y de cada unammanada de ganado obejuno o cabrío, siendo la tal manada de cien cabezas arriba tengan de pena quinientos maravedíes de día y mil mrs. de noche — y siendo de cien

cauezas abajo tenga de pena cada caueza cuatro mrs. de día y ocho maravedíes de noche y cada caueza cuatro - mrs. de día y ocho maravedíes de noche y cada caueza de puerco tenga de pena de día un cuartillo y de noche medio real hasta veinticinco cauezas y de veinticinco cauezas arriba se entienda manada tengan de pena... (¿medio real?) de día y un real de noche y de más todas las penas declaradas de todos los ganados y bestias se ha de pagar el daño que hicieren al dueño de la tal heredad siendo juzgado y averiguado. También permitimos que el señor de tal pan y heredad pueda si hallare los dichos ganados haciéndole daño denunciar si quisiere y si fuere por sabidas haga lo mismo si quisiese, pero si el señor de los tales ganados que haciendo daños o los pastores que los guardan vinieren a el dueño del dicho pan y heredad dentro de tres días de como hicieren el tal daño y lo manifestaren a el señor el dueño de la tal heredad no pueda denunciar por sabida ni por tomada las quales penas se repartan en esta forma: La denunciación que hiciere el tal cauallero por tomada el tal cauallero lleve la tercia parte de las penas, y la otra tercia parte el juez que la sentenciare y la otra tercia parte se de a la cera del Santísimo Sacramento y animas del purgatorio de por mitad y en esto haya mucha diligencia para que no pierdan este beneficio las dichas cofradías y si fuese el dueño de dicho pan el denunciador lleve la tercia parte que había de llevar el cauallero y las dos como di

cho es juez y obras pías e ordenase que para poder los tales ganados andar y entrar y comer los panes y heredades y rastrojos porque ansí lo puedan hacer en sus haciendas libremente y sin pena alguna y los que de otra manera obiesen de coner con ganados los dichos panes y heredades e rastrojos con cargas ha de tener licencia del señor de las tales heredades dada ante el escribano público antes que entren a comer en ellas y la tal licencia tengan las personas que guardaren los tales ganados en su poder al tiempo que el cauallero los hallare en las tales heredades y rastrojos con cargas y si allí no la tubiere y después la mostrare no le balga e pague la dicha pena y los caualleros sean obligados quando hallaren los dichos ganados en los tales panes y heredades y rastrojos a sauer si los ganados y heredades son del mismo dueño porque si lo fueren no han de denunciar y si denunciaren el tal señor no sea obligado a pagar cossa alguna ni costas y se ordena que si los dichos que fueren denunciados parecieren dentro de tres días de como les fuere notificado y confessare la denunciación no se hagan más autos sino que luego sea condenado en la pena desta ordenanza y pague las costas hasta este estado con el consentimiento de la condenación y esto se guarde ansí en esto como en los demás excessos que se hicieren contra lo proveído por todas estas ordenanzas y el cauallero dueño que de vista hallare haciendo los dichos daños en los panes y heredades sea creído por su juramento

y el tal cauallero sea obligado a dar aviso al que recibió el daño y al que lo hizo para que el que recibe el daño cobre su hacienda y el que lo hizo sepa como esta prendado esto sin costa alguna y ante todas cosas la persona que recibió el daño ha de ser pagado enteramente.

15.- DE LO QUE SE HA DE GUARDAR QUANDO EL CAUALLERO A
RIESGO DEL DELINCUENTE POR SE ESCUSAR DE LA PENA
DENUNCIARE POR MITAD.

Item por experiencia se ve que de causa de la mucha - malicia que en los hombres hay por muchas vías procuran quebrantar nuestros fueros buenos estilo uso y costumbre inmemorial que se ha tenido y tiene ordenanzas en razón de la guarda y conservación de los montes en lo cual conviene poner remedio para que los caualleros no excedan de sus officios y los usen bien y diligentemente por manera que los que quebrantaren las ordenanzas sean punidos y castigados y los tales caualleros no hagan encubierta ni disimulación con ninguna persona de cualquier calidad que sea por tanto ordenamos y mandamos que si alguna persona excedie se contra estas hordenanzas que si por amistad o parentesco hiciere saber a algún cauallero para que lo denuncie a fin que otro no se lo pida ni sea penado que la tal denunciación no le balga y passe a otro cualquier cauallero el qual se ligitimo actor para lo pedir como si el hiciera la tal toma que el otro caug

llero denunció el qual cauallero que primero denunció según dicho es sea privado del dicho officio perpetua^{mente} y toda la pena sea aplicado por tercias partes denunciador concejo y juez que lo sentenciare.

16.- QUE LA PENA SEA DEL CAUALLERO QUE VISITANDO LOS TERMINOS HALLARE EL EXCESO Y NO DEL QUE LOS VISITANDO POR SAUIDA DENUNCIO ANTES.

Item porque se ha visto por experiencia que algunos caualleros estando en esta villa denuncian de algunas cossas contra los que exceden por los terminos e otros caualleros andando visitando los terminos hallan el tal excesso el qual denuncian y sobre ello ha habido pleytos entre el que primero lo denunció por sabida con el que ansí visitando los dichos terminos hico la tal toma diciendo el uno ser primero denunciador y por ello le pertenece la pena y el otro por haber tomado la tal pena y en fraganti del culpado y visto el fuego o cortado las talas y corta le perteneció y para que lo susodicho cesse e los tales caualleros salgan a visitar y guardar los dichos términos — ordenamos y mandamos que cada y quando lo tan acaeciére que sea preferido y de mejor condición el cauallero que ansí contare o hiciere la toma habiendo andado visitando y guardando los términos a el que denunció por sabida primero por manera que esto no sea parte para pedir la tal pena ni le pertenezca salvo que sea parte

y le pertenezca al sigundo cauallero que lo denuncia-
re por haber visitado visto y contado la tala o otro
delicto que se haga.

17.- QUE LOS CAUALLEROS SEAN VEZINOS DESTA VILLA DE
SIGURA Y ORCERA SU ARRABAL.-

Item que los tales caualleros y guardas de los térmi-
nos conforme a las ordenanzas antiguas desta villa
usadas y guardadas conforme a la ley del fuero hayan
de ser y sean personas contiosas y vecinos desta vi-
lla y Orcera su arrabal porque así siendo personas
abonadas y miradas guarden mejor los términos y estas
nuestras ordenanzas y en esto se guarde lo proveydo
por su magestad.

18.- QUE EL CAUALLERO PRENDA CAZANDO PESCANDO Y HAGA
LAS DENUNCIACIONES ANTE LA JUSTICIA ORDINARIA
DESTA VILLA Y ESCRIVANO DEL CABILDO Y SE NOTIFI
QUE A EL MAYORDOMO PARA QUE PIDA LA PENA QUE PER
TENECIERE AL CONCEJO.

Item por que nos parecen justas buenas y razonables
hordenanzas viejas antiguas que esta villa ha tenido
y tiene por una de las quales se pone el modo y solem
nidad con que los caualleros han de hacer las denun-
ciaciones y manifestaciones porque no se pueda hacer
fraude ni encubierta alguna y cada uno a quien las pe
nas pertenezca haya lo suyo ordenamos y mandamos que

los dichos caualleros ansi recevidos a el uso y exercicio del dicho officio y que han de guardar y visitar los términos con toda diligencia y solicitud si hallaren alguna persona o personas o ganados en los dichos términos cotos dehessas o bedados cazando o pescando donde conforme a las ordenanzas de esta villa y ley del fuero que habla en razón de los ganados forasteros que entran en nuestros términos sin licencia y registro deste concejo de que los quebrantadores tienen pena y los prendaren y supiesen dentro de que término y días son obligados por dicha ordenanza deben manifestar los tales caualleros son obligados sin lo disimular con persona alguna a hacer la tal denuncia-ción y manifestación ante la justicia ordinaria desta villa y por ante el escriuano del cauildo desta dicha villa a quien nombramos y señalamos para ello y no ante el escriuano público ni ante otra persona alguna el qual escriuano del cavildo asiente en un libro de el dicho concejo las tales manifestaciones declarando por extenso el nombre del cauallero que las hace y contra quién las hace y en qué parte del término lo hizo y si es el ganado que prendó mayor o menor o si fuera de día o de noche con día mes y año declarando por extenso la tal corta y tala o toma fuego o daño porque ha de ser condemnado el que culpado fuere conforme a las dichas ordenanzas y ansí asentadas las dichas manifestaciones que el cauallero la jure y pida su derecho ante la justicia y el dicho escriuano noti

fique la dicha manifestación de pena en que conforme a las dichas ordenanzas podría ser condenado el culpado al mayordomo o procurador del dicho concejo a el qual de la pena que ansí perteneciere a el dicho concejo de la tal pena y de lo que ansí el dicho concejo hubiere de haber se le haga cargo a el tal mayordomo para que con los demás propios y rentas del dicho concejo haya razón cierta y verdadera y dé cuenta con pago y en razón de la cobranza de las dichas penas que a el dicho concejo perteneciere las pueda pedir y demandar y cobrar en juicio y fuera del de cualesquiera personas que en ellas hayan incurrido conforme destas dichas ordenanzas e por la orden y forma que por el dicho concejo fuere mandado so pena que el escriuano o mayordomo que contra esto negligente fuere lo pague de sus bienes al concejo y el cauallero que las tomas que hiciere no denunciare y manifestare segun desuso dicho es pierda su oficio y no lleve de las tales tomas que hiciere cosa alguna que toda la pena dellas sea para el dicho concejo y el dicho mayordomo lo pueda pedir segun dicho es.

19.- QUE LOS CAUALLEROS MANIFIESTEN LAS TOMAS Y QUE NO RECIBAN MARAVEDIES NI OTRAS COSSAS SI NO FUEREN PRENDAS MUERTAS PARA HACER LA DICHA MANIFESTACION.

Item ordenamos y mandamos que los tales caualleros ha

gan las tales manifestaciones conforme a las ordenanzas desuso y no disimulen con persona alguna y no recian maravedies algunos ni otras cossas sin hacer la dicha manifestación y estar sentenciada la toma y para en pago de la pena que por ello le perteneciére y oviere de auer y para hacer la dicha manifestación no recian dinero si no fuere prendas muertas hasta estar sentenciado segun dicho es y las dichas prendas muertas que ansí recibieren manifiesten ante la justicia las quales ella deposite en persona lega llena y abonada que no sea cauallero de manera que no haya fraude ni encubierta en ningún daño o toma que hicieren so pena de perjurio por la primera vez que se averiguare y de los maravedies que recibiere de otra manera y lo que ansí disimulare e incurriere lo pague de sus bienes con el doblo aplicado la tercia parte para el denunciador y la otra para el juez que lo sentenciare y que como en caso de cohecho o baratería para en prueba della sea bastante por testigos las mismas personas con quien hiciere el dicho cauallero algun caso de los susodichos y por la segunda vez demás de las dichas penas sea privado del dicho officio para que dende en adelante no pueda usar el dicho officio.

20.- DE LOS QUINTOS.

Item ordenamos y mandamos que cada y cuando los dichos



caualleros hicieren algunos quintos de los ganados de los vecinos de afuera de la orden en los términos desta villa los manifiesten ante el dicho escriuano del cavildo segun dicho es para que se cobre conforme a las dichas ordenanzas desta dicha villa y ley del fuero que sobre esto habla y lleve el concejo la quinta parte de tales quintos.

21.- QUE LOS CAUALLEROS LAS PRENDAS QUE TOMAREN LAS TRAYGAN A PODER DE LA JUSTICIA DESTA VILLA PARA QUE SE PONGAN EN FIALDAD.

Item ordenamos y mandamos que por quanto en las dichas ordenanzas antiguas hay una ordenanza que parece ser justa y razonable que es del tenor siguiente: Otrosí ordenamos y mandamos que los dichos caualleros todas las cossas que ansí tomaren y prendaren y quintaren en la manera que dicha es que los traygan a poder de la justicia desta villa para que ellos lo pongan en fialdad el tiempo que el derecho manda uso y costumbre de esta dicha villa para que si viniere su dueño a dar alguna razón porque no se deba perder sea oído y si no lo hiciere que pasen a la pena como aquellos que lo encubren porque lo que los dichos caualleros tomaren y prendaren que lo tomen y prenden bien e si lo tomaren e prendaren que se lo haremos sano y de paz e que si mal lo prendaren e tomaren que se paren a las costas y daños que sobre ellos se

hicieren e recrecieren y mandamos que estas condiciones se guaren y sean guardadas tanto quanto nuestra merced.....
 fuere le descrecer y menguar en ellas y cada y quando entendiéramos que nos cumpliera desto mandamos dar a los caualleros estas dichas hordenes y las mandamos guardar y sellar con una tabla de nuestros sellos y signada y firmada de el escribano público de la dicha villa que fué fecha y otorgada por el dicho concejo domingo a doce días del mes de noviembre año del nacimiento de nuestro salvador Jesuchristo de mil y quatrocientos y ochenta años yo Alonso de Castro escriuano del Rey nro señor e su notario público en la dicha su corthe y en todos los sus reynos e señoríos y escriuano público desta villa esta ordenanza saqué por mandado del concejo según que ante mí passó y por que es verdad hice aquí este mi acostumbrado signo en testimonio de verdad Alonso de Castro escriuano público por tanto que aprobamos e confirmamos en todo y por todo la dicha ordenanza dandole nueva fuerza y vigor para que sea firme y executada por ser como es muy útil y necessaria a esta villa y su república.

22.- DE LOS FORASTEROS QUE EN SIGURA Y EN SUS TERMINOS VINIEREN A SE A AVECINDAR.

Item que por quanto por derecho y domicilio y principal vecindad de cada uno es donde vive y tiene su casa

sa poblada donde por las leyes del encabezonamiento general a las alcabalas y del servicio y montadgo perteneciente a su magestad está declarado y mandado que en tal lugar sea habido por vecino y no por donde se avecindaron sin ir a vivir con su cassa poblada a el tal lugar contra lo qual y en gran daño y perjuicio desta villa y sus propios y rentas y término y en perjuicio de los pobladores de ellos y de sus haciendas de ellos y de sus ganados se vienen a avecindar muchas personas de fuera de los dichos términos sin traer su cassa ni tenerla poblada porque muchas veces acontecen que no se reciben las tales personas en esta villa porque ansí conviene y en fraude desta villa y su república por favor y por otras vías exquisitas procuran los tales forasteros avecindarse en las otras villas y lugares situados en los términos desta dicha villa y so color de la tal vecindad y sin tener allí cassa poblada gozan como vecinos de los dichos términos y otros meten sus ganados de que de más de lo susodicho defraudan a este dicho concejo de sus derechos propios y rentas como por experiencia se ha visto y a su magestad sus derechos y porque lo tal cesse y en ello se ponga remedio de manera que la tierra sea abastada para los vecinos ordenamos y mandamos que cada y quando el tal forastero se viniere a avecindar a esta villa o a qualquiera de las otras villas y lugares de su término si casado fuere sea obligado a traer den-

tro de treinta días de como fuere recevido por vezino y a tener por todo el año su cassa poblada y hacer vecindad con los demás vecinos y esto mismo haga si viudo fuere so pena que no lo cumpliendo ansi no le valga la tal vecindad y si ganados hubiere metido en los términos los nuestros caualleros se los prendan y quinten conforme a la ley del fuero o ordenanza que desuso sobre ello habla pero si el vecino que se avecindare fuere hombre soltero y hiciere vecindad conforme a las leyes y pragmáticas de nuestros reynos aunque no tengan cassa poblada sea habido por vecino y goce como los demás vecinos.

23.- DE LO QUE PUEDEN HACER LOS LABRADORES EN SUS LABORES Y TIERRAS.

Item ordenamos y mandamos que qualquier persona vecino deste comun y que por tiempo fuere de el que tuviere qualquier titulo y posesión o otro qualquier derecho de tierras y labores en estos nuestros términos y en qualquiera parte de ellos pueda libremente sin caer e incurrir en pena alguna cortar y talar y sacar de quaxo y rozar y quemar todo el monte y arboles que hubiere nacidos y de nuevo nacieren de qualquier e suerte que el monte y arboles fuere y las dichas sus labores con tanto que en la parte que en las dichas labores hubieren carrascas o robres de dental arriba dexe dos pies de carrascas o robres en cada fanega donde

estuviere tal monte y si hubiere pinos donceles o sal
gareños de dental arriba no los pueda cortar sin que
primero sea visto por uno de los del concejo de la di-
cha villa de Sigura y este dé razon para que si fue--
ren de provecho los mande aprovechar el dicho concejo
y los demás pinos de dental abajo los pueda cortar li-
baramente con el demás monte como dicho es y los pinos
que por orden del dicho concejo se mandaron dexar que
en cada fanegada dos pinos estos los dueños de la he-
redad los pueda limpiar y desacar hasta medio del di-
cho pino poco más o menos y de las cumbres-arriba sea
obligado el señor de la tal heredad a dexar en cada
fanega de la dicha su labor en la tal parte donde hu-
biere carrasca o robre o pinos pueda el dueño de su
heredad limpiar segun dicho es sin pena alguna.

24.- QUANDO LOS LABRADORES PUSIEREN FUEGO A SUS LABO-
RES E SE LE SALIERE EL FUEGO.

Item ordenamos y mandamos que si algun vecino de es-
te comun echando fuego a su heredad y rastrojos y ta-
la y roza conforme a estas ordenanzas después del día
de Nuestra Señora de Agosto de cada un año se le sa-
liere el fuego hasta sesenta passos de más y de fuera
de su heredad no tenga pena alguna aunque queme en
los dichos sesenta passos qualquier árbol de fructo
llevar ni otro qualquier monte.

25.- DE LOS QUE ECHAREN FUEGO ANTES DEL DIA DE SANTA
MARIA DE AGOSTO.

Item que por experiencia se ha visto que de causa de echar fuego los labradores a sus labores rozas y ras trojos antes del día de Ntra Sra de Agosto de cada un año se ha encendido mucha parte de los montes de que ha venido gran daño y porque por ley capitular desta orden está proveído que ninguno use fuego antes del dicho día ordenamos y mandamos que ninguna persona - sea osada de echar los tales fuegos desde el día de mediado el mes de mayo hasta pasado el día de Ntra Sra de Agosto de cada un año y si lo contrario hicieren y quemare algunos árboles de más de las dichas pe nas incurra en pena de mil mrs. aplicandolos según de suso.

26.- DE LOS QUE ENCENDIEREN FUEGO PARA GUIJAR DE COMER
EN EL CAMPO Y NO LO MATARON QUANDO DE ALLI SE FUE
REN Y DE LA MANERA QUE HAN DE ENCENDELLO.

Item que por experiencia se ha visto que de causa de encender fuego en el campo pastores y gañanes e otras personas para guisar de comer y alzar el hato e irse sin matar el fuego han emprendido los montes de que - han redundado gran daño y perjuicio especialmente en los meses de mayo junio julio agosto por tanto ordenamos y mandamos que cada y quando qualquier persona en

cendiese fuego en los dichos términos sea obligado al zando el hato queriendose ir a lo matar con agua o con tierra enterrándolo de manera que no lo dexe vivo ni encendido so pena por cada vez que fuere hallado por matar y para lo encender no hubiere limpiado del alrededor las ramonicas y pajonas que hubiere por manera que en ello no se pueda encender el fuego incurra en pena de seiscientos maravedíes aplicados en es ta manera las dos partes ael cauallero que denunciare y la otra tercia parte para el juez que lo sentenciare y esto sea demás de la pena en que incurre por el daño que con el dicho fuego hicieren conforme a estas ordenanzas.

27.- QUE NO CORTEN ARBOLES NINGUNOS SIN LICENCIA DEL CONCEJO DE SIGURA SALVO PARA EL EFECTO QUE ADELANTE SE DIRA.

Otrosí mandamos y hordenamos que ninguna persona sea osado de cortar sin licencia de nos el dicho concejo arboles de fructo que son los siguientes noguera moral majuelo almendro higuera ciruelo serbal parra ce rezo pino doncel peral que lleve fruto que no sea per vetanos (?) de los quales dichos árboles de fructo aquí declarados ninguna persona pueda cortar ni corte pie ni raiz ni rama del gordor de astil de el azadón arriua si no fuere arranzar de raiz para plantar los vecinos del comun en sus heredades y no otra ninguna

persona porque los dichos vecinos podrán y puedan sacar los dichos plantones para sus heredades sin licencia de nos el dicho concejo _ Otrosí ordenamos y mandamos que ninguna persona sea osado en estos nuestros términos de cortar ni corte por el pie ni rama de carrascas ni robres ni quejigos ni avellanos ni arriejos (?) ningunos salgareños si no fueren menores del gordor del astil de el azadon y que el avellano no se corte de dental arriba ni de dental abajo ni se desmochen ni se quemen los dichos arboles pero permitimos y damos licencia a todos los vecinos deste comun y sus criados para que destos árboles puedan cortar todas y qualesquiera fustas de arados y carretas y para todos los demás aprovechamientos necesarios e leña por pie y por rama y si es preciso para acortar los tales fustes y aprovechamientos haver de cortar otros pies o ramas lo puedan libremente hacer sin pena alguna sin que los dexen sin aprovechar _ ansí mismo permitimos que los vecinos deste comun puedan destos arboles aquí declarados descortezar la mitad de cada un arbol para curtir azacanes y otras cosas necesarias con que los vecinos del dicho comun en lo que toca al cortar para sus aprovechamientos pidan primero licencia ael ayuntamiento de la dicha villa y den información de la necesidad que tiene para lo poder cortar y que por la dicha licencia no se les lleven derechos algunos y en lo demás del cortar y su

modo y manera y de las leyes y pragmática del Reyno que sobre ellos disponen. Otrosí declaramos que todos los demás árboles y montes que hay en estos términos fuera los en el capítulo y ordenanza declarados puedan los vecinos deste comun y sus criados cortar por pie o por rama sin pena alguna lo que quisieren.

28.- LA ORDEN QUE SE HA DE TENER PARA ECHAR RAMON A LOS CHOTOS E CORDEROS E PARA BACAS Y BUEYES DEL HERO.

Item ordenamos y mandamos que en ningun tiempo puedan desmochar los dichos árboles para ningún género de ganados salvo para los bueyes e bacas del ero por que para estos ganados se pueda decimar por alto todo el tiempo y no de otra manera so la dicha pena y para la res de ganado lanar y cabrio que fuere coja o estuviere gusanienta se pueda cortar una rama de los dichos árboles cada un día con que ande por sí y no de otra manera. Otrosí permitimos que se pueda echar ramón para chotos y corderos de los vecinos del común cortado de los árboles por alto que se entienda desmochado todo lo que uha persona de cada hatu pudiese llevar cada un día a questas a las majadas o corrales o a otra qualquiera parte donde los dichos chotos y corderos estubieren cortando el dicho ramón se lleve a lo menos sesenta passos desviado de los dichos árboles do se cortare el tal ramón y si estando

desviado el tal ramón como dicho es fueren halladas las madres con ellos comiendo en el dicho ramón no haya pena y esto se pueda hacer en todo tiempo tenga los dichos árboles fruto o no y a los pueblos se pueda llevar para el dicho efecto ramón con bestias y en el campo se les pueda también cebar ramón a bestias.

29.- QUE QUANDO HUBIERE NIEVE PUEDAN DESMOCHAR PARA EL
EL GANADO SIN LICENCIA DEL CONCEJO.

Item ordenamos y mandamos que en todo tiempo que la tierra estubiere cubierta de nieve puedan los vecinos deste comun desmochar por alto y echar ramón para todo qualquier genero de ganado y bestias sin pena alguna con que para ello pidan licencia a el concejo desta villa y no de otra manera.

30.- QUE NO TRAYGAN MACHOS DE CABRIOEN
EL TERMINO.

Item ordenamos y mandamos que ninguna persona sea osa do de traer ni trayga en estos nuestros términos en cada una manada de machos de cabrío más de seis mansos con esquilas la persona que más tragere tenga de pena por cada una vez que le fueren hallados si la tal persona fuere vecino deste común mil mrs. y si fuere forastero y no vecino deste común doce mil mrs. por cada una vez y estas penas sean aplicadas en esta

manera por tercias partes juez concejo y denunciador y que de los dichos seis mansos que puedan traer con esquilas si a uno y a todos ellos les echaren pretalles con campanillas o cencerros se entienda todo lo que truxere un manso solo un cencerro y no trayendo más de los seis mansos con cencerros no se puedan penar.

31.- CAPITULO QUE SE LE GUARDEN LOS RASTROJOS A LOS
VECINOS DESTE COMUN SEIS DIAS DESPUES DE SACA-
DAS LAS CARGAS.

Item ordenamos que a los vecinos deste comun que de presente son y por tiempo fueren se les guarden los rastrojos de sus panes seis días después de sacadas las cargas dellos y el que lo quebrantare tenga pena de cada una manada de ganado lanar o cabrío que sea de cien cabezas arriba trescientos mrs. y de cien ca-
bezas abajo dos mrs. de cada cabeza y los demás gana-
dos mayores y puercos tengan la pena declarada en la ordenanza de los panes y estas penas sea la tercia parte para el juez y las dos partes para el señor de tal rastrojo y en este caso se ordena que solo el dueño del rastrojo pueda prender y denunciar y no caullero ni otra persona alguna.

32.- QUE NO QUEMEN NI DERRIEN CAUANA NI CORRAL NI
RRANCHO NI APRISCO NI OTRO AMPARO PARA NO TORNAu

LLOS A HACER EN TIERRA BALDIA.

Item ordenamos y mandamos que ninguna persona sea osa do de quemar ni derrivar cauaña ni corral ni rancho ni aprisco ni otro amparo que esté hecho en nuestros términos para reparo de las gentes e ganados so pena de seiscientos mrs. aplicados por tercias partes juez concejo y denunciador lo qual se entienda en los baldíos porque en la parte que estuviere en señorío el propio señor lo puede hacer y no otra persona so la dicha pena y más que a su costa del que deshiciere el tal edificio se pueda tornar a hacer y declaramos que no se entienden incurrir en la dicha pena la persona que deshiciere el tal edificio en los baldíos para mudarlo a otra parte e para lo hacer mayor o menor.

33.- QUE SE ALBERGUEN EN LAS CUEVAS EL QUE ENTRARE PRIMERO EN ELLAS POR AQUELLA VEZ Y QUE DESPUES QUEDEN COMUNES.

Item que por quanto en estos nuestros términos hay cuevas en que se recogen y albergan personas y ganados e porque de causa de auer alguno entradose y alguna de las otras personas se quieren entrar y sobre ello ha habido cuestiones y debates siendo como son comunes para todos ordenamos y mandamos que ninguna persona pueda tomar posesión en ellas salvo que sean comunes para todos y que el primero entrare y hiciere fuego en ellas ocupe la tal cueba por aquella vez

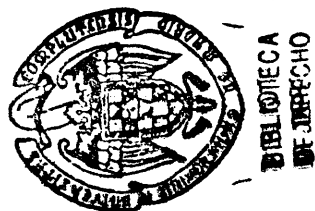
y por el verano e inbierno que la ubiere menester de manera que alzando el hato se quede común para el que primero la hubiere menester y ocupar so pena de seiscientos maravedises aplicados sigun desuso.

34.- QUE LAS FUENTES QUE ESTUVIEREN EN LAS LABORES SEAN COMUNES Y EL FRUCTO DE LOS ARBOLES.

Item ordenamos y mandamos que las fuentes que estuvieren en qualquiera haza de labor las tales fuentes - sean comunes y los árboles que estuvieren en las dichas heredades siendo tales que siempre se hayan tenido y reputado por comunes los frutos dellos que los tales frutos sean comunes a los vecinos deste común.

35.- DEL QUE METIERE EN LOS TERMINOS GANADOS DE FUERA DE LA ORDEN SIN LO REGISTRAR.

Item ordenamos y mandamos que qualquiera persona que encubiertamente truxere algunos ganados de qualquiera manera y condición que sea de qualquiera parte que fuere de fuera de la Orden y los metiere en nuestros términos sin registrarlos y manifestarlos ante el conjejo de la dicha villa de Sigura y los dichos nuestros caualleros los tomaren o lo supieren el que tal encubierta hiciere incurra en la pena de seiscientos mrs. y el señor del ganado incurra en la quinta parte del dicho ganado conforme a la ordenanza desuso que



habla de los dichos quintos aplicadas las dichas penas segun desuso y los dichos caualleros los echen fuera los tales ganados destos terminos conforme a la ley del fuero.

36.- DEL FORASTERO QUE ENTRARE A CORTAR MADERA EN ESTOS TERMINOS SIN SE AVECINDAR O REGISTRAR HACHA Y DEL VECINO QUE LE METIERE Y TUBIERE ENCUBIERTO.

Item ordenamos y mandamos que por quanto que se ha visto muchos fraudes y encubiertas que se hacen por muchos vecinos de la villa de Sigura y su arrabal Orcera y por otros vecinos de las otras villas y lugares situadas en estos términos meter forasteros y extrangeros dellos y tenerlos encubiertos sin se avecindar y registrar ante nos en el dicho concejo y así ayudan a hacer madera y otros aprovechamientos de pinos y vecinos desta villa y de su arrabal Orcera a quien pertenece el derecho conforme a la ley del fuero y sentencias que sobre ello hay y así se defrauda el derecho que pertenece a este concejo que le deben pagar los tales forasteros — por tanto por lo remediar instituimos y mandamos que ninguna persona de los tales vecinos sea osado de hacer la tal encubierta so pena de seiscientos maravedis aplicados segun en las ordenanzas desuso y el forastero que no registrare en el dicho cavildo la hacha dicho o herramien

ta con que labrare la tal madera de pinos o hiciere algun otro aprovechamiento de la tal madera sin nuestra licencia incurra en la pena de la ordenanza que habla de los que cortaren los tales arboles de fruto y más que pierda la tal herramienta aplicado sigun dicho es lo qual se entiende con los forasteros que no tuvieren aprovechamiento en los dichos términos e con los que tuvieren no se entienda lo contenido en esta ordenanza.

37.- QUE NO COJAN PIÑAS HASTA PASADO EL DIA DE TODOS
LOS SANTOS Y QUE LOS PIÑONES SE VENDAN PRIMERO
EN LOS PUEBLOS DESTOS TERMINOS.

Item ordenamos y mandamos que ninguna persona sea osado de coger piñas de pinos donceles hasta ser pasado el día de la conmemoración de los Sanctos de cada un año si no fuere hasta una docena de piñas y no más so pena de cien mrs. por cada una vez y pierda las piñas que huviere cogido aplicado todo sigun dicho es y si el día de Todos Sanctos cayere en sabado no puedan cogellas hasta el martes luego siguiente so la dicha pena y si la persona que las cogiere fuere forastero destos términos incurra en pena de seiscientos mrs. y pierda las piñas aplicado todo sigun dicho es con tanto que si el forastero tuviere derecho como los demás vecinos se entienda con él lo mismo que con los veci-
nos.

38.- DE LOS QUE BAREAREN BELLOTA DE CARRASCA ANTES DE
SANT LUCAS DE ROBLE ANTES DEL DIA DE SANT MIGUEL
Y LOS QUE TRAXEREN BARA PARA BAREAR.

Item ordenamos y mandamos que ninguna persona pueda coger ni barear la bellota de carrasca hasta el día d de San Lucas de cada un año y la bellota de roble y malhojo hasta el dia de Sant Miguel de septiembre de cada un año so pena que el que antes destos días la cogiere o bareare para ganado incurra en pena de trescientos mrs. y el que desgrumare las carrascas con las manos o en otra manera incurra en pena de cien mrs. por cada carrasca que así desgrumare aplicadas las dichas penas sigun desuso y quando los dichos nuestros caualleros los hallaren cogiendo o bareando o - desgrumando segun dicho es los prendan a las tales personas y por sólo su juramento sean creydos y se execute en las tales personas e por sus bienes por la dicha pena - otrosí que ningún pastor porquero ni otra persona andando con el ganado no pueda traer vara de avellano ni de otro árbol fuera de su gancho so pena que si fuere hallado con la tal vara que fuere dos varas y media de medir de largo incurra en pena de trescientos mrs. por cada vez que así con ella fuere hallado y que la tenga en su hato y permitimos que a qualquier vecino de Sigura y de las villas y lugares de su tierra puedan coger un celemín de bellota antes de dicho día de San Lucas para su comer sin incurrir

en pena alguna e la pena del barear bellota antes de los dichos días se declara que sean trescientos repar-
tidos por tercias partes juez concejo y caualleros.

39.- QUE NO SE PUEDAN COGER NI BAREAR NUECES HASTA
PASSADO EL DIA DE SANT MIGUEL DE SEPTIEMBRE.

Item ordenamos y mandamos que ninguna persona sea osa
da d'aquí adelante hasta passado el día de Sant Mi-
guel de septiembre de cada un año de barear ni coger
nueces en nuestros términos si no fuere de su propria
heredad y el cauallero haya de tomar por prenda y por
sauida y no pueda coger el cauallero las dichas nue-
ces ni otra persona por él so pena que el que antes
del dicho día las cogiere pague quinientos maravedíes
de pena e las nueces perdidas aplicadas sigun dicho e
es y si en la dicha pena incurriere algun cauallero
la parte que de la dicha pena había de pertenecer a
los caualleros aplicamos para el dicho concejo e más
que pierda el officio por aquel año y no goce dél co-
sa alguna del.

40.- QUE NINGUN FORASTERO DE LOS TERMINOS PUEDA SACAR
CARGAS DE NINGUNA COSSA DE LOS PUEBLOS DE ELLOS
SIN METER OTRAS TANTAS DE PROVEIMIENTO COMO LLE-
VARE DE MADERA U OTRAS COSAS.

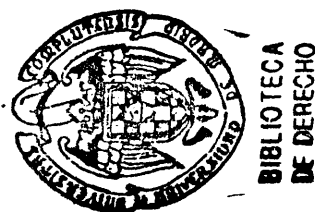
Item ordenamos y mandamos que porque esta villa y su
tierra es estéril e montuosa y muy fragosa de muy po-

cas labores de manera que si no viniere de fuera man
tenimiento los pobladores no se podrán substentar y
en poco tiempo vendría grande hambre y otros daños e
inconvenientes y se despoblaría de cuya causa se ha
tenido de uso y costumbre inmemorial usada y guarda-
da y aun por privilegio y libertad que ningun foras-
tero pueda sacar ningun genero de carga sin meter car-
ga de mantenimiento lo qual es muy justo y razonable
por tanto que ninguna persona de fuera destos dichos
nuestros términos sea osada ni pueda sacar de la di-
cha villa de Sigura de la Sierra ni de los dichos sus
términos ni de las villas y lugares situadas en ellas
ninguna cossa de género ni especie de carga que hubie-
re de sacar sobre qualquiera bestia mayor o menor sin
que haya traído y venido a esta villa o a las dichas
villas y lugares del dicho común otras tantas cargas
que han de ser enteras para sigun la bestia fuere de
pan o vino o aceyte e fructo de legumbres e pescado
o de otra qualquier cossa de proveimiento para el tal
pueblo y que no puedan sin traer los dichos bastimen-
tos yr a hacer cargas a los términos desta dicha vi-
lla sin traer las dichas cargas del mantenimiento a
los dichos pueblos e de ninguna manera los dichos fo-
rasteros puedan entrar a sacar cargas a la Sierra des-
ta dicha villa so pena que el que lo contrario hicie-
re pierda las cargas que ansí llevare contra estas
nuestras ordenanzas y más seiscientos mrs. de pena
aplicado todo sigun dicho es y el cauallero que pren-

dare las dichas cargas pueda traerlas y al que las llevare a esta dicha villa donde se cumpla de derecho a las partes conforme a esta nuestra ordenanza y entiendese y ansí lo ordenamos y mandamos que para sacar corrambre y lanas desta villa de Sigura ni sus términos ni de las demás villas y lugares situados en ella ninguna persona sea obligada a meter cargas.

41.- QUE NO HALLANDO EL FORASTERO QUE LLEVO BASTIMENTO A EL PUEBLO EN EL CARGAS QUE LLEVAR COMO TRUXO PUEDA YR A HACERLAS A OTRO PUEBLO DONDE LAS HALLARE Y QUE EL CAUALLERO NO LO PRENDA.

Item que por experiencia se ha visto que habiendo los tales forasteros traydo a vender y vendido las tales cargas de bastimento y habiendo cargado sus cargas que llevan los nuestros caualleros vuelven a esta villa del camino los tales forasteros y cargas en los qual son bejados y reciben agravio del qual no reciben satisfación porque antes se quieren ir que pedir su justicia y porque esto cesse y los caualleros prendan bién y justamente y porque por muchas veces acaece que en los pueblos donde así los forasteros han vendido no hallan cargas que hacer de cuya causa van a hacer cargas al pueblo más cercano y para que se escuse qualquiera fraude que se podría hacer ordenamos y mandamos que el tal forastero sea obligado a llevar cédula del escribano del cavildo de la villa de donde



sacaren las dichas cargas donde ubieren vendido en la qual cedula bayan expecificados las largas que metió y vendió para que ansí las pueda hacer y comprar en otros pueblos donde hallaren porque llevando la tal cédula no sea molestado por los dichos nuestros caualleros porque ansí cessen los dichos inconvenientes y si mostrándole la dicha cédula el cauallero prendare y volviere el tal forastero el cauallero pague el día al tal forastero y su interese luego sin dilación y se determine bién e sumariamente sin figura de juicio por lo qual sea executado el tal cauallero sin embargo de apelación ni otro remedio alguno y demás desto sea privado del dicho officio y si la tal cédula de escribano llevare el tal forastero que la tal prenda que hiciere por el tal cauallero sea justa y bien fecha y habiendo realmente traydo las dichas cargas aunque dexe de llevalla la dicha cédula por la haber perdido o por otra causa baya brevemente y que el escribano de cavildo no lleve derechos algunos al forastero por la tal licencia y que el concejo de la villa se los pague de sus propios.

42.- QUE EL VECINO NO VENDA AL FORASTERO CARGAS EN LOS TERMINOS PARA SACARLO FUERA NI EL VECINO LLEVAR LAS BESTIAS DEL FORASTERO PARA SACAR DEL TERMINO LAS TALES CARGAS.

Item que porque muchas veces acontece que vecinos de los tales pueblos venden a los forasteros los basti-

mentos que traen por donde no se traen a vender a esta villa y pueblos de su término de lo qual pues se vive de acarreo en ellos por la esterilidad como dicho es por ello viene gran daño y perjuicio y para lo remediar hordenamos y mandamos que ningunas personas vecinas destos nuestros términos que ansí tienen facultad de sacar madera u otras cosas o cargas algunas no sea osado de sacar carga alguna para lo dexar y vender en ningun lugar alrededor desta villa de Sigura dentro de cinco leguas della ni la de persona alguna ni haga otro contracto con vecino o morador de el tal pueblo comarcano directe ni indirecte so pena que por cada carga que ansí hubiere sacado dado u contractado en qualquier manera en el tal pueblo comarca no pague seiscientos mrs. aplicados sigun dicho es y que esto se pueda denunciar cada y quando que se sepa.

43.- QUE NO SE COJAN ABELLANAS ANTES DEL DIA DE NUESTRA SEÑORA DE SEPTIEMBRE.

Item ordenamos y mandamos que ninguna persona coja abellanas antes del día de nuestra Señora de Septiembre de cada un año so la dicha pena de la ordenanza que habla sobre los que cojen nueces que es de quinientos mrs. aplicados sigun allí se aplican y lo mismo sea contra el cauallero que el otro por el cogiere - las dichas avellanas pero bien permittimos que cada un vecino pueda coger para su comer antes del dicho

tiempo hasta un celemn no más.

44.- QUE SE LES GUARDE EL PASTO DE LOS QUESEADEROS A LOS SEÑORES DE GANADO HASTA SAN JOAN DE JUNIO DE CADA UN AÑO.

Item ordenamos y mandamos que los señores de ganado que en cada un año pidieren y se les diere queseaderos en nuestros términos les guarden el pasto del término a el queseadero dende mediado de abril de cada un año hasta que hayan acauado de hacer queso con que no puedan hacer desde el día de San Joan de junio siguiente porque desde el dicho día en adelante mandamos que puedan en qualesquier queseadero entrar a pastar qualesquier ganados sin pena alguna.

45.- QUE SE LES GUARDEN LOS QUESEADEROS EL TIEMPO PORQUE SE LES CONCEDIERE Y LA ORDEN QUE SE HA DE TENER EN CONCEDERLOS.

Otrosí ordenamos y mandamos que las tales personas que pidieren queseadero se les amojone y dé mandamiento para que se les guarde y de otra manera si no fuere visto y amojonado por la persona o personas que para ello fueren señaladas por este cavildo no se les pueda dar ni dé el tal mandamiento e para que se les haya de dar sea obligado a el tiempo que pide el queseadero a jurar en forma devida de derecho el número de obejas que tiene para queseear sin las quales solem

nidades no se les dé queseadero ni mandamiento y si la tal persona se lo tomare por su autoridad no sea guardada e pueda haber otro queseadero y las personas que por mandamiento de este concejo fueren a ver y amojonar los queseaderos bayan a costa de las personas que lo pidieren a el escribano del cavildo medio (¿real?) y un quesso que de tiempo inmemorial acostumbra a llevar y le pertenece.

46.- DE LA PENA DE LOS QUE METIEREN GANADOS FUERA DE BESTIAS DE ARADA EN LOS QUESEADEROS AL TIEMPO QUE SON VEDADOS.

Item hordenamos y mandamos que si alguna otra persona haviendose pedido el tal queseadero y siéndole amojonado como dicho es y durante el tiempo del queseadero metiere en ella a pastar algun otro ganado o el mismo dueño lo metiere so color de ser el tal ganado de sus amigos hijos o parientes o criados ora sean mayores o menores directe o indirecte incurra en cada uno ora sea el dueño de el queseadero u otro qualquiera en pena de cada manada de doscientos maravedíes de día y de quatrocientos de noche y el señor del egido lo pierda y si fuesen puercos pague de cada una cabeza quatro maravedíes de día y ocho de noche y si fueren yeguas o vacas medio real de día por cada caueza y uno de noche y si fueren cabras de cada manada qualquiera que sea doscientos mrs. de día y de noche

con el doblo quedando en salbo que los bueyes y vacas y otras bestias de arada lo puedan pastar y comer sin pena alguna y las penas dichas aplicamos sigun dicho es desuso y a la parte de los dichos caualleros la - pueda llevar el señor de tal queseadero si la pidiere antes que el cauallero de manera que la parte de pena sea del primero que la pidiere.

47.- QUE LOS PASTORES NO TRAYGAN EN SUS HATOS ARMAS NINGUNAS SI NO FUEREN LOS CUCHILLOS QUE SUELEN.

Item porque de traer los pastores y gañanes en sus cauañas y hatos armas offensivas ha habido muertes y otros escándalos en lo qual conviene haber remedio or denamos y mandamos que en las cauañas y hatos de qualquier ganado que hubiere en nuestros términos los tales pastores y gañanes no puedan traer ni tener armas offensivas como es arcabuz o escopeta ballesta o lanza espada dardo daga y puñal sino los cuchillos que suelen traer los pastores ni otras armas semejantes so pena que las hayan perdido aplicadas al cauallero o justicia que las tomaren e paguen trescientos mrs. aplicados sigun dicho es.

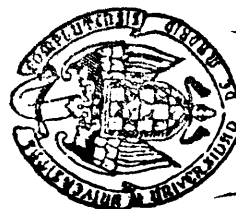
48.- QUE NO LABREN NI HAGAN ALGUN EDIFICIO EN LOS CAMINOS NI VEREDAS PUBLICAS FUERA DE SUS HEREDADES NI EN LOS ABREVADEROS DE GANADOS CABAÑAS NI EJIDOS.

Item ordenamos y mandamos que ninguna persona en los dichos nuestros términos sea osado de arar ni cavar ni labrar ni hacer otro edificio ni labor alguna en los caminos ni veredas públicas que van a otra parte por donde pasan los via andantes y en las cauñas ni abrevaderos de ganados ni en las majadas o egidos cotos y bedados so color alguna ni hacer cossa que impida el aprovechamiento público e común dello so pena de seiscientos maravedíes por cada vez repartidos por tercias partes juez concejo y denunciador y la tierra quede común como antes lo era e pierda lo que hubiere edificado e sembrado el qual camino e bereda se entiende quando passare adelante porque si en su labor remata el dueño lo puede arar y echar por do quisiere sin pena alguna.

49.- QUE NINGUNOS GANADOS PUEDAN ENTRAR EN EL BARUECHO HASTA QUE HAYA TRES DIAS QUE HAYA CESSADO DE LLOVER.

Item ordenamos y mandamos hechos sus barbechos para sembrar en que ha hecho costa y gastado su tiempo y habiendo llovido sobre los dichos barbechos y estando mojados los pastores que los guardan por discuido o por malicia dexan átravesar ganados por encima de los tales barbechos e por passallos los dueños de los barbechos reciben mucho daño e perjuicio por tanto mandamos que cada y quando hubiere llovido sobre los tales

barbechos y estén mojados que ninguna persona dexen atravesar sus ganados por encima de los tales barbechos hasta ser passados tres días después de haber dexado de llover sobre los tales barbechos e qualquiera persona que lo contrario hiciere tenga de pena por cada una vez que los nuestros caualleros lo hallaren con los dichos ganados atravesando los dichos barbechos por cada una res de cabrío, lanar de cien cabezas abajo un maravedí de día y dos de noche y por cada un puerco la propia pena y si fueren cien cabezas arriba estos dichos ganados tengan de pena de cada una manada trescientos maravedíes aplicados por tercias partes juez dueño de el barbecho y cauallero de sierra y por cada res vacuna que no sea de arado o yeguas o otras bestias mayores que no sean de arada ocho maravedíes de día y medio real de noche las quales dichas tomas que hicieren los dichos caualleros mandamos que sea de vista y no de oídas ni sabida y declaramos que los barbechos anejos que se quedaren por sembrar pasado el mes de henero de cada un año de allí en adelante no se guarden aunque estén mojados y si los barbechos y los ganados fueren de un dueño no haya pena aunque los atraviесе mojados en quanto a la pena deste capítulo por hollar los barbechos mandamos que si los dueños y pastores de los tales barbechos y ganados pagaren al cauallero que los prendare y a el dueño del barbecho la pena el cauallero no denuncia.



50.- LAS FUENTES DE LOS TERMINOS ESTEN LIMPIAS Y SE GUARDEN DE DOS BARAS ALREDEDOR.

Item ordenamos y mandamos que porque las fuentes estén limpias y sus nacimientos para el beber de las gentes y su servicio y aprovechamiento que ninguna persona abreve puercos ni laben en ellas otras suciedades so pena de seiscientos mrs. aplicados por tercias partes juez denunciador y concejo que todas las dichas fuentes y nacimientos dellas que ansí están en nuestros términos fuera de los pueblos que son conocidos resten limpias para el dicho servicio de los hombres dos baras de medir alrededor dellas so la dicha pena porque ansí conbiene al bien público.

51.- DE QUE MARCO HA DE SER LA MADERA QUE SE ASERRARE EN LA SIERRA DE AGUA Y QUE APROVECHEN TODO EL PINO QUE CORTAREN.

Item que las aserradoras de qualesquier sierras de agua destos nuestros términos asierren la madera de chillas de marca del concejo de tres varas de medir de largo y media de ancho una pulgada más o menos y la dicha pulgada sea comun del canto y dos cercos por chilla de el mismo cargo y cada ripia nueve cuartas de largo y una tercia de ancho una pulgada más o menos y un dedo de canto y un tablón de ripia de dos gordores bale dos ripias y una alfagia tenga dos cer

cos y valga al precio de cada chilla todo lo qual vendan a el precio que nos el dicho concejo señalaremos y lo mismo las cavo costeras y asientos que hicieren e no a más y sean obligados a aprovechar todo lo que buenamente puedan aprovechar de los pinos e cortaren conforme a las dichas marcas de ripias y chillas so pena de seiscientos mrs. por cada un pie que dexaren de aprovechar y de cada pieza que no fuere aplicado segun dicho es y si la tal pieza fuere falta o quebrada no la puedan vender más de por mitad del precio que se diere por la entera y buena so la dicha pena.

52.- QUE LOS SEÑORES DE LAS SIERRAS DE AGUA DE SIGURA REPARTAN LA MADERA TODOS IGUALMENTE.

Item ordenamos y mandamos que los señores de las dichas sierras de agua sean obligados a repartir cada día de madera que en la tal sierra se aserrare ygualemente segun las cargas que cada uno quisiere comprar no descogiéndola para unos sino que la den de buena o mala como saliere a todos e no la puedan apartar aunque sea para ellos ni para sus acreedores sino que den a todos los que por ella fueren a las dichas sierras de los que tienen derecho de la poder llevar y sacar y no de otro so pena de seiscientos mrs. por cada vez aplicados segun dicho es.

53.- QUE LOS SEÑORES DE LAS SIERRAS DE AGUA NO SAQUEN

CADA DIA MAS DE UNA CARGA DE MADERA Y EL REPARTI
MIENTO DELLAS HAGA A MEDIO DIA.

Item ordenamos y mandamos que ningunos señores de sierras de agua no puedan sacar de sus sierras mas de una carga de la dicha madera que asierren cada día con sus bestias que llevaren bastimento porque se ha visto por experiencia que de causa de sacar ellos la madera que han querido escoger se llevar la mejor y los vecinos que van por ella quedan defraudados porque se llevan la peor y mala que dexaron e porque no pueda haber fraude mandamos que el repartimiento que de la dicha madera se ha de hacer los dichos señores de sierras sea al mediodía poco más o menos de dada día so pena que el que lo contrario hiciere pierda la dicha madera y pague mas de seiscientos mrs. aplicados todos segun dicho es.

54.- QUE LOS SEÑORES DE SIERRAS DE AGUA NO HAGAN DELLA PILA SEÑALADAMENTE PARA PERSONA ALGUNA.

Item ordenamos y mandamos que ningun señor de las dichas sierras de agua pues han de repartir la dicha madera como dicho es no hagan della pila señaladamente para persona alguna diciendo a los que van por ella que no toquen a la tal que la tienen dada o vendida o que es para alguna persona cierta sino que a qualquiera persona de Sigura o de Orcera su arrabal y de los

otros pueblos que tienen derecho de la sacar y no a otros la repartan como dicho es e so la dicha pena aplicada sigun dicho es.

55.- QUE A LOS QUE TRABAJEN EN LAS SIERRAS DE AGUA NO LES DEN EN PAGO DE SUS JORNALES MADERA POR REPARTIMIENTO COMO A LOS DEMAS VECINOS.

Item que ningun señor de las tales sierras de agua en el cortar de los pinos para ellos guarden el tenor y forma de estas nuestras ordenanzas que hablan acerca de el cortar de ellos y aprovecharlos so las penas dellos e que no puedan dar en pago a los que travajaren en servicio de las tales sierras madera en sus jornales ni la aparten ni den por repartimiento como a los demás vecinos so pena de seiscientos mrs. por cada vez que excedieren aplicados sigun se contiene desuso en estas nuestras ordenanzas.

56.- QUE SI SOBRARE MADERA EN LA SIERRA LA PREGONEN EN SIGURA Y SI NO HUBIERE QUIEN LA COMPRE LA DEN A QUIEN QUISIERE E QUE A LOS QUE LE CUPIERE POR SUERTE EN EL REPARTIMIENTO Y EN EL PRECIO DELLA GUARDE LO QUE LES FUERE MANDADO POR EL CONCEJO.

Item ordenamos y mandamos que hecho el tal repartimiento de la dicha madera sobrare alguna la hagan pregonar en esta villa para que dentro de tres días la

vayan a comprar los que ansí tiene derecho del dicho aprovechamiento y si para sus necessidades los dichos dueños vendieren alguna madera adelantada no les pueden dar más madera de la que por el dicho repartimiento les cupiere e guarden los tales dueños la orden que por este concejo se les diere ansí para el dicho repartimiento como para el precio que hubieren de llevar por cada pieza aserrada e para lo demás sigun visto le fuere a el dicho concejo so pena que el que contra ello y estas dichas ordenanzas fuere incurra en la dicha pena desuso por cada vez e más pierda la madera por la primera vez aplicado todo sigun dicho es e por la segunda vez haya doblada la dicha pena y por la tercera vez la dicha pena del doblo e mas no pueda cortar pinos mandar en la sierra por dos meses primeros siguientes y mas esté preso doce días.

57.- QUE SE LES DA COTO Y REDONDA A LAS SIERRAS DE AGUA A CADA UNA MEDIA LEGUA COMUN E QUE NO CORTEN PINOS EN ELLA SALVO PARA EDIFICIOS DE CASAS LOS VECINOS DEL COMUN.

Item que por quanto por experiencia se ve que el principal aprovechamiento que esta villa y su tierra tiene son las dichas sierras de agua porque por la madera que en ellas se hace traen los bastimentos sigun más largo se habla en las dichas ordenanzas de uso de las cargas sin cargas y que por experiencia se ve que

los pinares se van apocando por las talas que se han hecho si no les guardasen redonda e ansí hay algunas pérdidas por fata de pinares y estar desviados los pinos y porque el dicho comercio no pare e todos sean abastados e la república no reciuva daño ordenamos y mandamos que todo siempre se les guarde a cada una de las sierras media legua que les damos y señalamos por coto y redonda alrededor siendo señalado y aprobado por el dicho concejo y oficiales dél de tal manera que ninguna persona sea osada para madera de río cortar ningun genero de pino de ningun gordor que de el sea y aunque sea de gordor del hasta del azadón ni para ello se pueda dar licencia y si se diere no valga porque siempre ansí los pinos criados como los que criasen y nacieren sean y esten para el aprovechamiento de las dichas sierras de agua y no para otra cossa alguna pero permitimos que para edificios de cassas los vecinos deste comun de el valle de Sigura puedan entrar a cortar madera en el dicho coto y no para otro efecto ni aprovechamiento alguno so pena que los que lo contrario hicieren o cortaren o redondearen o cataren o desmocharen o quemaren en el dicho sitio de los dichos pinos para otro efecto mas del para que está dicho incurra en pena de mil mrs. por cada un pie aplicados sigun dicho es lo qual pueda denunciar qualquiera persona si antes lo prendare o supiere que el cauallero e haya la parte que se aplicada a los caua-

llos para que si antes lo denunciare porque así sea guardado mejor el dicho coto y mandamos que la dicha media legua comun y no legal enrededor el qual coto les señalamos a los dueños de las tales sierras en que puedan cortar para el aprovechamiento della sin pena alguna también permitimos que para llevar en carretas a el Andalucía puedan cortar en los dichos sitios con licencia del concejo jurándola en forma que no los convertirá en rio so la dicha pena doblada.

58.º QUE NINGUNO ASSIERE MADERA DE MANOS EN LOS TERMINOS SIN LICENCIA DEL CONCEJO DE SIGURA.

Item mandamos y ordenamos que porque de haber habido sierras de manos se ha visto por experiencia el gran daño y perjuicio que se hace en los dichos pinares e por ello la república recibe agravio y para lo remediar ordenamos y mandamos que ninguna persona sea osada en estos nuestros términos hacer madera aserrada de manos sin expressa licencia e mandado del dicho concejo de Sigura so pena de mil mrs. e más que pierda la tal madera aplicada segun desuso.

59.º QUE NADIE SAQUE MADERA NINGUNA MENUDA NI ROLLIZOS EN CARRETAS FUERA DE LOS TERMINOS DE SIGURA.

Item ordenamos y mandamos que ninguna persona sea osa

da de sacar madera aserrada que se entiende madera menuda ni rollicos en carretas para llevar de los términos porque de causa de llevar en tanta abundancia se hace estanco donde los llevan y se compra allí la madera y estoruan que los bastimentos no vengán a esta villa y sus términos para que los vecinos comunmente los hayan y tengan como si esta villa y sus términos los truxesen a vender como se contiene en otra ordenanza y el que lo contrario hiciere por cada carretada incurra por sabida o por tomada en pena de mil mrs. e más que pierda la tal madera e su valor aplicado todo según dicho es e que no se difiere en el juramento del cauallero sino que lo pruebe y qualquiera sea parte para lo denunciar y lleve la pena del cauallero.

60.- QUE NINGUNA PERSONA FUERA DE LOS TERMINOS CORTE COSSA ALGUNA DE ELLOS VERDE NI SECA SIN LICENCIA DEL CONCEJO.

Item ordenamos y mandamos que ninguna persona fuera destos nuestros términos de qualquiera calidad preeminencia o dignidad que sea no pueda ni sea osado de cortar cossa alguna verde ni seca de ninguno destos nuestros términos ni sacalla fuera ora sea del gordor del astil de azadón arriba e dende abajo por delgado que sea el pie o rrama que cortare quemare o sacare o se aprovechar para qualquier cossa sin licencia del

concejo desta villa so pena de seiscientos mrs. aplicados según dicho es.

61.- QUE LOS ARTESEROS APROVECHEN TODO EL PINO QUE CORTAREN.

Item ordenamos y mandamos que los cadiceros y arteseros que cortaren pinos para hacer sus officios los aprovechen enteramente todo que de ellos buenamente se pudiere aprovechar aunque sea hacer trabillas o artesones pequeños de ellos so pena que el que no aprovecharé así los pinos que obiere cortado pague por cada pie seiscientos mrs. aplicados según desuso.

62.- QUE LOS VECINOS DE SIGURA Y SUS TERMINOS PUEDAN CORTAR QUALESQUIER ARBOLES PARA REPAROS DE CAMINOS Y PARA HACER PASOS EN RIOS Y ARROYOS.

Otrosí ordenamos y mandamos que todos los vecinos de la villa y de las otras villas y lugares de su término puedan cortar qualquiera monte y de qualquier calidad que sea para reparo y ensanche de qualesquier caminos y veredas y veintenas e para passos puentes y rios e arroyos por donde la gente passe y camine así a pie como con bestias y carretas porque puedan pasar libremente para este efecto y no otra cosa se les permite y da licencia, so las penas en estas nuestras ordenanzas contenidas el que lo contrario hiciere.

63.- DE LOS QUE TOMAREN LOBOS EN EL TERMINO DE SIGURA.

Item ordenamos y mandamos que qualquier persona de qualquier calidad que sea que en nuestros términos tomare lobos mayores e camas dellos que este concejo de Sigura pague a la tal persona que los tomare deste nuestro cavildo de cada lobo mayor quatro ducados y de cada lobecico quinientos mrs. y cada concejo de las villas deste comun pague de cada lobo mayor un ducado y de cada lobecico cien mrs. y cada una aldea pague por cada lobo mayor doscientos mrs. y de los lobecicos ni paguen nada y de cada una çorra pague esta villa un real y las demás villas de su término medio real todo lo qual se entienda que se ha de pagar registrándose en el dicho concejo de Sigura con los dichos lobos e camas dellos y çorros donde se corte a cada uno la oreja derecha y jure la tal persona ora sea vecino o forastero que los tomaron en nuestros términos e mandamos que los dichos concejos paguen lo aquí declarado e para ello sean apremiados porque así conviene.

64.- QUE NO SAQUEN LOS FORASTEROS DESTOS TERMINOS SE-
NUELOS NI HIERVAS NI AVES.

Otrosí ordenamos y mandamos que qualquier persona de nuestros términos no siendo vecinos dellos cortaren y llevaren fuera sin licencia de nos el dicho concejo açores y otras aves y yeruas o mineros u otras cossas

que son defendidas por nuestros fueros e por otras nuestras ordenanzas que lo haya perdido y pierda con más las bestias en que lo llevare e incurra en las demás penas de estas nuestras ordenanzas que son mil mrs. por cada pie de sifuelo que sacare y llevare y lo mismo por las dichas aves e mineros y otras cossas que aplicamos donde ellas las aplican.

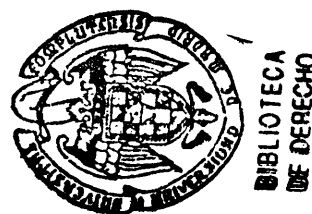
65.- DE LAS VEREDAS DE LOS GANADOS ESTRANGEROS EN LOS TERMINOS DE SIGURA ESTAN.

Otrosí por quanto por experiencia se ha visto y se ve el gran daño y perjuicio que a esta villa y su república y en disminución de sus propios y rentas del concejo della ha venido de causa de tener cañada amonjonada a los ganados estrangeros que entran en estos términos y la sierra a hervajear de extremo lesde veinte días del mes de mayo hasta el día de Sant Miguel de septiembre de cada un año porque los nuestros caualleros prendan y hacen vejaciones a los que ansí vienen con sus ganados diciendo que se salen de la vereda y cañada y que reparan y vuelven atrás por lo qual muchos dexan de venir con sus ganados y lo peor es que los alcaldes entregadores de cañadas por llevar penas y achaques como por experiencia se ha visto hacen culpas donde no las hay otras veces por se haber salido e careado penan con grandes penas a los labradores de que reciben gran daño e bejación e attento

que por donde entran los tales ganados para el dicho extremo es tierra desembarazada de labores en caso de que por otra parte alguna parte las haya e se siembra por otra parte está hueca que pueda passar el ganado libremente se ordenó y mandó que para que cessen las tales bejaciones que guardando los tales ganados pan y vino y las dehessas privilegiadas entren y bayan por los dichos términos a la dicha Sierra sin guardar cañada alguna con tanto que vayan por donde es costumbre y no arrosten ni detengan el ganado so pena de seiscientos mrs. aplicados por tercias partes juez concejo y denunciador con tanto que vayan a los contaderos acostumbrados a se contar y registrar.

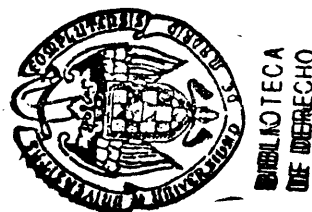
66.- QUE LOS ARBOLES DE FRUCTO LLEVAR QUE ESTUVIEREN EN LAS HAZAS DE TERMINO NO SE PUEDAN CORTAR.

Item ordenamos y mandamos que los arboles de fructo que estuvieren en las dichas haças de lavor de estos nuestros términos que ninguna persona los corte por el pié ni desmoche siendo de dental arriba y permitimos que el señor de la tal heredad pueda desmochar los tales árboles e no otra persona que el que lo contrario hiciere tenga de pena por cada pie que cortar mil mrs. y por cada rama cien mrs. aplicados por tercias partes juez dueño y denunciador y si el dueño denunciare sean las partes para el tal dueño y destos dichos árboles mandamos que no se saque curtido.



67.- QUE TRES DIAS ANTES QUE EL CONCEJO DIERE LICENCIA GENERAL PARA RAMONEAR LO HAGAN SAUER A LAS VILLAS Y LUGARES DEL COMUN.

Item ordenamos y mandamos que attento que algunas veces ha acontecido que el concejo de la dicha villa da licencia para ramonear para los ganados en tiempo de fortuna y que los ganados lo han menester y no embar-
gante que esta licencia se da generalmente para toda la tierra deste comun quando lo vienen a saber las de-
más villas y lugares dél ya los vecinos de Sigura han gozado de el dicho beneficio y quando vienen a saber-
lo los demás vecinos del común ya es passado el térmi-
no que se dió para el dicho ramonear que no goçan del dicho beneficio generalmente como es raçon por tanto
que cada y quando que el concejo de la dicha villa de Sigura diere licencia para ramonear habiendo causa
justa tres días antes que se use de la tal liçençia lo hagan saber a las dichas villas y lugares del di-
cho común y en orden que llevare el peón para el dicho aviso ha de llevar declarado a los pueblos donde va
repartido entre los dichos pueblos el salario sin que ninguno reciva agravio y este orden se guarde para
dar aviso de cómo se manda ramonear y para quando se manda juzguese el dicho ramonear y esto se guarde so
pena que lo que de otra manera se hiciere sea en sí ninguno y de ningun valor y efecto es justo que todos
goçen generalmente.



68.- DE LAS MAJADAS.

Otrosí ordenamos y mandamos que en todo el territorio común deste termino se señalen y amojonen e acoten ma jadas para ganados mayores y menores a abrevaderos e para ello se disputen personas de experiencia de cada villa uno o dos para que los que ellos declararen ante el ayuntamiento de Sigura por aquello se esté y se guarde dentro de los quales no se corte ni en veinte passos alrededor cossa so pena de dos mil mrs. por ca da pie que cortaren dentro de la tal majada aplicado sigun dicho es.

69.- DE LA CAZA Y PESCA.

Otrosí ordenamos y mandamos que ninguna persona vecino desta villa ni de sus términos sea osado de caçar ni caçe ningun género de caça en nuestros términos en el tiempo que crien qualquier caça ni el tiempo que los conejos y perdices chillaren i ruscaren (?) ni du rante que las perdices estén con los huevos el qual tiempo declaramos que es en esta tierra desde entrante el mes de abril hasta el fin del mes de junio siguiente quando toca a las perdices y conejos abril y mayo y junio de cada un año porque todo este tiempo la experiencia ha mostrado en esta tierra por ser fría en la qual crían las dichas perdices y qualquiera que lo contrario hiciere en qualquiera manera que sea e

tomare los huevos a las dichas perdices e gaçapos de leche a los conejos incurra en las penas declaradas en las pragmáticas de su magestad que en esto hablan.

70.- QUE NINGUN FORASTERO ENTRE EN EL TERMINO A CAZAR
NI CORTAR DEL MADERA NI SAQUE METALES NI AVES.

Otrosí ordenamos y mandamos que ningun hombre extraño de nuestra tierra y jurisdicción no sea osado a entrar en los dichos nuestros términos a sacar ningun genero de caça con canes ni redes ni con ballesta ni corte madera alguna ni la saque ni lleve sal ni fierro ni otro metal ni aves algunas de las que se crían en los dichos términos so las penas contenidas en las leyes y pragmáticas de su magestad.

71.- QUE ESTANDO CRIADA LA CAZA LA PUEDAN CAZAR CON
QUALESQUIER INSTRUMENTO.

Otrosí ordenamos y mandamos que en todo tiempo del año que esté criada la caça así de conejos y liebres como de perdices y palomas torçaces e otras aves las puedan tomar y caçar con qualquier genero de instrumentos aparejados para caçar sin pena alguna esto por que es cosa muy notoria y evidente que de causa de ser estos términos muy montuosos e fragosos y que las labores dellos son pocas y están cerradas de montes en los quales se crían muchos puercos y lobos y osos

y onças y cabras monteses conejos perdices y otros generos de animales que se comen y destruyen los panes como por vista de ojos cada un año se ve y demás que es cossa muy notoria que en más de treinta leguas a la redonda destos términos no hay bosque alguno de su magestad ni de señor alguno particular y si no se caçase fuera del dicho tiempo bedado entre año poca o mucha caça se destruirían los panes e otras heredades que se las comen y destruyen lo qual todo que dicho es es mandamos se haga con que en todo y por todo se guarden las leyes o pregmáticas de su magestad que disponen sobre la manera de poder caçar.

72.- DE LA PESCA.

Otrosí ordenamos y mandamos que ninguna persona vecino de estos términos ni de fuera de ellos sea osado de pescar ni pésque en los ríos ningún género de pescado pedes ni trucha en el tiempo que el tal pescado desovare e para ello corrieren y en el tiempo de la cría el qual tiempo declaramos que es el de las truchas desde principio de octubre hasta mediado diciembre de cada un año porque desde este dicho tiempo en adelante han desovado y criado y los peces desde entrante abril hasta en fin del mes de mayo de cada un año porque ansí es en esta tierra porque es fría se halla que en este tiempo desovan y crían los tales

pescados el qual tiempo damos por coto e bedado para que ninguna persona pueda pescar guardando en todos las leyes y pregmáticas de su magestad que sobre ello disponen declárase más que los alguaciles ni otras personas fuera de los caualleros no puedan denunciar por sabida ni por tomada y si lo denunciare no valga la tal denunciación ni se le aplique la pena lo cual sea en todas las cortas y talas y daños de heredades ni de rastrojos.

Poder de los regidores, concejo, justicia y regimiento del lugar de Orcera a don Rodrigo de Angulo, agente de negocios en Madrid, para que defienda el derecho de los habitantes del Partido a no pagar diezmo a la encomienda por madera y pez.

En el lugar Orcera arrabal de la Villa de Segura de la Sierra en doce días de el mes de henero de mil setezientos y treinta y ocho años, ante mí el escribano público y testigos que ban declarados Los señores don Gabriel Antonio Fernández Zorrilla regidor perpetuo de dicha Villa y Alcalde ordinario deste lugar por Su Magestad, Don Juan Martíenes de Ocaña, francisco de Oyo y Juan de Ungría, Rexidores, Conzejo, Justizia y Regimiento por la que les toca como tales y en boz y hombre de los demas vezinos deeste arrabal por quien prestaron voz y caución de rato en forma para que estaran y pasaran por lo que era declarado Dijeron que de ziento doszientos y mas años a esta parte que memoria de hombres no es contrario a estado este lugar y sus vezinos en la costumbre y posesion inmemorial inconcusamente observada y guardada, como se notizia que lo a estado dicha villa y demas de su Partido de no pagar Diezmo a la Encomienda deella de la madera de todos jeneros que se corta en el término común y sacan los vecinos deel para el Andaluzia y Mancha, ni de la que se fabrica en las sierras de agua como ni tampoco de la pez que se aze de los pinos que eria la tierra con abundanzia sin venefizio deel hombre Por no tener otros aprovechamientos los

abitadores de estos sitios incommodos de otros tratos
 por o fragoso y aspero.....

 el arrendador que ha sido de la encomienda de dicha vi
 lla
 de su Magestad sobre la paga deel diezmo de la madera
 que se a cortado y saca de este termino para la Casa de
 Taucos que se está construyendo en la ciudad de Seuilla
 y Reales Armadas, se pretende azer comun la paga del
 dicho diezmo a los vezinos y moradores de dicha villa
 y demas de su partido para cuyo remedio y de un acuer-
 do y parecer, nemine discrepanti, otorgan que dan poder
 a Dn Rodrigo de Angulo ajente de negocios de la villa
 y corte de Madrid, espezialmente para que en su nombre
 y en virtud de todas legales disposiciones deel fuero,
 Partida y Reyno, pueda parecer y parezca ante su Mages
 tad y señores de su Real supremo Consejo de Castilla y
 demás tribunales que de esta causa puedan y deuan cono
 zer, monstrandose para en nombre de los otorgantes y
 aga las contradiziones y alegatos en derecho que tengan
 por combenientes en virtud de la inmemorial y anticua-
 da posesión y costumbre que se a tenido en este lugar
 inconcusamente observada y guardada de no pagar diezmo
 de todo jenero de madera que se an cortado y sacado
 deel referido termino comun, y sierras de agua ni de
 la pez que en el se a fabricado por sus vezinos para
 todo jenero de venefizios de que ofrezca las justifica
 ciones necesarias presentando los papeles testimonios
 o informaziones que fueren combenientes sobre cuyo asun

to pueda formar cualesquiera artículos con las protes-
tas a derecho conformes.....
notarios y abogados y jure las talas recusaciones que
pruebe y se aparte de ellas concluya y oiga, autos sen-
tenzias interlocutorios y difinitivas consienta lo fa-
vorable y de lo contrario apele y suplique para todos
y cualesquiera tribunales adonde pueda y deua llevarse
este negocio conforme a derecho, y en el se siga por
via de queza, recurso y agrauio asta que sea fenezido
ganando los despachos necesarios con que se requiera
ael juez o juezes que vinieren dirigidos sacando testi-
monio de su denegazion o cumplimiento que para todo y
lo inzidente y de pendiente le dan este poder con gene-
ral administración y facultad de enjudiziar jurar, -
prouar, recusar, concluir, azetar, suplicar y sobsti-
tuirlo en la persona que le pareziere reuocarla y nom-
brar otra con causas o sin ella que a todos re eletan
en forma en cuyo testimonio asi lo otorgaron siendo
testigos Julian Martínez Guillén, Joseph Romero Mendo-
za y Gregorio Torres, vezinos y estantes en este lu-
gar y de los otorgantes que doy fee conozco firmaron
los que supieron y por el que dijo no sauer lo firmo
un testigo a su ruego. SIGUEN LAS FIRMAS Y RUBRICA NO
TARIAL.

Representación al Rey de D. Bernabé Picarzo de Almazán, Regidor decano de Segura, denunciando el intento de despojo de los montes por Diego de los Ríos.

Señor:

Dn Bernabé Picarzo de Almazá, Abogado de Vuestros Consejos, Rexidor perpetuo y Decano de esta vuestra Villa de Segura de la Sierra, territorio de la Orden de Santiago, a los Reales Pies de V.M., con el más humilde y sumiso respeto, pone en su alta consideración que con motivo de una reverente súplica que hizo a V.M. por su Memorial con fecha de 26 de enero de este año expuso a sus Reales Pies, como las pagas que se habían hecho a Dn Diego de los Ríos, Regidor perpetuo que fue de esta villa, por la Real Hacienda, en virtud de certificaciones que se le habían dado por Dn Juan Pichardo, Ministro de Marina de esta Provincia, de las maderas que se habían cortado en tierras de su labor, nombrada Las Herrerías habían sido injustas por falta de título, ni Privilegio que no lo tenía y yo siempre lo había repugnado como Asesor, que había sido de aquel Ministerio; proponiendo que la justificación la había de dar el mismo Pichardo, sirviendose V.M. de mandarle remitir certificación o testimonio del título o privilegio Real que Dn Diego de los Ríos debía haver hecho constar en su Ministerio o Juzgado para que la Real Hacienda le pagasse las maderas que habían cortado en sus tierras; asegurando yo que no lo manifestaría; y en quanto a acreditar las cantidades excesivas que había cobrado

Dn Diego y devía restituir por falta de título expuse también que la devía y podía dar el referido Pichardo sirviéndose V.M. mandar, que remitiese igual documento de las certificaciones que había dado a favor del insinuado Dn Diego para que se le pagasen dichas maderas en las nuevas Poblaciones de Sierra Morena, que se construían de cuenta de la Real Hacienda; en el Real Negociado de Sevilla y Arsenales de Cádiz, donde habían conducido; y que estas certificaciones se podían pedir también en sus respectivas oficinas, y Contadurías, para confirmación de su importancia.

Haviendo fallecido Dn Diego de los Ríos el día 12 de diciembre inmediato, dispone en su testamento que aquellos pinares, como si tubiera legítimos títulos de Propiedad, haciendo barías mandas, y legados de ellos; y por otra cláusula previene, que para el pago de los años que no se le pagaron las Maderas, que se cortaron en sus tierras en tiempo de Ministro de Marina Dn Josef Gutiérrez de Rubalcava, y otros, se acuda al Vuestro Consejo de Guerra con esta solicitud; proposición tan voluntaria, como desnuda de todo apoio; pero sin embargo lo hallado en este Alcalde Mayor, y nuevo Auditor de Marina Dn Juan Francisco de Rivera; pues olvidándose de las obligaciones que tiene como Alcalde Mayor de esta villa, y caveza de su Ayuntamiento, de mirar y defender los derechos y regalías de sus Caudales de Propios, juradas al tiempo de su recepción; y por otra parte contraviendo a las que como Auditor y

Assessor del Ministerio le son tan propias, como inseparables, atendiendo más a poner a cuvierto y disimular las operaciones del Ministro Dn Juan Pichardo, que a los intereses tan privilegiados de la Real Hacienda, ha dado una providencia en los autos de partición del Dn Diego de los ríos con la que virtualmente aprueba y le confirma la disposición en quanto a la propiedad de sus Montes, dando con ello fomento a pleitos, despojando a esta Villa, y a la Real Hacienda de su Regalía, y Privilegio de no litigar despojada, y sin que ante todas las cosas se manifieste el legitimo título, que otro tercero quiera pretender, y a esta villa de la Posesión inmemorial que en virtud de los suyos siempre ha gozado; Providencia tan extraña, que está acreditando a las claras la contemplación del Ministro con que procede, prefiriendo este respeto a los intereses de la Real Hacienda.

Supponiendo, como tengo afirmado a V.M. en mi citada representación, que este Ministro no hará constar del Privilegio que devió acreditar Dn Diego de los Ríos para que se la haian pagado sus Maderas (pues aunque lo ha solicitado ver esta Villa, no lo ha podido conseguir, como expondré después) se ha recurrido a querer decir que el Intendente de Marina de Cartagena dió un Mandamiento u orden para que se le pagasen; pero no aún esta se ha podido ver, ni requerido con ella a esta villa, como correspondía; pues ha haverlo assi executado huviera quedado copia en los Libros de Acuerdos para lo sub-

cesivo, y sus recursos, si los tubiesse, por tratarse de un despojo de sus principales derechos. Lo que subcedió en este particular es que entiendo de Dn Alonso Venero, Ministro que fué de Marina, el Dn Diego puso instancia en su Juzgado pretendiendo se declarare a su favor la propiedad de los árboles de su Labor de Herre^rías; y dando traslado a esta villa para hacerle saver la demanda, libró su Despacho exorto con que se requirió a este Ayuntamiento y en su virtud se opuso exponiendo los justos y lexítimos títulos que tenía para la Posesión inmemorial, que gozaba, y en vista de esta contradicción de la Villa, se dexó, y desamparó Dn Diego este Juzgado de Marina y acudió al de el Intendente de Marina de Cartagena, quien sin audiencia de esta villa, como se quiere oy persuadir, ganó la expresada orden; pero aun cuando fuese cierta en los términos que la refieren ningun derecho ha dado a el Dn Diego, ni el Ministro Dn Juan Pichardo devía haverlo patrocinado; pues solamente parece se reduce, a decir el Intendente que no comprehende o alcanza el fundamento porque se le niegue a Dn Diego de los Ríos el pago de las Maderas que se le cortaban en los Montes de sus tierras; pues le era mui fácil, como notorio a este Ministerio haverlo satisfecho; que porque la villa estaba en quieta, y pacífica posesión inmemorial; no se pagaba y haví pagado jamás a ningun particular las Maderas, que se havían cortado en sus tierras y Dn Diego no havía manifestado ningun Privilegio distinto, con--

tra los de la villa; y esta omisión en el Ministro, y después haver ocultado esta orden, dando a Dn Diego subrepticamente sus certificaciones, para que haia cobrado las Maderas de la Real Hacienda; da mucho que sospechar en la legitimidad de la dicha Orden.

De esta ocultación y negación se puede convencer a V.M. por un expediente que pende en este Ministerio de Marina, pues habiendo puesto igual instancia sobre la propiedad de los pinos de sus Labores (a similitud e influxo de Dn Diego de los Rios) Antonio León de Lara vecino de la villa de Santiago y pedido por un otrosi de su pedimento se pusiésse en Autos testimonio de la insinuada orden, que se supone, havia ganado aquel, se dio traslado a esta Villa y revatiéndole esta su demanda, formando artículo de manutención por los fundamentos y privilegios que le asisten; se conformó también esta Villa con la pretensión de Antonio León y pidió se pusiesse testimonio de aquella orden pero con todo no se ha podido conseguir el verla, ni que se mande, y en este estado se ha quedado este expediente como subcedió con el Dn Diego de los Ríos.

Con convencimiento de los ningunos títulos que este se atribuye, y de la verdad de los particulares, que dexo espuestos, para su confirmación será mai conveniente (teniéndolo V.M. a bién) el mandar a este Ministro Dn Juan Pichardo, que juntamente con los Privilegios que Dn Diego haia manifestado en su Juzgado para que se le paguen por la Real Hacienda las Maderas

que se cortan en sus tierras; lo remita también integro el expediente que se instauró por el referido Dn Diego en tiempo de su antecesor Dn Alonso Venero, solicitando la propiedad de los Pinares, con inclusión del Despacho que se libró para emplazar a esta villa y la respuesta o cumplimiento que el Ayuntamiento le puso y otro igual testimonio del otro expediente promovido por Antonio León de Lara con la misma pretensión de la propiedad de los pinos, en que se dió traslado a esta villa, comprehensión de los pedimentos que este dió, los de la villa con sus otrosíes y de la providencia y Auto, que en esta vista de todo puso Pichardo, también se podrá mandar al Intendente de Marina de Cartagena (si V.M. fuere servico) haga buscar en su Juzgado el expediente que se causó por Dn Diego de los Ríos pretendiendo la declaración de la propiedad de los Montes de sus tierras a su favor, y la orden y Mandato que se dió por aquella Intendencia para que se le pagasen por la Real Hacienda, y que se remitta testimonio integro de todo: con cuos documentos, y si fuese necessario testimonio del Despacho que libró Venero para emplazar a esta villa con su respuesta, que parará entre los Libros de Acuerdos, no dexará duda que Dn Diego de los Ríos no ha tenido, ni pueden manifestar oy sus herederos, y menos este Ministerio de Marina título o Privilegio que cohoneste las indevidas pagas que se han exigido a la Real Hacienda por este motivo, y por todo resultará también que la providencia puesta por este Auditor y Alcalde Maior en los

Autos de Inventario y partición Dn Diego apoiándole la propiedad de los Montes, en conformidad de la disposicion de su testamento no ha tenido otro obgeto que la sumisión y condescendencia de este Ministro; y si fuere conducente, que si me parece serlo, testimonio de esta providencia, con mi presencia no podra occultarse.

Aunque los documentos insinuados han de convencer plenamente del ningun título que jamás ha tenido Dn Diego de los Ríos para apropiarse de los Montes en perjuicio de esta villa, y de la Real Hacienda, se declara más por los que diré. Primeramente se puede hacer una información plenissima de testigos, que ningun particular dueño de tierras de este termino jamás ha cobrado, ni se le han pagado los pinos que se han cortado en ellas, ni por la Real Hacienda ni por otro alguno; y lo que es más que haviendo tenido el mismo Dn Diego y sus Padrés y su Hermano Estevan de los Ríos la bores propias con pinares en esta jurisdicción, tampoco lo han covrado, ni pretendido ni otro alguno que Dn Diego por el favor que ha hallado en el Ministro, sin embargo que son antiquisimas, y mui repetidas estas cortas; pues siempre se ha reconocido por dueña única a esta villa.

Lo segundo puede acreditarse por testimonio que en ninguna Partición de los muchos dueños de tierras montuosas que ha havido, y ay en los términos y Partido de esta Villa, aunque se diga de doscientos o tres-

cientos a esta parte, en ninguna se ha dado valor ni estimación a los Montes ni Pinares que hai, ni ha havido en ellas por la propia razón de no tener derecho a ellos, y haverse considerado siempre por Dueña a esta villa; y lo mismo ha subcedido en las ventas y transpasos que se han hecho de dichas tierras de unos en otros; pues jamás se ha dado valor a dichos Arboles y Montes: lo que assi puede verificarse de la venta que yo le hice a Dn Diego de los Ríos de la Labor de dichas Herrerías, de que oy es el Litis, y de la que me hicieron antes a mí sus Dueños; pues en unas ni otras escrituras, se da el menor valor ni estimación a los Pinares por la dicha consideración: de donde se infiere que no haviendo tenido los que me vendieron, ni yo, derecho a los Montes, no pudimos transpasarlo a Dn Diego, ni este adquirirlo por este título; y consiguientemente ha necessitado nueva gracia y concessión de V.M. y de otro modo será y se deve reputar por una intrusión violenta, y tiránica contra los Privilegios y regalías de esta villa, y de los intereses de la Real Hacienda. Todo es justificable en el día teniendo V.M. la venignidad de mandar que los Escribanos de esta villa reconozcan los Autos de Inventarios y Particiones, y los Protocolos de Escrituras públicas que se hallen en sus oficios, y den testimonio de si se halla entre ellos alguna escritura de venta o partición, sean antiguas o modernas, en que se de estimación o valor a los Montes o Pinares que se hallen en sus tierras; executándose igual dili

gencia con los papeles que hai en el Archivo de esta villa; y que este testimonio (o de no haverlos) se entregue al Escribano de Ayuntamiento para que lo autorize y remitta o entregue a quien V.M. fuese servido mandar.

Aunque por tan repetidos documentos parece quedar comprobado que Dn Diego de los Ríos no ha tenido ni puede manifestar instrumento que contribuia al despojo que ha causado a esta villa apropiándose los referidos Montes, se confirmará el propio intento con otros repetidos Auténticos, que se conocen en dicho archivo de esta villa; pudiendo ser el primero una executoria y sentencia que se dio por el Consejo del Gran Maestre de la Cavallería de Santiago en el pleito que las villas y lugares del Partido le pusieron a esta en el año de - 1488 pretendiendo tener parte en los pastos y Montes de esta villa y sus Aprovechamientos e intereses; pues siendo treze los capítulos que le disputaron, por todos, y especialmente por los seis primeros se declaró, no tener aquellas parte, sí ser esta dueña y señora de los términos y Montes, y no poder aquellas hacer ni dar Licencia para edificios, ni otros aprovechamientos en su jurisdicción, como puntualmente se demuestra de la sentencia. El segundo se saca de las Ordenanzas Generales que por comission del Consejo de Ordenes celebró esta villa en concurrencia de todas las del Partido el año 1580; pues por ellas se dispone que ningun vecino del común pueda cortar maderas ni limpiar y rozar los árboles de sus propias tierras sin que preceda expresa Li-

cencia de esta villa y que por persona que nombre su Ayuntamiento se reconozca el Monte, para que si hai Arboles de aprovechamiento los utilice el Concejo; de que es visto que su propiedad no es de aquellos particulares. El tercero instrumento auténtico puede serlo las Escrituras de Censo que con facultad Real tomó contra sus Propios y Rentas esta villa el año de 1600; pues entre la hypoteca con afianza sus capitales y réditos a favor de sus dueños, son los Pinares y Productos de las Maderas y frutos de vellota de todos sus términos; habiendo precedido las Informaciones regulares de ser todas la hypotecas que se señalan Propias de esta Villa, para conceder la Real facultad; de que se convenze igual dominio a favor de esta Villa. El Quarto será también el testimonio que puede darse por esta Villa de los Papeles que se custodian en su Archivo, por donde consta que para la redemption de sus censos y para la fábrica del Convento de Religiosos Franciscos, con advocación de Nuestra Señora de la Peña, de que es patrona; y para otras necesidades que ha tenido, ha vendido de sus Pinares, sin distinción de tierras concejiles o de particulares, los que ha necesitado: todos estos documentos afianzan el derecho de esta villa contra el intempestivo que le ha usurpado Dn Diego de los Ríos; como puede justificarse si V.M. tubiese a bién de mandar que se habiliten y remitan estos testimonios.

Con todo lo expuesto y el fin unico de que no

se confunda y sofoque una verdad tan notoria, como parece se pretende, me precisa hacer presente a V.M. como fiel vasallo en defensa de los Derechos de la Real Hacienda y como Rexidor de esta villa en conservación de los que le corresponden; que en conformidad de una cláusula del testamento de Dn Diego de los Ríos, que acorde arriba y en que dispone que sus herederos acudan al Real Consejo de Guerra a solicitar el pago de las Maderas, que se cortaron en sus tierras por la Real Hacienda, en tiempos de Dn Josef Gutiérrez de Rubalcava y otros Ministros, oy se ha partido de esta Villa con este intento Dn Antonio Reylló Velarde, Alcalde Mayor de la del Tomelloso, según ha manifestado: este es hierno de Dn Diego de los Ríos, casado con una hija suya, y va muy esperanzado en la protección de este Ministerio; pero si el Fiscal de V.M. tomase parte en el asunto, como le corresponde, con tan repetidos fundamentos como llebo expuestos, y tan legítimos, no dará lugar a que la Real Hacienda litigue despojada, que es el fin que los conduce; si que antes bien, resistiendo y oponiéndose a dicha pretensión la hará de que se suspenda cualquier pagos que soliciten los herederos de Dn Diego, y que se sequestren y embargen todos los bienes que esta haia dexado por su muerte, para reintegrar al Real Patrimonio, de lo que sin título alguno ha percibido, con lo demás que tubiere por conveniente pedir.

También hago presente a V.M. por lo que pueda importar en los presentes asuntos, que Antonio Félix

Román Escribano del Ministerio de Marina se halla implicado también con Dn Diego de los Ríos en esta manipulación de Madera, por ser notorio que en una grande partida de Rollizos que llevaron para la Real Carolina y Nuevas Poblaciones, Román fue el que como comisario las conduxo por el Río, separándose dos Meses o más del empleo de Escribano de dicho Ministerio, lo qual no se le hubiera permitido ni el aceptado a no tener conocido interés; y para maior convencimiento Dn Diego en una cláusula de su testamento declara que de una contrata de Maderas que tubo con dicho Escribano Román estaban solventes, como también puede acreditarse.

Con inteligencia de todo, V.M. resolverá lo más arreglado, como siempre, y que fuere de su Real agrado.

Dios guarde la C.R.P. de V.M. los muchos años que estos sus Reynos y Vassallos necesitamos. Segura de la Sierra y Abril 20 de 1782.

A L.R.P. de V.M.

Firmado: Bernabé Picarzo de Almazán

Testimonio de la existencia en su protocolo de un expediente, librado por el escribano del Ayuntamiento de Segura, Francisco Fernandez de Hevia, relativo a una investigación, ordenada por el Concejo, sobre las maderas cortadas por el Negociado.

Francisco Fernandez de Hevia Escribano por S.M. unico del Ayuntamiento, Junta de Propios y Arbitrios de esta villa de Segura de la Sierra, Certifico y doy fee, como en esta Escrivania de mi cargo se halla un expediente que da principio con un testimonio dado por mi, su fecha veinte y nueve de abril ultimo, que inserta cierto Decreto de los Señores de dicho Ayuntamiento y Junta, el qual con lo demás actuado en su consecuencia es del tenor siguiente.

Decreto

En la villa de Segura de la Sierra en veinte y nueve dias del mes de Abril de mil setecientos ochenta y tres años los señores Licenciado Don Joachin Gonzalo Rodriguez, Abogado de los Reales Consejos, Gobernador y Justicia Maior en esta y su Partido por S.M. Dn Cele^udonio Zorrilla y Machado, Dn Bernabe Picarzo de Almazan Rexidores perpetuos. Antonio Marin Garay y Juan Juárez, que son los añales, Dn Miguel Ramón de Alphonsea y Joseph Romero Diputados del Común. Joseph Carriqui y Pedro Perez de la Fuente, síndico, Procurador Gral y Per^usonero, Concejo, Justicia y Regimiento de esta dicha villa y Junta de Propios y Arbitrios en ella, estando

juntos, como lo acostumbran en la Sala Consistorial, dixeron, que este Ayuntamiento y Junta se halla inte-ligenciado de que en la corta actual que se está ha-
ciendo de maderas por el Real Negociado de Sevilla en
estos Montes, la maior parte de ella escede de las
diez varas, contra la prohibición absoluta para que
no se corten a dicho fin sino desde dichas diez varas,
o algo menos dexando los arboles que tengan buelta re
servados y los maiores de aquella medida precisamente
para la carena y construcción de bageles de la Real
Marina, cuías maderas también se cortan en estos Montes,
como destinados a ellos, originada esta versación
de hallarse las dos respectivas comisiones a cargo del
Sor Dn Juan Pichardo ministro principal interino de Marina
y Montes de este Partido de que procede el ningún
arreglo que se observa en dichas cortas con conocido
perjuicio de esta villa en la extinción de sus montes y
lo que es de mas consideracion que el que se irroga a
dicha Real Marina por la falta de maderas, que se expe
rimentara en lo subcesivo de las Menas y Marcas corres
pondientes a ella; deviendo precaver en lo posible es-
ta villa los citados perjuicios y el conozido que expe
rimenta en su caudal de propios, acordaron que inmedia
tamente para los efectos que puedan convenir en mate-
rias de tanta importancia al Real Servicio y a dichos
caudales, se pase al reconocimiento de las Maderas que
en dicha actualidad se hallan cortadas en esta Juris-
dicción por personas expertas, e inteligentes en este
asunto, y que comparezcan a declarar ante Su Merced

dicho Señor Gobernador vajo de juramento el numero y clase de ellas con toda difinicion y claridad; a cuio fin nombraron sus Mercedes de una conformidad a dicho señor Joseph Romero, a Andres Navarro vecino de esta villa y por ajudante a Francisco Xavier Romero de Ventura de este mismo domicilio: Y a intento de que se forme expediente separado en el asunto, y que su Merced dicho Señor Gobernador pueda dar y tomar las más efectivas y adecuadas providencias, acordaron se deduzca testimonio con inserción de este Decreto, y se passe al mismo Señor Gobernador, reservando sus Mercedes, en vista de lo que resulte de dicho reconocimiento de Maderas acordar lo conveniente: assi lo dixeron sus Mercedes y lo firmaron los que supieron de que doy fe. Licdº Gonzalo. Machado. Picarzo. Alphosea. Romero. Joseph. Carriqui, Ante mi. Francº Frez de Hevia.

Auto

Visto este testimonio por el señor Gobernador y Justicia Mayor de esta villa de Segura de la Sierra y su Partido por S.M. mandó se le notifique a los dos peritos y ajudante que constan combrados en el acuerdo que inserta, cumplan a la mayor brevedad con el reconocimiento de madera, que se les encarga y fecho comparezcan a declarar ante su merced y el presente escriba no vajo de juramento, pues por este su auto assí los proveió, mandó y firmó su merced de que doy fee, en esta dicha villa a veinte y nueve de Abril de mil sete-

cientos ochenta y tres años =Licdo. Gonzalo = Ante mi=
Francisco Fernández de Hevia=

Notificaciones

Este dia notifiqué los nombramientos de peritos y ajudante que contiene el Decreto, que inserta el testimonio de este pliego a Joseph Romero, Andrés Navarro y Francisco Xavier Romero de Bentura vecinos de esta villa en sus personas, y enterados respondieron estaban prontos a cumplir con lo que se les encarga de todo lo qual doy fee = Hevia=

Declaración

En la villa de Segura de la Sierra en siete días del mes de Mayo de mil setecientos y ochenta y tres años, ante su Merced dicho Señor Governador y por ante mi el escribano comparecieron personalmente Joseph Romero y Andres Navarro vecinos de esta villa practicos nombrados para el reconocimiento y medición de las Maderas que constan del Decreto, que inserta el testimonio de este pliego y Francisco Xavier Romero de Bentura de este mismo domicilio, ajudante nombrado al mismo efecto, y vajo juramento que prestaron por Dios y a una señal de cruz segun derecho en manos y por recepción de su Merced dixeron, que a consecuencia de dichos sus nombramientos y notificación que de ellos se les havia hecho, havian pasado a los sitios de la parte de arriba y de avajo de la Navalasna, Cañada del Muerto, Royo Trapero, Majadal de las Burras, Prado del Puerco,

Cerecera, Alameda y Majadal del Borriquillo, todos comprendidos en los términos y jurisdicción de esta villa, en los que de presente se havia practicado, y estaba practicando la corta de Maderas con destino al Real Negociado de Sevilla, cuia comisión corre a cargo del Sr. Dn. Juan Pichardo, como subdelegado de dicho Real Negociado, residente en el lugar Orcera, y Ministro interino de Marina y Montes en ese Partido y sus agregados, encargado por esto en las cortas en estos mismos montes de las Maderas para las carenas y construcción de Bageles de la Real Armada, y que haviendo reconocido, medido y numerado todas las que en la actualidad se hallaban cortadas en los dichos sitios para dicho destino del Real Negociado de Sevilla havian encontrado tres mil quatrocientas y treinta y una piezas cortadas y labradas de diferentes marcas de tabla y canto, y de las larguras siguientes

<u>Baras</u>	<u>Primeramente de ocho baras de</u>	<u>Piezas</u>
De 8	largo quarenta y quatro piezas	44
De 9	De nueve baras, vintiuna piezas	21
De 10	De diez baras, ciento ochenta y nueve	189
De 11	De onze baras, ciento y setenta piezas	170
De 12	De doze baras, doscientas setenta y dos	272
De 13	De trece baras, trescientas treinta y tres	333
De 14	De catorce baras, trescientas y diez	310
De 15	De quinze baras, quatrocientas diez y seis	416
De 16	De dieciséis baras, quinientas veintisiete	527

De 17	De diecisiete baras, doscientas treinta y una	231
De 18	De dieciocho baras, trescientas y cinco	305
De 19	De diecinueve baras, doscientas treinta y una	231
De 20	De veinte baras, doscientas y cuatro piezas	204
De 21	De veinte y una baras, ochenta y ocho	88
De 22	De veinte y dos baras, quarenta y dos piezas	42
De 23	De veinte y tres baras, diez y siete	17
		<hr/>
		3.431

Que todas las piezas cortadas y labradas montan a una suma las mismas de tres mil quatrocientas treinta y una, salvo error; y que entre estas Maderas numeradas, y contadas havian reconocido quatrocientas y veinte y siete de buelta que era lo que havian visto y reconoci-do, contado y numerado, segun la práctica que tenian en semejantes asuntos y lo que podian decir y declarar, so cargo del juramento que tenian fecho en esta su depo-sición, en la que haviendoseles leído se afirmaron y ra-tificaron, y dixeron haverse ocupado en esta diligencia siete días y ser de edad dicho Joseph Romero de quaren-ta y cinco años, el Andres Navarro de quarenta y nueve y el Francisco Xavier Romero de treinta y uno, todos po-co más o menos y lo firmaron los que supieron con su merced de todo lo qual yo el escribano doy fé =Lído. Gonzalo = Joseph Romero = Andres Navarro = Ante mi = Francisco Fernández de Hevia = Que dicho Decreto, Auto, No tificaciones y Declaración corresponden con los in-sertos de dicho testimonio que queda en esta escribania

de mi cargo a que me refiero y para que conste en virtud de otro acuerdo de los mismos señores de este Ayuntamiento y Junta, su fecha de este día doy el presente en estas tres foxas utiles rubricadas de mi puño en esta dicha villa a veinte y tres dias del mes de Mayo de mil setecientos ochenta y tres años.

Signo, rubrica y firma del escribano

Francisco Fernández de Hevia



BIBLIOTECA
DE DERECHO

Excmo. Sr.

Noticioso el Rey de que entre 3.431 piezas de madera que pocos dias ha estaban ya cortadas en los montes de Segura de la Sierra para el Real Negociado de Sevilla, las 3.177 tienen de lla 23 varas de largo y 4237 de ellas vuelta proporcionada para la construcción de baxeles; ha resuelto S.M. que asi estas como las de la misma especie que desde entonces aca se hayan derribado se entreguen a la Marina, y que en lo sucesivo por parte de dicho Negociado no se extraiga de alli pieza alguna que exceda de 10 varas, especialmente siendo de vuelta; y de su Real Orden lo comunico a V.E. a fin de que expida las correspondientes a su cumplimiento. Dios guarde a V.E. muchos años. Aranjuez 9 de junio de 1783.

Sr. Conde de Gausa

Carta de don Francisco de Bruna, del Real Negociado de Segura en Sevilla, a don Antonio Valdés, ministro de Marian y Secretario de Estado y del despacho de Indias.

Excmo. Señor:

Muy señor mío: en 25 pasado me dize Dn Juan Pichardo, subdelegado del Real Negociado, que por real orden que se ha servido V.E. comunicarles en 10 del propio Mes, como Ministro interino de Marina de Segura de la Sierra, manda S.M. que deuido servir solo en lo sucesivo para la fabrica de bageles los árboles de aquellos Montes, cuyas maderas sean de buelta, o excedan de 10 varas de largo; quiere el rey que reservando dicho Ministro para el mismo fin las que hay de esta especie entre las cortadas en el presente año para el real Negociado desta Ciudad cuide de remitirlas al Arsenal de la Carraca al mismo tiempo que se execute la conducción de las que tengan el propio destino: y en cumplimiento desta real determinación he dado orden a correo seguido al dicho subdelegado que reserve para la Marina 41 piezas que cortaron los hacheros demas de 10 varas contra lo que les preuino el referido Pichardo.

Conociendo que habrá dado motivo a esta real orden las cavilaciones y recursos maliciosos de la villa de Segura debo exponer a V.E. (para que tenga una idea del pernicioso carácter de aquellas gentes) que resentida esta de no manejar los fondos del arbitrio de Guadalmena y Bañares concedido por S.M. para la conserva-

ción, y aumento de los Arboles, de que se le privo en el año de 64 por su mala versación, no ha perdonado, ni perdona medio alguno para inquietar la jurisdicción de Marina, destruir el Negociado y destrozar impunemente aquellos preciosos montes por sus intereses particulares.

El punto del día es haberse introducido clandestinamente y perturbado la corta del Negociado en el presente año con el pretexto de que las piezas exceden de las 10 varas señaladas en la real orden de 28 de mayo de 64, faltando abiertamente a la que se le comunicó por el Ministerio de Hazienda en 25 de junio de 771, en que se les previene entre otras cosas, que la villa debe observar y arreglarse a la costumbre observada en cerca de 40 años, y en su consquencia no puede, ni deve intervenir en los cargos de madera, que hayan de cortarse por corresponder este conocimiento privativamente a la jurisdicción de Marina a quien esta cometida la conservación y fomento de todas las arboledas, por cuyo motivo no es permitido hacerse corta alguna sin que preceda licencia de los Ministros della con quienes se ponde de acuerdo el real Negociado para que las execute.

En cumplimiento della ha precedido siempre para las cortas del Negociado la lizencia, y el ponerse de acuerdo con el Ministro de Marina, el que convocó para la deste año en la forma ordinaria, los Hacheros,

el capataz y el delineador de Arsenales, previniendo-les no derribasen pino que pasase de las 10 varas y que la corta se practicase en sitios donde ya había cortado la Marina. Esto así, cometió la villa el atentado, por medio de algunos yndividuos della, de intimidar a los hacheros amenazándoles de ponerlos presos si cortaban algun pino que pasase de 10 varas, y hauiendose sin embargo continuado la corta, tubieron el exceso de pasar a medir los pinos labrados; sin llevar o-tro interés que su encono particular con los que disfruta la real Hazienda siendo asi que ellos mismos deven su subsistencia a las dos comisiones que con sus caudales mantienen aquel Pais.

Lo mas es que tengan valor de repugnar las cortas con el pretexto que exceden de 10 varas, sin hazerse cargo, que a quantos forasteros se presentan solicitando piezas, sean de 15 ò 20 varas se les permite con arreglo a ordenanzas, pues de lo contrario suspenderían las obras de sus casas y molinos: pero la verdad es que de 1566 piezas que se han cortado y labrado este año sólo 41 que son las mandadas entregar a la Marina exceden de las 10 varas en esta forma = 25 piezas de 11 varas, 9 de a 12 varas y 7 de a 13 varas.

Sobre que devo esponer a V.R. con la sinceridad, que acostumbro, que en cada pinada se necesitan 50 ó 60 piezas (llamadas violones por su figura) de 12 ó 13

varas de largo para labrar el rio en los sitios peligrosos donde se forman suelas y voladores sobre que pasa todo el resto de la pinada: En cuyo supuesto estoy persuadido que el espiritu de la citada orden de 28 de mayo y de la que S.E. se ha servido comunicar a don Juan Pichardo sera el que no se derriben pinos gruesos de mas de 10 varas y de calibres extraordinarios porque deben quedar reservados para la construcción de bageles del rey, pero no los tortuosos y de figura irregular, que economiza el Negociado dividiendolos en dos o tres piezas de distintas menas o calibres, que es del modo que pueden ser aprovechadas porque su principal consumo es de maderas desde 4 varas hasta 10; y si se han traído algunas desta ultima clase sin dividir ha sido por el motivo expresado; pero después se han destinado para las máquinas de sangre de la real Fundición de Artilleria desta ciudad; y las de menos longitud para la Maestranza de Artilleria y Campo de San Roque donde en todo el tiempo del bloqueo y sitio se han consumido casi dos pinadas, quedando en thesoreria de exercito mucha parte de su producto.

Siendo de notar que haviendose finalizado por el expresado motivo las maderas de Segura a la mitad del tiempo y faltado por consiguiente el abasto, y surtimiento a los particulares y hazendados de estas cercanías, los almazeneros de las de Flandes las duplicaron, y aun triplicaron los precios a las suyas, de manera

que la tabla la vendian por 8 reales, llegó el caso de valer 24: cuyo exceso subsistió hasta que llegó el año pasado la pinada, que actualmente se está vendiendo: lo que persuade de la importancia del Negociado; ya por lo que produce a la real Hacienda y ya para destruir en lo posible un ramo de comercio pasibo tan perjudicial a los vasallos de S.M.

Tengo la libertad de remitir a V.E. copias literales de mi informe de 26 de abril de 64. de resultas de la visita que de orden del rey hize en aquellos Montes a que acompañó un plan topográfico dellos (que para en la Secretaría de Hazienda) y de la referida orden de 28 de mayo, que la motivó, por si V.E. se toma-se la molestia de instruirse del manejo interior de aquellas Comisiones, odio de sus Havitantes a los Montes, medios y ausilios para su fomento, y abundante provisión de Marina, Negociado y Particulares; todo a presencia del terreno, y con arreglo a las leyes del reyno, instrucciones y ordenanzas, que hablan del plantío y fomento de Arboles.

Sevilla 9 de julio de 1789

Excmo Sor

BLM de VE

su ms. aten² servr.

Dn Franc² de Bruna.

Queda enterado el Rey de haver dispuesto Vd, segun avisa en carta del 9 del corriente, se reservasen para la Marina las 41 piezas de maderas de más de 10 varas, que se encontraron entre las cortadas en el presente año para el Negociado de maderas de Segura, conseqüente a la Real Orden comunicada en 30 del pasado a Dn Juan Pichardo y de que di noticia al Sr Ministro de Hacienda a fin de que la trasladase a V.S. y espera S.M. del acreditado celo de V.S. que tomará igual interés en la ventajosa provisión de maderas para la Marina que en el fomento del Negociado, que no es aquella menos util y si mucho más precisa. Dios guarde a V.S. muchos años. Madrid 19 de julio de 1783.

Sr. Dn. Francisco de Bruna. Sevilla

Oficio del Sr. Intendente general de Marina del Departamento de Cádiz relativo a mis méritos en la Visita extraordinaria de Montes de Alcaraz.

En orden del 21 de presente, me dice el Sor. Intendente General de Marina del Departamento de Cádiz lo siguiente.

"Me he enterado de lo representado por Vm. en carta de 31 del pasado, y del Dictamen del Asesor de esa Subdelegación, Dn Pedro Ambrosio de Olivares, en razón de los medios para la esaccion de las Multas y Condenas al Director de las favricas de laton Dn Juan Graubner, de que me acompaña Vm. testimonio, y en su virtud, conformándome con el parecer de aquel Letrado prevengo lo conveniente al Ministro de esa Provincia, Dn Alonso Morgado, y a S.M. recomendaré en el correo procsimo el buen desempeño de Vm y de ese Asesor, en la comisión delicada y penosa, que han concluido con mucha satisfacción mia; Avisolo a Vm en contestación a su citada carta para su intelixencia y la de Olibares; Dios guarde a Vm muchos años. Isla de Leon 21 de Abril de 1798. Franc^o Gorriola. Sor. Dn Jose Ruiz Moscoso.

Lo que paso a noticia de Vm para su intelixencia en la parte que le toca.

Dios guarde a Vm muchos años. Iznatoraf y
Abril 27 de 1797

Josef Antonio Ruiz

Sor Dn Pedro Ambrosio de Olivares.

PROPUESTA DE LEY PRESENTADA POR LA COMISION DE AGRICULTURA A DISCUSION DE LAS CORTES; COMO COLOFON DE SU DICTAMEN RESPECTO DE LA PREGUNTA ¿ES UTIL O PERJUDICIAL EL REGLAMENTO DE MONTES?:

1º) Se derogan y anulan en todas sus partes todas las leyes y ordenanzas de montes y plantíos en cuanto conciernan a los de dominio particular; y en su consecuencia los dueños quedan en plena y absoluta libertad de hacer en ellos lo que más les acomode, sin sujeción alguna a las reglas y prevenciones contenidas en dichas leyes y ordenanzas.

2º) Los dueños tendrán igual libertad para cortar sus árboles y vender sus maderas a quien quisieren, y ni el Estado, ni cuerpo alguno, ni persona particular, podrá alegar para estas compras privilegio de preferencia o tanteo, u otros semejantes, los cuales quedan también derogados, debiendo hacerse los contratos por convenciones enteramente libres entre las partes.

3º) Los terrenos destinados a plantío, cuyo suelo y arbolado sean de dominio particular, se declaran cerrados y acotados perpetuamente y sus dueños podrán cercarlos y aprovechar como quieran los frutos y producciones, dejando libre el paso de caminos reales y de travesías, o servidumbres, cañadas y abrevaderos, como también el disfrute de caza y pesca.

4º) En los montes, cuyo suelo sea de dominio particular y el arbolado corresponda a los propios o baldíos



BIBLIOTECA
DE DERECHO

de los pueblos, los dueños del suelo podrán exigir que se les venda por su justa tasación el arbolado, o que se les dé a censo redimible por el capital que de la tasación resulte, obligándose a pagar a los propios los réditos que según ella correspondan, y vendido, o dado a censo el arbolado quedará acotado el terreno, y el dueño podrá cercarlo y disfrutarlo como se previene en el artículo precedente.

5º) Queda desde ahora extinguida la conservaduría general de montes y las subdelegaciones del mismo ramo, así en las provincias marítimas como en las demás. Las denuncias que se ofrezcan se pondrán ante las justicias de los pueblos respectivos, y en apelación entenderán las Audiencias territoriales, como de los demás asuntos; pero los jueces que determinen las denuncias no continuarán recibiendo la parte que hasta ahora han recibido en las condenaciones, la cual se aplicará al fisco.

Así lo entiende la comisión; V.M., sin embargo, resolverá como siempre, lo más acertado. Cádiz, etc"

Dn Prudencio Maria Pichardo, oficial 2º del Cuerpo de la Real Armada, Ministro pral. que he sido de marina y montes de esta Provincia de Segura de la Sierra, Subdelegado del Real Negociado de Maderas que desde ella se conducen en navegación por los Ríos Guadalimar y Guadalquivir a la Ciudad de Sevilla, y Administrador Juez privatibo, del Arbitrio de Guadalmena y Bañares, en virtud de Reales Ordenes, y Comisionado actual por S.M. en esta propia Provincia de disposición del Supremo Consejo del Almirantazgo.

CERTIFICO: Que desde el año de mil setecientos ochenta y cinco, hasta el día de hoy, he conocido y conozco, de vista, trato, y comunicación al Licenciado Dn Pedro Ambrosio Olivares, Abogado de los Reales Consejos y Auditor de Marina y montes de esta Provincia, cuyo empleo ha servido, y está sirviendo en virtud de Real Nombramiento y despacho de S.M. desde el día primero de julio de mil ochocientos dos en que tomo posesión de su Auditoria, hasta de presente, en que se cuentan quince años y dos meses cumplidos, sin interrupción; en cuya época, y en las antecedentes hasta el ya citado de mil setecientos ochenta y cinco, ha contrahido en este ramo de marina, y sus comisiones, como Asesor de ellas por S.M. los meritos siguientes:

Establecido que fue el referido Dn Pedro Ambrosio Olivares en la citada villa de Segura, capital de este Partido, con su oficio, y Estudio habierto de Abogado, Director, o Asesor ordinario de

todos los negocios forenses, políticos, y gubernamentales de la Audiencia y Curia Eclesiástica Ordinaria de dicha Villa, y Pueblos de su Partido (nullius Diocesis), tan luego como se iban viendo todos sus escritos, y dictámenes verdaderamente solidos y arreglados a las Leyes Reales y Canonicas adquirió una opinión general y singular, nada comun entre todos los Abogados de su profesion en este Partido y sus Pueblos Comarcanos por su profunda instrucción, y practica en ambos derechos; con cuyo motivo mi venerado Padre Dn Juan Pichardo Ministro que fué de Marina y montes de esta Provincia, y Juez Subdelegado por muchos años de las citadas comisiones en tiempo que no estaba creada esta Auditoria, lo eligió, y distinguió con sus nombramientos de Asesor de Marina, y de las mencionadas comisiones, especialmente para los asuntos mas arduos, y competencias jurisdiccionales mas delicadas que le ocurrieron, consultandole los demás puntos, y negocios entrincados, y aun las defensas que encargaba a favor de la Real Hacienda en clase de Abogado fiscal, contra el gremio de Carreteros que aspiraban a un aumento exorbitante por la extracción y transporte de maderas de marina y Real Negociado desde sus Astilleros, hasta el Aguadero, en que logró la Real Hacienda, con las acertadas defensas de dicho Dn Pedro Ambrosio Olivares, un arreglo, y moderación en los precios de los transportes de dichas maderas, dexando convencidos a

los carreteros con las resultas, y Ordenes de la Corte, en la qual, y en las Intendencias de Marina de los Departamentos de Cádiz y Cartagena, se hizo particular aprecio de sus defensas y dictámenes, segun las ordenes que se comunicaban a mi Padre.

Entre estas fue una la decisiva de la reñida competencia que tubo en el año mil setecientos ochenta y cinco con el Alcalde mayor, y Ayuntamiento de Segura a instancia de su Procurador Sindico general, en que con el mayor esfuerzo exortaron a mi Padre en repetidos escritos para obligarle a que con el Ministerio, sus Comisiones y dependientes se estableciese en Segura, como lo habian estado otros Ministros sus antecesores, con arreglo a la Ordenanza de ellos por ser la Capital de la Provincia, a que se opuso mi Padre por justas causas con la dirección y acuerdo del mismo Olivares que merecieron la Real aprobación de S.M. en vista de los expedientes de ambos juzgados competidores, a quienes se comunicó la Real Orden decisiva de tan ruidosa competencia, mandando que mi Padre continuase con el Ministerio y Comisiones en este Lugar de Orcera, y no en Segura, a cuyo Alcalde mayor Capitulares y Sindico, reprendió S.M. muy seriamente por sus temeridades, y otros vicios contenidos en sus exortos, imponiendoles perpetuo silencio en el asunto.

Que a esta imitación así mi Padre hasta su fallecimiento como los demas Sres. Ministros sus subcesores y Yo en nuestros respectivos tiempos y duración de nuestros empleos, todos hemos experimentado iguales victorias en todas las muchas competencias con algunas de las Justicias de los Pueblos de la Provincia, incluso el Corregidor de la villa de Quesada, el Alcalde ordinario de la de Iznatoraf, el Governador de la de Segura, y su Ayuntamiento enemigos notorios de la jurisdicción de Marina y sus Comisiones, por sus fines particulares, e injustos resentimientos contrarios al fomento y conservación de estos preciosos montes y otros importantes obgetos recomendados por S.M., entre ellos, varios puntos jurisdiccionales, pribatibos del ramo de Marina, y sus Comisiones, como son el repartimiento de pastos para los Bueyes Carreteros de estas y demás ganados de las mismas, señalamiento de redondas para dichos Bueyes, durante su ocupación en la exportación de maderas, con los demas del gremio de Carreteros en que han sido, y son continuos los tropiezos con los Capitulares de la villa de Segura, cuyos recursos a favor de la Marina y sus Comisiones ha dirigido este Sor. Auditor Olivares con tanto acierto que hemos ganado todas las competencias, sin exemplar alguno en contrario de quantos han salido hasta ahora, decididas unas por S.M., otras por las Capitanias

Generales de ambos Departamentos y otras por la Superintendencia general del Real Negociado de Sevilla, baxo las ordenes de los Excmos, Señores Ministros de la Real Hacienda en mi tiempo el mayor numero de estas competencias.

Que una de ellas quedó, y permanece pendiente desde mi relevo en que se ha empeñado el Alcalde mayor y Ayuntamiento de Segura, con el mayor calor, y por sus fines particulares, apropiar el dominio de los Arboles Silvestres nacidos, y criados naturalmente en terrenos incultos, y montuosos a los llamados Dueños de estos, siendo realengos, comunes y de comun aprovechamiento entre los Pueblos de la mancomunidad para sus necesidades propias, alimento, y abrigos de sus ganados de tiempo inmemorial, hasta ahora, y pertenecientes en propiedad al privilegiado fondo de montes, sujeto por S.M. a la jurisdicción, y ramo de Marina, a cuyas novedades de Segura se ha opuesto en sus solidos dictámenes dicho Sr. Olivares contra la opinión de Segura, impendiendo un improbo trabajo conmigo en este negocio de la mayor importancia, que ha merecido el aprecio de ambos Departamentos segun las ordenes comunicadas de forma que segun el semblante de las cosas, la villa de Segura y sus secuaces han dado prueba de su error en uno de los Decretos de su Ayuntamiento, y los restantes han decaído en su orgullo, y opinión, y todo

es debido a la solidez y conocimientos profundos de dicho Sr. Auditor Olivares.

Otro de sus particulares méritos, lo conceptuo, en haver servido ocho años esta Auditoria, sin sueldo, ni gratificación alguna en tiempo de mi Padre, y por ausencia del Auditor Dn Josef Antonio Caveza y Salgado, que la hizo con Real Licencia en la villa de Guadalcanal con motivo de ciertas cuentas, y otros asuntos que dexo pendientes, cuando se le confirió esta plaza, en que dió pruebas dicho Olivares de su literatura, actividad, aplicación en el desempeño de los muchos expedientes de este Ministerio, y de su desinterés.

En seguida de estos servicios, no ignorados por los Señores Intendentes de ambos Departamentos, le confirieron a un mismo tiempo la plaza de Asesor ordinario de la Subdelegación de Marina y montes de la Ciudad de Alcaraz, y su Partido, la mas basta de todas las de la Provincia, despachándole sus respectivos títulos jurídicos en cuya virtud sirvió aquella Asesoría desde quince de Diciembre de mil setecientos noventa y tres, hasta treinta de junio de ochocientos dos en que se cuentan ocho años y medio, mas que cumplidos e interinamente aquella Subdelegación, como Subdelegado nato durante la penosa y larga enfermedad del propietario Dn Juan Navarro, hasta su muerte, y asimismo la sirvió en las ausencias de su subce-

sor D. Manuel Rodriguez Galves, quando pasó a la Corte con motivo de su casamiento en ella, hasta que se trasladó a Alcaraz con su actual muger.

En los citados ocho años medio ocurrió la visita extraordinaria de aquellos montes cometida por S.M. al Subdelegado actual de Marina y montes de Iznatoraf y su Partido Dn Josef Antonio Ruiz, que por muy escrupulosa y delicada, duró quatro años y medio, dirigiendo, y sustanciando sus expedientes, con acuerdo del mismo Dn Pedro Ambrosio Olivares, como Asesor de la visita, con especial nombramiento del Sor. Intendente general de Marina del Departamento de Cádiz Dn Franc^o Gorriola, por cuyo conducto corrió dicha visita. En ella resultaron reos de graves excesos en los montes hasta el numero de sesenta o mas individuos, entre los mas poderosos de la Ciudad incluso el Corregidor de aquel tiempo, sustanciados sus respectibos espedientes, y sentenciados con acuerdo de dicho Asesor Olivares, se consultaron las sesenta, o mas sentencias a S.M. con sus respectibos procesos originales, y extractos de cada uno, antes de su publicación, y mandadas ver por S.M. fueron devueltas de su Real Orden con las de aprobacion de todas y cada una de dichas sentencias, sin la menor rebocacion, ni reforma, en que contrajo el Asesor un merito extraordinarios por su acierto en todas ellas, y en su sustanciado, siendo la visita mas

espinosa; de forma que todo salió a satisfacción de S.M. de el Sr. Intendente, del Visitador, y de dicho Asesor, como adverti en las Ordenes y expedientes que vinieron a este Ministerio despues de executadas las sentencias y cobradas las multas y condenaciones que en ellas se impusieron, y fueron bastantes para indemnizar a la Real Hacienda de los dispendios de tan penosa visita, y a contener los graves excesos de los taladores de los montes.

Que a consecuencia de estos servicios, y de haver vacado esta Auditoria por el fallecimiento de Dn Josef Blazquez, fue provista por S.M. a favor de dicho Olivares, en atencion a ellos, y a su acreditada literatura, librandole el titulo y Real Despacho correspondiente, de cuyo empleo tomó posesión el citado dia primero de Julio de mil ochocientos dos, con el sueldo de su anterior dotación de quarenta escudos mensuales; y en esta epoca es quando ha conformado mas, y mas, y aumentado sus meritos y victorias ya indicadas en los recursos y competencias con las Justicias, y su acierto en los sustanciados, y definitivos de los procesos de modo que sus acuerdos y dictámenes, han sido, y son respetables en toda la Provincia, y entre todos los Abogados de ella y su Comarca, sosbteniendo con su firme constancia los Reales Decretos de S.M. y conciliando la recta administra



cion de justicia, con el beneficio, y equidad de sus leales vasallos, en todo compatible.

Ultimamente: hallandose vacante de trece años a esta parte la plaza de Promotor fiscal, que servia el Abogado Dn Ramon Pretel, y Cozar, con la dotación de doscientos ducados anuales, y obligación de fixa residencia en este Pueblo, por renuncía que hizo de ella; y no habiendose provisto hasta ahora en otro Abogado, a pesar de la necesidad de este empleo para promover, y agitar la multitud de denuncias, e incalculable numero de otros procesos, ha sido preciso al Señor Auditor Oliva-res cargarse con mayor peso, y trabajo en la expedición de las causas, y su sustanciado, ha que ha sido consiguiente el posible cuidado de agitarlas, y de fundar con mas extensión, sus providencias interlocutorias supliendo en esta parte la que tocaba de obligación al oficio Fiscal, a costa de sus incesantes tareas, en que ha experimentado y experimenta la Real Hacienda la exoneración del pago de la dotacion de este empleo en los trece años transcurados, y es otro de los servicios de dicho actual Sor Auditor bien conocidos en este Ministerio.

Que es lo que por ahora tengo presente, y puedo certificar, como lo certifico, con toda verdad, y por lo que me consta de ciencia, y de expe

riencia propia, y a ruego del Interesado, y para los efectos que le puedan convenir la firmo en es te Lugar Orcera, a veinte y siete de Agosto de mil ochocientos diez y siete =entre líneas= cinco= vale=

Prudencio M^a Pichardo.

XXII .- BIBLIOGRAFIA

ABELLA VERA; Joaquín: Legislación de montes, Madrid, 1965.

AGUNDEZ FERNANDEZ, Antonio: Jurisprudencia contencioso-administrativa sobre temas forestales, "REAS" 60 (1967) 129-77.

ALCALA-ZAMORA Y TORRES, Niceto: La inscripción de los montes públicos en el Registro de la Propiedad, "RCDI" 1 (1925), 161-69.

ALCALA-ZAMORA y TORRES: Algo más sobre la inscripción de montes, "RCDI" 1 (1925), 401-06.

ALTAMIRA Y CREVEA, Rafael: La propiedad comunal y la legislación contemporánea, "RGLJ" (1889), 294-323.

ALTAMIRA Y CREVEA: Historia de la propiedad comunal, Madrid, 1890.

ALVAREZ-GENDIN BLANCO, Sabino: Naturaleza jurídica de los montes públicos según la nueva ley que los regula, "RCDI" 31 (1958), 745-61.

ANES, Gonzalo: El Antiguo Régimen. Los Borbones. Historia de España. Editorial Alfaguara IV.

ANES, Gonzalo: Las crisis agrarias en la Edad Moderna. Madrid, 1970.

ARANDA NAVARRO, Jesús: Los bienes comunales: su concepción y naturaleza jurídica, especial referencia al problema de su reivindicación, Madrid, 1963.

ARTIME PRIETO, Manuel: La Ley de Montes y la doctrina jurisprudencial, "FG" 125 (1961), 177-94; 126 (1961), 265-76.

BALLESTER ROS, Ignacio: La riqueza forestal de los Municipios españoles, "REVL" 109 (1960), 72-84.

BARRACHINA: La repoblación forestal y la reintegración al campo, Madrid, 1930.

BAZ IZQUIERDO, Fernando: Explotación colectiva de los bienes comunales de aprovechamiento agrícola, "REAS" 51 (1965), 33-65.

BELVER Y OÑA: ¿Debe reputarse como dueño de un terreno montuoso aquel que lo tiene inscrito dentro de los linderos de sus títulos de propiedad y comprendido en la cabida que le resulta a la finca donde se encuentra? "RGLJ", núm. 59, 1881, páginas 322-330.

BELLO, Luis. Viaje a las escuelas de España. Madrid, 1929.

BENEYTO PEREZ, Juan: Notas sobre el origen de los usos comunales. "AHDE", número 9, 1932, pp. 33-102.

BENEYTO PEREZ: Sobre los bienes de ciudades en la historia del Derecho español, "Un." (1933), 105-15.

BEYTO PEREZ, Juan: Historia de la Administración Española e hispanoamericana. Madrid, 1958.

BERMUDEZ, A: El Corregidor en Castilla (1348-1474).

— BONFANTE, P: Instituciones de Derecho Romano.

BUSTELO Y GARCIA DEL REAL, F: La población española en la segunda mitad del siglo XVIII. Moneda y Crédito, nº 123 (diciembre, 1972).

CARBALLAL PERNAS, Ramón: Sobre el Proyecto de Ley regulando los montes de aprovechamiento comunal pertenecientes a núcleos vecinales. "FG", núm. 137, 1968, páginas 43-48.

CARUANA GOMEZ DE BARREDA, Jaime: La prioridad cronológica del fuero de Teruel sobre el de Cuenca. "AHDE". XXXI. 1961.

CASTRO BOLAÑO: Informe sobre el estado de los montes de la provincia de Lugo y de los medios de proveer a su conservación. Lugo, 1850.

CASTRO SOMOZA, Juan Luis: Los montes "en mano común" de vecinos en Galicia. "RGLJ", 1966, pp. 456-500.

CASTRO SOMOZA, Juan Luis: Comentario crítico a la ley sobre montes vecinales en mano común. "FG", núm. 143, 1969, páginas 265-292.

JOSE DE CAVANILLES, Antonio: Observaciones sobre... el reyno de Valencia. Madrid, 1795.

CAXA DE LERUELA, Miguel: Restauración de la antigua riqueza de España. Nápoles, 1631.

COLON DE LARREATEGUI, Felix: Juzgados Militares de España y sus Indias. Madrid, 1817.

DE LA CONCHA: La "presura". 1946.

CONSEJO DE ESTADO: Dictamen sobre aprovechamientos forestales en Navarra. "DA", número 117, 1967, pp. 81-84.

COSTA, Joaquín: Colectivismo agrario en España. 2ª ed. Madrid, 1918.

COVIAN: Pastos de facería. "Enciclopedia Jurídica Seix", t. XXIV.

CUADRADO IGLESIAS: Naturaleza jurídica de los aprovechamientos comunales de pastos y leñas. Salamanca, 1961.

CUEVA, Enrique de la: Índice legislativo forestal. Huesca, 1925.

CHAVES, Bernabé: Apuntamiento legal sobre el dominio solar de la Orden de Santiago. Barcelona, 1975.

DESDEVIZES DU DEZERT, G: L'Espagne de l'Ancien Regime. Paris (1897-1904).

DIAZ AMBRONA, A: Discurso en defensa de los dictámenes de los siguientes proyectos de ley: 1º De montes vecinales en mano común... Madrid, 1968.

DIAZ RUEDA: Infracciones en montes públicos. "RGLJ", núm. 36 1870, pp. 126-128.

DIAZ DE LA RIVA, Angel, y GUERRA-LIBRERO YARROYO, Gumersindo: Montes municipales, públicos en general y de particulares. Legislación, jurisprudencia, comentarios y concordancias. Madrid, 1963, 918 pp.

DIEGO, Clemente de: Derechos y aprovechamientos comunales. Titular de los mismos, en su libro "Dictámenes jurídicos", I. Barcelona, 1958, pp. 184-210.

DIEGO, Clemente de: Derechos y aprovechamientos comunales. Servidumbres, en su libro "Dictámenes jurídicos", I. Barcelona, 1958, pp. 211-232.

DIEGO, Clemente de: Propiedad comunal, en su libro "Díctame
nes jurídicos", I. Barcelona, 1958, pp. 233-280.

DIEZ GONZALEZ: Un informe sobre una cuestión de montes. -
"RGLJ", núm. 60, 1888.

DIPUTACION FORAL Y PROVINCIAL DE NAVARRA: Aguas patrimonia-
les y terrenos comunales. Pamplona, 1917.

DOMINGUEZ ORTIZ, A: El Antiguo Régimen. Los Reyes Católicos
y los Austrias. Historia de España. Alfaguara III.

DOMINGUEZ ORTIZ, A: El régimen señorial y el reformismo bor-
bónico. Madrid, 1974.

D'ORS, Alvaro: El Código de Eurico. Edición, Palingensia y
nostas. Cuadernos del Instituto Jurídico Español. Estudios
Visigóticos II. Roma. Madrid, 1960.

ELORRIETA ARTAZA, Antonio: Las tierras incultas y los mon-
tes en la política económica española.

ENTRAMBASAGUAS, Joaquín de: Los Manrique. Madrid, 1947.

ESCOLANO DE ARRIETA, Pedro: Práctica del Consejo Real. Ma-
drid, 1976.

ESCUDERO, José Antonio: Los cambios ministeriales a fines
del Antiguo Régimen. Sevilla, 1975.

FAIREN GUILLEN: El régimen de montes y la alera foral de
Aragón hasta el Código Civil, "RAP" 5 (1951), 107-46.

FAIREN GUILLEN: Una encuesta sobre las regulaciones inter-
nacionales de pastos en los Pirineos, "RAP" 8 (1952), 249-
99; y en "RJC" (1953), 147-53.



FAIREN GUILLEN: Contribución al estudio de la facería internacional en los valles de Roncal y Bareteous, en "Institución Príncipe de Viana", Pamplona, VII, Núm. XXIII.

FAIREN GUILLEN: Facerías pirenaicas internacionales, Madrid 1956.

FAIREN GUILLEN, Víctor: Consideraciones jurídicas sobre los boalares de Aragón. "Anuario de Derechos Aragonés", 1944.

FAIREN GUILLEN, Víctor: La alera foral, 1951.

FERNANDEZ ALMAGRO, F: Política naval de la Edad Moderna y Contemporánea. Madrid, 1946.

FERNANDEZ DURO, C: La marina vándala.

FERNANDEZ DURO, C: Armada española desde la unión de los - reinos de Castilla y León. Madrid (1895-1901).

FERNANDEZ DE NAVARRETE, Martín: Reflexiones sobre los montes de Segura de la Sierra. Madrid, 1825.

FERNANDEZ RODRIGUEZ, Antonio: Consideraciones al Proyecto de Ley regulando los montes de aprovechamiento comunal pertenecientes a núcleos vecinales, en el aspecto referente a la naturaleza jurídica de los mismos. "FG", núm. 137, 1968, páginas 79-92.

FERNANDEZ RODRIGUEZ, Tomás Ramón: Parques Nacionales y protección de la Naturaleza. "Civitas administrativo", núm 5, 1975, pp. 215-223.

FERNANDEZ RUIZ DE VILLEGAS, Antonio: Bienes del común de ve

cinosa de Güejar-Sierra. Consideraciones ante un caso de propiedad particular colectiva. "Bol. Gob.", número 55, Madrid 1970, pp. 21-33.

FERNANDEZ DE VELASCO, Recaredo: Sobre la naturaleza de los bienes comunales. "RDPriv.", núm. 15, 1928, pp. 66-76.

FLORES DE QUINONES: Comunidad o servidumbre de pastos. "RD-Priv.", 1933.

FONTANA, José María: Monarquía absoluta 1814-1820. Barcelona, 1971.

FUERO JUZGO: Edición de Juan Antonio Llorente. Madrid, 1972.

GARCIA CAÑADA, Ricardo: Los montes y la regularización de las corrientes de agua. Una opinión sobre el tema "Utilización de las aguas". "CNR-I", t. I, pp. 65-111 (de la 3ª Parte).

GARCIA CAÑADA, Ricardo: Refutación de las conclusiones de la comunicación del señor González Quijano (sobre "La repoblación forestal y los fenómenos torrenciales en su relación con las obras de riego"). "CNR-II", t. I, pp. 301-317.

GARCIA CAÑADA, Ricardo: Necesidad de la repoblación de las cuencas de abastecimiento de pantanos y laderas de los canales de riego. "CNR-II", t. I, pp. 319-341.

GARCIA CARIDAD: Notas críticas al proyecto de ley reguladora de los montes pertenecientes en mano común a los núcleos vecinales de Galicia. "FG", núms. 135-136, 1967, pp. 281-299.

GARCIA DE ENTERRIA, Eduardo: Dictamen sobre deslinde de montes. "ADC", número 12, 1959, pp. 3, 1029-1068.

GARCIA GALLO; Alfonso: Historia del Derecho Español (Manual) Madrid, 1973.

GARCIA GALLO, Alfonso: El carácter germánico de la èpica y el Derecho en la Edad Media española. "AHDE" XXV. 1955.

GARCIA GALLO, Alfonso: Crisis de los derechos locales y su vigencia en la Edad Moderna. Cuadernos de Derecho Francés, 10-11. Barcelona, 1955. págs. 69-81.

- GARCIA GARRIDO, M: Derecho a la caza y "ius prohibendi" en Roma. "AHDE", XXVI, 1956.

GARCIA OVIEDO, Carlos y MARTINEZ USEROS, Enrique: Derecho Administrativo.

GARCIA SERRANO, Rafael y VILLEGAS DIAZ, Luis Rafael: "Relaciones de los pueblos de Jaén, de Felipe II". Boletín del Instituto de Estudios Giennenses. Nums. 88 y 89 abril, sep-tiembre de 1976.

GARCIA ORMAECHEA: El catálogo de los montes públicos y el Registro de la Propiedad. "RGLJ", 1926, pp. 122-128.

GARCIA PELAYO, M: El estamento de los nobles en el despotismo ilustrado español. Moneda y Crédito, nº 17 (1946).

GARCIA SANZ, A: Agronomía y experiencias agronómicas en Es-paña durante la segunda mitad del siglo XVIII. Moneda y Cré-dito, nº 131 (1974).

GARRIDO FALLA, Fernando: Sobre los bienes comunales. "REVL", núm. 125, 1962, páginas 673-692; y en "Problemas políticos. ...", III, pp. 225-242 con el título Defensa y administración de los bienes comunales.

GARRIDO FALLA, Fernando y SERRANO GUIRADO, Enrique: Consideraciones sobre una posible reforma de la legislación de montes. "REAS", núm. I, 1952, pp. 33-47.

GARRIDO Y PEREZ DE LAS BACAS, Antonio: Texto de la nueva Ley de Montes, con las anotaciones correspondientes a la cita de otras disposiciones. Huesca, 1957.

GIBERT Y SANCHEZ DE LA VEGA, Rafael: Historia General del Derecho Español. Madrid, 1974.

GIBERT Y SANCHEZ DE LA VEGA, Rafael: Antiguo régimen español de montes y caza. Madrid,

GIBERT Y SANCHEZ DE LA VEGA, Rafael: Ordenanzas reales de montes en Castilla (1496-1803), por el Instituto de Estudios Administrativos en Estudios de Historia de la Administración. Separata (Madrid, 1971).

GIBERT Y SANCHEZ DE LA VEGA, Rafael: La comunidad rural en Castilla y León. "AHDE" XXXI. 1961.

GIBERT Y SANCHEZ DE LA VEGA, Rafael, et alteri: El Fuero de Sepúlveda. Segovia, 1953.

GOMEZ CHAPARRO: Legitimación pasiva del Estado en los pleitos sobre montes de Corporaciones locales en Navarra. "RDJ", número 34, 1968, pp. 11-22.

GOMEZ CHAPARRO, Rafael: Legitimación pasiva del Estado en los pleitos sobre montes de Corporaciones locales en Navarra. "RDJ"; núm. 34, 1968, pp. 11-22.

GOMEZ GONZALEZ, Mariano: Montes públicos. "EJE", núm. 22, 1910, pp. 642-652.

GOMEZ PEDREIRA: Regulación de los "montes vecinales en mano común" (anotaciones al proyecto de ley). "FG"; núm. 137, 1968, pp. 55-73.

GONZALEZ, Julio: Las conquistas de Fernando III en Andalucía. En "Hispania" Tomo VI. nº XXV. 1946.

GONZALEZ ALONSO, B: El Corregidor castellano.

GONZALEZ LOPEZ: Regulación de los "montes vecinales en mano común" (anotaciones al proyecto de ley). "FG", núm. 137, 1968, pp. 13-18.

GONZALEZ Y MARTINEZ, Jerónimo: Sobre la inscripción de montes públicos. "RCDI", número 1, 1925, pp. 275-278.

GONZALEZ PEREZ, Benito: Una sentencia sobre montes en mano común. "Certamen ", núm. 251, 1962.

GONZALEZ PEREZ, Benito: Los montes en mano común en la nueva legislación forestal. "Certamente", núm. 247, 1962.

GONZALEZ PEREZ, Jesús: Competencia de la jurisdicción ordinaria para conocer de un proceso penal incoado por la sustracción de productos forestales depositados judicialmente. "RAP", núm. 11, 1953, páginas 177-178.

GONZALEZ PEREZ, Jesús: Competencia para conocer de los delitos cometidos en un monte público. "RAP", núm. 20, 1956, páginas 116-117.

GONZALEZ PEREZ, Jesús: El proceso del artículo 41 de la Ley Hipotecaria y los montes públicos catalogados. El titular registral de un derecho real sobre un "monte público catalogado" puede utilizar, para hacer efectivo su derecho, el proceso del artículo 41 de la Ley Hipotecaria. "RAP", número 1, 1950, pp. 177-180.

GONZALEZ PEREZ, Jesús: El proceso del artículo 41 de la Ley Hipotecaria y los montes públicos catalogados. "RCDI", 150, páginas 30-42.

GONZALEZ PEREZ, Jesús: Montes públicos catalogados. Competencia de la jurisdicción ordinaria en orden a los hechos constitutivos de faltas penales. "RAP", núm. 4, 1951, pp. 219-220.

GONZALEZ PEREZ, Jesús: Montes públicos catalogados. Competencia de los órganos judiciales para ordenar el depósito de lo que estime cuerpo del delito. "RAP", número 4, 1951, pp. 220-221.

GONZALEZ PEREZ, Jesús: Montes públicos catalogados. Competencia de la Administración en orden a su posesión y deslinde. "RAP", núm. 4, 1951, pp. 221-222.

GONZALEZ PEREZ, Jesús: El proceso del artículo 41 de la Ley Hipotecaria y los montes públicos catalogados. "RAP", núm. 11, 1953, pp. 172-177.

GONZALEZ PEREZ, Jesús: El Catálogo de montes de utilidad pública. "RAP", número 15, 1954, pp. 177-179.

GONZALEZ QUIJANO, Pedro María: Aguas y montes. Conferencia. Madrid, 1911.

GONZALEZ QUIJANO, Pedro María: Contestación al trabajo del señor Cañada (sobre "Los montes y la regularización de las corrientes de agua"). "CNR-I", t. I, páginas 113 ss.

GONZALEZ QUIJANO, Pedro María: La repoblación forestal y los fenómenos torrenciales en su relación con las obras de riego. "CNR-II", t. I, p. 253.

GRAU FERNANDEZ, Salvador: Comentarios a la Ley y Reglamento de Montes. Con notas de Jurisprudencia. Madrid, 1966, 747 pp.

GUAITA, Aurelio: Régimen jurídico-administrativo de los montes, 2ª. ed., Santiago de Compostela, 1956.

GUAITA, Aurelio: Derecho forestal de Navarra, en el vol. colectivo "Curso de Derecho foral navarro", Pamplona, 1959, II, páginas 109-124; y en "REVL", núm. 94, 1957, pp. 481-496.

GUAITA, Aurelio: Exclusión de montes del Catálogo de los de utilidad pública. "FG", número 80, 1952, pp. 131-144.

GUAITA, Aurelio: Infracciones en materia forestal. "REAS", núm. 4, 1953, pp. 7-35.

GUAITA, Aurelio: Montes y bienes comunales. "RDAF", núms. 25-26, 1970, pp. 7-47.

GUAITA, Aurelio: La autonomía, en la regulación de los "montes vecinales en mano común". "FG", núm. 137, 1968, pp. 19-28.

GUAITA, Aurelio: Derecho Administrativo Especial.

GUERRA-LIBRERO Y ARROYO, Gumersindo: Pedraza y su "Comunidad de Villa y Tierra". "REVL", núm. 141, 1965, pp. 347-376.

GUILARTE, Alfonso María: El régimen señorial en el siglo XVI Madrid, 1962.

GUILLART Y LOPEZ DE GOICOECHEA, José: Contenido social de los Estatutos y Ordenaciones de los montes y huertas de la ciudad de Zaragoza. "Un.", núm. 1, 1924, páginas 126-133.

GUILLEN, Julio: Los Gutiérrez de Rubalcava.

HERAS MARTINEZ, Fernando de las: Trascendencia de la moderna legislación de montes en el Registro de la Propiedad. "RCDI", 1948, pp. 548-556.

— HERNANDEZ-TEJERO Y JORGE, Francisco: Derecho Romano.

HERZOG, Maurice: La montaña.

HIGUERAS ARNAL, E: El Alto Guadalquivir. Zaragoza, 1961.

IBARGUEN, Luis Miguel: Los montes públicos. RGLJ, 1885, pp. 5-24.

INIGUEZ MORENO, M.: ¿Son expropiables los bienes comunales de los Municipios? "Certamen", núm. 291, 1966, pp. 122-126.

KAMEN, H.: El establecimiento de los Intendentes en la Administración española. Hispania XXIV, nº 95 (1964).

KLEIN, Julius: La Mesta.

LADERO QUESADA, Miguel Angel: La Orden de Santiago en Andalucía. Bienes, rentas y vasallos a finales del siglo XV.

LADERO QUESADA, Miguel Angel: Andalucía en el siglo XIV.

LAFUENTE, Modesto: Historia de España.

LALINDE ABADIA, Jesús: Los fueros de Aragón. (págs. 33 y ss.) Zaragoza, 1976.

LALINDE ABADIA, J.: Iniciación histórica al Derecho Español.

LARRATEA, Enrique de: Aprovechamiento comunal de fuente enclavada en propiedad particular: facultades del Ayuntamiento. Consulta. "RJC", 1896, pp. 627-629.

LARRUGA Y BONETA, E.: Memorias políticas y económicas sobre los frutos, fábricas, comercio y minas de España. Madrid - (1785-1800).

LASO, M^a Pilar y BAUER Erich: La propiedad forestal en España. "REAS", número 49, 1964, pp. 7-49.

LASSO DE LA VEGA, Jorge: Biografía de marinos ilustres, Madrid, 1855.

LECEA Y GARCIA, C.: La Comunidad y Tierra de Segovia. Estudio histórico legal. Segovia, 1893.

LIANO FLORES: Regulación de los "montes vecinales en mano común" (anotaciones al proyecto de ley). "FG", núm. 137, 1968, páginas 29-42.

DEREK W. Lomax: La Orden de Santiago. Madrid, 1965.

LLEO: Necesidad de reglamentar administrativamente la repoblación forestal de las riberas de los ríos, "RGLJ" 152 - (1928), 279-96.

LLEO: Las propiedades comunales y la legitimación de las roturaciones arbitrarias. "RGLJ", núm. 144, 1924, pp. 423-434.

LLEO: Las realidades, las posibilidades y las necesidades forestales de España. Madrid, 1929.

LLEO: Consideraciones sobre el patrimonio forestal de España. "RGLJ", núm. 166, 1935, pp. 790-806.

MADARIAGA, Juan Angel de: Necesidad de la repoblación de las cuencas de abastecimiento de pantanos y laderas de los canales de riego. "CNR-II", t. II, pp. 133-150.

MADOZ, Pascual: Diccionario Geográfico. Madrid, 1845.

MALLOL GUARRO, Federico de: El Derecho forestal francés: Código Forestal de 1952. "CDF", núm. 6, 1956, pp. 59-73.

MAÑUECO, Gabriel: Prescripción de los montes públicos. "RCDI" núm. 1, 1925, páginas 571-589.

MARQUES CARBO, Luis: Los pastos comunales de Cangas de Onís, "REVL" 73 (1954), 82-86.

MARTI RAMOS: El usufructo de bosques en Cataluña. RJC, 1950, pp. 3-22.

MARTIN-RETORTILLO BAQUER, Lorenzo: El proceso de apropiación por el Estado de las vías pecuarias, "RAP" 51 (1966), 97-150.



MARTIN-RETORTILLO BAQUER, Lorenzo: Recuperación de bienes comunales transcurrido el plazo del año. "RAP", núm. 45, 1964, páginas 255-256.

MARTIN-RETORTILLO BAQUER, Lorenzo: Aspectos administrativos de la creación y funcionamiento de los Parques Nacionales. "Civitas administrativo", núm. 6, 1975, páginas 343-364.

MARTIN GONZALEZ, Jesús: Incendios forestales y orden público. "Bol. Gob.", número 50, noviembre-diciembre 1968, enero 1969, pp. 39-50.

MARTIN-RETORTILLO GONZALEZ, Cirilo: Consideraciones sobre las dehesas boyales, "RDPriv." (1943), 516-26.

MARTIN-RETORTILLO GONZALEZ, Cirilo: Cuestiones jurídico-fiscales sobre los montes de los pueblos. Barcelona, 1944.

MARTIN-RETORTILLO GONZALEZ, Cirilo: La posesión en montes públicos. "RGLJ", número 174, 1943, pp. 270-292.

MARTIN-RETORTILLO GONZALEZ, Cirilo: La nueva Ley de Montes y los Municipios. "REVL", núm. 95, 1957, pp. 643-655.

MARTIN MATEO, Ramón: El futuro de los bienes comunales. - "REVL", núm. 155, 1967, páginas 661-682,

MARTIN MATEO, Ramón: Sobre los montes vecinales. "REAS", núm. 59, 1967, pp. 63-73.

MARTINEZ, Juan de la Cruz: Memoria histórica del partido de Segura de la Sierra de Baeza, 1846.

MARTINEZ, Juan de la Cruz: Estudio sobre el ramo de montes arbolados en España. Madrid, 1852.

MARTINEZ, Pedro Fernando: Exposición al presidente de la Junta Provincial. Jaén, 1836.

MARTINEZ, Pedro Fernando: Respuesta a don Martin Foronda. Jaén, 1837.

MARTINEZ BLANCO, Antonio: Elementos de legislación y administración forestales. Madrid, 1928.

MARTINEZ HERMOSILLA, Paulino: La repoblación forestal en España y su importancia para la agricultura y la economía pública. "REAS", núm. 5, 1953, pp. 37-48.

MARTINEZ HERMOSILLA, Paulino: Los montes en la política agraria española. "REAS", número 11, 1955, pp. 101-124.

MARTINEZ HERMOSILLA, Paulino: Discurso en las Cortes sobre la nueva Ley de Montes. "REAS", núm. 19, 1957, pp. 167-174.

MARTINEZ-RISCO Y MACIAS, Sebastián: Dictamen sobre naturaleza jurídica de un monte disfrutado por los vecinos y acciones que competen al Ayuntamiento para reivindicar porción acotada por particular. "RDAF", núm. 5, 1963, pp. 227-239.

MARTINEZ SANCHEZ, Luis: Dehesa de "El Piorno": estudio de las antiguas Ordenanzas de la villa de Lepe en cuanto pueda referirse con "El Piorno". "REVL", número 82, 1955, pp. 562-591.

MASA ORTIZ, M.: Legislación de Montes (comentarios al Reglamento de 2 de febrero de 1962). Barcelona, 1964, 892 pp.

MEIGIDE PARDO, A.: Contribución a la historia de la industria naval en Galicia. Los arsenales del Ferrol en el siglo XVIII. Lisboa, 1965.

MENDOZA OLIVAN, Víctor: Deslinde de montes públicos: respeto de posesión tabular; impugnación de la Orden aprobatoria. ADGCE (66-73), I, 1975, pp. 654-684.

MERCADER RIBA, J. et aliter: Los Borbones. El siglo XVIII en España y América. Tomo IV de la Historia social y económica de España y América dirigida por Vicens Vives.

MERINO PEREZ, F.: El rescate de bienes comunales. Madrid, 1933, 158 pp.

MESANZA R. DE SALAS, Bernardo de: El bosque y la conservación de la Naturaleza en Vizcaya. "REAS", núm. 70, 1970, pp. 35-45.

MONARES: Observaciones acerca de los montes de dominio particular y de los propios y comunes de los pueblos. "RGLJ", número 15, 1859, pp. 141-146.

MONTERO DE BURGOS: Comentario a la "ley de montes vecinales en mano común". "REAS", núm. 64, 1968, pp. 95-108.

MONTES de Segura de la Sierra y corta de sus maderas (informe inédito) Museo Naval.

MORENO PAEZ, Leocadio Manuel: El principio de legalidad en los deslindes administrativos de montes públicos. "RCDI", número 30, 1954, pp. 913-931.

MOXO, S de: La incorporación de señoríos en la España del Antiguo Régimen. Valladolid, 1959.

MOXO, S. de: La disolución del régimen señorial de España. Madrid, 1965.

NAVARRO LOPEZ, Genaro: La Orden de Santiago y Segura de la Sierra. Boletín del Instituto de Estudios Giennenses, nº 53 (1967).

NIETO GARCIA, Alejandro: Ley de montes vecinales en mano común de 27 de julio de 1968. "RAP", núm. 57, 1968, pp. 351-378.

NIETO, Alejandro: Bienes comunales: Refundición de dominio forestal de suelo y vuelo. "RAP", núm. 60, 1969, pp. 125-132.

NIETO GARCIA, Alejandro: Ordenación de pastos, hierbas y rastrojeras, dos vols., Valladolid, 1959.

NIETO, Alejandro: Bienes comunales. Madrid, 1964.

NUÑEZ RUIZ, Manuel Jesús: La Ley de Montes de 8 de junio de 1957 y el Registro de la Propiedad. "REVL", núm. 94, 1957, páginas 536-545.

OLAZABAL, Lucas de: Cuarenta años de propaganda forestal. Madrid, 1898.

OLESA MUNIDO, F.: La organización naval de los estados mediterráneos y en especial de España durante los siglos XVI y XVII.

ORLANDIS ROVIRA, José: La prenda de iniciación de juicio en los fueros de la familia Cuenca-Teruel. AHDE. XXIII. 1953.

ORLANDIS ROVIRA, José: La prenda como procedimiento coactivo en la Edad Media española. AHDE XIV. 1942-1943.

OSSORIO MORALES: Las servidumbres personales, 1936.

PARDO CASTIÑEIRA: Regulación de los "montes vecinales en mano común" (anotaciones al proyecto de ley). "FG", núm. 137, 1968, pp. 49-54.

PASTOR DE TOGNERI, Reyna: Poblamiento, frontera y estructura agraria en Castilla la Nueva (1085-1230). Cuadernos de Hª de España. XLV- XLVI. Buenos Aires, 1967.

PAULY WISOWA.

PAZ ARES, J. C.: Régimen de los llamados montes de vecinos en Galicia. Vigo, 1966, 87 pp.

PAZ ARES, J. C.: Examen del ámbito objetivo de la Ley de 27 de julio de 1968 sobre montes vecinales en mano común. "RGLJ", 1969, páginas 77-79.

PAZ REMOLAR, Ramón: Visitas de encomiendas en el siglo XV.

PEREZ BUA, M.: Las reformas de Carlos III en el régimen local de España. Madrid, 1959.

PEREZ CARBALLO, Angel: La propiedad forestal en España: intervención del Estado en la propiedad forestal de los particulares. "REAS", núm. 59, 1967, pp. 9-56.

PEREZ PRENDES, J. M. : Una visión de la Administración Central española en el siglo XVIII. Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad de Madrid. 1959. VI.

PEREZ DE TUDELA, J.: Las armadas de Indias en los orígenes de la política de colonización. Madrid, 1956.

PEREZ DE TUDELA, G.: Discurso histórico y legal en que se demuestra que los priores y vicarios de la Orden Militar del Señor Santiago... Madrid, 1788.

PESCADOR DEL HOYO, Carmela: La caballería popular castellana. En Cuadernos de Historia de España. XXIX- XXXVIII. Años 1959-1963. Buenos Aires.

PONZ, A.: Viaje de España.

— PRIETO-CASTRO Y FERRANDIZ, Leonardo: Derecho Procesal Civil.

PUJOL GERMA: Montes públicos: cuestiones acerca de su propiedad y posesión. LAP, 1949, pp. 296-300; 1950, pp. 72-75, 100-102.

QUIROS LINARES, F.: Fuentes para la geografía de la circulación en España: algunos libros sobre los caminos españoles en los siglos XVIII y XIX.

(AL) RAZI Isa ben Ahmad: Anales palatinos del Califa de Córdoba Al-Hakam II. Traducción Emilio García Gómez. Madrid, 1967.

REBES SOLE, José Enrique: Desafectación de los montes comunales por no uso de su aprovechamiento. "REVL", núm. 151, 1967, pp. 59-79.

REDACCION DE "EL CONSULTOR DE LOS AYUNTAMIENTOS Y JUZGADOS": Manual de montes, 5ª ed., Madrid, 1914, con apéndice de 1927.

RIO Y GARCIA SOLA, José R. del: Bienes comunales: instrumentación de su explotación a través de una cooperativa. ADGCE (66-73), I, 1975, pp. 285-294.

ROCA ROCA, Eduardo: Naturaleza y régimen jurídico de los montes de Gúejar-Sierra (Granada), en "Actas del III Symposium Historia de la Administración". Ed. IEA, Madrid, 1974, pp. 717-756.

RODRIGUEZ CASADO, V.: Política interior de Carlos III. "Simancas" 1. 1950.

RODRIGUEZ MOLINA, J.: Las Ordenes Militares de Calatrava y Santiago en el Alto Guadalquivir (siglos XIII-XV). Cuadernos de Estudios Medievales II-III. Granada 1974-75.

RODRIGUEZ MORO, Nemesio: Los bienes aprovechados en común por los vecinos de las parroquias en Galicia. "REVL", núm. 143, 1965, pp. 728-738.

RODRIGUEZ MORO, Nemesio: Singular administración de los montes de Gúejar-Sierra (Granada). "REVL", núm. 141, 1965, páginas 386-389.

RODRIGUEZ MORO, Nemesio: Los pueblos no constituidos en entidad local menor pueden tener el aprovechamiento exclusivo de bienes del común de vecinos. "REVL", número 132, 1963.

RODRIGUEZ MORO, Nemesio: ¿Puede un Ayuntamiento exigir por vía administrativa daños y perjuicios derivados del contrato de aprovechamiento de un monte?. "REVL", número 107, 1959, pp. 744-751.



RODRIGUEZ MORO, Nemesio: La cuota empresarial de la Seguridad Social agraria y las Corporaciones locales (sobre montes propiedad de éstas). "REVL", núm. 182, 1974, pp. 329-338.

ROMANI BIESCAS, Arturo: Anotación de embargo sobre una parcela de un monte catalogado doblemente inmatriculado en el Registro de la Propiedad. ADGCE, (66-73), I, 1975, pp. 693-704.

ROMERO DE SOLIS, P.: La población española en los siglos XVIII y XIX. Madrid, 1973.

RUIZ ALMANSA, Javier: Participación de los Ayuntamientos en la riqueza forestal española. "REVL", núm. 52, 1950, páginas 584-588.

ROUDIL, Jean: Les fueros d'Alcaraz et d'Alarcon. Paris, 1968.

ROUDIL, Jean: El fuero de Baeza. La Haya, 1962.

SAGUER, Emilio: Explotación de bosques por el usufructuario según el Derecho de Cataluña. "RDPriv.", núm. 6, 1919, páginas 263-269.

SALAZAR, Ambrosio de: Almoneda general de España. Paris, 1612.

SALAZAR, Luis de: Historia genealógica de la Casa de Lara. Madrid, 1694-1697.

SALAZAR, Luis de: Los comendadores de Santiago. Madrid, 1949.

SALOMON, Noel: La vida rural castellana en tiempos de Felipe II. Barcelona, 1973.

SALVA: ¿Cual es la penalidad vigente en el día para castigar las infracciones, daños y otros delitos que se cometen en materia de montes? "RGLJ", núm. 36, 1870, páginas 167-201.

SALVADOR CAJA, Miguel: Algunas de las mas notables leyes forestales del mundo. "REAS", núm. 60, 1967, pp. 193-215.

SANCHEZ ALBORNOZ, Claudio: La frontera y las libertades de los castellanos. En Estudios Generales XVI.

SANCHEZ ALBORNOZ, Claudio: Las behetrías. En AHDE, I. 1924.

SANCHO REBULLIDA, Francisco de Asís: Usufructo de montes. Barcelona, 1960, 143 pp.

SANTAMARIA, Victorino: La corta de árboles a principios del siglo XIX. "RGLJ", 1906, pp. 333-342.

SANTAYANA BUSTILLO: Gobierno de los pueblos de España, Zaragoza, 1742.

SARRAILH, J.: La España ilustrada de la segunda mitad del siglo XVIII. Edición española, 1957.

SEBASTIAN GARCIA, Vicente Angel: Función social-recreativa del monte. "REAS", número 70, 1970, pp. 106-125.

SERRANO GUIRADO, Enrique: El procedimiento administrativo en los deslindes de montes públicos. "RAP", núm. 2, 1950, páginas 109-130.

SIEIRA BUSTELO, Constantino: Distinta titularidad de los montes de utilidad pública. Su naturaleza jurídica. "REVL", número 87, 1956, pp. 371-391.

SIEIRA BUSTELO: La repoblación forestal y los montes de ve cinos en Galicia. "Lucus", Lugo, octubre, 1967.

SIEIRA BUSTELO, Constantino: Distinta titularidad de los montes incluidos en el Catálogo de montes de utilidad pública: su naturaleza jurídica. "REVL", núm. 86, 1956, pp. 149-170; núm. 87, 1956, pp. 371-393.

SOLCHAGA LOITEGUI, Jesús: Recuperación de oficio de la posesión de un monte catalogado. El deslinde de los bienes de la Administración. ADGCE (66-73), I, 1975, páginas 685-692.

SUAREZ, Federico: Los voluntarios realistas. En AHDE XXVI, 1956.

TAMAMES, R: Estructura Económica de España. 3ª edición, Madrid, 1965.

TIERNO GALVAN, Enrique: Antología de las Cortes de Cádiz.

TOMAS Y VALIENTE, F: El marco político de la desamortización en España. Barcelona, 1971.

TOMELO LACRUE, Mariano: Temas forestales. Zaragoza, 1943.

TORRES FONTES, Juan: Dos ordenamientos para los caballeros de cuantía de Andalucía y Murcia. En AHDE XXXIV, 1964.

— TORRES LOPEZ, Manuel: Lecciones de Historia del Derecho Es pañol.

UREÑA Y SMENJAUD, Rafael de: El fuero de Cuenca, Madrid, 1935.

VALLVE BERMEJO, Joaquín: La cora de Jaén. En "Al-Andalus". Vol XXXIV, fas 1^a.

VAZQUEZ DE FIGUEROA, José: Memoria sobre la Ordenanza de matrículas y reglamentos de Montes (Inédita).

VAZQUEZ DE PARGA, Luis: La división de Wamba. Madrid, 1943.

VERA FERNANDEZ-SANZ, Alberto: Las servidumbres y otros derechos reales sobre montes de utilidad pública. "REVL", número 153, 1967, pp. 400-414.

VILLANUEVA, Joaquín Lorenzo: Viaje literario a las iglesias de España. Madrid, 1803.

VILLAR Y ROMERO, José María: La "Comunidad de Tierra" de Santa María de Albarracin, en "Ests. Jordana", III-2, páginas 221-245.

VILLEGAS DIAZ, Luis Rafael y GARCIA SERRANO, Rafael: Relaciones de los pueblos de Jaén, de Felipe II. En Boletín del Instituto de Estudios Giennenses Núms. 88-89, abril, septiembre 1976.

VIZCAINO PEREZ, V.: Tratado de la jurisdicción ordinaria, Madrid, 1974.

ZABALA Y LEZO: España bajo los Borbones. Barcelona, 1926.

ZEUMER, Karolus: Leges visigothorum antiquiores. Hannoverae et Lipsiae, 1894.

ZUMALACARREGUI, J. M.: Ensayo sobre el origen y desarrollo de la propiedad comunal en España hasta el final de la Edad Media. 1903.

XXIII.- INDICE

I N D I C E

I .-	INTRODUCCION	Pag.	3
II.-	SISTEMA DE TRABAJO	"	14
III-	FONDOS UTILIZADOS.....	"	18
IV.-	SITUACION GEOGRAFICA.....	"	23
V .-	PANORAMAHUMANO	"	34
VI.-	REGIMEN DEL FUERO	"	47
VII-	PUNTO DE FLEXION	"	134
VIII-	LA RUPTURA Y SU EQUIPO LEGAL.....	"	146
IX.-	LA ORDENANZA DE 1748.....	"	150
X .-	LA ORDENANZA DE 1751.....	"	171
XI.-	LA ORDENANZA PENAL	"	176
XII-	LA NUEVA GUARDERIA FORESTAL.....	"	184
XIII-	LA LUCHA POR EL DERECHO.....	"	193
XIV.-	LA INUTIL TIRANIA.....	"	236
XV.-	EFFECTOS JURIDICOS Y POLITICOS.....	"	276
XVI-	EFFECTOS SOCIALES	"	295
XVII-	EFFECTOS ADMINISTRATIVOS. (LA PROVINCIA MARITIMA DE SEGURA DE LA SIERRA).....	"	334
XVIII-	LOS MONTES DE MARINA ANTE LAS CORTES DE CADIZ	"	342
XIX.-	ENLACE CON SITUACIONES ACTUALES.....	"	376
XX.-	CONCLUSIONES.....	"	406
XXI-	APENDICE DOCUMENTAL	"	410
XXII-	BIBLIOGRAFIA.....	"	525
	INDICE	"	553